

Sumario

Editorial | 11

DEBATES

Movimientos sociales: Argentina, Bolivia, Brasil, México y Paraguay

Argentina: una cartografía de las resistencias (2003-2008)
Entre las luchas por la inclusión y las discusiones sobre el modelo de desarrollo
Maristella Svampa | 17

“Autonomías indígenas” y “Estado Plurinacional”
Proyectos políticos de los movimientos indígenas y campesinos en Bolivia
Marxa Nadia Chávez León | 51

O MST e as reformas agrárias do Brasil
Bernardo Mançano Fernandes | 73

Los vaivenes de los movimientos sociales en México
Guillermo Almeyra | 87

Paraguay: el nuevo escenario de disputa de los intereses populares
Marielle Palau y Guillermo Ortega | 103

ANÁLISIS DE CASOS

Una fábrica patagónica en autogestión obrera

Aires de libertad

Zanon bajo gestión obrera

Laura Meyer y María Chaves | 115

APORTES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO LATINOAMERICANO

El '68 estudiantil en México

El '69 obrero en Argentina

1968: a 40 años del movimiento
estudiantil en México

Massimo Modonesi | 145

Nuestra bandera | 149

¿Qué es la autogestión académica? | 152

Autogestión académica y
universidad crítica | 154

José Revueltas

El Mayo argentino

Horacio Tarcus | 161

EXPERIENCIAS DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Venezuela: construyendo otra cultura

La educación en Venezuela: batallas por
la descolonización cultural

Entrevista a Silio Sánchez

por Claudia Korol | 183

CRIMINALIZACIÓN Y DERECHOS HUMANOS

En defensa del MST brasileño

O caráter da criminalização dos
movimentos sociais no Brasil

Cesar Sanson | 197

O crime de ser MST	
Leandro Gaspar Scalabrin	201

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTOS

<i>Estado y marxismo. Un siglo y medio de debates</i>	
por Claudio Katz	211

<i>Crítica y Emancipación</i>	
<i>Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales</i>	
por Juan Chaves	213

<i>Las disyuntivas de la izquierda</i>	
<i>en América Latina</i>	
por Jorge Marchini	217

Conflicto agrario	
Otro camino para superar la crisis	221

No somos campo, somos tierra y territorio	
Red Puna	
Movimiento Nacional Campesino Indígena	
Jujuy, 2 de junio de 2008	228

Proclama campesina indígena	
Coordinación de las organizaciones	
de pequeños campesinos	
y pueblos indígenas	
Rosario, 24 de junio de 2008	231

Los productores invisibles	
Comunicado del Frente Nacional Campesino	
Buenos Aires, 3 de junio de 2008	236

Las soluciones mágicas y las inevitables	
catástrofes subsiguientes	
Grupo de Reflexión Rural	
Julio de 2008	240

El capital internacional está dominando la agricultura brasileña	
João Pedro Stedile	
São Paulo, 30 de julio de 2008	253
Programas estruturantes de curto prazo	
Plataforma da Via Campesina	259
Detener la guerra	
Orlando Fals Borda	268
Declaración Política del VII Foro Mesoamericano de los Pueblos	
Managua, 16 de julio de 2008	274

Editorial

Una revista semestral como la nuestra no puede analizar lo que acaba de suceder poco antes de su composición ni tampoco, obviamente, describir los escenarios posibles en el campo de las luchas sociales ni los desenlaces eventuales de las mismas. Nos tendremos que contentar, por lo tanto, con registrar el hecho de que en el duro enfrentamiento político en torno al reparto de la renta agraria y a la política económica nacional que tuvo como protagonistas a la nueva derecha argentina, apoyada por vastos sectores de las clases medias urbanas y rurales, y el gobierno, que favorece al sector industrial, los movimientos sociales permanecieron al margen, sin voz ni capacidad de iniciativa o, peor aún, fueron cooptados por alguno de los dos contendientes. También permanecieron mudos los mismos industriales debido a sus relaciones con el capital financiero y sus inversiones en el sector capitalista rural. Aquellos movimientos sociales que esbozaron una actitud independiente en esta pugna entre los grandes exportadores de granos, la agroindustria, los rentistas rurales y el capital financiero y la gran industria, la industria liviana para el consumo interno y su representación política en el gobierno, no pudieron pesar, sin embargo, por no poder ofrecer una alternativa ni tener representación política. Los movimientos sociales, en efecto, tienen un peso político objetivo, pero lo que resulta decisivo, en las situaciones de crisis, es la capacidad de presentar una alternativa a los problemas políticos y sociales que desbordan sus propios intereses y, así, de disputar la hegemonía cultural y política a sus adversarios. Esta observación viene particularmente al caso porque el objetivo de este número del *OSAL* es presentar a los lectores el comienzo de un balance de conjunto sobre el estado en que se encuentran los diversos movimientos sociales en nuestro continente y qué problemas deben enfrentar en algunos países clave de la región.

Publicamos así estudios sobre los movimientos sociales en la Argentina, el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra en Brasil, los movimientos campesinos y de los pueblos originarios en relación con las autonomías en Bolivia, el curso de los movimientos sociales en México y los problemas que se les presentan en Paraguay después de

la elección –que saludamos– de Fernando Lugo. Por razones de espacio dejamos para otro número los casos de Ecuador, Venezuela y Colombia, aunque la entrevista con Silio Sánchez sobre el poder popular y la educación popular en Venezuela y la importante toma de posición sobre la situación colombiana de un intelectual tan prestigioso como Orlando Fals Borda –cuyo reciente fallecimiento es una gran pérdida para las ciencias sociales latinoamericanas– llenan parcialmente ese vacío.

También refuerzan el objetivo central de este número un estudio de caso –la construcción de una empresa capitalista sin capitalistas ni capitales y con una dirección obrera anticapitalista en la fábrica ceramista recuperada Zanon, en la Patagonia argentina– así como documentos de diversas organizaciones indígenas, campesinas, sindicales y sociales sobre la necesidad de enfrentar al agronegocio en Brasil o, en especial, sobre la movilización de los financieros y capitalistas rurales contra el gravamen a las ganancias extraordinarias de los sojeros en Argentina. En relación a Zanon, presentamos junto a la revista el elocuente documental *Corazón de Fábrica*, ganador del concurso Otras Miradas.

Resolvimos además conmemorar los movimientos estudiantiles y obreros en 1968-1969 en México y Argentina, que fueron dos de los momentos más altos de la rebelión democrática de esos años en nuestro continente, no sólo para hacer un balance retrospectivo de un importante momento histórico. En efecto, buscamos también poder ver más detalladamente –para entender las formas y ritmos disímiles que hoy mismo asumen los procesos de cambio social en cada país– las particularidades socioculturales y organizativas en México y Argentina, en el Norte y en el Sur de nuestra América, de un proceso mundial de construcción de la conciencia democrática y libertaria colectiva que en otros continentes asumió formas diferentes.

Nos preocupa la actual situación, que no queremos observar pasivamente. En efecto, desde fines de los años setenta, los trabajadores, los campesinos, los sectores más pobres de América Latina, así como los del resto del mundo, enfrentan una ofensiva política y económica del capital financiero internacional contra los ingresos, los salarios reales, las conquistas históricas y los salarios indirectos de los productores.

La riqueza inmensa que estos originan con los aumentos de productividad y los progresos científicos y técnicos está cada vez más concentrada en pocas manos y destruye simultáneamente la Naturaleza y las bases de la civilización, que sólo es posible en un equilibrio con aquélla y con una sociedad donde la palabra justicia no sea mera retórica y no crezcan de modo exponencial las desigualdades sociales, lanzando a la miseria y la hambruna a cientos de millones de seres humanos.

La feroz pretensión de que la propiedad privada del recurso suelo no debe tener límite ni cortapisas lleva a la vez a la destrucción de los bosques de la Amazonia y de los montes nativos en todo nuestro continente, a la desertificación de vastas zonas y a la carestía de los alimentos y su desaparición del consumo popular en países que, como la Argentina, pueden alimentar a una población quince veces superior a la que tienen. Persiguiendo solamente la ganancia, se tiran millones de litros de leche a los campos y se finge ignorar que la tierra tiene también una función social –producir alimentos– y no es sólo un mero medio de producción.

La crisis alimentaria mundial, debida a que el capital financiero se apoderó de la agricultura y de la vida rural y las puso al servicio de sus ganancias, se expresa en nuestros países, tan ricos en recursos naturales y en tierra, en un ataque contra los movimientos campesinos, contra los sindicatos obreros y rurales, contra toda forma de organización y solidaridad social, contra las clases pobres urbanas y en una ofensiva a fondo contra la posibilidad de construir la indispensable soberanía alimentaria de cada pueblo, de reducir drásticamente la pobreza y de eliminar la miseria y el hambre.

El aumento constante del precio de los combustibles no renovables reforzará, con las plantaciones de biocombustibles, este ataque contra los bosques; con la sojización, contra las tierras con agricultura campesina diversificada; y con la deforestación resultante de ambas, la amenaza contra el agua. Elevando los precios de los insumos agrícolas, expulsará a otros millones más de campesinos y agotará otros millones de hectáreas en los países latinoamericanos si no se le ponen frenos a estas políticas mundiales, exigiendo la intervención de los estados frente al llamado “mercado” (o sea, frente a los intereses del capital financiero) pero también y, especialmente, con la movilización de los movimientos sociales para imponer proyectos de desarrollo nacional y continental alternativos, justos y respetuosos de la Naturaleza.

Es alentador, en este sentido, que comience la acción unificada por ese tipo de proyectos nacionales en México, con el Diálogo Nacional, en Venezuela, con las Misiones, entre los pequeños productores rurales organizados en Vía Campesina en todo el continente, e incluso en sectores de la Argentina que buscan un camino independiente y van más allá de la indispensable oposición a los especuladores y dueños de la tierra y del también indispensable apoyo al derecho-deber del gobierno de hacer pagar impuestos a quienes más tienen.

La ofensiva mundial del capital financiero internacional modifica el uso del suelo, con la sojización en Brasil, Paraguay, el oriente boliviano y la Argentina, y amenaza a Venezuela; también modifica el territorio, transforma a Uruguay en una gran hacienda productora de soja y eucaliptus,

destruye poblaciones, expulsa campesinos; los forrajes para las vacas ajenas se comen los cultivos alimentarios y las culturas y pueblos campesinos e indígenas. Pero, sobre todo, al concentrar el poder y la riqueza y al atacar a los movimientos sociales, esa ofensiva no acepta las reglas democráticas ni las mismas instituciones capitalistas históricas. Vemos así como el poder dictatorial del ejército, los paramilitares y los narcotraficantes, con la colaboración de Estados Unidos e Israel, aplasta a Colombia, y cómo en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina crecen grupos de intereses que a la luz del día trabajan por la secesión (del oriente boliviano, de Guayaquil en Ecuador) o declaran no acatar las constituciones o las leyes que no les convienen, a las cuales oponen su sabotaje económico, sin reparar en medios ni límites.

Frente a esta situación, hay quienes piensan que los movimientos sociales están en pleno reflujo y han sido cooptados por los gobiernos, o derrotados, porque en el fondo creen que esos movimientos, en especial los campesinos, que dependen de las cosechas, si no están en una permanente línea de ascenso, desaparecen. Además, confunden los gobiernos, que son el resultado, el subproducto, de los movimientos sociales anteriores a las elecciones, con dichos movimientos, que actúan en cambio movidos por las necesidades. Y olvidan que la reacción de la derecha política y social y de EE.UU. ante la acción hacia adelante de los trabajadores y oprimidos de nuestra América podría provocar otra ola de acción, ahora mucho más independiente de los gobiernos y mucho más radical, precisamente porque la ofensiva brutal que los pueblos están sufriendo, de un lado, los deja ante la alternativa de luchar o retroceder más de un siglo y, de otro, encuentra a grandes sectores con mucha más autoconfianza y un nivel de organización que es cada vez más independiente de las burocracias y los partidos que antes los controlaban.

De ahí que como revista miremos hacia lo que sucede en los movimientos y no solamente hacia los gobiernos y las expresiones burocráticas de estos, conscientes, sin embargo, de los límites de los movimientos sociales y de su gran heterogeneidad, así como de la necesidad general de apoyarse en ellos para dar una solución política a la crisis y crear instrumentos políticos que los unifiquen. De ahí también que nos interese en particular por ver cómo muere –si es que muere– lo viejo, y cómo está naciendo –si es que nace– lo nuevo y, en vez de hacer una fotografía en blanco y negro de este momento, tratemos de ver matices dentro de un proceso que está en movimiento, que tiene sus alzas y sus bajas y diferentes avatares, pero que se opone a la opresión nacional y a la fría e inhumana política neoliberal.

Guillermo Almeyra

Debates

Movimientos sociales: Argentina, Bolivia, Brasil, México y Paraguay



Argentina: una cartografía de las resistencias (2003-2008)

Entre las luchas por la inclusión y las discusiones sobre el modelo de desarrollo

Maristella Svampa

“Autonomías indígenas” y

“Estado Plurinacional”: proyectos políticos de los movimientos indígenas y campesinos en Bolivia

Marxa Nadia Chávez León

O MST e as reformas agrárias do Brasil

Bernardo Mançano Fernandes

Los vaivenes de los movimientos sociales en México

Guillermo Almeyra

**Paraguay: El nuevo escenario de disputa de los
intereses populares**

Marielle Palau y Guillermo Ortega

Argentina: una cartografía de las resistencias (2003-2008)

Entre las luchas por la inclusión
y las discusiones sobre el
modelo de desarrollo

Maristella Svampa

Doctora en Ciencias Sociales. Investigadora del CONICET y la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).

Resumen

El artículo plantea que en el año 2004, en Argentina, se pasó de una demanda de solidaridad a la de orden y que a pesar de la recuperación económica crecieron las desigualdades sociales. Agrega que el gobierno cooptó movimientos de desocupados piqueteros y que estos se fraccionaron y perdieron protagonismo. Añade que aparecieron fuertes movimientos sindicales, muchas veces opuestos a las direcciones de los sindicatos. Sostiene que las fábricas recuperadas se institucionalizaron y que surgieron movimientos de clase media contra la precariedad. La expansión de la soja chocó con los pueblos originarios y con la economía campesina y la disputa de la renta extraordinaria entre el gobierno y los exportadores, concluye, ha instaurado un clima de tensión política.

Abstract

The article puts forward the idea that in 2004 in Argentina there was a switch from a demand for solidarity to one for order, and in spite of economic recovery, there was an increase in social inequality. It adds that the government co-opted unemployed picket movements, which were then broken up and lost importance. Moreover, it states that strong trade union movements appeared, which on many occasions were opposed to the direction of the unions. It sustains that the recovered factories were insti-

tutionalized and that middle class movements against instability rose up. The expansion of soybean production clashed with the indigenous peoples and the rural economy. It concludes that the dispute over the extraordinary incomes, between the government and the exporting farmers, has led to a climate of political tension.

Palabras clave

Desocupados, piqueteros, neoliberalismo, transnacionales, movimientos campesinos e indígenas, medioambiente, sindicalismo, democracia, fábricas recuperadas, minería, soja, agronegocios.

Keywords

Unemployed, picketers, neoliberalism, transnational corporations, rural and indigenous movements, environment, trade unionism, democracy, recovered factories, mining, soybeans, agribusiness.

Mucho se ha hablado de los éxitos políticos y económicos que marcaron la gestión del gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007). Entre ellos, se destaca la salida de la gran crisis de 2001-2002, que sacudió los cimientos de la sociedad argentina. En este sentido, cabe recordar que esta crisis estuvo recorrida por demandas ambivalentes y contradictorias. Por un lado, existía un llamado a la solidaridad y a la autoorganización social, lo cual desembocó en la conformación de un rico campo multiorganizacional de carácter antineoliberal; por otro, la crisis expresaba también un fuerte llamado al orden y al retorno a la normalidad frente a lo que podía considerarse como una amenaza de disolución social. Así, durante 2002, la Argentina se convirtió en un laboratorio de nuevas formas de acción colectiva, visibles en las movilizaciones de los desocupados, el surgimiento de asambleas barriales, la recuperación de fábricas quebradas y la multiplicación de colectivos culturales. Durante un tiempo, en este escenario de efervescencia y de cruces sociales inéditos, tendió a imponerse la demanda de solidaridad. Sin embargo, a principios de 2003, el declive de las nuevas movilizaciones así como la fragmentación de las organizaciones de desocupados fueron diluyendo la expectativa de una recomposición política “desde abajo”, para dar paso a una fuerte demanda de orden y normalidad. En este sentido, Kirchner se hizo eco de este mensaje social, en la medida en que apuntó a encarnar la exigencia creciente de normalidad, tal como aparecía ilustrado en su consigna “Por un país en serio, por un país normal”.

Sin embargo, los primeros gestos políticos de Kirchner fueron más allá de esta demanda, mostrando una vez más la productividad política del peronismo, en un escenario de crisis que desembocó en el colapso de gran parte del sistema partidario argentino. Productividad manifiesta en las primeras medidas, que generaron una amplia expectativa social y recolocaron en el primer plano el sistema institucional, redefiniendo así la escena política. Entre los primeros gestos políticos, es preciso destacar el descabezamiento de la cúpula militar y el recambio de la Corte Suprema de Justicia, esta última estrechamente asociada al régimen de los noventa. Asimismo, el gobierno de Kirchner asumió como política de Estado la condena a la violación de los derechos humanos realizada durante la última dictadura militar (1976-1983), lo cual contribuyó a echar por tierra la “teoría de los dos demonios” –que ponía en el mismo plano el terrorismo de Estado y la acción de los guerrilleros– que habían avalado las gestiones anteriores, así como a impulsar una política de la memoria; demandas intrínsecamente ligadas a la larga lucha de las organizaciones de derechos humanos en la Argentina.

De este modo, el gobierno de Kirchner tuvo la habilidad de instalarse en un espacio de crítica al neoliberalismo, nota común de las grandes movilizaciones de 2002. A su vez, su llegada se vio favorecida por la emergencia de un nuevo polo latinoamericano, visible en el surgimiento de gobiernos de “centroizquierda”, como el de Lula en Brasil y Chávez en Venezuela, en un contexto de crisis y crítica del consenso neoliberal. Este cambio de clima ideológico se expresaría en la retórica antineoliberal que Kirchner asumiría desde mediados del año 2003, que apuntaría a ciertos agentes económicos nacionales (en especial, los productores del campo), así como a algunas empresas privatizadas en manos de consorcios multinacionales. Esta retórica tuvo la capacidad de interpelar a gran parte del campo militante, que se reconoce deudor de la tradición nacional-popular asociada al peronismo histórico.

Por último, al final de su gestión, Kirchner podía exhibir así logros económicos importantes respecto de la gran crisis de 2002, cuando la devaluación produjo una caída del Producto Interno Bruto (PIB) del 16%, la tasa de desocupación llegó a alcanzar un 21% y el salario real disminuyó un 24%. Entre 2003 y 2007, el PIB alcanzó un crecimiento anual de alrededor del 9%, mientras que la desocupación fue descendiendo del 17,3% en 2003 al 8,5% en 2007, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En gran medida, las altas tasas de crecimiento económico y el superávit fiscal se deben a la recuperación de la industria, post-devaluación, así como a la expansión vertiginosa del modelo extractivo-exportador y la consolidación de un nuevo modelo agrario.

«Nos abocaremos a dar cuenta de los cambios originados en el espacio organizacional piquetero (desocupados), así como en las dimensiones más novedosas que asume la acción sindical»

Pese a los buenos índices macroeconómicos, el crecimiento fue muy desigual. Las brechas económicas y sociales abiertas en los noventa, y reforzadas luego de la salida desordenada de la convertibilidad entre el peso y el dólar, se consolidaron. Así, si en la década anterior, el 10% más rico ganaba 20 veces más que el 10% más pobre, en la actualidad, la brecha es un 35% más amplia: el primero supera 27 veces al segundo. Cierto es que la pobreza, que al comienzo de la gestión de Kirchner alcanzaba el 57%, se redujo al 34%. Pero en los noventa la brecha era del 24% (Lozano, 2005; 2006), todo lo cual hace pensar que la crisis de 2002 instaló un nuevo umbral desde el cual pensar las desigualdades.

En este marco de salida de la crisis, éxito económico, persistencia de las desigualdades, reactivación de la tradición nacional-popular y reforzamiento del sistema presidencialista, se operaría un fuerte corrimiento de las fronteras del conflicto social: así, entre 2003 y 2008 asistimos, por un lado, a una reconfiguración de las organizaciones de desocupados y una reemergencia del conflicto sindical; por otro, al compás de la explosión de los conflictos socioambientales, irían cobrando mayor importancia y visibilidad tanto las antiguas como las nuevas formas de lucha por la tierra y el territorio. En todo caso, la dinámica de dichos conflictos va diseñando una cartografía de las resistencias diferente a la de los noventa, pero en la que prevalecen los lenguajes de movilización pergeñados en aquella época: la utilización de la acción directa, la expansión de la forma asamblea y la demanda de autonomía.

En lo que sigue, a fin de apreciar los contornos de esta nueva cartografía, proponemos al lector un recorrido en dos momentos: en primer lugar, nos abocaremos a dar cuenta de los cambios originados en el espacio organizacional piquetero (desocupados), así como en las dimensiones más novedosas que asume la acción sindical; en segundo, presentaremos

las luchas de los movimientos campesinos e indígenas, las características de las nuevas asambleas socioambientales (contra la minería tóxica y las papeleras), para terminar con un breve resumen acerca del alcance y las nuevas oportunidades que se abren frente al reciente conflicto que enfrentó al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2008) con los diferentes sectores del agro movilizado (abril-julio de 2008).

De la centralidad de los desocupados a la reemergencia del conflicto sindical. La reconfiguración del espacio piquetero

No es ninguna novedad que en la Argentina de la última década emergieron nuevas formas de organización y acción colectiva, como producto de la resistencia a las políticas neoliberales. Entre estas expresiones, la nota más original fue la emergencia de un conjunto de movimientos de desocupados (piqueteros), a partir de 1996-1997. Desde sus orígenes, dichos movimientos estuvieron atravesados por diferentes corrientes político-ideológicas, que incluyen desde el populismo nacionalista hasta una multiplicidad de organizaciones de corte anticapitalista¹. Sin embargo, pese a la heterogeneidad político-ideológica, la existencia de un repertorio de acciones comunes y el desarrollo de una estrategia de cooperación entre las diferentes corrientes hizo posible que pudiéramos hablar de un “movimiento piquetero”, en creciente ascenso político-social, más allá de los fuertes episodios de represión registrados. Esto fue lo que efectivamente sucedió hasta mediados de 2001, año en que se realizaron las dos grandes asambleas piqueteras que reunieron a la casi totalidad del nuevo arco militante.

Como hemos dicho, con la asunción de Néstor Kirchner, varias cosas cambiaron. Ciertamente es que el nuevo gobierno se encontró con organizaciones piqueteras que contaban con un fuerte poder de convocatoria, en especial luego de las grandes movilizaciones de 2002. Sin embargo, la gran represión llevada a cabo en junio de ese año, que costó la vida de dos jóvenes militantes y centenares de heridos, supuso una primera gran inflexión, que golpeó de lleno a las organizaciones y movilizó a vastos sectores sociales en contra de una política represiva abierta y la amenaza de instalación de un Estado autoritario. Al mismo tiempo, las organizaciones piqueteras ya mostraban una gran heterogeneidad ideológica y una tendencia cada vez mayor a la fragmentación. En este sentido, la política de Kirchner consistió en poner en acto, simultáneamente, el abanico de estrategias disponibles para integrar, cooptar y disciplinar a las organizaciones piqueteras, pero evitando la represión abierta y sistemática que la propia sociedad rechazaba. Este proceso encontró una primera traducción en el realineamiento que la propia entrada de Kirchner produjo en el espacio piquetero, visible, por un lado, en la institucionalización e integración de las corrientes afines a

la tradición nacional-popular, dispuestas a apoyar la política del nuevo presidente; y por otro, en la oposición y movilización de las vertientes ligadas a la izquierda partidaria e independiente. Como consecuencia de ello, el proceso de reconfiguración del espacio piquetero fue mayor. Por un lado, a partir de 2003, asistimos al final de la alianza estratégica entre las dos grandes organizaciones territoriales, la Federación de Tierra y Vivienda, y la Corriente Clasista y Combativa, que habían liderado las luchas antineoliberales desde 1997. Por otro, el Bloque Piquetero Nacional, constituido por organizaciones ligadas a partidos de izquierda y agrupaciones independientes, y protagonista de grandes movilizaciones entre 2002 y 2004, sufrió un gran desgaste y debilitamiento, de cara al escenario de judicialización del conflicto y estigmatización mediático-social que se fue montando. Asimismo, las organizaciones ligadas a las corrientes autonómicas también conocieron una fuerte inflexión. Veamos algunos detalles de estas transformaciones.

El retorno de la tradición nacional-popular y el campo oficialista

La hipótesis de la integración e institucionalización comenzó a perfilarse tempranamente como una de las tendencias centrales del gobierno de Kirchner, alimentada por el accionar de ciertas organizaciones sociales que vieron en el nuevo presidente la posibilidad de un retorno a las "fuentes históricas" del justicialismo. Más aún, este nuevo giro del peronismo coincidió con la configuración de un nuevo escenario en América Latina, atravesado por la circulación de prácticas contestatarias y la emergencia de gobiernos de centroizquierda. En este marco, Hugo Chávez devino el nuevo modelo de referencia, en virtud de sus afinidades con la tradición nacional-popular argentina.

Es cierto que, anteriormente, en el campo piquetero algunas de estas agrupaciones ya habían manifestado una tendencia hacia la institucionalización (como la Federación de Tierra y Vivienda); otras más incipientes habían desarrollado un perfil más combativo (como la juvenil Barrios de Pie). Por su parte, Kirchner, desde el poder, se encargó de promover la creación de nuevas organizaciones sociales, entre ellas el Movimiento Evita, un frente de organizaciones territoriales de fuerte presencia en todo el país que retoma claramente la iconografía peronista.

Desde entonces, este conjunto de antiguas y nuevas organizaciones recibe un tratamiento privilegiado de parte del gobierno nacional, beneficiadas por los nuevos programas sociales, entre ellos el Plan Arraigo y Manos a la Obra, que contemplan la construcción de viviendas y el financiamiento de emprendimientos productivos. A partir de 2005, varios dirigentes piqueteros se incorporaron al gobierno, especialmente en secretarías ligadas a la acción social y comunitaria, a nivel nacional y provincial, como en la cancillería, lugar privilegiado para llevar a cabo un entrelazamien-

to de las acciones a nivel latinoamericano. En la actualidad, dichas organizaciones atraviesan una etapa de franca estatalización, compartiendo espacios de poder con intendentes y gobernadores anteriormente ligados a la época del menemismo o a lo más rancio del aparato del justicialismo, sectores con los cuales consideran que han entablado una disputa de poder².

Desde el punto de vista territorial, organizaciones como Barrios de Pie ampliaron su campo de acción, en particular a partir del programa nacional Promotores Territoriales para el Cambio Social, controlado desde el Ministerio de Desarrollo Social y concebido como una red de resolución de problemas. Al mismo tiempo, la organización buscó distanciarse de la "identidad piquetera", resignificada como una fase de la lucha cuya reivindicación se corresponde con el período de "resistencia al neoliberalismo". En este marco, la relectura hace hincapié en el abandono del piquete (corte de ruta) como estrategia de movilización, debido tanto al cansancio de los sectores medios como al acercamiento con el gobierno. De igual manera, el Movimiento Evita, al no poseer una historia piquetera previa, apuntó a construir su identidad en torno "de la militancia social y el trabajo de organización realizado en los barrios"³. Así, ambos movimientos reivindican una tradición más movimientista, autodefiniéndose como "organizaciones sociales", al tiempo que aspiran al desarrollo de un frente político más amplio, en el difuso espacio de la "transversalidad" impulsado por Kirchner al comienzo de su gobierno.

Dicha estrategia política sufrió empero varios reveses: por un lado, en 2007, en ocasión de las elecciones generales, el presidente Néstor Kirchner y su esposa y sucesora, Cristina Fernández de Kirchner, sellaron una alianza política con los sectores más conservadores del peronismo, así como con los llamados "radicales K"⁴. Por otro lado, el propio Kirchner, luego de la asunción de su esposa a la Presidencia, preparó su retorno a la dirección del Partido Justicialista, lo que se hizo efectivo en abril de 2008⁵. Ambas decisiones echaron por tierra la ilusión populista de aquellas organizaciones sociales que habían apostado a una suerte de cambio político "desde adentro" o la construcción de una especie de "transversalidad", más allá de la estructura rígida del partido. En este sentido, dichos grupos han tendido a sobreestimar la capacidad innovadora del gobierno de los Kirchner, al tiempo que resignaron toda independencia, como lo muestra la subordinación fiel a las consignas impartidas desde la Casa Rosada: así, las movilizaciones protagonizadas desde entonces tienen como antagonista a los sectores enfrentados con el gobierno (especialmente los sectores formadores de precios y los sectores agrarios).

Un devenir más azaroso parece haber tenido la Federación de Tierra y Vivienda, ligada a la suerte de su máximo referente, el

controvertido Luis D'Elía. Dicha organización sufrió varias rupturas en los últimos años, al tiempo que se vio enfrentada a la propia Central de Trabajadores Argentinos (CTA), de la cual forma parte, debido a las ambiciones del propio D'Elía, quien en 2003 vislumbró la oportunidad de alentar un proyecto propio, primero como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y, luego de su fracaso electoral, como funcionario del gobierno de Kirchner, desde la Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social, a la cual debió renunciar en 2006⁶. Estos intentos por capitalizar políticamente la larga historia de la FTV y su desarrollo comunitario terminaron en el fracaso, y lesionaron fuertemente a la organización, en gran medida porque las estrategias estuvieron subordinadas a un estilo de liderazgo personalista y no a un proyecto colectivo. Todo ello no significó, sin embargo, un alejamiento en relación al gobierno de los Kirchner, del que D'Elía aparece como uno de sus defensores públicos más acérrimos e incondicionales.

El campo de las organizaciones partidarias y autónomas

A la integración, institucionalización y progresiva estatalización de los grupos filopopulistas es necesario sumar la estrategia de disciplinamiento y criminalización que el gobierno de Néstor Kirchner aplicó sobre los grupos más movilizadas, entre los que se encuentran las organizaciones ligadas a los partidos de izquierda, así como los grupos independientes y autónomos. Para ello, el gobierno nacional no dudó en alimentar la estigmatización de la protesta –contraponiendo la movilización callejera a la exigencia de “normalidad institucional”–, impulsando activamente la difusión de una imagen de la democracia supuestamente acosada por las agrupaciones piqueteras.

Poco importaba si las declaraciones gubernamentales daban cuenta de un vaivén peligroso que iba de la judicialización al reconocimiento de las necesidades de los desocupados, del cuestionamiento de la representatividad de las organizaciones a la afirmación del derecho legítimo a la protesta. La campaña de invectiva y descalificación verbal tuvo momentos de alto voltaje entre octubre de 2003 y agosto de 2005. Los esquemas maniqueos y las simplificaciones ganaron el lenguaje periodístico y apuntaron a reducir la experiencia piquetera a una metodología de lucha (el piquete), así como se multiplicaron los ataques contra las organizaciones, acusadas de asistencialismo (dependencia en relación al Estado por medio de los planes sociales) y hasta de nuevo clientelismo de izquierda. El resultado fue el efectivo avance de la judicialización, o entrega del conflicto a los tribunales, y la instalación de un fuerte consenso antipiquetero, sostenido y avalado por amplias franjas de la opinión pública.

Cierto es que los movimientos piqueteros también contribuyeron a esta situación de aislamiento y deslegitimación. Muy especial-

«Presentaremos las luchas de los movimientos campesinos e indígenas, las características de las nuevas asambleas socioambientales (contra la minería tóxica y las papeleras)»

mente, las organizaciones ligadas a los partidos de izquierda (que incluyen diferentes variantes del trotskismo) tuvieron serias dificultades para reconocer el cambio de oportunidades políticas (la demanda de normalidad) y la productividad política del peronismo, por lo que diagnosticaron que Kirchner representaba una pura continuidad respecto de los gobiernos anteriores. En consecuencia, y en un escenario de fuerte confrontación, tendieron a impulsar la movilización callejera, multiplicando los focos

de conflicto y, en última instancia, olvidando la vulnerabilidad de las bases y la gran asimetría de fuerzas y recursos existentes.

En este contexto, todas las organizaciones piqueteras opositoras al gobierno de Kirchner sufrieron procesos de fragmentación organizacional y, en un fuerte marco de reflujo de la acción en las calles, se

vieron obligadas a revisar sus estrategias de intervención política. Una de las organizaciones masivas que más sintió el debilitamiento del poder de convocatoria fue sin dudas la Corriente Clasista y Combativa, ligada al maoísmo, que luego de un período de hesitación, y habiendo aceptado el desarrollo de emprendimientos propuestos por el gobierno (sobre todo, la construcción de viviendas), optó por el pasaje a la oposición. Por su parte, las organizaciones ligadas al trotskismo (como el Polo Obrero) presentaron una fuerte línea de continuidad respecto del período anterior, en la medida en que buscaron subordinar la temporalidad propia de las organizaciones territoriales a lo político-partidario o, más recientemente, a lo político-electoral. Sin embargo, la distinción entre lo social-reivindicativo (el trabajo territorial, en sus diferentes aspectos) y lo estrictamente político (y ello por encima de sus definiciones) continúa siendo un elemento de debate y de reflexión presente en casi todas las organizaciones, dada la difícil coexistencia establecida, desde los orígenes mismos del accionar piquetero, entre la urgencia de las demandas y las aspiraciones de corte emancipatorio.

Por último, las estrategias de las organizaciones independientes fueron marcadamente heterogéneas, tanto debido a la ausencia de un posicionamiento único ante las políticas sociales desarrolladas por el gobierno como al desinterés en la creación de espacios de articulación política. Algunas de estas organizaciones, como el Movimiento Teresa Rodríguez, aceptaron incorporarse a los planes de autoconstrucción de viviendas y desarrollo de emprendimientos textiles (fábrica de guardapolvos) que propuso el gobierno de Néstor Kirchner, en un proceso que, si bien implicó logros, superó rápidamente la posibilidad de ajustar las lógicas (a la vez individuales y económicas) desarrolladas por las cooperativas de vivienda y las unidades textiles a la lógica (a la vez colectiva y política) propia del movimiento social.

Una de las organizaciones autónomas que mejor sorteó este período de reflujo y reconfiguración organizacional fue el Frente Darío Santillán, proveniente de la Coordinadora Aníbal Verón, espacio que tuviera un gran protagonismo y resonancia con las clases medias entre 2002 y 2003. En efecto, el Frente Darío Santillán rechazó los proyectos productivos propuestos por el gobierno (autoconstrucción y pequeñas fábricas textiles), pero al mismo tiempo continuó con aquellos emprendimientos ligados a la producción artesanal y autogestión (panaderías, huertas comunitarias, bloqueras). Desde una perspectiva política, apuntó a ampliar la acción hacia otros espacios –el frente campesino, estudiantil y sindical–, anudando fuertes lazos con movimientos campesinos –en especial con el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE). Al mismo tiempo, potenció la dimensión cultural del movimiento (creación de una editorial y una distribuidora cultural, entre otros), lo cual tornó ostensible la coexistencia y entrelazamiento novedoso del modelo del militante social con el del activista cultural. Por último, el movimiento extendió su plataforma discursiva, incorporando activamente la problemática relativa a la defensa de los recursos naturales. En contraposición, otro de los movimientos independientes más emblemáticos del período 1997-2003, el Movimiento de Trabajadores Desempleados (MTD) de Solano –expresión radical del autonomismo– entró en una etapa de visible declive, ligada tanto a la opción por un desarrollo territorial focalizado (la concentración en unos pocos emprendimientos productivos) como a una estrategia aislacionista y claramente desmovilizadora. Esto se tradujo en una significativa ausencia política en el plano regional y nacional, pese a su llamativa presencia en los foros internacionales alternativos.

En suma, una vez pasada la efervescencia social, y con ello el período de resonancia con las clases medias movilizadas, hacia mediados de 2004 las organizaciones piqueteras disidentes se encontraron en las calles con un importante nivel de aislamiento social, pero en un

contexto político bien diferente al de los años anteriores. Así, la inflexión fue triple. Por un lado, y de manera casi paradójica, la crisis de 2001-2002 otorgó al peronismo una nueva oportunidad histórica, permitiéndole dar un enorme salto a partir de la masificación de los planes asistenciales. Así, los dispositivos del clientelismo afectivo se potenciaron, asegurando tanto la posibilidad de la reproducción del peronismo “desde abajo” como el cierre de la brecha disruptiva abierta por las organizaciones piqueteras. Por otro lado, más allá de la masificación, la política social continuó en la misma línea que las anteriores, esto es, basada en la fragmentación y la focalización de la ayuda social, lo cual terminó por consolidar la matriz asistencial. Por último, el corrimiento de los conflictos sociales hacia la matriz sindical y la explosión de conflictos socioambientales volvieron a colocar un velo de indiferencia e invisibilidad sobre el accionar de las organizaciones piqueteras, en su gran parte debilitadas, encapsuladas en el trabajo territorial de los barrios y con escasas posibilidades de hacer escuchar sus reclamos.

Sin embargo, la dificultad por suscitar adhesiones y aliados importantes por fuera del campo militante no fue exclusiva responsabilidad del gobierno nacional, de los medios de comunicación o de la mirada racista y unidimensional que adoptó gran parte de la sociedad argentina. Hacia adentro, necesario es decirlo, asistimos a una potenciación mayúscula de las divergencias existentes entre las diferentes vertientes político-ideológicas, esto es, el pasaje de la cooperación al conflicto. En este contexto, los movimientos piqueteros críticos y antisistémicos se vieron muy debilitados y debieron resignar la centralidad que, hasta 2004, tuvieron en la cartografía argentina de las resistencias. Asimismo, las organizaciones oficialistas tendieron a expandirse y multiplicar sus intervenciones, pese a que su presencia en el plano de la recomposición del nuevo poder peronista continúa siendo marginal.

Finalmente, lo sucedido entre 2003 y 2005 dejó planteado como desafío no sólo la importancia de la disputa cultural y simbólica en un escenario de agudización de los conflictos sociales, sino también la urgencia de reflexionar acerca de cómo tender puentes y generar articulaciones entre los elementos más positivos y aglutinantes de las diferentes vertientes de la izquierda –la tradición nacional-popular, la tradición marxista clásica y la narrativa autonomista– que recorren y desbordan del espacio piquetero, atravesando el conjunto del campo militante.

El corrimiento del conflicto: sindicalismo y precariedad

Mientras la política gubernamental tendía a sellar las fronteras de la exclusión, las fronteras de la precariedad comenzaron a mostrarse más flexibles y porosas, revelando un mayor protagonismo del extenso mundo de traba-

jadores, sindicalizados y precarios. En efecto, a partir de 2004, el contexto de crecimiento económico sin redistribución y con un fuerte aumento de la precariedad marcó el retorno de la conflictividad sindical, de la mano de la tradicional Confederación General del Trabajo (CGT), luego de una década de desmovilización y de una reorientación hacia un sindicalismo de tipo empresarial. Desde 2004, la CGT se encuentra unificada bajo el liderazgo de Hugo Moyano, jefe del sindicato de los camioneros, quien durante los años noventa encabezó el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA), nucleamiento sindical peronista que osciló entre la crítica a la CGT oficialista y la colaboración con la CTA. Durante los años de la gestión de Kirchner, en un escenario más bien segmentado y fuertemente corporativista, el vínculo entre la CGT y el gobierno se desarrolló en el marco del estilo peronista tradicional: a saber, entre la afirmación de la dependencia política y la apelación a la fuerte capacidad de presión.

Por su parte, la CTA, que nuclea sobre todo a trabajadores del sector público y cuyas dificultades actuales son evidentes, pareciera no haber encontrado una política coherente respecto del gobierno. Esta agrupación, que en los noventa desempeñó un papel aglutinador y contestatario, se ha visto muy desdibujada debido a las divergencias internas, dado que incluye a conocidos dirigentes que simpatizan con la política oficial. Por otro lado, pese a las promesas de Néstor Kirchner y su sucesora, Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno continúa sin otorgar a la central la personería gremial exigida.

En el marco del aumento de la conflictividad sindical, no han sido pocas las luchas protagonizadas por comisiones internas, en ciertos casos por fuera de la dirigencia de los sindicatos o de las centrales reconocidas. Entre estos actores se destaca el sector de servicios y transporte (empresas de *call center*, subterráneos de Buenos Aires). Otros conflictos sindicales de base que tuvieron gran resonancia fueron protagonizados por el sector público (educación y salud). Desde las huelgas de los hospitales públicos, amenazados por el desguace, hasta los persistentes paros del sector docente (enseñanza primaria y secundaria) en varias provincias, dichos conflictos han puesto de manifiesto el deterioro salarial y la ampliación de las fronteras de la precariedad, en una época de prosperidad económica. El asesinato de un docente en la provincia patagónica de Neuquén (abril de 2007) a manos de la policía provincial y las constantes pujas en otras provincias revelaron la ausencia de propuestas integradoras en torno a la recuperación y revaloración de lo público, así como la dificultad de los propios sindicatos para nacionalizar los conflictos.

Sin embargo, estos conflictos de base han ido configurando la emergencia de una militancia sindical, que viene ensayando

«Estos conflictos de base han ido configurando la emergencia de una militancia sindical, que viene ensayando nuevas experiencias de coordinación»

nuevas experiencias de coordinación. Un ejemplo lo constituye el Movimiento Intersindical Clasista, que se formó en diciembre de 2005 y reúne una izquierda basista, proveniente tanto del sector público como del transporte (subterráneos). Otro caso es la Coordinadora de Trabajadores Precarios, conformada por jóvenes trabajadores de *call center*, encuestadores y becarios universitarios. Estos trabajadores, en su mayor parte provenientes de servicios caracterizados por el trabajo

flexible y en negro, optaron por atravesar un camino organizativo propio.

Una de las características de dicha experiencia refiere a una acción militante externa, esto es, que el desarrollo de una estrategia de resistencia (y por ende de construcción del sentido de la precariedad) parte de las instancias de coordinación, y no desde el propio lugar de trabajo⁷.

Asimismo, en términos tanto generacionales (jóvenes) como de ethos militante, la dinámica de dichos espacios de coordinación presenta una afinidad mayor con los colectivos de los movimientos alter-globalización, que podemos hallar en otras latitudes (Europa), ligados a la problemática de la precariedad. Así, sus acciones se insertan más en la lógica de los movimientos sociales que en el registro sindical tradicional.

Frente a la ausencia de control y regulación estatales que se advierte en las más diversas esferas, la problemática de la precariedad se ha venido manifestando bajo diferentes formas. Así, uno de los hechos que sacudió el país fue la muerte de 194 jóvenes en un incendio ocurrido en una discoteca (República de Cromañón) en la ciudad de Buenos Aires. Aunque el local tenía capacidad para 1.200 personas, en el momento del siniestro –diciembre de 2004– había más de 4 mil jóvenes. El hecho se constituyó en la trágica ilustración de un modelo socioeconómico excluyente, dejando a la vista una trama de corrupción empresarial y complicidad estatal, así como la vulnerabilidad y desprotección de la vida de los más jóvenes.

Desde un comienzo, los familiares y sobrevivientes de esta tragedia se organizaron, exigiendo que la justicia actuara sobre los responsables directos e indirectos. La presión de estos, así como las investigaciones efectuadas, terminaron con la destitución de Aníbal Ibarra, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por “mal desempeño de sus funciones”, ocurrida en marzo de 2006.

Pero el efecto Cromañón presenta la particularidad de combinar dos dimensiones: por un lado, como movimiento social inscribe su lógica de acción en un tipo de lucha contra la impunidad, pese al escaso apoyo obtenido por parte de los organismos tradicionales de derechos humanos, hoy vinculados al gobierno. Por otro, como hecho social, produjo una conmoción en la sociedad que desembocó en la desnaturalización de la precariedad. Esto se ha venido expresando en diferentes protestas (corte de calles), que tienen como protagonistas a estudiantes secundarios y vecinos que denuncian la precariedad (en términos de infraestructura, de aumento de la inseguridad, de ausencia de control estatal) como algo anormal e insoportable, e interpelan la responsabilidad del Estado. Dichas demandas pueden sintetizarse en una consigna contundente: “No queremos otro Cromañón”, que de alguna manera revela la instalación de un nuevo umbral desde el cual pensar ciertos hechos, antes vividos como catástrofes naturales o simplemente como tragedias inevitables.

Por último, recordemos que en la Argentina existe un importante movimiento de fábricas recuperadas y autogestionadas por los trabajadores, que involucran a unas 12 mil personas. En los últimos años, las fábricas recuperadas entraron en una etapa de fragmentación organizacional. Afirma Julián Rebón (2007):

El gobierno de Kirchner intervino en algunos casos puntuales, pero nunca incorporó la recuperación como una política de Estado, en especial, en lo que se refiere a la cuestión de la propiedad. Las expropiaciones temporarias (sólo en la ciudad capital y en la provincia de Buenos Aires existen algunos procesos de expropiaciones definitivas) se debieron a legislaciones provinciales y/o locales. Precisamente la inexistencia de una política nacional de expropiación llevó a que la suerte de las empresas recuperadas tienda a quedar sujeta a la voluntad del gobierno local, la discrecionalidad de los jueces y avatares de ese proceso.

Por esta razón, varias fábricas recuperadas continúan amenazadas de desalojo, una vez pasado el período de cesión o *comodato*. Tal es el caso de los

trabajadores de FASINPAT (Fábrica sin patrones, ex Zanon), ubicada en el norte de la Patagonia, quizá la experiencia más resonante –por su carácter antagonista– del movimiento de fábricas recuperadas, y con múltiples lazos con el resto del campo militante.

En suma, la dinámica de los conflictos abiertos por la precariedad y las nuevas formas de exclusión vinculadas al actual modelo de acumulación presagia escenarios inestables y un incremento de las movilizaciones. Sin embargo, estas acciones contestatarias se desarrollan en un marco de extrema fragmentación organizacional, ausencia de instancias duraderas de articulación política y un fuerte poder integrador por parte del gobierno. Así las cosas, las organizaciones piqueteras y las nuevas formas de acción sindical enfrentan dos desafíos mayores: por un lado, la búsqueda de un horizonte de superación del actual contexto de fragmentación; por otro, la necesidad de repensar los cambios recientes operados en el heterogéneo mundo de las clases subalternas, en un país en el cual los movimientos sociales y las izquierdas antisistémicas siempre han tenido enormes dificultades para articular políticas conjuntas y convertirse, por ende, en grandes movimientos políticos.

Las luchas por la tierra y el territorio. Las fases del modelo neoliberal

En los últimos veinte años, el impulso del capitalismo neoliberal ha conocido diferentes fases en América Latina: un primer momento, en los noventa, marcado por la desregulación económica, el ajuste fiscal, la política de privatizaciones (de los servicios públicos y los hidrocarburos), así como por la introducción generalizada de los agronegocios (los cultivos de transgénicos mediante la siembra directa). Como afirma Boaventura de Sousa Santos (2007), estas transformaciones confirmaron el carácter meta-regulador del Estado, esto es, un Estado que emerge como “entidad responsable de crear el espacio para la legitimidad de los reguladores no estatales”. Esto implicó la generación de nuevas normas jurídicas que garantizaron la institucionalización de los derechos de las grandes corporaciones y la aceptación por parte de los estados nacionales de dicha normativa creada en los espacios transnacionales.

En 1994, la Argentina realizó una reforma constitucional que significó un cambio profundo en relación a la explotación de los recursos naturales; por un lado, marcó la renuncia del Estado nacional a la propiedad de los mismos y consagró su provincialización (gas, petróleo, minería); por otro, dio paso a una obligada privatización al excluir al Estado (provincial o nacional) de cualquier tipo de explotación. En este marco, las grandes empresas transnacionales fueron conformando enclaves de explotación que abarcaron, en primer lugar, la explotación de los hidrocarburos,

«En el marco del aumento de la conflictividad sindical, no han sido pocas las luchas protagonizadas por comisiones internas, en ciertos casos por fuera de la dirigencia de los sindicatos o de las centrales reconocidas»

y posteriormente fueron incluyendo la expansión de las fronteras mineras y energéticas. Asimismo, el proceso de privatización trajo consigo el desmantelamiento de la red de regulaciones que garantizaban un lugar a las economías regionales dentro de la economía nacional. La nueva política se tradujo en una manera diferente de concebir el espacio geográfico nacional, que desplazó la idea de un modelo global de territorio subsidiado desde el Estado nacional por la de "territorio eficiente". En consecuencia, la viabilidad o inviabilidad

de las economías regionales pasó a medirse en función de la tasa de rentabilidad.

En la actualidad, el capitalismo neoliberal en América Latina atraviesa una segunda fase, caracterizada por la generalización de un modelo extractivo-exportador que apunta a consolidar y ampliar aún más las brechas sociales entre los países del Norte y el Sur,

en base a la extracción de recursos naturales no renovables. La minería a cielo abierto, la construcción de megapresas, los proyectos previstos por la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA)⁸ y prontamente los agrocombustibles (etanol) ilustran a cabalidad esta nueva división del trabajo. En términos de D. Harvey, la actual etapa de expansión del capital puede ser caracterizada como de "acumulación por desposesión"⁹, proceso que produjo nuevos giros y desplazamientos, colocando en el centro de la disputa la cuestión acerca del territorio y el medioambiente. La presente etapa también aparece asociada a nuevos mecanismos de desposesión, como la biopiratería o la apropiación de formas culturales y cultivos tradicionales pertenecientes a los pueblos indígenas y campesinos.

No es casualidad entonces que en este escenario de reprimarización de la economía, caracterizado por la presencia desmesurada de grandes empresas transnacionales, se hayan potenciado las luchas ancestrales por la tierra, de la mano de los movimientos indígenas y campesinos, al tiempo que

han surgido nuevas formas de movilización y participación ciudadana, centradas en la defensa de los recursos naturales, la biodiversidad y el medioambiente –todo lo cual va diseñando una nueva cartografía de las resistencias. Estos conflictos se insertan en una dinámica multiescalar, en la que “lo global” y “lo local” se presentan como un proceso en el que se cristalizan, de un lado, alianzas entre empresas transnacionales y estados que promueven un determinado modelo de desarrollo y, de otro, resistencias de las comunidades locales que no comparten tal modelo ni los estilos de vida que éste impone. En el marco de dichos procesos, la construcción de un lenguaje sobre la territorialidad se ha venido cargando de nuevas significaciones y valoraciones, a partir del rechazo a una concepción eficientista e instrumental que exhiben tanto los gobiernos como las empresas transnacionales y determinados actores locales. En la Argentina, tanto la expansión del modelo sojero como del de la minería metálica a gran escala podrían pensarse como un ejemplo paradigmático en el cual una visión de la territorialidad se presenta como excluyente de las existentes (o potencialmente existentes), generando una “tensión de territorialidades” (Porto Gonçalves, 2001). Así, la definición de lo que es el territorio y, de manera más general, de cuál es el modelo de desarrollo viable, tiende a convertirse en el *locus* del conflicto.

Seguidamente, buscaremos dar cuenta de las diferentes movilizaciones y movimientos sociales que se desarrollan bajo esta lógica del conflicto.

Mercantilización, nuevo modelo agrario y luchas por la tierra

Desde fines de los noventa, la expansión del modelo sojero, caracterizado por el uso de las nuevas tecnologías de acuerdo a estándares internacionales (semillas transgénicas mediante la siembra directa), colocó a la Argentina como uno de los grandes exportadores mundiales de cultivos transgénicos. Su vertiginoso desarrollo implicó una reestructuración global del sistema agrario tradicional, que ya arrastraba una fuerte crisis, agravada por la política excluyente de los años noventa. Sin embargo, su éxito inicial no sólo está relacionado con el agotamiento del modelo anterior, sino también con su capacidad relativa de articular diferentes actores económicos: mientras que en el sector semillero aparecen las grandes empresas multinacionales (como Monsanto y Cargill) y unos pocos grandes grupos económicos locales, en el circuito de producción surgen otros actores económicos, entre ellos los “terceristas” (los que cuentan con el equipamiento tecnológico), los “contratistas” (suerte de “productores sin tierra”, entre los cuales se incluyen los *pools* de siembra y los fondos de inversión) y, por supuesto, los pequeños y medianos propietarios, muchos de ellos rentistas.

La contracara de dicho proceso ha sido tanto la potenciación como la emergencia de problemáticas económicas, sociales y ambientales. Así, por ejemplo, entre 1988 y 2002, desaparecieron 103.405 establecimientos agrarios en el nivel nacional. A la reducción del número de explotaciones es necesario agregar el incremento de la superficie media, que pasó de 243 a 587 hectáreas. Según el Grupo de Estudios Rurales (GER, 2004: 112), las técnicas de siembra directa disminuyeron entre un 28 y un 37% el uso de mano de obra, lo que generó un fuerte éxodo de la población rural. Por otro lado, el aumento de la rentabilidad viene acompañado por el avance de la deforestación, el uso masivo de agrotóxicos y una tendencia al monocultivo. A esto debemos sumar lo que supone la sojización del modelo productivo en términos de renuncia de la soberanía alimentaria; o, en otro nivel, de posibilidad de independencia y desarrollo tecnológico, vista la tendencia a exportar sólo productos primarios (*commodities*) y no productos con mayor valor agregado. Por último, la instalación y expansión del nuevo modelo agrario trajo consigo el desplazamiento de poblaciones y las amenazas de desalojos para las comunidades campesinas, sobre todo en la llamada “frontera agrícola” (las áreas marginales), como en las provincias de Santiago del Estero y Salta.

En el marco de la hegemonía del modelo sojero, han venido desarrollándose variadas formas de resistencia, en especial de la mano de movimientos campesinos, cuya acción va delineando “la tensión existente entre una agricultura industrial y una agricultura campesina o familiar” (Dominguez et al., 2007: 239-246). Uno de los movimientos campesinos de mayor trayectoria es el MOCASE, en la provincia de Santiago del Estero, que surgió en 1985 y cuenta con unas 9 mil familias organizadas, tanto por el tema de la tierra como por la comercialización de sus productos. En un contexto de expansión de la frontera agrícola, la acción del MOCASE no resulta nada fácil. Desde hace años, la organización es permanentemente hostigada por las guardias “paramilitares” de los grandes terratenientes, así como por la judicialización de los conflictos en torno a la propiedad de la tierra. Recordemos que, aunque muchos campesinos no cuentan con los títulos de las tierras, la reforma constitucional de 1994 incorporó el reconocimiento al derecho veintañal, abriendo con ello la posibilidad de titularización de las tierras a indígenas y campesinos.

De manera más reciente, también en otras provincias se han venido desarrollando movimientos campesinos que luchan contra el avance de la soja y por la titularidad de las tierras. Tal es el caso del Movimiento Campesino de Córdoba y del Movimiento Campesino de Formosa (MOCAFOR), este último incorporado desde hace varios años a la CTA. Asimismo, dichas organizaciones, que conforman hoy el Movimiento

Nacional Campesino e Indígena, han sido objeto de las políticas sociales del gobierno de Kirchner. Desde 2006, participan en el Programa Social Agropecuario, que depende de la Secretaría de Agricultura, lo que sin embargo no ha conllevado ningún cambio de estatus en relación con la tenencia de la tierra (Giarracca, 2007).

La problemática de la lucha por la tierra presenta dimensiones más dramáticas, si hacemos referencia a las organizaciones y pueblos indígenas. Entre ellas, las comunidades Kolla, Mapuche, Wichí, Toba y Ava Guaraní han protagonizado en años recientes una sostenida resistencia a los desalojos y, al mismo tiempo, no abandonaron su lucha por alcanzar la propiedad legal de las tierras que ocupan. Una de las regiones más afectadas es la Patagonia, donde actualmente se lleva a cabo un proceso de reprivatización de la tierra que implica la expansión de ambiciosos proyectos de explotación hidrocarburífera, mineros, energéticos, forestales y turísticos. El desarrollo de estos megaemprendimientos afecta sobre todo a las comunidades mapuches. Uno de los casos más conocidos es la contaminación del yacimiento petrolero de Loma de la Lata, en manos de Repsol-YPF, donde las comunidades Kaxipayiñ y Paynemil presentan niveles de intoxicación alarmantes por la acumulación de más de diecisiete metales pesados en sus tejidos. Desde hace años la cuestión se debate en la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos. Asimismo, la expansión de la frontera energética abrió otros frentes de conflicto, entre los cuales se destaca el proyecto que prevé crear seis represas sobre el río Corcovado (situado a 100 kilómetros de Esquel, en Chubut), que ha generado la resistencia de la comunidad mapuche Pillan Mahuiza, cuyas tierras quedarían inundadas con la construcción.

Otro de los conflictos más resonantes es el que enfrentan las comunidades mapuches y la corporación italiana Benetton, convertida en el mayor latifundista de la Argentina, con 900 mil hectáreas en la región. Así, se han dado numerosos casos de recuperación comunitaria de tierras en las provincias de Neuquén (con el apoyo de la Coordinación de Organizaciones Mapuche y el Consejo Asesor Indígena-CAI) y Río Negro (con el respaldo de la Ruka Mapuche). Muchos de estos casos han entrado en la vía de la judicialización, pese a que la Constitución Argentina, reformada en 1994, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios a la formación de los propios estados, así como su derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras tradicionalmente ocupadas. Asimismo, en noviembre de 2006, se aprobó la Ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena, que frena por cuatro años los desalojos de comunidades, con el propósito de relevar –en vistas a regularizar– la situación territorial de las comunidades originarias existentes en el país, a

finés de garantizar el control de los bienes de la naturaleza por parte de los pueblos originarios (Agosto y Briones, 2007).

La expansión de los movimientos socioambientales. Las asambleas contra la minería tóxica¹⁰

Las reformas realizadas durante los años noventa resultaron cruciales para la reorganización y futura expansión del modelo extractivo-exportador. En lo que respecta al sector minero, se establecieron condiciones leoninas para la explotación. Así, en primer lugar, este conjunto de medidas consistió en la autoexclusión del Estado y el otorgamiento de beneficios y exenciones al capital transnacional, algunos de los cuales son: estabilidad fiscal por treinta años, exención del pago de los derechos de importación, deducción del 100% de la inversión en el impuesto a las ganancias, exención del pago del canon por tres años para el descubridor del yacimiento. Y finalmente, en cuanto al pago de regalías, se estableció un porcentaje máximo del 3% al valor boca mina declarado por la empresa (del que se descuentan los costos que implica el proceso desde su extracción hasta el traslado para la exportación), así como la no obligación de liquidar divisas en el país.

En segundo lugar, la construcción de un andamiaje legal fue acompañada desde el Banco Mundial mediante el Programa de Asistencia a la Minería Argentina (PASMA), cuyo principal objetivo consistió en realizar reformas regulatorias e institucionales tendientes a alentar la inversión privada en minería. El proyecto, que tuvo una duración de seis años (1995-2001), se ejecutó a nivel del Estado nacional y seis provincias. Posteriormente se llevó adelante la segunda fase, que incluyó esta vez a diecisiete provincias. Entre los componentes del proyecto se encuentran el desarrollo del marco institucional, el sistema de catastro y registro minero, el manejo ambiental y el sistema unificado de información minera.

Por último, se implementó también una legislación de "facilitación fronteriza" para que los límites entre países y sus consecuentes incumbencias no fueran un impedimento para la explotación a ambos lados de la cordillera de Los Andes. El Tratado de Integración y Complementación Minera con Chile, firmado en julio de 1996, rige la explotación integrada de yacimientos compartidos por los dos países. A partir de dicho instrumento, el tránsito de bienes pero también de personas deja de ser regulado por los estados. De esta manera, se configura un territorio donde se desdibujan las fronteras y se genera una legalidad propia a los intereses mineros. En el marco de este tratado, el primer proyecto a desarrollarse se denomina Pascua-Lama, localizado en ambos lados de la cordillera, para el caso argentino en la provincia de San Juan.

«La definición de lo que es el territorio y, de manera más general, de cuál es el modelo de desarrollo viable, tiende a convertirse en el locus del conflicto»

En este marco, y al igual que en otros países latinoamericanos como Perú, Ecuador y Guatemala, se fueron generando una serie de movilizaciones socioambientales contra la minería tóxica. Estos movimientos, conocidos como asambleas de vecinos o de autoconvocados, se sitúan en pequeñas y medianas localidades de la zona cordillerana y precordillerana de varias provincias. En la Argentina, uno de los casos pioneros y emblemáticos fue el conflicto que mantuvo la

población de Esquel, ubicada en una provincia patagónica, contra la empresa minera canadiense Meridian Gold. Gracias al alerta dado por técnicos y ambientalistas de la región, la comunidad de Esquel se movilizó contra la explotación de una mina de oro a cielo abierto, riesgosa para la salud y el medioambiente. Asimismo,

siguiendo los pasos de Tambogrande¹¹, los vecinos autoconvocados organizaron un plebiscito, en marzo de 2003, que arrojó un rotundo “no” a la minería tóxica, reuniendo al 81% de la población. Posteriormente, en 2006, la empresa minera intentó judicializar el conflicto al querellar a seis asambleístas de Esquel por “violación de secretos empresariales”. Sin embargo, el “efecto Esquel” tuvo un arrastre multiplicador, despertando a otras regiones en las que ya se habían implantado o se proyectan emprendimientos mineros de gran envergadura, que involucran a conocidas multinacionales. Así, en la actualidad existen más de cincuenta asambleas contra la minería tóxica, en más de nueve provincias argentinas. En todos los casos, la composición de dichas movilizaciones refleja un carácter heterogéneo y multisectorial, con una marcada presencia de las clases medias, y en muchos casos de sectores profesionales (docentes, técnicos y otros), encargados de proponer/elaborar un saber contra-experto, a fin de confrontar con el discurso dominante.

Al compás de la explosión de los conflictos socioambientales, las asambleas se han orientado a la conformación de una “red de territorios”

que dio origen a diversos colectivos de organizaciones, entre ellas la Asamblea Coordinadora Patagónica, Asamblea Comarcal, Asamblea Regional No a Pascua Lama y Plenario de Organizaciones del NOA (noroeste argentino). Estas asambleas regionales integran la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), que desde 2006 funciona con el objetivo de potenciar las luchas de las comunidades. El carácter asambleario de la UAC (que ha realizado ya seis encuentros nacionales) refleja empero las dificultades de construir instancias de segundo grado, que potencien los antagonismos existentes en función de una lógica de acumulación política. Sin embargo, pese a sus dificultades, la UAC se ha convertido en un lugar de intercambio de experiencias y, por ende, de ampliación de las demandas, entre las cuales se incluye una incipiente y progresiva afinidad valorativa con la cosmovisión de los movimientos campesinos e indígenas, históricamente invisibilizados y relegados al margen de la sociedad. De hecho, el Movimiento Campesino e Indígena ha participado de los últimos dos encuentros.

Estos conflictos socioambientales tienen lugar en el marco de un entramado complejo, en el cual se encuentran involucrados diferentes actores sociales, económicos y políticos en el nivel local, regional, estatal y global. En este sentido, cabe señalar que la multiescalaridad suele combinarse perversamente con una tipología muy expandida en América Latina: *las economías de enclave*. Así, estos emprendimientos suelen encontrar un contexto favorable en aquellas regiones caracterizadas por una matriz social más jerárquica y escasamente diversificada desde el punto de vista económico, en la que imperan gobiernos provinciales y municipales de bajísima calidad institucional y sobreabunda el empleo estatal¹². En este contexto, las asimetrías propias de la dinámica entre lo local (las asambleas de autoconvocados) y lo global (empresas multinacionales) tienden a exacerbarse: las movilizaciones suelen ser más erráticas y la vulnerabilidad del colectivo, mayor. Esta realidad parece ajustarse a varias provincias del noroeste argentino, como La Rioja, San Juan, Salta, Catamarca y Tucumán. El paradigma lo constituye sin duda la provincia de San Juan, actualmente gobernada por un dirigente peronista que fuera el encargado de promover la ley minera en los años noventa, quien posee intereses económicos en el sector. Así, en Calingasta, una de las localidades más afectadas de la provincia, las diferentes tentativas por llevar a cabo un referéndum con relación al tema de la minería han fracasado. La suspensión del plebiscito en tres oportunidades reafirma el compromiso del Estado provincial y su alianza con las empresas transnacionales para garantizar la expansión de la actividad minera en dicha región. Asimismo, a fines de 2007, la Legislatura de esa provincia sancionó un nuevo régimen contravencional que establece la pena de treinta días de cárcel o trabajo comunitario a todo aquel "que

anunciando desastres, infortunios o peligros inexistentes provoque alarma en lugar público o abierto al público, de modo que pueda llevar intranquilidad o temor a la población" (ver <www.noalamina.org>), en un evidente intento por acallar la resistencia contra la minería a cielo abierto.

Muy diferente es el caso de aquellas otras provincias que cuentan con un fuerte tejido social y una economía más diversificada, como Mendoza y Córdoba. Así, en 2007, presionada por las movilizaciones socioambientales, la Legislatura de Mendoza aprobó una ley contra la minería tóxica, y la provincia de Córdoba, con todos sus vaivenes, se apresta actualmente a seguir sus pasos. Asimismo, en las provincias patagónicas, la existencia de una matriz social más abierta y la presencia de una población de tipo aluvional favorecieron el rápido proceso de empoderamiento de los movimientos, tal como lo demostró el caso de Esquel, y posteriormente las provincias de Río Negro y La Pampa, que rápidamente se plegaron a sancionar una normativa que prohíbe el desarrollo de este tipo de minería.

Por otro lado, la posibilidad de éxito de las movilizaciones socioambientales también está ligada a otro tipo de factores: por ejemplo, a la etapa de realización en la cual se encuentra el proyecto (prospección, exploración o explotación). Así, la mayor parte de las acciones exitosas se refieren a proyectos mineros que se encontraban en una etapa de prospección o exploración. Muy diferente es el caso de las acciones de resistencia una vez que el emprendimiento se encuentra en una fase de explotación y desarrollo. El caso más emblemático es el de la minera La Alumbra, instalada desde 1997 en Andalgalá, provincia de Catamarca, que cuenta con un mineraloducto de más de 200 kilómetros de extensión, que comunica el yacimiento con la ciudad de Tucumán. En los últimos años, han sido numerosas las denuncias de contaminación a causa de la rotura de dicho mineraloducto. En un contexto de economía de enclave, la acción económica y social de la empresa tiende a acallar toda disonancia. En todo caso, a once años de la instalación del primer proyecto de minería a cielo abierto en el país, resulta posible establecer de manera cierta cuáles fueron los impactos sociales, económicos y ambientales. Frente a ello, y por primera vez en la Argentina, en el mes de junio de 2008, la justicia falló en contra de una minera, haciendo responsable a La Alumbra por graves daños ambientales.

Asimismo, el éxito de estas acciones de resistencia depende del sistema de oportunidades políticas. Un caso relevante es el de la provincia de La Rioja, donde desde hace más de un año las asambleas de Chilecito y Famatina realizan un corte que impide el acceso de la empresa Barrick Gold (una de las compañías mineras más grandes del mundo, de origen canadiense) al territorio en el que se proponía iniciar la etapa de

«nada parece indicar que la actual gestión de Cristina Fernández de Kirchner vaya a orientarse hacia una discusión acerca del modelo de desarrollo»

exploración. A mediados de 2007, las acciones de lucha encontraron una novedosa oportunidad política, a raíz de un conflicto interno dentro del Partido Justicialista provincial, que derivó en el desplazamiento del gobernador. En el marco de la crisis política, el gobernador sustituto sancionó por decreto una ley que prohíbe la minería contaminante. Sin embargo, una vez consolidado por la vía electoral, éste buscó limitar el alcance de la ley, que hasta el día de hoy no ha entrado en vigor.

Por último, no olvidemos que, desde la órbita del gobierno nacional, se ha venido confirmando la continuidad del modelo minero¹³, y nada parece indicar que la actual gestión de Cristina Fernández de Kirchner vaya a orientarse hacia una discusión acerca del modelo de desarrollo, en lo que se refiere a la explotación de los recursos naturales y el rol de las

grandes empresas transnacionales, frente a un contexto optimista en términos de inversiones extranjeras.

La Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú

Uno de los conflictos socioambientales más resonantes es sin duda el de Gualeguaychú (provincia de Entre Ríos), donde los vecinos se movilizaron en contra de la instalación de dos papeleras, Botnia y Ence, de origen transnacional. A diferencia de otros reclamos socioambientales, como el de las mineras, el conflicto por las pasteras añade un registro para nada suplementario, al involucrar a dos países vecinos y traer por ende al primer plano cuestiones referidas a la soberanía estatal.

Dicho conflicto se retrotrae al año 2003, cuando el gobierno uruguayo, bajo la presidencia de Jorge Batlle, aprobó la construcción de dos plantas papeleras en la costa del río Uruguay, que dicho país comparte con Argentina. Recordemos que, desde fines de los ochenta, impulsado por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Uruguay apostó al desarrollo del modelo forestal, cuyo destino no era otro que la industria papelera internacional (ver

Giarracca, 2007). Lo cierto es que, mientras del lado uruguayo se desoyeron las voces que advertían sobre la extensión del monocultivo del eucalipto, del lado argentino se ignoraron también las advertencias de las organizaciones ambientalistas frente a la amenaza de contaminación que podrían producir ambas plantas papeleras (Bergel, 2006). Pese a ello, a ambos lados del río Uruguay, las organizaciones ambientalistas continuaron realizando una intensa campaña de difusión y alerta en la población. Asimismo, el Frente Amplio uruguayo, que durante su campaña electoral se había manifestado en contra de la construcción de las papeleras, una vez en el gobierno optó por apoyar su instalación.

El 30 de abril de 2005 se realizó una enorme movilización que culminó con el "abrazo al río Uruguay", que se constituyó en el acta de nacimiento de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú. Del lado argentino, entre 2005 y 2006 se realizaron intensas movilizaciones que incluyeron largos cortes de los pasos fronterizos que unen ambos países. Los asambleístas autoconvocados lograron, de este modo, mediante una protesta pacífica que conjugaba la desobediencia civil con la democracia asamblearia, colocar el conflicto en la agenda política nacional e internacional. En ese marco de internacionalización del conflicto, la empresa Ence decidió cambiar la zona de emplazamiento de la pastera. No así Botnia, compañía de origen finlandés, que optó por continuar las obras para finalmente entrar en funcionamiento a mediados de 2007.

El conflicto desembocó en dos querellas: la primera, ante el tribunal internacional de La Haya, ante el cual la Argentina radicó una denuncia por amenaza de contaminación, y cuyo juicio definitivo todavía está pendiente. La segunda fue una causa abierta en el tribunal del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), ante la presentación de Uruguay, que denunció la ilegalidad de los cortes de los puentes fronterizos. Por su parte, desde principios de 2007, frente a la falta de respuesta de las autoridades, la Asamblea de Gualeguaychú retomó el corte del puente internacional por tiempo indefinido, tensando enormemente la relación entre ambos países.

El impacto de la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú está vinculado tanto a la duración de la protesta como a su carácter masivo: mujeres y hombres de todas las edades, mayoritariamente pertenecientes a las clases medias, han venido recorriendo un largo camino que se tradujo tanto en un empoderamiento político como en una ampliación del horizonte respecto de la complejidad de los problemas socioambientales. En este sentido, la experiencia de Gualeguaychú representa el pico más alto de la corta historia asamblearia de la Argentina; sin embargo, también ha sido la experiencia que más rápidamente mostró sus límites. Así,

desde un comienzo, la asamblea buscó diferenciarse de los desocupados (piqueteros), rechazando el mote de “neopiqueteros” que le adjudicaba tanto la prensa argentina como uruguaya. Pero los límites de Gualeguaychú no residen tanto en su carácter de clase o en su marcada autorreferencialidad (muy probablemente, debido a la sobreexposición frente a los medios de comunicación), sino más bien en el hecho de haber desarrollado una fuerte matriz nacionalista. La intervención del presidente argentino, Néstor Kirchner, en apoyo a la asamblea (en clave de “Causa Nacional”), y la respuesta no menos virulenta de su par uruguayo, Tabaré Vázquez, resultaron cruciales en dicha inflexión nacionalista. Por un lado, el enfrentamiento entre los dos gobiernos sirvió para reactivar la vieja oposición entre “país grande” y “país pequeño” que recorre históricamente la relación. Por otro, el conflicto enfrenta a dos países que cuentan con una tradición política muy diferente. Así, mientras en la Argentina la acción política no-institucional está claramente instalada y constituye un repertorio habitual de las organizaciones sociales, en Uruguay, la existencia de una fuerte tradición institucional ha generado una gran desconfianza hacia todo tipo de acción que se desarrolle por fuera de los carriles institucionales habituales. De esta manera, el conflicto terminó por instalarse en un registro de difícil solución, el de la exacerbación de las lógicas nacionalistas, antes que en el terreno de la discusión del modelo de desarrollo.

En fin, más allá de las ambivalencias, las limitaciones y los matices, tanto los movimientos campesinos e indígenas como las nuevas movilizaciones socioambientales se instalan en un campo de difícil disputa. Por un lado, deben confrontar directamente la acción global de las grandes empresas transnacionales, provenientes del Norte desarrollado, que en esta nueva etapa de acumulación del capital se han constituido en los actores claramente hegemónicos del modelo extractivo-exportador. Por otro, en el plano local, deben confrontar con las políticas y orientaciones generales de los gobiernos –tanto a nivel provincial como nacional–, quienes en su mayor parte consideran que en la actual coyuntura internacional las actividades extractivas constituyen la vía más rápida –si no la única en esas regiones– hacia un progreso y desarrollo, siempre trunco y tantas veces postergado en estas latitudes.

La ilusión desarrollista y los nuevos escenarios

Convengamos que mucho se ha escrito acerca de las dificultades que una gran parte de los movimientos sociales actuales tienen para comprender e involucrarse en la compleja dinámica de reconstrucción del Estado, en el marco de procesos nacionales caracterizados como “gobiernos en disputa”. Incluso se ha criticado la visión simplificada, y por momentos dogmática-

mente autonómica, de movimientos y organizaciones sociales proclives a ignorar las ambivalencias y dilemas que afrontan dichos gobiernos. Sin embargo, muy poco se ha hablado acerca de la *ilusión desarrollista* que hoy parece caracterizar a varios gobiernos de la región y de las consecuencias que ello podría aparejar en términos de modelo de desarrollo.

En efecto, la expansión vertiginosa del modelo extractivo-exportador y los grandes proyectos de infraestructura de la cartera del IIRSA parecen alimentar una ilusión desarrollista, habida cuenta de que, a diferencia de los años noventa, las economías latinoamericanas se vieron favorecidas por los altos precios internacionales de los *commodities*, tal como se refleja en las balanzas comerciales y el superávit fiscal. El hecho no puede ser desestimado, muy especialmente luego del largo período de estancamiento y regresión económica de las últimas décadas. En esta coyuntura favorable, no son pocos los gobiernos que han relegado a un segundo plano o sencillamente escamoteado las discusiones acerca de los modelos de desarrollo posible, habilitando así un nuevo impulso de la visión productivista¹⁴.

Para el caso argentino, necesario es decir que las propuestas reformistas del gobierno de los Kirchner (2003-2007 y 2007-2008) han sido de corte más modesto y claramente continuista, tanto en lo que se refiere al nuevo paradigma agrario como a la explotación de los recursos naturales. Una excepción la constituye, como hemos dicho, el reclamo de los vecinos de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos. Sin embargo, en los primeros meses de 2008, se abrieron nuevas oportunidades políticas para una discusión, al menos en lo que respecta al modelo sojero y sus consecuencias, cuestión hasta ese momento reservada a unos pocos especialistas, ecologistas marginales y movimientos campesinos. Veamos, para terminar este artículo, en qué consiste dicha oportunidad.

A fines de 2007, con un objetivo recaudatorio y fiscalista, la nueva presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, aumentó las retenciones a las exportaciones de las mineras, hidrocarburos y productos agrícolas (entre ellos, la soja transgénica). Poco después, a principios de 2008, anunció un nuevo aumento de las retenciones al agro, elevándolas al 44%. Pese a que las medidas fueron adoptadas en un contexto de estampida de los precios internacionales de los productos agrícolas que benefician a los sectores agrarios, generaron un crudo enfrentamiento entre el gobierno y los diferentes sectores organizados del campo. De manera inédita, el frente agrario agrupó tanto a las grandes organizaciones rurales (entre ellas la tradicional Sociedad Rural Argentina, que nuclea a los grandes propietarios) como a aquellos representantes de los pequeños y medianos productores (Federación Agraria Argentina). Durante cien días, estos actores llevaron

a cabo conjuntamente una serie de bloqueos de rutas (paros agrarios y *lock-out*) que dejaron al país al borde del desabastecimiento y dividieron a la sociedad. La dinámica que adquirió el conflicto dio especial visibilidad a algunos de los socios "menores" del nuevo modelo sojero, entre ellos los pequeños productores agrarios, quienes llevaron a cabo una alianza *non sancta* con las corporaciones más poderosas, históricamente identificadas como el adversario. A su vez, las clases medias urbanas aportaron nuevas dimensiones políticas al conflicto, mediante numerosos cacerolazos realizados en apoyo a los reclamos agrarios, en los cuales no estuvieron exentas ni las cuestiones de orden racista y clasista (el rechazo visceral al peronismo, asociado tradicionalmente a los sectores populares), ni las demandas institucionales (la distribución del poder político, visiblemente concentrado en el matrimonio presidencial).

Por su parte, la escalada vertiginosa del conflicto mostró la escasa flexibilidad y apertura del nuevo gobierno de Cristina Kirchner, lo que se tradujo en una inesperada licuación del capital político y simbólico acumulado por el kirchnerismo desde la salida de la crisis y, por ende, en una importante pérdida de prestigio de la autoridad presidencial. Los sectores aliados al oficialismo no dudaron en leer el conflicto en clave latinoamericana, esto es, en el marco de una supuesta polarización entre la derecha oligárquica y un gobierno nacional-popular o nacional-desarrollista. Lo cierto es que, más allá de las hipérboles de los discursos y las falsas polarizaciones, a medida que el conflicto se agravaba, el gobierno tendió a enfatizar el carácter popular de la medida, poco explicitado al inicio, abriendo una oportunidad de discusión acerca de la necesidad de la "redistribución económica y social".

Es importante subrayar que, en su mayoría, los cortes de ruta y bloqueos fueron sostenidos por asambleas de autoconvocados compuestas por pequeños productores. Uno de los lugares más emblemáticos de la protesta fue Gualaguaychú. Sin que sea legítimo hablar de solapamiento, el caso es que existió una suerte de comunicación entre la Asamblea Ambiental de Gualaguaychú y las protestas rurales, que reconocen como dirigente a Alfredo de Angelis, a la vez presidente de la Federación Agraria de la provincia de Entre Ríos y miembro de la Asamblea Ambiental de Gualaguaychú. Asimismo, el conflicto creó una oportunidad política para hablar de la situación de los excluidos del modelo sojero, esto es, de los movimientos campesinos e indígenas, que desde hace años vienen sufriendo el desplazamiento y despojo de sus tierras a causa de los desmontes y plantaciones de cultivos transgénicos, en especial en el norte argentino.

A fines de junio de 2008, en un contexto de estancamiento de las negociaciones y de agravamiento de la crisis, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió sortear las dificultades y transfirió al

Parlamento la difícil tarea de decidir acerca del futuro de las retenciones al agro. En fin, pese a que el final todavía abierto del conflicto nos exime de realizar cualquier balance definitivo, lo cierto es que éste ha servido para traer a la discusión numerosos temas vinculados tanto al actual modelo de acumulación y el alcance del paradigma agrario como a los nuevos lenguajes de la movilización callejera. Así, por un lado, el conflicto activó la discusión acerca de la redistribución de la riqueza y la persistencia de las desigualdades, algo inimaginable poco tiempo atrás, interpelando al conjunto de la sociedad y sus diferentes voceros (partidos políticos, movimientos sociales, intelectuales, universidades, actores corporativos). Por otro lado, evidenció los puntos ciegos del nuevo paradigma agrario, que involucran una serie de problemáticas muy arduas y complejas y cuya discusión apenas está en sus albores. En este sentido, tal vez la puja entre el "campo" y el "gobierno" contribuya a generar un verdadero debate social sobre las diferentes implicaciones de un paradigma productivo que, a no dudarlo, engloba mucho más que a los productores agrícolas, supera la discusión acerca del tamaño de la unidad productiva o el porcentaje de retenciones que debe cobrar el Estado, y pone en tela de juicio la actual visión productivista y lineal del desarrollo, que predomina tanto en el gobierno como en el conjunto de los actores involucrados en el nuevo modelo.

Por último, el giro inesperado que adoptaron las movilizaciones agrarias en su lucha contra el alza de las retenciones plantea ciertos cuestionamientos acerca de las lógicas políticas y las formas de autoorganización en juego, en la medida en que éstas favorecieron y posibilitaron un reforzamiento –y una acumulación política– de la derecha conservadora. Así, las intensas movilizaciones y acciones de lucha, sostenidas especialmente por los pequeños productores autoconvocados, mostraron las peligrosas dimensiones de un discurso corporativo y pragmático, compatible con la forma asamblea, clave de bóveda de los nuevos movimientos sociales. Esta articulación perturbadora impone, por ende, la urgente necesidad de revisar críticamente el alcance de las nuevas formas de movilización.

Boaventura de Sousa Santos afirma que en las últimas décadas asistimos a una reducción de la figura de la democracia, identificada sin más con la democracia liberal y representativa. En este sentido, sostiene que "hemos perdido demodiversidad" (Santos, 2005). Mediante la acción colectiva, diferentes movimientos sociales latinoamericanos contes-taron esta reducción, desarrollando otras formas de acción y deliberación, ligadas a la democracia directa. En el marco de esas movilizaciones cobró centralidad la forma asamblea, como nuevo paradigma de la política desde abajo. En la Argentina de 2008, el carácter asambleario de los movimientos se ha venido expresando en el conjunto de actores abordados en este ar-

título: las organizaciones piqueteras, las nuevas instancias de coordinación sindical, las organizaciones campesinas e indígenas, los movimientos socio-ambientales y, más recientemente, los autoconvocados agrarios.

Sin embargo, la forma asamblea está lejos de ser unívoca, pues su expansión no está vinculada necesariamente con una definición “sustancial” de la democracia o, para decirlo en términos más contemporáneos, con un proyecto de corte emancipatorio. Desde esta perspectiva, lejos estamos de aquellas experiencias ligadas al ideario revolucionario (la Comuna, el consejismo obrero), cuya discusión puebla bibliotecas enteras del pensamiento de las izquierdas. Así, la realidad que hoy confrontamos requiere, antes que nada, el reconocimiento de que nos encontramos frente a la generalización de una *forma* que apunta *primordialmente* a la defensa y desarrollo de la participación, producida y alimentada desde abajo. De ahí sus potencialidades contrahegemónicas cuando aparece asociada a un horizonte político radical e instituyente, pero también sus límites y posibles distorsiones cuando deviene una institución en sí misma, niega explícitamente su vinculación con un discurso político-ideológico pero, de facto, puede adoptar las formas más perversas del pragmatismo, acompañando o refuncionalizando las lógicas de poder de las clases dominantes.

Bibliografía

- Agosto, P. y Briones, C. 2007 “Luchas y resistencia Mapuche por los bienes de la naturaleza” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 22, septiembre.
- Armellino, M. s/f “Tensiones entre organización sindical y organización territorial: la experiencia de la CTA y la FTV en el período post-crisis” en Pereyra, S.; Schuster, F. y Pérez, G. *La huella piquetera. Avatares de las organizaciones de desocupados post-crisis 2001* (Buenos Aires: Ediciones El Margen).
- Barattini, Mariana 2007 “La organización en el marco de la individualización laboral. La Coordinadora de Trabajadores precarizados”, Segundo Congreso Latinoamericano de Antropología, Buenos Aires.
- Bergel, P. 2006 “Derivas uruguayas” en *M’Bigúa*, Año 1, N° 1, junio-diciembre.
- Domínguez, D.; Lapeña, P. y Sabatino, P. 2007 “Un futuro presente: las luchas territoriales” en *Nómadas* (Bogotá: Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos).
- Fornillo, Bruno s/f “Derivas de la matriz nacional popular: el pasaje de la movilización a la institucionalización del Movimiento Barrios

- de Pie durante la presidencia de N. Kirchner, 2002-2007" en Pereyra, S.; Schuster, F. y Pérez, G. *La huella piquetera. Avatares de las organizaciones de desocupados post-crisis 2001* (Buenos Aires: Ediciones El Margen).
- GER-Grupo de Estudios Rurales 2004 "17 de Abril: Día Internacional de la Lucha Campesina. Desalojos y arrinconamientos de campesinos y de comunidades indígenas en la Argentina" en *Realidad Económica* (Buenos Aires) N° 203.
- Giarracca, Norma 2007 "La tragedia del desarrollo: disputas por los recursos naturales en la Argentina" en *Sociedad* (Buenos Aires) diciembre.
- Harvey, David 2004 "El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión" en *Socialist Register*. En <<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/social/harvey.pdf>>.
- Lozano, Claudio 2005 "Comportamiento de los sectores dominantes. Pobreza, distribución del ingreso y crecimiento en Argentina", Encuentro Plan Fénix en Víspera del Segundo Centenario, Buenos Aires, septiembre.
- Lozano, Claudio 2006 "La Argentina desigual" en *MORENO* (Buenos Aires) N° 179, diciembre.
- Natalucci, Ana s/f "El movimiento Evita... de los barrios a la plaza. Desplazamiento de una trayectoria" en Pereyra, S.; Schuster, F. y Pérez, G. *La huella piquetera. Avatares de las organizaciones de desocupados post-crisis 2001* (Buenos Aires: Ediciones El Margen).
- Porto Gonçalves, C. 2001 *Geografías, movimientos sociales. Nuevas territorialidades y sustentabilidad* (México DF: Siglo XXI).
- Rebón, J. 2007 *La empresa de la autonomía. Trabajadores recuperando la producción* (Buenos Aires: Colectivo de Ediciones Picaso).
- Santos, Boaventura de Sousa 2005 *Reinventar la democracia. Reinventar el estado* (Buenos Aires: CLACSO).
- Santos, Boaventura de Sousa 2007 "Más allá de la gobernanza neoliberal: el Foro Social Mundial como legalidad y política cosmopolitas subalternas" en Santos, Boaventura de Sousa y Rodríguez-Garavito, César (eds.) *El derecho y la globalización desde abajo. Hacia una legalidad cosmopolita* (Barcelona/México DF: Anthropos/Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Cuajimalpa).

Svampa, Maristella y Pereyra, S. 2003 *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras* (Buenos Aires: Biblos).

Notas

1 Para una presentación general de las organizaciones de desocupados, ver Svampa y Pereyra (2003).

2 La llamada "Plaza del Sí", convocada por Kirchner en el tercer aniversario de su gobierno (25 de mayo de 2006), fue la ocasión para reunir en un mismo espacio un conjunto heteróclito de organizaciones, que iba desde los organismos históricos de derechos humanos hasta las organizaciones piqueteras oficialistas, pasando por los sindicatos de la Confederación General del Trabajo (CGT) y las organizaciones del peronismo bonaerense.

3 Para una lectura del Movimiento Barrios de Pie, ver Fornillo (s/f). Para el Movimiento Evita, ver Natalucci (s/f).

4 Se trata de aquellos que proceden de la histórica y cuasi extinta Unión Cívica Radical, y que hoy apoyan al gobierno. El vicepresidente electo en diciembre de 2007, Julio Cobos, proviene de esta vertiente.

5 Desde 2003, el Partido Justicialista no ha presentado un candidato único en las elecciones nacionales. Así, en ese año hubo tres candidatos peronistas a la presidencia. Tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández se presentaron con el Frente para la Victoria, cuya composición partidaria es variable según los distritos, agrupando partidos de

centro y centroizquierda. En 2005, luego de un agitado congreso partidario, el Partido Justicialista fue intervenido. Todo indica que la actual normalización partidaria, bajo la jefatura de Kirchner, daría por terminada la tímida experiencia de transversalidad, inaugurada por el Frente para la Victoria, así como fortalecería el sistema tradicional de partidos.

6 Para una lectura pormenorizada de la relación entre la CTA y la FTV, se sugiere ver Armelino (s/f).

7 Para profundizar sobre este tema, ver Barattini (2007).

8 Cartera de proyectos de infraestructura de transporte, energía y comunicaciones consensuada por varios gobiernos latinoamericanos en el marco de la IIRSA.

9 Para Harvey, el actual modelo de acumulación implica cada vez más la mercantilización y depredación, entre otras cosas, de los bienes ambientales. La acumulación por desposesión (lo que Marx denominaba la "acumulación originaria") ha desplazado en centralidad a la dinámica ligada a la "reproducción ampliada del capital". Este argumento puede verse en Harvey (2004).

10 Retomamos aquí parte de nuestra investigación sobre conflictos socio-ambientales, desarrollada en el marco de la Universidad Nacional de General

Sarmiento, Argentina, que cuenta con la participación de Lorena Bottaro y Marián Solá Álvarez.

11 Recordemos que ya en 2002, en Perú, uno de los países latinoamericanos más afectados por el desarrollo de la megaminería, la comunidad de Tambogrande, compuesta mayoritariamente por población campesina de origen indígena, expresó su rechazo a la minería en un referéndum que se constituyó en una suerte de ícono y modelo para otros países.

12 Durante los noventa, las localidades petroleras del norte de Salta fueron un caso emblemático y anticipatorio, que expresaba cabalmente la combinación entre el predominio de grandes capitales privados y extranjeros en el marco

de una economía de enclave, y gobiernos provinciales y municipales de bajísima calidad institucional, caracterizados por la corrupción en los planos político y económico. En este marco, la implementación del modelo de explotación y control de los recursos naturales tiende a ser acompañada por políticas represivas y autoritarias que criminalizan la pobreza y la protesta social.

13 En 2003, el presidente Kirchner presentó el Plan Minero Nacional, mediante el cual dio continuidad y un nuevo impulso a las políticas de sus antecesores.

14 Asimismo, esto produjo un uso bastante lábil y hasta contradictorio del término “neodesarrollista” para caracterizar a diferentes gobiernos de la región.

“Autonomías indígenas” y “Estado Plurinacional”

Proyectos políticos de los
movimientos indígenas y
campesinos en Bolivia

Marxa Nadia Chávez León

Socióloga. Coautora, junto a Álvaro García Linera y Patricia Costas, de *Sociología de los movimientos sociales en Bolivia*. Integrante del equipo de investigación del Centro de Estudios Andino-Amazónicos y Mesoamericanos (Bolivia).

Resumen

El artículo sostiene que el concepto de “autonomía” fue introducido por el conservadurismo con un significado virtual de extraterritorialidad y que el de “autonomía indígena” surgió entonces como contramedida defensiva. Además, expone las diferencias existentes entre las organizaciones campesinas del Oriente boliviano y las del Altiplano, que pueden realizar grandes movilizaciones. Analiza, por último, la nueva Constitución política nacional y desarrolla la discusión sobre el Estado Plurinacional.

Abstract

The article states that the concept of “autonomy” was introduced by the conservatism with the virtual meaning of extra-territorialism and that the “indigenous autonomy” therefore came about as a defensive counter-measure. In addition, it shows existing differences between the rural organizations of Eastern Bolivia and those of the Altiplano, which can organize large movements of people. Finally it analyzes the new national political Constitution and develops the debate on the Plurinational State.

Palabras clave

Autonomía, autonomía indígena, Tierras Comunitarias de Origen, campesinos, ayllus, marcas, Nueva Constitución Política, autogobierno, Estado Plurinacional, oligarquía.

Keywords

Autonomy, indigenous autonomy, Community Lands of Origin, rural community, ayllu, markas, New Political Constitution, self-governance, Plurinational State, oligarchy.

Muchos cambios se han perfilado en el escenario político boliviano desde que las últimas elecciones presidenciales del año 2005 llevaron a Evo Morales y a su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), al gobierno. El momento que vivimos fue inaugurado por la Guerra del Agua en Cochabamba en abril de 2000 y continuó con grandes procesos de autoorganización social hasta 2005. El protagonista central de este ciclo de rebeliones fue el movimiento indígena y campesino, que se transformó en el núcleo articulador de los levantamientos en Bolivia.

En Latinoamérica, los antecedentes de la discusión acerca de las "autonomías indígenas" se hallan en los debates que determinados organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (López Bárcenas, 2006), emprendieron sobre los derechos de estos pueblos a la autodeterminación y el autogobierno. En Bolivia, esta polémica adquiere rasgos particulares, pues el tema y la misma palabra —"autonomía"— fueron incorporados en la discusión política por las fuerzas más conservadoras del país, que vieron en la consigna autonómica una oportunidad y una bandera de rearticulación de un poder que encontraron amenazado por la intervención popular en los asuntos públicos y la irrupción indígena en los espacios gubernamentales. Las "autonomías departamentales" son el pivote central del proyecto político reaccionario boliviano.

Las organizaciones indígenas, en especial la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), respondieron ante la ofensiva del proyecto cívico-empresarial anunciando la creación de sus propios "estatutos autonómicos". De esta manera, surgió para los sectores populares el debate sobre la autonomía y el reto de reapropiarse de esta noción hasta ahora capitalizada a favor del proyecto oligárquico. En este trabajo deseamos evaluar el alcance de las propuestas y las reflexiones de las organizaciones sociales que enfrentan el desafío de resignificar este concepto mediante la incorporación de la idea de "autonomías indígenas". También queremos establecer cómo, en el Proyecto de Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) aprobado por la Asamblea Constituyente, se piensan la participación y la articulación real entre las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) autónomas y Asamblea Legislativa Plurinacional Bicameral, que reemplazaría al actual Congreso Nacional de la República, en la medida en que éste es un

elemento central para analizar el alcance de la transformación del Estado. Para este efecto, hemos estudiado las propuestas de reforma de modelo de Estado y de creación de autonomías indígenas realizadas por las organizaciones indígenas más representativas, así como las tres versiones de la NCPE (una aprobada en grande en la ciudad de Sucre y la otra en detalle en Oruro, y la revisada, negociada y presentada en La Paz).

Proyectos políticos: Asamblea Constituyente y autonomías indígenas

Las propuestas políticas de lo que genéricamente puede denominarse “movimiento indígena y campesino” boliviano se enraízan en tres experiencias históricas de lucha y resistencia: el movimiento comunal sindical del Altiplano lacustre, el movimiento cocalero y el movimiento indígena de Oriente¹. Aunque las primeras dos experiencias son importantes, nos centraremos en la última, debido a que es ella la que específicamente, desde la década del noventa, impulsa la demanda de realización de una Asamblea Constituyente y ahora sostiene el debate sobre las “autonomías indígenas”.

El movimiento indígena del Oriente boliviano, que surgió en la década del ochenta, en gran parte gracias al apoyo de instituciones como la iglesia católica, organizaciones no gubernamentales y organismos como la OIT, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo (Patzí, 1999), y fue impulsado por varios dirigentes indígenas, ha tenido un desarrollo muy diferente respecto a los movimientos del área andina, ya que se trata de “pueblos indígenas” muy diversos y con poblaciones por lo general pequeñas, cuya experiencia histórica más importante fue la de su reorganización espacial y política –“Reducciones” o “Misiones” a las que fueron sometidos por los jesuitas durante el período colonial y republicano. La situación temprana de los pueblos indígenas del Oriente ha sido definida por los procesos de “genocidio” y “etnocidio” (Plata, 2008) que, al reducirlos física y numéricamente, les restaron las posibilidades de tener la fuerza de masa de las poblaciones indígenas altiplánicas. Tras un largo proceso de organización, nació la CIDOB, que alberga en su seno a diversas culturas y sus respectivas formas organizativas, pero cuyos pueblos en muchos casos cuentan con un bajo número de componentes –por ejemplo, los guarasugwe puaserna que, según datos censales, apenas llegan a 31 personas (*La Prensa*, 2007a).

Por las razones expuestas, las estrategias políticas de este movimiento no giraban en torno a la movilización masiva ni a las acciones directas, sino predominantemente alrededor de la lucha legal mediada por una estructura organizativa bastante institucionalizada y con una importante presencia de indígenas profesionales y asesores de ONG. En esa etapa de su historia, este movimiento se relacionó con el Estado boliviano

El pedido de reconocimiento estatal de las Entidades Territoriales de Origen significaba ya un quiebre de los poderes departamentales, pero también de los ámbitos de gestión municipales

de manera “pactista” (García Linera et al., 2005), es decir, apelando al poder gubernamental como a un árbitro que debía protegerlos de los empresarios madereros y agroindustriales, actitud diferente a la del movimiento indígena del Altiplano Norte, que interpelaba y enfrentaba radicalmente al Estado.

Fueron los pueblos indígenas del Oriente los que sugirieron inicialmente, en 1995, mediante la Asamblea del Pueblo Guaraní (PNUD, 2007), la realización de una Asamblea Constituyente (AC), propuesta que luego hizo abiertamente la CIDOB en 2001. La AC fue pensada como la vía de acceso a reformas institucionales “totales” en el marco del Estado, y que recuperaría para su convocatoria y desarrollo la experiencia organizativa indígena. Estas elaboraciones estaban basadas en los convenios internacionales que

debatían el derecho a la libre determinación o autodeterminación de los pueblos. En los primeros documentos emitidos por la CIDOB no están señaladas ningún tipo de propuestas referentes a “autonomías” ni a la constitución del “Estado Plurinacional”, pero sí a la exigencia de un Parlamento unicameral.

Luego de los constantes pedidos hechos a gobiernos como el de Hugo Bánzer Suárez, Jorge Quiroga, Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, la exigencia de la AC fue retomada por el Movimiento al Socialismo, que fijó la fecha de la realización de la misma para mediados del año 2006. Es en ese año que las organizaciones indígenas bolivianas elaboraron propuestas respecto al modelo de Estado y ordenamiento territorial del país, en las que desarrollaron tres formulaciones centrales: Estado Plurinacional, Poder Legislativo unicameral y autonomías indígenas.

La colonialidad del Estado

Tanto en controversias académicas como en aquellas que se dan al interior de las organizaciones sociales

indígenas y populares, se discute actualmente la posibilidad de transformación del Estado (García Linera et al., 2007) o, en todo caso, su *deconstrucción*, que implicaría la remoción profunda de las formas organizativas de la administración, de la representación y de la toma de decisiones en lo que hasta ahora es el aparato burocrático e institucional estatal. Si partimos del hecho de que el carácter colonial del Estado en Bolivia está basado en la exclusión de otras formas de práctica política –como las existentes en las comunidades indígenas y en los movimientos que actúan con lógicas comunitarias en los sindicatos campesinos–, vemos que el mismo está pensado desde la óptica de una sola cultura, que subordina formas políticas no liberales a instituciones y prácticas liberales (García Linera et al., 2007). Es decir, el problema no radica solamente en el cuestionamiento de los funcionarios gubernamentales, sino en el papel y la estructura del mismo Estado. En ámbitos gubernamentales y en la misma propuesta de la Nueva Constitución Política del Estado se está discutiendo la forma en que se encararía un proceso de descolonización estatal y social, y cómo ello se vincularía a la discusión sobre “autonomías indígenas”.

Lo que está en tela de juicio en Bolivia no es poco: significa enfrentar el tema de la “igualdad política intercultural” como ha señalado Luis Tapia (2007) –una discusión que, sin embargo, se está realizando dentro de los marcos actuales de la organización estatal.

La introducción del tema “autonómico” en el debate político: respuestas y contra-respuestas

Ante el ascenso de fuerzas campesinas indígenas y populares, los departamentos que conformaron la denominada “media luna” (que inicialmente incluía cuatro departamentos: Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija) comenzaron desde 2003 a manifestar sus intenciones de conformar departamentos autónomos, como una reacción inmediata a las revueltas protagonizadas por indígenas, trabajadores mineros y otros sectores. A principios de ese año, el Comité Cívico tarijeño pidió “autonomía regional” si es que no se los consultaba sobre la exportación del gas, medida que constituyó uno de los motivos más potentes para la expulsión de Gonzalo Sánchez de Lozada, entonces presidente de la República (*Correo del Sur*, 2003). La autonomía planteada por los comités cívicos y las prefecturas hasta aquí aún no estaba manifestada en la forma que adoptaría desde 2004, es decir, no se propugnaba una “autonomía departamental”, sino más bien una de carácter regional (ver <www.comiteprosantacruz.org/comite/pronunciamientos/manifiestonuevabolivia.htm>), pero se esbozaba ya la trama de intereses que estaban inmersos en estas zonas respecto al negocio de exportación del gas por un puerto chileno. El mismo Comité Cívico cruceño, el día en

que Sánchez de Lozada huía a Estados Unidos, reivindicó el derecho a la "autodeterminación de los pueblos" (ver <www.comitéprosantacruz.org/comite/pronunciamientos/nuevarepublica.htm>).

Este fue el inicio del debate de las "autonomías" en todo el ciclo político iniciado en 2000 con la victoria popular en la Guerra del Agua. Las "autonomías departamentales" serían pensadas, confeccionadas, reivindicadas, propuestas y defendidas por los sectores más conservadores como los comités cívicos. La "autonomía" no fue una iniciativa indígena o popular. Recién en 2006, las organizaciones indígenas y campesinas presentaron una propuesta unificada al respecto, acorde a las pulsaciones de la AC y la ofensiva de las oligarquías preponderantemente orientales. En efecto, ante la marcha de la Constituyente, el bloque de derecha presentó su proyecto de autonomías y "estatutos autonómicos".

La igualación del tema autonómico de la oligarquía con el proceso constituyente

La Asamblea Constituyente, tal y como fue pensada en un inicio, no sólo fue promovida por organizaciones sociales indígenas, sino también por entes como la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida, que aportaron su propia perspectiva de una AC como espacio de encuentro de organizaciones y movimientos indígenas, de trabajadores y populares.

Finalmente, en esta lucha por el significado del cónclave, éste quedó como el espacio del "cambio concertado", en el que participarían *todos* los sectores de la población, mediante el voto directo y secreto, producto de una negociación entre sectores de derecha y el gobierno. En las discusiones iniciales, la derecha no aceptó la representación ni por corporaciones ni por pueblo indígena y menos aún que la Asamblea tuviera carácter vinculante. En una especie de "trueque", entonces, pidieron la realización de un referendo por las autonomías a cambio de "permitir" la convocatoria a elección de constituyentes. Ante esta situación, el gobierno nacional aceptó la efectivización del referendo por autonomías, el mismo día en que debían realizarse las elecciones para los constituyentes. La aceptación de las autonomías departamentales, propuesta política de la oligarquía oriental, a cambio de que ésta "permitiera" la realización de la Constituyente, significó la igualación en términos políticos de la Agenda de Octubre (nacionalización de los hidrocarburos, sobre todo, Asamblea Constituyente y otras demandas), fruto de la autoorganización social, con la recientemente denominada "Agenda de Enero", mes de la realización del primer "Cabildo del Millón" organizado por los comiteístas y la Prefectura cruceña de derecha. La demanda autonomista quedó desde entonces como postulado *legítimo* que podía ser equiparado con las demandas y

logros populares de los años 2000 a 2005, cuando, hasta ese momento, la fuerza real del movimiento cívico no era tan grande ni fuerte como pretendía, aunque sí había logrado un relativo apoyo en los sectores, especialmente urbanos, de Santa Cruz.

Incluso en el seno de la Constituyente, como señala José de la Fuente, consultor de la misma, la bancada de la derecha, liderada por el partido Poder Democrático y Social (PODEMOS), estuvo directamente ligada con las decisiones del Comité Cívico Pro Santa Cruz (De la Fuente, 2008); por lo tanto, los problemas en el desarrollo de la AC fueron impulsados por esta entidad, viviéndose otra fase de rearticulación de comités cívicos y partidos de derecha en torno a un discurso “democrático”.

La trayectoria de las propuestas indígenas respecto a la “autonomía indígena” y el “Estado Plurinacional”

Las “autonomías indígenas” fueron introducidas por las organizaciones indígenas ante una expansión de la influencia del Comité Cívico cruceño que estaba apoyado por los agroindustriales y ganaderos de la región. En este sentido, la “autonomía indígena” fue una respuesta “defensiva”, ya que en las negociaciones iniciales se había aceptado la Agenda de Enero autonómica. La situación material real de los pueblos indígenas del Oriente, que como hemos visto es muy diversa y con poblaciones pequeñas, abre las condiciones para la elaboración de propuestas sobre lo que inicialmente se llamó “autodeterminación de los pueblos” y lo que ahora se concibe como los “estatutos autonómicos indígenas”.

Retomaremos las propuestas hasta 2006 (antes del inicio de las sesiones de la Constituyente) de dos organizaciones indígenas: la CIDOB y el Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ); la de una organización campesina como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), cercana al Movimiento al Socialismo² y el documento conjunto de las organizaciones indígenas y campesinas de 2006, respecto a cuatro temas fundamentales que aluden a la estructura del Estado: división política administrativa, “autodeterminación de los pueblos” que luego se pone en términos de “autonomía”, Estado Plurinacional y Asamblea parlamentaria unicameral.

En 2001, la proposición de la CIDOB como organización que había luchado por la Asamblea Constituyente incluía cuatro propuestas. La primera está referida específicamente a lo que en esos momentos se denominaba “autonomía de gestión”, establecida en la parte de la “división político-administrativa”. El basamento de la autonomía de gestión eran las TCO, que debían ser tratadas como unidades político-administrativas transformadas en Entidades Territoriales Indígenas (ETI), con la capacidad de

manejar autónomamente sus recursos (CIDOB, 2001). Este planteamiento surgía también de la experiencia que habían tenido los pueblos indígenas de estas zonas con los latifundistas y ganaderos. Aceptando la división política republicana en departamentos, provincias, secciones de provincia y cantones, el pedido de reconocimiento estatal de las ETI como división administrativa significaba ya un quiebre de los poderes departamentales, pero también de los ámbitos de gestión municipales cuyo monopolio ejercen las oligarquías de la zona.

El nexos con el Estado, que es el segundo eje que nos interesa, estuvo planteado en la reforma del Poder Legislativo; así, la "autonomía de gestión" y de territorio como unidad político-administrativa se ligaba con las ETI mediante un Parlamento unicameral, en el que cada pueblo indígena contaría con la participación directa de un representante (36 diputados indígenas, si es que se toma en cuenta que se reconocen 36 pueblos "indígenas") con la posibilidad de integrar todas las comisiones parlamentarias (CIDOB, 2001). La elección directa de cada pueblo garantizaba el respeto a la forma en que cada uno de ellos elegiría a su representante. Algunos problemas de la propuesta surgen cuando se ve el caso de Occidente, donde tanto aymaras y quechuas, reconocidos como la población mayoritaria entre los 36 pueblos o etnias indígenas, tendrían derecho sólo a un representante. Aunque la representación directa indígena constituye un avance muy significativo, aún tendría que discutirse el sentido político de "igualdad" en cuanto a la participación política, y en lo referente al "reconocimiento" del carácter "multicultural" del país³.

Por su parte, el CONAMAQ, nacido en la década del noventa, aglutina a los ayllus y comunidades originarias, principalmente en los departamentos de Oruro y Potosí y algunas zonas de La Paz y Chuquisaca. No se considera a sí mismo como una organización social sino como un "gobierno indígena"⁴. Al igual que la CIDOB, el CONAMAQ venía elaborando propuestas de reconstitución de los territorios indígenas, es decir, de la formación del Estado Plurinacional (CONAMAQ, 2005). Esta cercanía de propuestas hizo posible la existencia de alianzas entre la CIDOB y el CONAMAQ, en la marcha del año 2002 por la Asamblea Constituyente, por ejemplo, en la que conformaron un eje, a veces distanciado de la CSUTCB y en especial de su entonces dirigente, Felipe Quispe.

La propuesta del Estado Plurinacional sugiere la creación de cuatro poderes que garanticen la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones gubernamentales: el Poder Deliberativo Plurinacional, que reuniría a todos los pueblos indígenas bolivianos y los diversos sectores de la sociedad civil; el Poder Judicial Plurinacional, que incluiría

«Los términos de la polémica giran en torno a la búsqueda de una respuesta que incluya a las autonomías departamentales limitando su poder con la aceptación de las 'autonomías indígenas'»

distintas formas de comprensión y práctica de la justicia; el Poder Amáutico Constitucional; y por último, el Poder Diárquico, que atravesaría a los otros mencionados y los obligaría a organizarse sobre la base de una comprensión "diárquica" del poder, en la que la presencia de los varones estaría obligatoriamente acompañada por igual presencia de mujeres⁵, y la presencia de pueblos de tierras altas (Occidente) sería igual a la de los de tierras bajas (Oriente). Estas propuestas

no fueron tomadas en cuenta en la redacción final de la Nueva Constitución Política del Estado.

Por otra parte, en 2006, el CONAMAQ presentó propuestas específicas sobre "autonomías de regiones" que restablecerían antiguas macro-regiones indígenas con fronteras precoloniales, que de todas formas no desconocerían la organización del Estado boliviano unitario (CSCB/

CONAMAQ/CRSUCIR, 2006). En ese sentido, aun con los problemas que una nueva reterritorialización implicaría, este planteamiento es una respuesta al proyecto oligárquico de "autonomías departamentales".

Basada en el programa del MAS, la CSUTCB redactó su propuesta sobre autonomías en 2006, exigiendo el *respeto a las competencias del Estado nacional* y la solidaridad de los departamentos desarrollados y con abundantes recursos naturales (especialmente gas, petróleo y minerales) con los departamentos más pobres (CSUTCB, 2006; REPAC, 2006).

El 5 de agosto de 2006, finalmente, se presentó un documento conjunto producto de la reunión de las organizaciones indígenas y campesinas que conformaron el denominado "Pacto de Unidad": "Propuesta para la Nueva Constitución Política del Estado. Por un Estado Plurinacional y la autodeterminación de los pueblos y naciones indígenas, originarias y campesinas". Este texto consideró tres tipos de autonomía: las territoriales indígenas originarias y campesinas, las interculturales urbanas y las autonomías regionales. La

participación política se daría mediante la representación directa, respetando el ordenamiento de los tres poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La unicameralidad aparece de nuevo, pero esta vez se añade la participación de representantes urbanos y la representación directa de los pueblos indígenas y originarios.

Un tema ampliamente debatido fue el del Poder Social Plurinacional, incluido como un "cuarto poder" de carácter civil y corporativo (elegidos sus miembros por usos y costumbres y por voto universal), que tendría las atribuciones de "vigilar y controlar" a los poderes del Estado y contaría con la facultad de sancionarlos, siendo independiente de éste –idea que finalmente no fue incluida en la Nueva Constitución Política del Estado.

Los graves enfrentamientos del 24 de noviembre de 2007 en Sucre, producidos por el pedido de esta ciudad de introducir en la discusión de la AC el tema de la "capitalía plena", terminaron por truncar los debates sobre las reformas estatales y territoriales. Finalmente, la última sesión de la AC realizada en Oruro aprobó en detalle la Nueva Constitución Política del Estado.

La Nueva Constitución Política del Estado y las "autonomías indígenas": el carácter actual de lo "plurinacional"

Existieron tres versiones de la Constitución Política del Estado: la aprobada en grande en las instalaciones del Liceo Militar en Sucre, la aprobada en detalle en Oruro y la revisada en la ciudad de La Paz, que fue la que se publicó oficialmente.

En términos de la definición sobre los tipos de divisiones políticas, las tres versiones del proyecto del MAS han aceptado la división republicana en departamentos, provincias y municipios incluyendo dentro del principio de democratización liberal el territorio indígena –originario–campesino, aunque abren la "posibilidad" de establecer nuevas formas de delimitación territorial y de "regiones" indígenas originarias y campesinas. En cierta medida, se recoge (en términos menos participativos) la manera en que las organizaciones indígenas como la CIDOB habían planteado desde los noventa primero una autonomía de gestión (apoyada en la libre determinación y autodeterminación de los pueblos originarios e indígenas); después, ante la coyuntura nacional de expansión de la influencia de los cívicos de derecha, se optó por aceptar la discusión en términos de autonomías indígenas, pero basadas en las Tierras Comunitarias de Origen.

El problema es la relación que tienen los territorios indígenas, originarios y campesinos con una división como la departamental reivindicada por los comités cívicos de Pando, Santa Cruz, Beni y Tarija, cuando en la realidad se había visto que la autonomía departamental signi-

ficó el desconocimiento total del derecho de “autogobierno” y manejo de recursos naturales que reclamaban las organizaciones indígenas, ya que de facto se aplicó, vía grupo de choque, un control por parte de las instancias departamentales sobre divisiones territoriales republicanas de origen colonial, como las provincias o las más recientes jurisdicciones municipales, donde, como hemos señalado, los que tienen el control son los partidos políticos tradicionales y, en su mayoría, personeros que obedecen a los comités cívicos y las prefecturas.

Ante las protestas de las organizaciones indígenas por una posible negociación entre el partido derechista PODEMOS y los cívicos separatistas de Santa Cruz y, por el otro lado, el gobierno, que aceptase la subordinación de las autonomías indígenas ante las autonomías municipales y departamentales, finalmente la norma establecida en la NCPE según las primeras versiones quedó redactada con un apartado en cada tipo de autonomía (departamental, regional, municipal e indígena) que afirmaba la no subordinación de ninguna de estas autonomías a otra. En la última versión, desaparecen los cuatro apartados y se coloca en el capítulo primero un solo artículo (N° 277) que afirma: “Las entidades territoriales autónomas no estarán subordinadas entre ellas y tendrán igual rango constitucional”. Los términos de la polémica giran en torno a la búsqueda de una respuesta que incluya a las autonomías departamentales limitando su poder con la aceptación de las “autonomías indígenas”, que es una forma de intentar lograr una inclusión neutralizadora del tema de autonomías a nivel departamental, que podría resultar bastante contradictoria si se considera que la división departamental y la indígena, en el tenor con el que fue acuñado el término autonomía, no se relacionan materialmente en forma igual, aun cuando en la ley se intente equipararlas (hecho ahora defendido por las organizaciones indígenas del Oriente). De esta manera, en los estatutos autonómicos departamentales defendidos por los cívicos y las prefecturas no se acepta la modalidad de “autonomía indígena” (Börth et al., 2008), existiendo el hecho material de dominación económica entre personas y familias que alcanzan a poseer áreas tres veces más grandes que la mancha urbana de Santa Cruz, y otras que subsisten en condiciones de servidumbre en las haciendas.

Respecto de la articulación directa entre territorio y formas de participación en una estructura “estatal”, en los aspectos fundamentales que otorgarían un poder real de decisión política a los territorios autónomos, vemos que en las dos primeras versiones de la NCPE, tanto la de Sucre como la de Oruro, se proponía un Estado Plurinacional y *autonómico*, lo que en la versión revisada en La Paz se cambió por la frase “Estado Plurinacional con autonomías”.

«Los movimientos indígena-campesinos permiten comenzar a pensar qué tipo de ‘inclusión’, ‘igualdad’ y ‘participación’ puede proponerse [...] lo cual está configurando toda una experiencia histórica»

La unicameralidad del Poder Legislativo, exigencia de todas las organizaciones indígenas y campesinas, fue dejada a un lado en la última versión como parte de las negociaciones que se dieron durante la aprobación en Oruro y la presentación del texto ya revisado en La Paz. Estos acuerdos determinaron que la composición del Poder Legislativo fuera bicameral.

Las dos versiones de la NCPE tenían como artículos principales la existencia de la llamada Asamblea Legislativa Plurinacional, conformada por los 157 asambleístas elegidos mediante criterios *territoriales* y *poblacionales*; por tanto, existirían asambleístas elegidos por *circunscripciones departamentales*, privilegiando así la división republicana ahora defendida por los cívicos cruceños, y por *circunscripción uninominal*, ambos elegidos por voto universal estableciendo el sistema de mayoría relativa en la asignación de los escaños para los uninominales.

En la NCPE aprobada en Sucre y Oruro, el párrafo IV del artículo 149 garantiza un tipo de “participación *proporcional* de los pueblos y naciones indígenas originarias campesinas”; más adelante, se determina que la ley puede establecer circunscripciones especiales indígena-originario-campesinas, sin considerarse su densidad poblacional (en vista de que existen pueblos de menos de 50 personas). Una posibilidad abierta era establecer por ley el número de circunscripciones especiales indígena-originario-campesinas, introduciendo la propuesta pensada desde las organizaciones indígenas del Oriente como la CIDOB, sólo que esta vez como instancia ampliada para originarios y campesinos.

En la versión final revisada estos artículos cambiaron de modo muy notorio: el artículo 146 define que la Asamblea Legislativa Plurinacional se compondría de dos cámaras: la Cámara de Diputados y la Cámara de Representantes Departamentales,

y que todos los miembros de esta asamblea deberían ser elegidos por voto universal. La Cámara de Diputados quedaría conformada por 121 miembros, elegidos por circunscripciones uninominales y con escaños asignados por un sistema de mayoría absoluta.

En la Cámara de Representantes Departamentales, que estaría en lugar del Senado nacional, cada departamento tendría cuatro representantes elegidos en circunscripciones plurinominales departamentales, en un sistema de representación proporcional. La dinámica de ambas cámaras es más o menos la misma que se mantenía en el régimen anterior, que incluía la Cámara de Diputados y la de Senadores. Las circunscripciones y su número quedan a determinarse por ley, según la cantidad de habitantes y con criterios de extensión territorial, afinidad cultural y continuidad geográfica. Si bien se mantiene la existencia de circunscripciones especiales indígena-originario-campesinas, se elimina la parte que garantiza “la elección directa por formas propias” de representantes de circunscripciones indígenas. La elección directa era un pedido de las organizaciones indígenas, y en la NCPE revisada en La Paz queda sin explicitarse claramente.

“Estatutos autonómicos indígenas”: un nuevo giro en la trayectoria del debate indígena y campesino

La realización de referendos por los Estatutos Autonómicos impulsados por la derecha en Bolivia se ha dado en cuatro departamentos, lo cual abrió nuevos desafíos a las organizaciones indígenas y campesinas del país. Una de las respuestas por parte de estas últimas fue la redacción de sus propios estatutos autonómicos, reconocidos ya por la NCPE, que debía ser aprobada mediante un decreto que convocara a un referendo.

En esta situación, el movimiento indígena del Oriente ha protagonizado ya varias reuniones para decidir la elaboración de sus Estatutos Autonómicos Indígenas, que harán frente a los Estatutos Autonómicos Departamentales, aprobados en Santa Cruz con más del 40% de abstención y voto por el No, en uno de los procesos electorales más violentos y con más denuncias de fraude en la historia del país.

Aun cuando no existen propuestas terminadas, el primer esbozo presentado por la CIDOB sobre autonomías indígenas elaborado ya en 2006 básicamente recogía las ideas de autodeterminación y reconocimiento práctico por parte del Estado a los territorios indígenas (CIDOB, 2006). Las ideas, ahora, desarrollan básicamente los planteos presentados con anterioridad respecto a las Tierras Comunitarias de Origen, que pasarían a ser sistemas organizativos de la CIDOB reconocidos como una nueva división política del Estado, estableciendo que las tierras saneadas serían la base de articulación del movimiento indígena. A su vez, se constituirían

en el primer nivel en esta región, equiparados con lo que actualmente son los municipios, reconociendo las formas organizativas de cada TCO y haciendo desaparecer a los representantes de la antigua división estatal como los corregidores y los agentes cantonales. Las elecciones en cada TCO se realizarían cada cinco años, igual que las elecciones municipales, decisión que fue calificada de "democratización de las formas de gobierno", pero se mantendrían las asambleas, cabildos, etc. Pero esta vez serían catalogadas como "forma de gobierno indígena", por tanto, con financiación por medio de la coparticipación tributaria y con aportes propios de las asociaciones productivas, utilizando los recursos naturales existentes en la TCO; en caso de tratarse de áreas protegidas, las TCO tendrían el derecho de gestionar sus recursos directamente. Se proponía, además, la creación de zonas de Autonomías Regionales Indígenas (ARI) (CIDOB, 2006) como una forma de poner en consideración rearticulaciones territoriales a nivel macro, lo cual entraría en contradicción, en muchos casos, con las elites que hasta ahora han monopolizado los espacios municipales y provinciales. Las ARI formarían parte de la CIDOB, que a su vez es el tercer nivel que puede mandar a sus diputados, en un número de doce personas, de acuerdo al porcentaje de población que representan (CIDOB, 2006).

Las reuniones de elaboración de los estatutos autonómicos de pueblos indígenas se han multiplicado y se encuentran en plena etapa de discusión, en el marco de la posibilidad de aprobación de la NCPE.

Dicha propuesta muestra dos facetas dentro de un mismo hecho. Ante su relación con las prefecturas y los cívicos, se está equiparando a las TCO y a las ARI como entes con atribuciones iguales a la Prefectura, lo que ya significa hacer frente a las pretensiones absolutamente colonialistas de los Estatutos Autonómicos Cívicos para subordinar a los pueblos indígenas, hecho que pasa por la aspiración de las elites y oligarquías de los departamentos del Oriente de controlar autónomamente los recursos naturales y la propiedad de la tierra, como está establecido en sus estatutos. Sin embargo, como ya hemos señalado antes, ello también es parte de esta propuesta "defensiva", hecho significativo si es que pensamos que el movimiento popular había logrado presentarse a la ofensiva, con gran posibilidad de pensar y establecer cambios profundos y, paradójicamente, ha debido ceder terreno al bloque cívico-empresarial.

Balance provisional

La discusión sobre la construcción de autonomías indígenas está señalando el momento histórico de emergencia del movimiento indígena del Oriente (y otras organizaciones algo más pequeñas de Occidente como el CONAMAQ), como impulsores fundamentales de la Asamblea Constitu-

yente. La emergencia del movimiento indígena del Oriente, con todos sus caracteres y limitaciones, ha abierto la posibilidad de establecer una democratización dentro del mismo movimiento indígena y popular en general, para introducir una reflexión sobre varios horizontes de movilización o de práctica política en términos de perspectivas de organización, visiones a futuro e, inclusive, alianzas con miras a cambios profundos. En ese sentido, los movimientos indígena-campesinos permiten comenzar a pensar qué tipo de “inclusión”, “igualdad” y “participación” puede proponerse –discusión desde las organizaciones que se está presentando relacionada con lo estatal, lo cual está configurando toda una experiencia histórica para los pueblos indígenas y el movimiento campesino, tal como lo fue el proceso de los noventa con la aplicación de las medidas pluriculturalistas. Sin embargo, esto no significa necesariamente que se esté cuestionando, con estas nuevas políticas de “autonomías indígenas”, el carácter monocultural en el Estado y en el ejercicio de gobierno.

El proceso no ha sido fácil y ha estado mediado por la subordinación de los movimientos campesinos –en especial la parte ahora “poderosa” de la CSUTCB– a las pulsaciones políticas del MAS. En esa medida es que las movilizaciones tal y como las vimos hasta 2005 han entrado en una especie de reflujo, salvo momentos tensos y muy violentos que se dieron principalmente en el Oriente boliviano y en otros departamentos –como los del 11 de enero de 2007 en Cochabamba, en San Julián (Santa Cruz) también en 2007 y en Sucre en 2008– pero que a pesar de su corta duración demuestran el grado en que se plantean los términos del enfrentamiento. No es casual que la Unión Juvenil Cruceñista, brazo armado y de choque del Comité Cívico Pro Santa Cruz, “el corazón fascista de la oligarquía” (Tapia, 2007), haya salido a las calles anunciando que matará a los “collas” (migrantes del Occidente del país). Tampoco que en Sucre se haya vejado, hecho arrodillar y “pedir perdón” a autoridades indígenas y campesinas en plena plaza central de la ciudad, situaciones que se van tornando, por parte de los agresores (generalmente las “uniones juveniles” que intentan proliferar en todos los departamentos), cada vez más frecuentes y brutales. En medio se sitúan las acciones que lleva a cabo el gobierno para intentar apaciguar las situaciones conflictivas originadas por los sectores conservadores –sin tomar necesariamente acciones contundentes– y para contener y controlar las respuestas frontales del polo popular, que podrían confluir en un enfrentamiento general que conllevaría un alto costo de vidas humanas.

Las “autonomías indígenas” han surgido en este contexto. Aunque sean pensadas dentro de los términos de “autogobierno”, el solo hecho de haber aceptado que fueran incluidas dentro del debate sobre la

La oligarquía ha tenido una gran capacidad para inducir y obligar al gobierno a incluir dentro de su acervo las ideas de "propiedad privada", mestizaje, democracia liberal y condena de la violencia popular

autonomía departamental implica un retroceso para la lucha popular. Sin una previa crítica sistemática del sentido que el proyecto conservador boliviano le da a la palabra "autonomía", el uso y aceptación de este término por parte del gobierno boliviano puede causar más confusión que claridad en los sectores populares, pues resulta relativamente más sencillo que en aquellos lugares donde el poder de las elites es mayor la versión de autonomía que se imponga sea la oligárquica. Toda la polémica y

creatividad política propiciadas por la ola insurreccional iniciada en 2005, todas las reflexiones conjuntas entre intelectuales y organizaciones sociales acerca de proyectos de sociedad que se proponían ir más allá de las premisas liberales sobre el Estado y la sociedad, se complicaron con el debate autonómico, que, en esta especie de guerra de posiciones que vivimos, ha tendido a legitimar el imaginario y el horizonte discursivo

de las elites bolivianas, en lugar de ampliar el radio de acción e irradiación popular.

De hecho, la oligarquía ha tenido una gran capacidad para inducir y obligar al gobierno a incluir dentro de su acervo discursivo no sólo el proyecto autonómico sino también las ideas de "respeto a la propiedad privada", mestizaje, democracia liberal electoral y condena de la violencia popular, y también tuvo la capacidad de apropiarse pragmáticamente de expresiones como "socialismo", "nación", "igualdad", "libertad", "autodeterminación", que eran parte del discurso izquierdista. En cambio, las fuerzas sociales y algunos de sus representantes presentes en el Estado no pudieron irradiar el discurso de cambio hacia los sectores populares reaccionarios, y por eso en varios casos algunas corrientes sindicales obreras cruceñas salieron a defender los intereses de sus patrones.

El Estado Plurinacional –cuya plurinacionalidad radica en el reconocimiento estatal de los territorios indígenas y su representación mediante

la votación en lo que se denominaría Asamblea Legislativa Plurinacional (bicameral)— es sin duda un espacio que pretende la democratización de la participación indígena dentro de los cánones liberales, y que secunda el restablecimiento de los territorios indígenas, lo que socava las bases del proyecto de los terratenientes y empresarios enquistados en los espacios de poder municipales y departamentales. Tanto la primera propuesta de la CIDOB sobre autonomías indígenas como la de Nueva Constitución Política del Estado se han enmarcado en los términos liberales. Ello se debe en gran parte a la forma en que se ha presentado la coyuntura: una región que se enfrenta el poder estatal —ahora en manos de un indígena— y que plantea autonomías cuasi separatistas, y la respuesta indígena: sí a las autonomías (indígenas) con respeto del Estado Unitario y con principios de solidaridad y enmarcadas en la Constitución Política del Estado.

Podemos afirmar que, en términos generales, en esta apertura dentro de la democracia liberal y sus formas de pensar la igualdad e inclusión, las representaciones indígenas tratan, por su lado, de introducir elementos de su historia de lucha por la autodeterminación en las disputas por la caracterización de la autonomía, sin que por ello sus intentos se vean libres de los significados planteados por la reacción —y aceptados por las fuerzas *progresistas* en el Estado—, por medio de un apabullante sistema de medios de comunicación privados de derecha y una estrategia oportunista de aliento de las frustraciones históricas y los prejuicios coloniales racistas de los distintos sectores sociales bolivianos.

Mientras se espera lo que pueda suceder en el referendo revocatorio y en negociaciones con la oposición que aún no arrancan, la “autonomía indígena” y sus estatutos se muestran como otro ciclo dentro de la experiencia histórica de los movimientos indígenas en general, del Oriente particularmente, y los movimientos campesinos del país. Entre tanto también están, quizá de forma más velada, las otras fuerzas que habían sostenido otros proyectos políticos en la rebelión, que continúan en constante movimiento subterráneo.

Bibliografía

Asamblea Constituyente 2007a “Nueva Constitución Política del Estado” (La Paz) diciembre.

Asamblea Constituyente 2007b “Nueva Constitución Política del Estado” (Oruro) 8 de diciembre.

Asamblea Constituyente 2007c “Nueva Constitución Política del Estado” (Sucre) 24 de noviembre.

- Barragán, Rossana 2007 "Historia del Estado. El almacén estatal y sus imaginarios" en PNUD *El estado del Estado en Bolivia. Informe Nacional sobre Desarrollo Humano* (La Paz: PNUD).
- Börth, Carlos et al. 2008 *Puentes para un diálogo democrático. Proyectos de constitución y estatutos: compatibilidades y diferencias* (La Paz: ILDIS/FBDM/NIMD).
- Cabildo de Achacachi 2001 "Declaración de Achacachi", octubre, mimeo.
- CENDA 2005 "Dossier II, documentos y propuestas para la Asamblea Constituyente" (Cochabamba) Tercera parte, noviembre.
- Choque, María Eugenia y Mamani, Carlos 2003 "Reconstitución del ayllu y derechos de los pueblos indígenas: el movimiento Indio en los Andes de Bolivia" en *Los Andes desde Los Andes* (La Paz: Yachaywasi).
- CIDOB 2001 "Propuesta sobre las reformas a la Constitución Política del Estado", Santa Cruz, mimeo.
- CIDOB 2006 "Propuesta de autonomías indígenas", Santa Cruz, mimeo.
- CONAMAQ 2005 "Bases de la Constitución del Estado Plurinacional" (Qullasuyu: Comisión Nacional para la Asamblea Constituyente).
- Correo del Sur* 2003 (Sucre) 1 de febrero.
- Corte Nacional Electoral de Bolivia 2005 "Geografía electoral", La Paz, mimeo.
- CSCB/CONAMAQ/CRSUCIR 2006 "Sistematización de propuestas para la Asamblea Constituyente", Vinto, 11 al 13 de mayo.
- CSUTCB 2006 "Nueva Constitución Plurinacional", La Paz, mimeo.
- CSUTCB/CONAMAQ/CIDOB/CSCB/FMCBBS/CPESC/CPEMB/MST/APG 2006a "Propuesta de Organizaciones Indígenas, Originarias, Campesinas y de Colonizadores hacia la Asamblea Constituyente", La Paz, julio, mimeo.
- CSUTCB/CONAMAQ/CIDOB/CSCB/FMCBBS/CPESC/CPEMB/MST/APG 2006b "Propuesta de Organizaciones Indígenas, Originarias, Campesinas y de Colonizadores hacia la Asamblea Constituyente. Propuesta para la Nueva Constitución Política del Estado", La Paz, agosto, mimeo.
- De la Fuente, Juan 2008 "Los alrededores de la Asamblea Constituyente" en *Tinkazos* (La Paz: PIEB) N° 23-24.

- El Deber* 2003 (Santa Cruz) 24 de abril.
- Escárzaga, Fabiola 2006 "La comunidad indígena en las estrategias insurgentes en México, Perú y Bolivia" en *Movimiento indígena en América Latina: resistencia y proyecto alternativo* (La Paz: UACM/CEAM/JP/BUAP).
- García Linera, Álvaro; Chávez, M. y Costas, P. 2005 *Sociología de los movimientos sociales* (La Paz: Plural).
- García Linera, Álvaro; Tapia, Luis y Prada, Raúl 2007 *La transformación pluralista del Estado* (La Paz: Muela del Diablo).
- Hylton, Forrest 2004 "El federalismo insurgente: una aproximación a Juan Lero, los comunarios y la Guerra Federal" en *Tinkazos* (La Paz: PIEB) N° 16, mayo.
- ILDIS/CEDIB 1986 "Coca-cronología", La Paz, mimeo.
- La Prensa* 2007a "36 Etnias Indígenas de Bolivia", octubre.
- La Prensa* 2007b 20 de noviembre al 10 de diciembre.
- López Bárcenas, Francisco 2006 *Autonomías indígenas en América Latina* (La Paz: Textos Rebeldes).
- Orozco, Shirley 2005 "Trayectoria política e ideológica. Historia del Movimiento al Socialismo (MAS)" en *Barataria* (La Paz) N° 2.
- Patzi, Felix 1999 *Insurgencia y sumisión. Movimiento indígena-campesino (1983-1998)* (La Paz: Comuna).
- Plata, Wilfredo 2008 "El discurso autonomista de las elites de Santa Cruz" en *Los barones del Oriente* (La Paz: Fundación Tierra).
- PNUD 2007 *El estado del Estado en Bolivia. Informe Nacional sobre Desarrollo Humano* (La Paz: PNUD).
- PNUD/IDEA 2007 "Encuestas para el desarrollo humano. El estado de la opinión: los bolivianos, la Constitución y la Constituyente", La Paz, mimeo.
- REPAC 2006 "Propuestas recogidas de la CSUTCB y la FNMB", La Paz, mimeo.
- Rivera, Silvia 2003 *Oprimidos pero no vencidos* (La Paz: Yachaywasi).
- Soruco, Ximena 2008 "De la goma a la soya: el proyecto histórico de la elite cruceña" en *Los barones del Oriente* (La Paz: Fundación Tierra).

- Tapia, Luis 2002a *La condición multisocietal. Multiculturalidad, pluralismo, modernidad* (La Paz: Muela del Diablo/CIDES-UMSA).
- Tapia, Luis 2002b *La velocidad del pluralismo* (La Paz: Comuna).
- Tapia, Luis 2006a "Ejes de rotación, movimiento y significación en Bolivia" en *Pensamiento de los confines* (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).
- Tapia, Luis 2006b *El núcleo común* (La Paz: Muela del Diablo).
- Tapia, Luis 2007 *La igualdad es cogobierno* (La Paz: CIDES-UMSA/ASDI-SAREC/PLURAL).
- Thomson, Sinclair 2006 *Cuando sólo reinasen los indios. La política aymara en la era de la insurgencia* (La Paz: Muela del Diablo).
- Thomson, Sinclair y Hylton, Forrest 2007 *Revolutionary horizons* (Londres/Nueva York: Verso).
- Zavaleta, René 1986 *Lo nacional popular en Bolivia* (México DF: Siglo XXI).
- Zavaleta, René 1992 *50 años de historia* (La Paz: Los Amigos del Libro).

Notas

1 La primera gran vertiente fue la que se explicitó a través de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, fundada en 1979 y que hasta la década del ochenta, época de los cambios estructurales hacia el neoliberalismo, se había convertido en una organización dependiente de la iniciativa estatal. En 1998 la CSUTCB, una de las organizaciones campesinas más importantes y grandes del país, inició un nuevo ciclo movilizatorio. El movimiento estuvo constituido por cientos de comunidades campesinas, en especial del sector circunlacustre del departamento de La Paz, aglutinadas en torno a los sindicatos-comunales, con profundos procesos de autoorganización inter-comunitaria, que alcanzó pro-

puestas que habían sido recuperadas del movimiento anticolonial más fuerte y radical en toda esta zona, tales como por ejemplo la rebelión liderada por Tupak Katari y Bartolina Sisa en 1781, poniendo por primera vez en el tapete de discusión pública nacional, después de 1979, la discriminación racial que había permanecido invisibilizada, evidenciando la rearticulación de una fuerte identidad aymara e indígena. El movimiento indígena y comunal de la zona andina logró constituirse en el nuevo eje de irradiación organizativa e identitaria, con propuestas como la "Reconstitución del Qullasuyu" y el "autogobierno indígena". La otra vertiente la constituyó el movimiento cocalero, centrado en el Chapare, del departamento de Co-

chabamba, surgido en los años ochenta. Se trata de un movimiento campesino, más que del tipo comunal como sucede en el área circunlacustre de La Paz. Las perspectivas del movimiento cocalero se desarrollaron signadas por las decisiones que se adoptaron desde 1995 en la organización del Primer Congreso de Tierra, Territorio e Instrumento Político, que contó con el apoyo de diversas organizaciones indígenas y campesinas. La creación de un "instrumento político" es parte fundamental del desarrollo histórico del movimiento cocalero y dará lugar a la aparición de la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos y, posteriormente, al Movimiento al Socialismo-Instrumento Por la Soberanía de los Pueblos.

2 Desde el año 2000, la CSUTCB presentó divisiones entre la dirigencia afín a Evo Morales y el MAS, y la dirigencia afín a Felipe Quispe, del Movimiento Indígena Pachakuti. Finalmente, se con-

cretó la división que se expresó en la existencia de dos CSUTCB paralelas.

3 Para una discusión y debate sobre el significado de la multiculturalidad, ver Tapia (2006b; 2007).

4 Poseedor de una estructura institucionalizada, en estos ocho años de movilizaciones indígenas, éstas fueron lideradas por sectores sindicales comunales y no así por estas organizaciones indígenas que mantuvieron un perfil bajo en relación con las movilizaciones masivas de la CSUTCB o las federaciones cocaleras y de "colonizadores", a excepción de los ayllus del Jach'a Karangas de Oruro y los Qhara Qhara de Chuquisaca.

5 Aunque esto sea más una idealización, como anota Silvia Rivera (2003), en realidad, en el mismo CONAMAQ se vivía la existencia de "ayllus masculinizados" que asumían la representación de todos haciendo pactos políticos a espaldas de las comunidades.

O MST e as reformas agrárias do Brasil

Bernardo Mançano Fernandes

* Universidade Estadual Paulista (UNESP). Coordenador do Grupo de Trabalho Desenvolvimento Rural da CLACSO.

Resumo

O trabalho estuda a evolução do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e da reforma agrária no Brasil. Argumenta também que o governo não quer uma reforma agrária que limite o agronegócio e por isso privilegia a legalização da colonização de terras na Amazônia. Expõe finalmente que o agronegócio e as ocupações camponesas avançam simultaneamente nessa região o que isso deixa prever uma dura disputa territorial no momento em que a fronteira agrícola chegue ao seu limite.

Abstract

This work studies the evolution of the Movement of Rural Workers without Land (MST) and the agrarian reform in Brazil. In addition, it sustains that the government does not want an agrarian reform which affects the agribusiness and therefore it privileges the legalizing of the occupation of Amazon lands. Finally it shows that agribusiness and rural community occupations advance simultaneously in the region, which, it sustains, makes it possible to forecast a strong territorial dispute as the expansion of agricultural frontier begins to reach its limit.

Palavras-chave

Camponeses, movimentos camponeses, MST, território, reforma agrária, agronegócio, fronteira agrícola.

Keywords

Rural community, rural movements, MST, territory, agrarian reform, agribusiness, agricultural frontier.

Introdução

Nosso objetivo neste artigo é uma breve reflexão a respeito do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e das mudanças recentes que ocorreram nas políticas da reforma agrária brasileira. A reforma agrária é uma política territorial que serve para minimizar a questão agrária. Para este estudo, tomamos como referência a definição de questão agrária compreendida como um problema estrutural do capitalismo (Fernandes, 2001), sendo parte de sua própria lógica de desenvolvimento, gerando processos de diferenciações e desigualdades, expulsões e expropriações, excluindo ou subalternizando, destruindo e recriando o campesinato. Por essa razão, as relações entre campesinato e capital são de conflitualidades permanentes e explicitadas, de um lado, pela subalternidade do campesinato ao capital e pelo poder que o capital tem, de acordo com os seus interesses, de destruir e recriar o campesinato e, de outro lado, pela resistência do campesinato em determinar sua própria recriação por meio das ocupações de terra (Fernandes, 2008a).

No centro dessas conflitualidades há a disputa territorial que se manifesta no controle do processo de criação e destruição do campesinato. A questão agrária é então uma questão territorial e a reforma agrária é a face dessa dimensão. As conflitualidades expressam os embates dos processos estruturais e suas características conjunturais. Nas últimas quatro décadas, a questão agrária teve diferentes conjunturas. Na década de 1970, a intensificação da expansão das monoculturas e a ampliação da agroindústria, acompanhada da quase extinção dos movimentos camponeses pela repressão da ditadura militar, marcou uma das maiores crises da resistência do campesinato. Com a redemocratização do país na década de 1980, ocorreu a consolidação do modelo agroexportador e agroindustrial simultaneamente ao processo de territorialização da luta pela terra, com o aumento das ocupações de terras e da luta pela reforma agrária.

Na década de 1990, ocorreu a multiplicação dos movimentos camponeses em luta pela terra, ampliando a conflitualidade e

a criação de assentamentos rurais, tendo o MST à frente desse processo, como demonstraremos neste artigo. Nesta década, corporações nacionais e transnacionais ampliam o modelo agroexportador em um amplo conjunto de sistemas que passou a ser denominado de agronegócio. Esse conjunto reúne, de formas diferenciadas, os sistemas agrícolas, pecuário, industrial, mercantil, financeiro, tecnológico, científico e ideológico.

Na primeira década do século XXI, essas mudanças conjunturais da questão agrária geraram diferentes conflitualidades. Os movimentos camponeses passaram a se confrontar cada vez mais com corporações transnacionais e cada vez menos com latifúndios. Esta confrontação está associada ao processo de globalização da questão agrária com a territorialização das corporações transnacionais para vários países e da criação de uma organização mundial de movimentos camponeses, a Via Campesina. A crise alimentar demonstrou o mito de que o agronegócio seria o grande produtor de alimentos, destacando a participação do campesinato e a necessidade de políticas de soberania alimentar. O aumento do preço do petróleo e a ampliação da produção de agrocombustíveis transformaram o campo em território para a produção de agroenergia e de alimentos. O MST e mais de noventa outros movimentos camponeses brasileiros estão no centro destas conflitualidades da atual questão agrária. Nesta conjuntura, as políticas de reforma agrária também se modificaram. Analisamos essas mudanças a partir desta nova conjuntura agrária que dá atualidade à questão agrária e ao MST.

O MST e as mudanças na conjuntura da questão agrária

Oficialmente, o MST tem 24 anos porque o Movimento definiu o seu primeiro encontro realizado em janeiro de 1984, na cidade de Cascaval, estado do Paraná, como a data de sua fundação. Todavia, ao considerarmos o seu período de gestação (a “pré-história” do MST) a partir das primeiras lutas e das primeiras reuniões que aconteceram nos anos 1978 a 1983, o MST está completando 30 anos em 2008 (Fernandes, 2000). Nestas três décadas de existência o MST conviveu com diferentes conjunturas da questão agrária. Essas mudanças trouxeram novos desafios e um deles está no próprio nome. Quando foi fundado, o MST se denominou Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra (Stédile e Fernandes, 1999). Todavia, a expressão “trabalhadores rurais” não sobreviveu na própria sigla, que desde o final da década de 1980 passou a ser MST. Desde meados da década de 1990 (especialmente por causa da fundação da Via Campesina), a expressão “camponês” aparece cada vez mais nas falas e nos documentos do MST. Se a expressão camponês era estranha na época de sua fundação, hoje é comum em acampamentos e assentamentos, em

«A crise alimentar demonstrou o mito de que o agronegócio seria o grande produtor de alimentos, destacando a participação do campesinato e a necessidade de políticas de soberania alimentar»

reuniões e outros espaços e territórios onde o Movimento se manifesta. Exemplos podem ser encontrados nas matérias publicadas no Jornal do MST ou em seu sítio <www.mst.org.br>.

Esta definição fortaleceu a identidade do MST como movimento camponês. E esse fortalecimento acentuou a questão territorial da luta. Um movimento camponês não existe sem os territórios do campesinato. Por essa razão, um movimento camponês

também é um movimento socioterritorial (Fernandes, 2005). É da terra e de todos os bens produzidos desde a terra que o campesinato promove a sua existência. Portanto, o território é elemento fundante neste artigo para compreender o MST e a reforma agrária hoje. Evidente que o território é condição essencial para todos os tipos de organização. Por essa razão, o MST vai disputar terri-

tórios com seu principal oponente: o agronegócio. Essa disputa é uma das principais marcas da questão agrária desde o passado até a atualidade e foi ampliada e intensificada pela modernização e mundialização da produção agrícola. Contraditoriamente, esta nova realidade liberta a reforma agrária da simples compreensão distribucionista e amplia seu conteúdo para uma luta ampla, multidimensional e complexa. Lutar pela reforma agrária significa lutar por todas as dimensões do território, entre elas a tecnologia, o mercado, a educação, saúde e, principalmente, contra o capital que procura tomar o controle dos territórios do campesinato.

Esta compreensão de reforma agrária como território o MST traz desde sua fundação. Por essa razão, o MST é um movimento camponês moderno (Oliveira, 2005). Uma das características dos modernos movimentos camponeses é o rompimento com as relações de dependências com partidos, governos e outras instituições, como já foi muito bem argumentado pelos sociólogos que estudaram os “novos movimentos sociais”. O MST desde sua fundação manteve autono-

mia nas relações com as instituições que contribuíram para a sua formação, como a Comissão Pastoral da Terra (CPT), a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e o Partido dos Trabalhadores (PT), para citar somente as três mais expressivas. Todavia, é fundamental lembrar que o MST também contribuiu com a formação dessas instituições. Essa relação de contrapartida nas formações dessas instituições pode ser melhor compreendida na construção de políticas para a transformação das realidades do país, cujos avanços são limitados pela correlação desproporcional de forças.

Outra característica da modernidade do MST é saber acompanhar as mudanças das conjunturas políticas. Aliás, esta é uma prática de destaque nos principais espaços políticos do MST, que tem grande relevância para a defesa de sua resistência contra o capital. A participação do MST na Via Campesina muito contribuiu com essa compreensão. A maior e melhor compreensão das realidades é possível quando se acompanha as lutas de movimentos camponeses de vários países do mundo. O inimigo comum dos movimentos camponeses em todo o mundo chama-se agronegócio. Ser um movimento camponês na América Latina significa lutar pela reforma agrária e contra o agronegócio. Os países da América Latina possuem as concentrações fundiárias mais altas do mundo e seus territórios são intensamente controlados pelas corporações multinacionais (Fernandes, 2006). As políticas de reforma agrária no Brasil, na Bolívia e no Paraguai, por exemplo, têm um forte obstáculo: o agronegócio. Este complexo de sistemas das corporações multinacionais está desafiando os movimentos camponeses no impedimento da reforma agrária, ora pressionando os governos, ora fazendo parte do arco de alianças de apoio aos governos de direita, centro e esquerda na América Latina.

O MST, os governos FHC e Lula e as políticas de reforma agrária

A eleição da primeira gestão do governo Lula (2003-2006) teve o apoio do MST. Havia a perspectiva de um governo ofensivo na implantação da reforma agrária, considerando que esta era uma promessa de Lula. Em 2003, membros do MST participaram, junto com um grupo de especialistas coordenado por Plínio de Arruda Sampaio, da elaboração do segundo Plano Nacional de Reforma Agrária (II PNRA). O primeiro PNRA foi elaborado em 1985 (governo Sarney) sob a coordenação de José Gomes da Silva (1987; 1989). Os projetos coordenados por estes dois históricos defensores da reforma agrária nunca foram implantados. Na década de 1980, a principal oposição à realização do I PNRA partiu dos ruralistas, principalmente com a criação da União Democrática Ruralista (UDR). Neste princípio do século XXI, a reforma agrária encontra como principal opositor o agronegócio, que defende o acesso à terra sob o seu

controle, ou seja, “sem luta de classe e sem conflitos” (Bruno, 2008). A reforma agrária de mercado, em todas as denominações que esta política recebeu, representa uma forma de controle territorial por meio da *comoditização* (Pereira, 2004), ou seja, a mercantilização da terra, retirando a reforma agrária do território da política e transferindo-a para o território da economia capitalista (Ramos Filho, 2008).

As diferenças e semelhanças entre ruralistas e agronegócio podem ser melhor compreendidas pelas relações que estes mantêm. Os ruralistas da década de 1980, em parte, integraram-se ao agronegócio por meio da produção ou pelo arrendamento da terra para as corporações. Os ruralistas, em grande parte, são formados por pecuaristas, produtores de soja e de cana de açúcar. Grandes latifundiários encontraram no modelo do agronegócio uma forma de utilizar suas terras para a expansão da soja e da cana, arrendando ou produzindo. O latifúndio controla grande parte das terras agricultáveis e por sua própria natureza as mantém improdutivas. O agronegócio avança sobre essas terras, por meio de sua lógica de produtividade de monoculturas em grande escala. As mudanças no uso do solo de pecuária para soja ou cana tornaram-se uma marca do processo em que improdutividade e produtividade se unem como barreiras às políticas de reforma agrária.

Essa nova conjuntura redefine as correlações de forças e impede a realização de uma reforma agrária que atinja o território do agronegócio. A reforma agrária será feita, principalmente pela incorporação de terras públicas na Amazônia. Essa conjuntura traz um novo desafio para os movimentos camponeses, como analisaremos a seguir.

Os governos Fernando Henrique Cardoso (FHC) e Lula foram os que mais criaram assentamentos ao consideramos os governos do processo de redemocratização do Brasil. Em torno de 80 por cento das realizações em números de assentamentos, famílias e área ocorreram nos períodos destes governos, como pode ser observado nas tabelas 1 e 2. Estas duas tabelas são esclarecedoras para a compreensão de que a reforma agrária só acontece com a organização dos movimentos camponeses, por meio da ocupação de terras. Observe-se a relação entre o número de ocupações e de assentamentos. A política de reforma agrária não é somente uma ação do Estado. É antes uma ação dos movimentos camponeses. Sem luta pela terra não há reforma agrária.

A luta pela terra, por meio das ocupações, cresceu mais intensamente a partir da primeira gestão do governo FHC. As duas gestões deste governo são marcadas por diferentes políticas de reforma agrária. Na primeira gestão, o governo FHC apostou que eliminaria a questão agrária com a realização de uma ampla política de assentamentos. Foi o período

em que mais se assentou famílias. Todavia, a questão agrária se manteve, exatamente por causa de seu caráter estrutural, como afirmamos na introdução deste artigo. Fracassada a teoria do governo FHC, ele iniciou uma estratégia completamente oposta. Investiu na criminalização das ocupações de terra, criando medidas provisórias para não assentar famílias ocupantes de terra e não desapropriar terras ocupadas. Estas medidas políticas atingiram parcialmente as ações dos movimentos camponeses, como pode ser observado na diminuição do número de famílias ocupantes na segunda gestão do governo FHC. Como as ocupações determinam a criação de assentamentos, a diminuição do número de famílias ocupantes representou a diminuição do número de famílias assentadas.

Tabela 1
Brasil. Ocupações de terra 1985-2006

Governo	Ocupações	%	Famílias	%
Sarney (1985-1989)	229	3	34.333	3
Collor/Itamar (1990-1994)	507	7	82.600	8
FHC (1995-1998)	1.987	28	301.908	29
FHC (1999-2002)	1.991	28	290.578	28
Lula (2003-2006)	2.387	34	343.958	33
Total	7.101	100	1.053.377	100

Fonte: DATALUTA (2008).

Tabela 2
Brasil. Reforma agrária 1985-2006

Governo	Assentamentos	%	Famílias	%	Hectares	%
Sarney (1985-1989)	800	11	122.598	16	8.248.899	17
Collor/Itamar (1990-1994)	461	7	61.825	8	4.485.953	9
FHC (1995-1998)	2.211	31	240.819	31	10.706.365	22
FHC (1999-2002)	1.712	24	149.140	19	7.296.429	15
Lula (2003-2006)	1.879	27	192.257	25	17.092.624	36
Total	7.063	100	766.639	100	47.830.270	100

Fonte: DATALUTA (2008).

O período do governo Sarney é o único em que o número de famílias em ocupações é menor que os números de famílias assentadas. Na época, acreditava-se que o governo faria a reforma agrária. A decepção do governo Sarney, que realizou menos de 10 por cento das metas do I PNRA, fez com que os movimentos camponeses se tornassem protagonistas prin-

Uma das características dos movimentos camponeses é o rompimento com as relações de dependências com partidos, governos e outras instituições, como foi argumentado pelos sociólogos

cipais das políticas de reforma agrária nos governos seguintes. A primeira gestão do governo Lula começou com uma grande esperança pela realização da reforma agrária. Os movimentos camponeses realizaram o maior número de ocupações de terras e de família da história da luta pela terra no Brasil. Ao contrário da segunda gestão do governo FHC, que criminalizou as ocupações, o governo Lula sempre dialogou com os movimentos camponeses. Esta tem sido uma caracte-

terística marcante deste governo. Contudo, também criou uma nova política agrária que, paradoxalmente, fez avançar e refluir a luta pela terra e a reforma agrária.

O agronegócio é uma das forças do arco de alianças que apóia o governo Lula. O presidente Lula tem feito claras declarações de admiração pelo agronegócio. Como afirmamos na primeira parte deste artigo, o

agronegócio está se apropriando das terras dos latifúndios e quer manter um estoque de terras para o futuro próximo, principalmente para a expansão da cana de açúcar para produção de agroenergia.

De forma velada, o governo Lula não desapropria terras nas regiões de interesses das corporações para garantir o apoio político do agronegócio. Mesmo em regiões de terras declaradamente griladas, ou seja terras públicas sob o domínio dos latifundiários e do agronegócio, o governo não tem atuado intensamente no sentido de desapropriar as terras. Somente as ocupações e o acirramento dos conflitos é que podem pressionar o governo a negociar com o agronegócio para cessão da fração do território em conflito. Mas, ao mesmo tempo em que ocorre esta lentidão, o presidente precisa dar uma resposta objetiva aos camponeses sem-terra. Esta postura resultou numa reforma agrária paradoxal. Aproveitando-se do acúmulo das experiências de implantação de assentamentos, o governo Lula investiu muito mais na regularização fundiária de terras de camponeses na Ama-

zônia do que na desapropriação de novas terras para a criação de novos assentamentos de reforma agrária.

A opção política do governo Lula de não fazer a reforma agrária por meio da desapropriação, e sim, principalmente, por meio da regularização fundiária, gerou um problema para os movimentos camponeses que mais atuam nas ocupações de terra –no caso, para o MST, responsável por 63 por cento das famílias em ocupações no período de 2000 a 2007. Neste período, 583 mil famílias ocuparam terras no Brasil. Destas, 373 mil estavam organizadas no MST. Em 2007, em torno de 70 mil famílias ocuparam terras, sendo que 45 mil estavam organizadas no MST (DATALUTA, 2008). A junção de políticas do governo Lula atingiu o MST. A predominância da criação de assentamentos por meio da regularização fundiária fez com que o tempo de acampamento das famílias aumentasse consideravelmente. Sem conquistas, muitas famílias abandonam os acampamentos, o que diminui a pressão contra o governo. A política compensatória do Bolsa Família –um auxílio financeiro mensal irrisório– também tem diminuído o poder de pressão dos movimentos organizados. Embora haja pesquisas em desenvolvimento sobre esta questão, ainda não temos resultados numéricos. Fazemos esta afirmação a partir do trabalho de campo em conversas com lideranças camponesas. Outras leituras desse processo podem ser vistas no artigo de Osvaldo Russo –ex-presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) <www.correiodocidadania.com.br/content/view/1136/47>. Ou em matéria publicada pelo jornal *O Estado de São Paulo* em 27 de abril de 2008, na página A10. Ou ainda em matéria publicada pelo jornal *Folha de São Paulo* em 4 de novembro de 2007, página 4.

O refinanciamento de dívidas do agronegócio e o aumento de novos créditos de investimentos e custeio têm possibilitado ao agronegócio a territorialização sobre as terras da Amazônia, desmatando áreas recordes nos estados de Mato Grosso, Rondônia e Pará. No Centro-Sul, as corporações compram extensas áreas para expansão da cana e do eucalipto. Estas políticas diminuíram o poder de pressão dos movimentos camponeses e intensificaram a dinâmica do agronegócio. Este também atua em Roraima, na fronteira com a Venezuela, colocando em risco a manutenção dos territórios indígenas. Esta conjuntura nos desafia a repensar o conceito de território. A simplificação desse conceito como apenas o espaço geográfico de uma nação não é suficiente para compreender as conflitualidades entre os movimentos camponeses e indígenas da América Latina. É preciso compreender os diferentes tipos de territórios em disputa que compõem o território nacional (Fernandes, 2008b).

O MST e a diversidade de movimentos e de assentamentos

Para melhor compreender o paradoxo da reforma agrária no Brasil hoje é preciso analisar a diversidade de movimentos camponeses e de territórios camponeses que se formaram nos últimos anos. Mesmo que o MST esteja enfraquecido pelas políticas do governo Lula, há avanços importantes e desafios a superar. O MST e os movimentos que compõem a Via Campesina Brasil estão enfraquecidos, porque na correlação de forças não conseguiram ocupar espaços políticos importantes e fazer com que o governo Lula aplicasse uma política agrária que atendesse os interesses do campesinato. Um exemplo é a não execução de uma política de reforma agrária ofensiva que intensificasse o processo de territorialização dos movimentos camponeses, com a criação de mais assentamentos por desapropriação do que por regularização fundiária. Os avanços estão na expansão do território camponês e nas experiências dos setores de educação e produção. Mas ainda precisam superar muitos desafios para aumentar a participação do campesinato nessas políticas. O MST é o movimento camponês mais atuante na luta pela terra no Brasil. Nessas três décadas de existência do Movimento, dezenas de outros movimentos surgiram. Em 2008, o número de movimentos camponeses na luta pela terra era noventa e três (Massaretto, 2008). O crescimento do número de movimentos intensifica a disputa territorial que tem à frente o MST, que é responsável por 63 por cento das famílias que lutaram por terra nos últimos sete anos.

No Brasil, a fronteira agrícola ainda está aberta, de modo que agronegócio e camponeses se territorializam sobre o espaço geográfico da Amazônia. Essa condição possibilita o aumento dos territórios do campesinato e do agronegócio. Este é um elemento paradoxal da reforma agrária no Brasil. A reforma agrária é compreendida pelas mudanças na estrutura fundiária de um país. No caso do Brasil, essa mudança está ocorrendo, mas a desconcentração fundiária não. O Brasil amplia o território agrícola e a concentração de terras. É fácil compreender essa contradição quando analisamos os dados da estrutura fundiária brasileira e percebemos que tanto o agronegócio quanto o campesinato ampliaram seus territórios nos últimos quinze anos (Fernandes, 2008a).

No governo Lula, a ampliação do território camponês ocorreu pela apropriação das terras públicas por meio da regularização fundiária, bem como pela compra de terras por meio de políticas de créditos fundiários. Por ampliação do território camponês estamos nos referindo ao aumento do número de unidades camponesas e pelo reconhecimento oficial de posses, quando o INCRA incorpora em seu cadastro os números de famílias e as respectivas áreas ocupadas, registrando-os como resultados da reforma agrária. Esta nova política aumentou os tipos de assenta-

mentos. Segundo os estudos de Coca (2008) e Rocha (2008), entre os assentamentos criados predominam os agroflorestais em detrimento dos agropecuários como tendência crescente desde a primeira gestão do atual governo. Nos estudos desses dois pesquisadores estão registrados dezoito tipos de assentamentos de reforma agrária e sete tipos de assentamentos de reforma agrária de mercado. Esta diversidade é resultado da criação de novos tipos de assentamentos, que ultrapassam o clássico modelo agropecuário e também respondem a diferenças regionais. Os movimentos camponeses e, especialmente, o MST, têm se utilizado dessa diversidade para avançar na luta pela reforma agrária em áreas próximas às regiões metropolitanas. Modelos de assentamentos agroflorestais criados para a Amazônia são implantados próximos à região metropolitana de São Paulo (Golffbartt, 2007). Ao mesmo tempo, também aumentam os números de assentamentos de reforma agrária de mercado, principalmente nas regiões Nordeste e Centro-Sul (Coca, 2008; Rocha, 2008).

Conclusão

O aumento dos territórios do campesinato e do agronegócio aponta para uma acirrada disputa territorial no futuro próximo com o começo do fechamento da fronteira agrícola brasileira. Esta condição vai acabar com o atual paradoxo da reforma agrária e intensificar os conflitos. Outro elemento da disputa territorial que já está se formando é o uso das terras para a produção de agroenergia. As atuais políticas que buscam resolver o problema do petróleo estão acirrando a disputa territorial pelo tipo de uso da terra. De um lado, o agronegócio intensifica a produção de agroenergia e de *commodities* para indústrias de alimentos. De outro lado, a Via Campesina defende o aumento do uso das terras para a produção de alimentos. O paradoxo volta ser contradição como elemento estrutural da questão agrária.

Bibliografia

- Bruno, Regina 2008 "Agronegócio e novos modos de conflituosidade" em Fernandes, Bernardo Mançano (coord.) *Campesinato e agronegócio na América Latina: a questão agraria atual* (Buenos Aires: CLACSO) no prelo.
- Coca, Estevan Leopoldo de Freitas 2008 *Análise e mapeamento dos tipos de assentamentos no Brasil: compreender a diversidade e a atualidade da reforma agrária brasileira. Estudo dos assentamentos das regiões Norte e Nordeste* (Presidente Prudente: NERA).

- DATALUTA-Banco de Dados da Luta pela Terra 2008 "Núcleo de estudos, pesquisas e projetos de reforma agrária" em <www.fct.unesp.br/nera>.
- Fernandes, Bernardo Mançano 2000 *A formação do MST no Brasil* (Petrópolis: Vozes).
- Fernandes, Bernardo Mançano 2001 *Questão agrária, pesquisa e MST* (São Paulo: Cortez).
- Fernandes, Bernardo Mançano 2005 "Movimentos socioterritoriais e movimentos socioespaciais" em *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Vol. 16, enero-abril.
- Fernandes, Bernardo Mançano 2006 "Questão agrária" em Sader, Emir e Jinkings, Ivana (coords.) *Enciclopédia Contemporânea da América Latina e do Caribe* (São Paulo: Boitempo) Vol. 1.
- Fernandes, Bernardo Mançano 2008a "Entrando nos territórios do Território" em Paulino, Eliane Tomiasi e Fabrini, João Edmilson (coords.) *Campesinato e territórios em disputa* (São Paulo: Expressão Popular).
- Fernandes, Bernardo Mançano 2008b "Questão agrária: conflitualidade e desenvolvimento territorial" em Buainain, Antonio (coord.) *Luta pela terra, reforma agrária e gestão de conflitos no Brasil* (Campinas: UNICAMP).
- Golfbartt, Yamila 2007 "A luta pela terra entre o campo e a cidade: as Comunas da Terra do MST, sua gestação, principais atores de desafios", Dissertação de mestrado, São Paulo.
- Massaretto, Nívea 2008 *DATALUTA-Banco de Dados da Luta pela Terra: organização do cadastro de movimentos socioterritoriais* (Presidente Prudente: NERA).
- Oliveira, Ariovaldo Umbelino 2005 "O MST como movimento socioterritorial moderno" em *Revista USP* (São Paulo: USP) Nº 64.
- Pereira, João Márcio Mendes 2004 "O modelo de reforma agrária de mercado do Banco Mundial em questão: o debate internacional e o caso brasileiro. Teoria, luta política e balanço de resultados", Dissertação de mestrado, CPDA-UFRRJ, Rio de Janeiro.
- Ramos Filho, Eraldo da Silva 2008 "De pobre e sem-terra a pobre com-terra e sem-sossego: territorialização e territorialidades da reforma

agrária de mercado (1998-2006)" em Fernandes, Bernardo Mançano; Medeiros, Leonilde e Paulilo, Maria (coords.) *Lutas camponesas contemporâneas: condições dilemas e conquistas* (São Paulo: UNESP) no prelo.

Rocha, Herivelto Fernandes 2008 *Análise e mapeamento dos tipos de assentamentos no Brasil: compreender a diversidade e a atualidade da reforma agrária brasileira. Estudo dos assentamentos da região Centro-Sul* (Presidente Prudente: NERA).

Silva, José Gomes da 1987 *Caindo por terra: crises da reforma agrária na Nova República* (São Paulo: Busca Vida).

Silva, José Gomes da 1989 *Buraco negro: a reforma agrária na constituinte* (Rio de Janeiro: Paz e Terra).

Stédile, João Pedro e Fernandes, Bernardo Mançano 1999 *Brava gente* (São Paulo: Fundação Perseu Abramo).

Los vaivenes de los movimientos sociales en México

Guillermo Almeyra

Ex Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de México (UAM), Unidad Xochimilco, en el Posgrado Integrado en Desarrollo Rural. Ex Profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Profesor de posgrado en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Columnista de *La Jornada*, de México.

Resumen

El artículo plantea el papel movilizador en México del movimiento indígena y de sus experiencias de poder local y de autonomía, a pesar de sus límites, así como de la lucha popular por los derechos democráticos y los recursos naturales. Destaca también la recuperación del movimiento sindical y del campesino, que comienzan a unirse con el movimiento cívico en torno a un proyecto alternativo de país.

Abstract

The article sets forth the idea of the Mexican indigenous movement with its experiences in local power and autonomy, and despite its limits, as a mobilizing force, as well as the people's struggle for democratic rights and natural resources. It also highlights the recovery of trade union and rural community movements, which began to join together with the civic movement around an alternative project for the country.

Palabras clave

Movimiento indígena, emigración, movimiento campesino, movimiento sindical, movimiento cívico, zapatismo, autogobierno, autonomía.

Keywords

Indigenous movement, emigration, rural movement, trade union movement, civic movement, Zapatism, self-governance, autonomy.

Si se hace un somero balance en México de la evolución de los movimientos sociales en los últimos veinte años, en particular, se destaca: la aparición con fuerza en la escena política del movimiento indígena, en sus diversas manifestaciones; la permanencia, al mismo tiempo, del gran movimiento conservador y desesperanzado constituido por la emigración masiva de millones de mexicanos hacia Estados Unidos, a pesar del peligro de muerte en el cruce de la frontera y de la discriminación y represión una vez llegados a su destino; y, por último, el gran movimiento cívico contra el fraude y la prepotencia ilegal del aparato estatal, que toma forma a partir de la elección fraudulenta de Carlos Salinas de Gortari en 1988, crece en la capital con la lucha contra el desafuero del gobernador, Andrés Manuel López Obrador, y se mantiene desde la protesta contra el nuevo fraude electoral que le robó a éste la presidencia de la República para dársela al candidato de la gran finanza, el gran capital, los terratenientes, la jerarquía eclesiástica y Washington, Felipe Calderón Hinojosa.

El primero de ellos, el indígena, buscó desde los noventa y busca aún la igualdad de derechos entre los pueblos originarios y el resto de la sociedad mestiza y el cese de la discriminación secular contra aquéllos y su reconocimiento en pie de igualdad en una Constitución nacional que debería ser reformada con tal fin. Se trata de un movimiento hacia la integración en la sociedad mexicana, no un movimiento revolucionario y antisistémico, aunque una parte de los indígenas, en la región de las Cañadas de Chiapas, se haya alzado en armas y haya construido una serie de municipios libres, y otra parte de ellos, en Oaxaca o en Guerrero, haya dado vida a experiencias autonómicas. Ese movimiento también estalló ante los terribles resultados sociales de la mundialización dirigida por el capital financiero y que subsumió las regiones rurales y la agricultura, y por eso los campesinos indígenas que tomaron las armas y combatieron a partir de enero de 1994 declararon categóricamente que preferían morir de un balazo a morir de diarrea u otras enfermedades comunes y curables.

El segundo movimiento, el de la emigración, que está despoblando vastas zonas rurales del país, ha cambiado las características demográficas y la pirámide etaria mexicana, transformando los pueblitos en residencias principalmente de viejos, niños y mujeres que viven de las remesas de los emigrados, y dejando vastas extensiones de tierras

sin producir; es un movimiento de aquellos que se van porque no tienen esperanzas de trabajar en México ni de cambiar la sociedad mexicana. Por su vastedad, ha sido una válvula de escape a la presión campesina; ha impedido que el estallido de Chiapas (que en los noventa no era aún una región de emigración) se repitiese en los otros estados pobres y con numerosa población campesina. También, para las clases gobernantes, ha sido un maná, ya que las decenas de miles de millones de dólares que los emigrados mandaban a sus regiones fortalecieron el peso mexicano y frenaron el descontento social mientras, al mismo tiempo, la emigración de los más jóvenes y emprendedores de las regiones rurales, pero también de las ciudades, aliviaba el trágico desempleo y subempleo masivo cuando el gobierno no era capaz de cubrir anualmente sino un tercio de las necesidades de empleo que plantea la incorporación de cada nueva leva de jóvenes al mercado de trabajo.

El movimiento social más masivo en México, por lo tanto, es conservador y antinacional, ya que enriquece aún más a EE.UU. (sólo en impuestos, se calcula, los mexicanos dejan allí 100 mil millones de dólares por año) con su trabajo (que aporta a México 20 mil millones de dólares anuales en concepto de remesas). Además, es profundamente nociva, en México mismo, la percepción popular masiva de que el modelo a seguir es el estadounidense y de que la solución a todos los problemas es individual y no colectiva y consiste en incorporarse al mercado de trabajo y aceptar los valores de EE.UU., al extremo de llegar a enrolarse en las fuerzas armadas de ese país en Irak, para obtener así el tan ansiado permiso de residencia o la nacionalidad local.

El tercer movimiento, el cívico, tiene su centro en la capital, Ciudad de México, en los estados centrales del país, Michoacán, Tabasco, Guerrero y Oaxaca, que tienen una gran proporción de población rural e indígena, y en Zacatecas y Baja California Sur, en el norte del país; pero tiene escasa influencia en otras regiones, aunque cuentan con buen número de indígenas, como Yucatán o Campeche, y en los estados mestizos norteños donde se practica una agricultura masiva de tipo capitalista. Se trata de un movimiento democrático, legalista y constitucionalista, en un país en el que la concentración de la riqueza alcanza niveles inigualados en otras partes del mundo (México tiene el segundo hombre más rico del planeta y un 30% de su población no llega a percibir un ingreso de un dólar diario), donde no hay ni ha habido nunca democracia y la ley y la Constitución son sistemáticamente ignoradas por las clases dominantes. Es por eso un movimiento subversivo, aunque sus reivindicaciones sean puramente reformistas y nacionalistas. Pero tiene escasos contactos con las luchas de los indígenas (y de los campesinos en general), que a su vez sólo margi-

nalmente participan en ese movimiento cívico, y tampoco está relacionado con los movimientos sindicales, a veces muy combativos, como el de los electricistas o los maestros de Oaxaca, que confluyen con el mismo y a veces le dan una columna vertebral con su organización, pero no son ni su motor ni su dirección y participan en él de modo esporádico y tangencial.

Por supuesto, fuera de esos tres movimientos principales, aunque entrelazado con ellos, está el movimiento obrero, que empieza a liberarse de los lazos burocráticos y corporativos que ataban los sindicatos al gobierno y sometían a las bases a direcciones particularmente corruptas y autoritarias. Y existe igualmente el movimiento campesino, formado por comuneros, pequeños campesinos y ejidatarios, que está superando las viejas direcciones campesinas priístas y corporativas. Sobre ellos volveremos más adelante.

El movimiento indígena, la rebelión zapatista, la autonomía, la Otra Campaña

Para quedarnos dentro de los últimos tres lustros, no expondremos aquí los prolegómenos del estallido de la rebelión en Chiapas el 1 de enero de 1994 ni haremos una historia de los zapatismos anteriores o contemporáneos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), organizado en los ochenta por un grupo de revolucionarios nacionalistas-maoístas derrotados en el norte del país y que se refugiaron en la selva chiapaneca uniéndose al trabajo organizativo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas y a la rebelión indígena latente en la zona de las Cañadas. Nos bastará con recordar las luchas campesinas indígenas que llevaron al Congreso Indígena de San Cristóbal en 1974, veinte años antes del levantamiento del EZLN, y los combates de los campesinos zapatistas, indígenas, organizados en la Coordinadora Nacional Plan de Ayala en el último cuarto del siglo pasado, así como la vasta movilización popular a favor de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y contra el fraude que llevó al gobierno a Carlos Salinas de Gortari, y la movilización de los nahuas de Guerrero, que a principios de los noventa anuló el proyecto gubernamental de construcción de una gran represa que habría inundado sus tierras.

Los zapatistas del EZLN no nacieron, pues, repentinamente y de la nada, sino que son el fruto de ese proceso mexicano y continental que en América Latina llevó también a los indígenas del Ecuador, organizados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), a derribar presidentes. Tampoco el EZLN tuvo siempre las posiciones que tiene actualmente, ya que al comienzo era una organización militar que esperaba derribar al gobierno por las armas (como reza la Primera Declaración de la Selva Lacandona) y el proble-

ma de la autonomía y la construcción de municipios autónomos –que hoy es esencial en su política en Chiapas– apareció recién más tarde, ante la necesidad de afianzarse en el territorio chiapaneco.

Por tanto, y porque el EZLN se apoya en una zona de Chiapas que equivale sólo aproximadamente a la diócesis de San Cristóbal de las Casas y coexiste con las fuerzas del gobierno y los partidos “del orden” en los otros dos tercios –también predominantemente indígenas– del territorio del estado sureño, e igualmente porque el zapatismo que no sigue al EZLN está presente en otras regiones del país y es también en buena parte indígena, no es lícito creer que zapatismo, movimiento indígena y EZLN son sinónimos, aunque el muy débil Consejo Nacional Indígena, que tiene una existencia más que todo formal, siga la

«Este trabajo de la comunidad sobre ella misma comienza a cambiar las relaciones entre ancianos y jóvenes y entre varones y mujeres, aunque subsista aún la tradicional discriminación de género»

línea de la organización chiapaneca. Tampoco se puede deducir que los indígenas zapatistas chiapanecos se expresen exclusivamente por boca del Subcomandante Marcos (vocero y dirigente militar del EZLN) ya que los planteos político-culturales de éste, que tanta repercusión han tenido en Europa y en sectores estudiantiles mexicanos, no son discutidos con los campesinos indígenas que, en cambio, fijan sus posiciones en las asambleas de las que participan, aunque den un “consenso preventivo” a Marcos permitiéndole opinar sobre temas en los que no tienen una posición unívoca o que no han encarado aún.

La verdadera gran fuerza del EZLN no es militar ni es la de una organización centralista, sino que reside en la decisión asamblearia de los asuntos comunes en cada municipio liberado y en la preparación, en asambleas y en los consejos nacidos de las mismas, de miles de administradores y dirigentes que son elegidos o revocados cada vez más democráticamente, porque las mujeres comienzan a participar en las reuniones y a tener cargos en la co-

munidad y los jóvenes son responsables de la educación de los niños y el cuidado de los ancianos. Este trabajo de la comunidad sobre ella misma comienza a cambiar lentamente las relaciones entre ancianos y jóvenes y entre varones y mujeres, aunque subsista aún la fuerte y tradicional discriminación de género.

Chiapas se ha convertido, por otra parte, en un estado líder en expulsión de campesinos, cosa que no sucedía en 1994. Muchos miembros de las comunidades zapatistas y hasta cuadros del EZLN han emigrado a EE.UU., ya que la situación económica en las zonas zapatistas empeoró en los últimos quince años y la agricultura familiar resulta insuficiente para subsistir. Las regiones zapatistas no son realmente autónomas, ya que sus habitantes (hombres y mujeres) deben entrar, durante la mayor parte del año, en el mercado no agrícola de trabajo; compran sus insumos en el mercado de alimentos y de herramientas y fertilizantes, que las zonas zapatistas no producen; venden o intercambian sus productos en los mercados pueblerinos fuera de esas zonas; y deben recurrir, en cierto momento, a la sanidad y la enseñanza oficiales (pese al esfuerzo por crear su propio sistema de educación y sanitario basado en el voluntariado y la solidaridad comunitaria)¹.

No puede haber, por consiguiente, autonomía en una sola región —que es pobre y atrasada, por añadidura— ni mucho menos aún en zonas donde los pueblos están divididos y sólo una parte de ellos es zapatista. Tampoco existe un proyecto político general zapatista de construcción de la autonomía y de la autogestión a escala regional (por no hablar de la nacional) de modo que los importantísimos progresos realizados en este terreno son más que nada empíricos, y el comportamiento centralista y verticalista del EZLN, así como la muy escasa referencia a la autonomía y la autogestión en sus documentos y en las declaraciones de Marcos, demuestran una diferencia notable entre la vida de las comunidades zapatistas indígenas y la de la organización a la que siguen y a la que pertenecen. Si actualmente las regiones zapatistas en Chiapas se han cerrado para reforzar su vida interna, y el EZLN y el propio Marcos, tan locuaz siempre, se encuentran en un silencio prolongado, es precisamente por ese motivo.

La organización calla porque sufre los efectos de su derrota política en los intentos de salir a los otros estados a buscar apoyo sin haberlo logrado en la medida de sus esperanzas, por su sectarismo ante los movimientos políticos y sociales que el EZLN no controla. Calla también porque no sabe qué decir frente a la lucha masiva de otros sectores campesinos, urbanos, intelectuales y de trabajadores por enfrentar los grandes problemas del país: intento de privatización del petróleo y de la energía

eléctrica, de modificar contra los asalariados la Ley Federal de Trabajo para “flexibilizarla”, problemas de la estructura de la propiedad agraria y de la del comercio exterior mexicanos (cuestiones todas en las que no sufre gran presión de sus bases indígenas campesinas de autosubsistencia ni de sus grupos de apoyo ultraizquierdistas urbanos que se niegan a trabajar conjuntamente con millones de personas –obreros, campesinos, militantes populares–, que en esos temas siguen a direcciones sindicales más o menos corrompidas o al llamado “gobierno legítimo” del caudillo popular Andrés Manuel López Obrador).

Las comunidades en cambio callan porque nunca hablaron sino por sus hechos y están tratando de acorazarse para hacer frente a la ofensiva, que será incluso militar, del gobierno, en cuanto éste haga aprobar sus principales planes nacionales y se afirme mediante la represión (ahora debe luchar simultáneamente contra los movimientos sociales que se organizan y radicalizan y contra la fuerza militar del narcotráfico, que corroe su propio aparato estatal).

La llamada Otra Campaña, desgraciadamente –porque despertó las simpatías de miles de activistas, y sobre todo de muchos jóvenes e izquierdistas que se guiaron por la letra de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, que la lanzó– fue funesta para el EZLN y para Marcos. Ante las elecciones presidenciales, y partiendo de que “todos son iguales”, esa tendencia hizo una campaña activa contra el voto al candidato de la oposición, López Obrador (de ahí el título electoralista de su “Otra Campaña” antielectoral), creyendo que aquél ganaría sin problemas. Lo peor es que esa actitud separó a los integrantes de la Otra Campaña del gran movimiento social que apoyó a López Obrador, ocupando prolongadamente incluso el centro de la ciudad de México con un campamento de decenas de miles de integrantes, y los puso además de espaldas al movimiento masivo de los pobladores de Oaxaca que dieron origen a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y también a la parte democrática del movimiento sindical que organiza el Diálogo Nacional, detrás de un programa nacionalista-anticapitalista.

El resultado de la actividad antielectoral y del sectarismo fue un ulterior debilitamiento del apoyo y de la capacidad de movilización del EZLN, que en el país está aislado como nunca. El refugio en Chiapas y en el silencio aísla aún más al EZLN y deja plena iniciativa al gobierno surgido del fraude para escoger la forma y el momento para acabar con la anomalía chiapaneca (una región indígena “libre” desde hace casi tres lustros y un ejército insurgente e indígena que la defiende). Antes de un ataque militar en toda regla, el gobierno de Felipe Calderón y el estatal están provocando una “guerra entre indios”, desgastando paula-

Los grandes movimientos cívicos del México de hoy son legalistas y subversivos, y forman en la autoorganización, el enfrentamiento con el aparato estatal y la construcción de estructuras propias de poder

tinamente a las comunidades zapatistas con decenas de pequeñas agresiones de paramilitares indígenas y de pleitos por la tierra. La falta de pronunciamientos sobre la lucha en defensa del carácter estatal del petróleo (porque ese movimiento es dirigido por López Obrador) o de los salarios y conquistas obreras, que el intento gubernamental de modificación de la Ley Federal del Trabajo amenaza (porque los sindicatos estarían burocratizados), acentúa el aislamiento del EZLN en el país.

Mientras tanto, en otras regiones como Oaxaca o Guerrero se desarrollan importantes manifestaciones de autonomía comunitaria. Se destaca la creación en asamblea de un cuerpo de Policía Comunitaria, dirigido por un jefe nombrado igualmente en asamblea, en la Montaña de Guerrero. Cientos de indígenas armados y otros cientos equipados con palos aseguran que

en su región no se produzcan robos, crímenes ni violaciones, y son alimentados y protegidos por la comunidad. Ellos apresan a los delincuentes y fijan las penas, que la comunidad controla. La Policía Comunitaria no es reconocida por la policía del estado ni por la justicia y actúa como poder frente al poder estatal. También en Guerrero funciona la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, que cubre regiones de habla nahua, amuzga, mixe y pobladas por afromexicanos (ver OSAL, 2008). Esta universidad, aún no reconocida por el estado de Guerrero pero sumamente activa y con programas independientes, ayuda a las comunidades a recuperar su historia, cultura, lengua y dignidad, y lo hace financiada por las comunidades mismas que alojan y alimentan a los alumnos en las casas de los pobladores. En Oaxaca, igualmente, las comunidades indígenas que participan en la APPO mantienen la independencia política de varios municipios y se apoyan en las movilizaciones locales de sus integrantes contra el gobierno del estado, al que desconocen.

Puede afirmarse, en resumen, que los indígenas (que en México representan el 15% de la población y se cuentan entre los campesinos más pobres) desean integrarse en el estado mexicano como ciudadanos plenos y no libran una lucha antiinstitucional sino una por la reforma de las leyes y la Constitución. Ellos no han logrado aún ni siquiera unir tras objetivos únicos a las 56 etnias en que se dividen, ni imponer sus derechos en la Constitución, como quiso hacerlo el EZLN con la Marcha del Color de la Tierra desde Chiapas a la ciudad de México; y el Consejo Nacional Indígena, que quería coordinar y dirigir sus luchas, nunca pasó de ser más que un grupo bien intencionado pero sin base ni peso. No obstante, ninguna de las etnias ha sido domesticada y las luchas de los indígenas en cada estado confluyen a veces con las de los campesinos o con otras luchas populares, como la de los maestros de la APPO, en Oaxaca, y siguen despertando la simpatía, aunque no la solidaridad activa, de vastas capas de la población urbana, lo cual obliga al gobierno a ser sumamente cauto en sus acciones antiindígenas y anticampesinas, ya que un ataque masivo contra los zapatistas chiapanecos o la Policía Comunitaria de Xochistlahuaca, Guerrero, podría movilizar y unificar las fuerzas indígenas y favorables a estos, hoy dispersas.

El potente movimiento cívico y sus límites político-organizativos

La Revolución Mexicana comenzó como un potente movimiento cívico democrático, contra la reelección y la autocracia, y luego se radicalizó². El cardenismo, en los años treinta, fue también, en el fondo, un movimiento cívico contra el llamado maximato del caudillo Plutarco Elías Calles y, para afirmarse, debió hacer una profundísima reforma agraria, armar a los campesinos, reconstruir el ejército y estatizar las palancas fundamentales de la economía, como el petróleo. En México fue el estado el que desarrolló la burguesía nacional y en parte la creó, y fueron los movimientos cívicos y sociales los que unificaron al país y desarrollaron el estado ampliado, con el consenso y la participación activa de los sectores pobres, sobre los cuales se asentó el aparato estatal resultante, primero, de la revolución de 1910 y, dos décadas después, del segundo impulso de ésta, el cardenista. Dado el carácter burocrático del partido oficial nacido de la Revolución (el Partido Nacional Revolucionario, con Calles; Partido de la Revolución Mexicana, con Cárdenas; y Partido Revolucionario Institucional (PRI) después de éste) todos los movimientos de renovación social se han dado sólo en parte dentro del mismo y sobre todo fuera, en "la bola", como se afirmó en "la bola" la Revolución Mexicana misma.

Los movimientos cívicos sucesivos a Cárdenas (henriquismo, jaramillismo, movimientos cívico-revolucionarios en Guerrero)

fueron muy fuertes porque reivindicaban la democracia y los derechos ciudadanos (y humanos) en un país con un poder político fuertemente centralizado y represivo pero, por sus bases mismas, tuvieron un marcado contenido social. Constitucionalistas, deseosos de dar vigencia real a las leyes, fueron también desestabilizadores y subversivos porque el desarrollo capitalista en México era incompatible con la democracia y el estado de derecho. Como en el caso de los indígenas chiapanecos, que desean ser mexicanos plenos pero para conseguirlo deben alzarse en armas y oponer su poder al del gobierno y sus propias leyes a las leyes estatales, los grandes movimientos cívicos del México de hoy, legalistas y subversivos a la vez, son una escuela que forma decenas de miles de personas en la autoorganización, el enfrentamiento con el aparato estatal y la construcción de estructuras propias de poder.

Tal es el caso de la APPO y del movimiento organizado en torno al "gobierno legítimo" de Andrés Manuel López Obrador, en especial con la Convención Nacional Democrática. Ambos son simultáneos y en parte se intersectan, pues la APPO, cuando llegó el momento de las elecciones nacionales, dio la mayoría en Oaxaca al candidato a presidente opositor y éste, aunque tardíamente, hizo declaraciones contra la represión a la APPO y por la libertad de sus presos.

El movimiento contra el fraude electoral que puso ilegalmente en la presidencia a Felipe Calderón, el hombre del gran capital, llevó a la constitución de un llamado "gobierno legítimo" presidido por López Obrador y apoyado por un gran movimiento de masas, sobre todo en la capital del país, que dura ya dos años. El mismo se manifestó en la ocupación de las cámaras legislativas, en el bloqueo a los desplazamientos de Calderón, en periódicas y sucesivas enormes manifestaciones en el Zócalo de la ciudad de México, en la organización de una Convención Nacional Democrática, y de brigadas con miles de integrantes para movilizar a la sociedad contra la privatización por parte del gobierno nacional de la empresa petrolera estatal Pemex. Entre los hechos más importantes se destacaron la ocupación del centro de la ciudad de México por un gigantesco campamento durante varias semanas y la combinación de la lucha no institucional (como la organización de brigadas de mujeres para copar edificios públicos) con la oposición parlamentaria, que enfrenta a la alianza entre el partido de la derecha clerical (Partido de Acción Nacional-PAN), el PRI y varios pequeños partidos de derecha o de centroderecha. Sin embargo, el Frente de Acción Popular (FAP), compuesto por el Partido del Trabajo, Convergencia Democrática y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en una serie de problemas fundamentales, ha votado junto con la mayoría, desprestigiándose mucho; y por último, en las elecciones internas

del PRD acaba de vencer un grupo muy conciliador con el gobierno y que ve a López Obrador con mucha resistencia.

El problema principal que enfrenta el movimiento social que apoya al "gobierno legítimo" es la falta de independencia frente al mismo, de organización autónoma y de objetivos claros, ya que la dirección autoritaria y verticalista de López Obrador, que tiene su justificación en la falta de un partido que lo respalde y, mucho más aún, en las tradiciones políticas verticalistas y las exigencias de sus bases, que buscan un líder, convoca y desmoviliza según la visión y las conveniencias momentáneas del mismo y dirige toda la lucha hacia la perspectiva de las futuras elecciones presidenciales de 2012 y las legislativas de 2009, como si los fraudes de 1988 y 2006 no demostrasen que la derecha jamás cederá el gobierno a una mayoría electoral. La falta de intervención en los movimientos sociales (APPO, campesinos, obreros) y la corrupción del PRD, así como la falta de objetivos concretos para la lucha política, debilitan a este movimiento. En efecto, la gente no come democracia aunque la defienda y necesite organizarse en torno a sus problemas concretos y a las dificultades nacionales (la migración, el desastre en el sector rural, el precio de los alimentos, el control de la banca por el gran capital financiero extranjero, el problema indígena, la educación, la defensa del ambiente y de los recursos naturales, los salarios y el desempleo, entre otros), que López Obrador prácticamente ignora en su acción opositora.

Dado que resulta imposible mantener una movilización constante por el respeto al voto popular durante seis años, el movimiento presidido por López Obrador estaba decayendo cuando fue salvado por el intento gubernamental de hacer aprobar la privatización petrolera. La defensa del carácter estatal de los recursos naturales, como establece la Constitución, le dio ahora nueva vida, aunque su forma actual podría modificarse si una parte importante del PRD votase con la derecha en el vital problema de la energía o si una fuerte recesión en EE.UU. empeorase aún más la situación de las clases populares y modificase la actual relación de fuerzas marcada por la ilegitimidad del gobierno y su debilidad, por un lado, y la falta de un gran movimiento de oposición con un programa alternativo, por otro.

En la actualidad, lo importante es la experiencia de autoorganización realizada por decenas de miles de personas de ambos sexos, especialmente mujeres de mediana edad y de las clases medias pobres urbanas. Mientras el PRD (el partido de López Obrador) está en manos de una burocracia corrompida y apta para cualquier acuerdo secreto con el gobierno del gran capital, este movimiento semiorganizado (frenado y controlado por un líder que lo usa como instrumento de presión) toma

posiciones mucho más a la izquierda que aquel partido y eventualmente podría dar base a López Obrador para la creación de otro –en este caso un movimiento-partido más para la acción extrainstitucional, con un programa mucho más concreto, que se dibuja en las movilizaciones (defensa del petróleo y de la soberanía, de los pequeños campesinos y del nivel de vida de los más pobres, de la Ley Federal del Trabajo).

El otro gran movimiento cívico –contemporáneo del que apoya a López Obrador–, el de la lucha por derrocar al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz (culpable de fraude, violencia, asesinatos), es local, del estado de Oaxaca; moviliza a los estudiantes, a la población pobre, a sectores importantes de los trabajadores y los campesinos y a importantes franjas de la población indígena de la región.

Surgido de una huelga de los maestros primarios y rurales –es decir, de la baja intelectualidad en contacto con las comunidades y poblaciones– que ocupó durante ocho meses el centro de la capital de Oaxaca e incorporó a otros sectores en lucha, en su curso ocupó radios y TV y las hizo funcionar en autogestión; tomó la universidad local; construyó y defendió barricadas; ocupó los edificios públicos, lo que hizo que los funcionarios debieran reunirse clandestinamente en hoteles o fuera de la ciudad; formó dos cuerpos de policía autónomos (de los maestros y de los indígenas); y funcionó de hecho como poder paralelo al del estado local y al del gobierno central, que debió enviar tropas y ejercer una feroz represión para detenerlo. Aun después de la represión, los asesinatos selectivos y las decenas de presos, el movimiento resurgió en sucesivas enormes manifestaciones y reaparece ahora en una nueva huelga masiva de los maestros con la ocupación del centro de la ciudad de Oaxaca por 21 días y la toma de rutas y caminos.

Este movimiento tuvo como origen una huelga dirigida por un sindicato y se transformó en una gran lucha popular, en una poblada. Rompió los mitos de que la emigración desangra a los movimientos sociales, pues Oaxaca es uno de los estados que expulsan mano de obra, pero ésta permanece unida más allá de las distancias por lazos familiares, culturales y étnicos que hicieron que emigrantes oaxaqueños en EE.UU. volvieran a su estado para participar en la lucha. Eliminó la idea anarquista, fomentada por la Otra Campaña, de que la participación en las elecciones, por un lado, o la dirección sindical (corporativa, negociadora, burocrática sin remedio según esa visión) impiden la lucha: Oaxaca votó masivamente contra el gobierno y por el PRD sin esperar nada de éste, autoorganizándose, y superó al sindicalismo dando objetivos políticos al movimiento obrero y popular. La APPO desmintió que los “revolucionarios” y las “vanguardias” hacen la revolución, porque decenas de miles de personas, en el mo-

vimiento, en las barricadas, en los municipios independientes, las luchas locales, la construcción de solidaridad y poder se construyeron como dirigentes y determinaron el curso de los acontecimientos. Por último, la APPO derribó la idea de la “multitud”, pues todos los sectores participantes lo hicieron adoptando los métodos obreros y las viejas tradiciones obreras radicales que, desde el magonismo, antes de la Revolución Mexicana, y hasta las luchas de los ferroviarios en los años cincuenta, caracterizaron al estado oaxaqueño. Cientos de organizaciones de todo tipo se unieron en la APPO y a ésta se sumaron organizaciones indígenas, que incorporaron sus propias reivindicaciones. El aislamiento en que dejaron a la APPO la Otra Campaña y la dirección del PRD y López Obrador permitió al gobierno local, unido al federal, su represión masiva. Pero el movimiento sigue, como lo indica la actual huelga de maestros oaxaqueños (ver Almeyra, 2007).

El movimiento obrero y el movimiento campesino

Históricamente, las direcciones burocráticas de los sindicatos corporativos se agrupaban en la Central de Trabajadores Mexicanos (CTM), que elegía un tercio de los parlamentarios del PRI y que se fue deshilachando hasta tener que formar, con otras centrales burocratizadas, el Congreso del Trabajo (CT), siempre oficialista, incluso hoy con un gobierno panista.

El último 1 de mayo, el desfile de esos ecos del pasado que no pasa mostró su división y su incapacidad para movilizar, pues no llegaron a ocupar ni un tercio de la plaza del Zócalo en México. La mayoría de los trabajadores asalariados hoy no está sindicalizada y la mayor parte de quienes lo están son miembros de sus respectivos sindicatos, entre los cuales los principales son independientes de la CTM y el CT, pero no hay una central obrera unificada que los agrupe. En los últimos años, sin embargo, se han constituido dos núcleos, el Frente Sindical Mexicano (dirigido por el Sindicato Mexicano de Electricistas, el más combativo y democrático) y la Unión Nacional de Trabajadores –dirigida por las burocracias de los sindicatos de obreros telefónicos, de los trabajadores del Seguro Social y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), muy poco democráticas. Ambos grupos mantienen sus diferencias pero, ante el ataque general del gobierno, confluyen desde hace más de cinco años en la organización del Diálogo Nacional (DN), que agrupa también a intelectuales como Pablo González Casanova, Miguel Concha y diversas organizaciones sociales, políticas y estudiantiles.

El DN tiene un proyecto de país que supera el de los partidos y el de López Obrador y une reivindicaciones obreras y nacionales, pero es boicoteado por el PRD y por López Obrador, que pretenden unir tras ellos a algunos sindicatos (un combativo dirigente electricista es

senador independiente en la lista del PRD y vota siempre fuera del bloque), pero también por la Otra Campaña, que no quiere un frente único ni siquiera con los sindicatos independientes, porque afirma que todos son burocráticos, y así carece de lazos reales con el movimiento de los trabajadores. Los sindicatos que integran el DN ya organizaron un paro nacional que movilizó a dos millones de personas y están preparando, con asambleas y movilizaciones, la primera huelga nacional en la historia del país por las reivindicaciones obreras (salarios, condiciones de trabajo, respeto a la Ley Federal del Trabajo, contra el desmantelamiento del Seguro Social), democráticas (por la libertad de los presos políticos y sociales y el castigo a los asesinos y represores, contra el fraude electoral) y nacionales (defensa de la estatización del petróleo y de la energía eléctrica, protección a la producción campesina, plan de desarrollo nacional).

El movimiento campesino, también históricamente corporativo y dividido actualmente en varias centrales, se enfrenta hoy al gobierno que, con la libre importación de granos y alimentos estadounidenses fuertemente subsidiados, amenaza con destruir por completo la producción agropecuaria nacional, cuya protección (créditos especiales, precios de garantía, comercialización estatal de insumos y de productos) fue desmantelada desde los años noventa, lo que reforzó brutalmente la emigración de jóvenes y familias enteras hacia el mercado estadounidense, desdoblado las zonas rurales, que quedan yermas.

Ya los campesinos, en un acto sin precedentes históricos, llevaron 100 mil manifestantes a la ciudad de México. Ahora, en unión con los sindicatos, intentan preparar la huelga nacional –apenas terminadas las cosechas– con cortes de ruta, manifestaciones populares, cierre de las aduanas, ocupaciones de oficinas públicas, para lo cual están en la fase organizativa.

El aparente reflujó de los movimientos sociales (muy espectacular en el caso del EZLN) esconde en realidad un proceso más complejo, ya que las luchas sociales son como ríos cársicos, que a veces dejan la superficie y parecen hundirse en la arena para aparecer algunos kilómetros más abajo, reforzados por otras surgientes y por las aguas subterráneas, y proseguir su camino hacia el mar. Sólo en la visión anárquica, los trabajadores, obreros o campesinos pueden estar constantemente movilizados y en la calle. En particular cuando carecen de dirección política que dé sentido y perspectivas a sus luchas.

Bibliografía

Almeyra, Guillermo 2007 "El legado de la APPO" en Beas, Carlos (coord.)
La batalla por Oaxaca (Oaxaca: Yope Power).

Almeyra, Guillermo y Thibaut, Emiliano 2006 *Zapatistas, un mundo nuevo en construcción* (Ituzaingó: Maipue).

OSAL 2008 (Buenos Aires: CLACSO) Año VIII, N° 23, abril.

Notas

- 1 Para un tratamiento más amplio de este tema, ver Almeyra y Thibaut (2006). su libro habla sobre "campesinos que para que no cambiase nada hicieron la revolución".
- 2 John Womack escribe en su historia del movimiento de Emiliano Zapata que

Paraguay: el nuevo escenario de disputa de los intereses populares

Marielle Palau y Guillermo Ortega

Investigadores de BASE. Investigaciones Sociales, Asunción.

Resumen

Este relato aborda los antecedentes políticos de la elección presidencial de Fernando Lugo en Paraguay. Asimismo, narra la constelación de apoyos que se dio en el país en pos del quiebre de la hegemonía del Partido Colorado. Por último, afronta los desafíos y las tensiones que encara el gobierno de Lugo en relación a las expectativas de los movimientos sociales.

Abstract

This text relates the situation regarding the political background to the election of Fernando Lugo in Paraguay. It also tells of the overwhelming support that occurred in the country in the attempt to break the hegemony of the Colorado Party. Finally, it deals with the challenges and tensions that the government of Lugo faces in relation to the expectations of social movements.

Palabras clave

Fernando Lugo, movimientos populares, Alianza Patriótica para el Cambio, movimiento campesino, Frente Social y Popular.

Keywords

Fernando Lugo, popular movements, Patriotic Alliance for Change, rural community movement, Social and Popular Front.

Elementos que posibilitaron el nuevo escenario

Dimensionar correctamente la importancia de la victoria de Fernando Lugo en las elecciones presidenciales de Paraguay obliga a recordar los más de sesenta años en los que el país estuvo gobernado por el Partido Colorado, especialmente los 35 de la dictadura ejercida por el general Alfredo Stroessner. Dicha dictadura acaba en 1989 con un golpe de Estado comandado por su consuegro, el general Andrés Rodríguez. Sin embargo, durante toda la llamada “transición política”, el Poder Ejecutivo continuó en manos del partido que había sido el sustento de los peores años de la historia política paraguaya.

De 1989 a esta parte, poco se avanzó para saldar la deuda con aquellos que sufrieron todo tipo de vejámenes en la lucha por un modelo de sociedad más justo y solidario. Se mantuvo el modelo corrupto y prebendario que sustentó económica y políticamente al Partido Colorado. Con la caída de la dictadura se inicia con más fuerza la presión para la aplicación de medidas neoliberales, que fueron ejecutadas en tanto no afectaban los intereses del propio partido de gobierno. Aumentó la penetración del capital transnacional en el campo. La expulsión campesina y la exclusión social se agudizaron. El descontento con esta realidad fue lo que generó las condiciones para la victoria electoral de Fernando Lugo del 20 de abril y que ese día las calles de Asunción se parecieran a las del 3 de febrero de 1989, cuando cayó Stroessner.

Ahora bien, durante la campaña electoral, lo que estaba en disputa no era sólo la derrota del Partido Colorado –“la alternancia”, al decir de muchos–, sino la posibilidad de iniciar la construcción de un Paraguay que deje atrás la larga historia de exclusión –en el amplio sentido de la palabra– de la mayoría de su población.

El (mal) gobierno de Nicanor Duarte Frutos fue la gota que colmó el vaso. Durante los cinco últimos años, se agudizó la represión y criminalización a los sectores sociales; aumentaron la pobreza y la inseguridad; el prebendarismo y la corrupción fueron cada vez más evidenciados, así como el despilfarro de los fondos públicos; se potenciaron los agrogocios, y sus nefastas consecuencias para la población rural y el medio ambiente aumentaron considerablemente; el Ejecutivo llevó su injerencia sobre otros poderes del Estado a un nivel grotesco y ni siquiera fue capaz de lograr el reagrupamiento de los movimientos internos del Partido Colorado. Con Nicanor, quedó al descubierto la crisis existente entre el régimen político y en nuevo modelo de acumulación del capital.

En ese contexto, sectores diferentes y contradictorios –desde conservadores hasta de la izquierda radical– comienzan a barajar la posibilidad de presentar como candidato al entonces monseñor Fernando Lugo. Su candidatura surge como resultado de la incapacidad de los

partidos de la burguesía de “hacer avanzar el proceso de transición” y de la inmadurez de las organizaciones del campo popular para superar su fragmentación y “construir una expresión política de masas” (Richer, 2006).

Luego de muchos tires y aflojes, finalmente, la Alianza Patriótica para el Cambio (APC)¹ presenta la candidatura de Lugo bajo la chapa del Partido Demócrata Cristiano, al tiempo que otras organizaciones van explicitando su apoyo electoral mediante diferentes agrupaciones. Se da así un proceso de agrupamiento y reagrupamiento de individualidades y organizaciones populares. Tekojoja² se conforma como movimiento político, el partido Movimiento al Socialismo³. La Alianza Patriótica Socialista aglutina en su seno a dirigentes de partidos de izquierda y del movimiento campesino. El Bloque Social y Popular reúne a los principales dirigentes sindicales. Queda conformado así el archipiélago que llama a votar por Lugo, pero se disputan entre sí el electorado para el Parlamento.

Si bien la candidatura y la victoria de Lugo se debe en buena parte al apoyo que obtuvo del movimiento popular, las organizaciones sociales no mantuvieron una posición unificada durante el proceso electoral⁴. Básicamente, pudieron identificarse cuatro posiciones:

- Apoyo institucional: algunas organizaciones que explícitamente y como tales apoyaron la campaña electoral, y algunos de sus integrantes fueron parte de las listas (tanto en la de la Alianza Patriótica Socialista como en la del Bloque Social y Popular). En esta posición se puede ubicar a algunas organizaciones campesinas y una central sindical.
- Apoyo de la dirigencia: aunque las organizaciones como tales no hayan dado su apoyo a ninguna de las listas, sus dirigentes ocuparon espacios importantes en las mismas.
- No tomaron posición: algunas organizaciones no expresaron su apoyo a ninguna candidatura y tampoco sus principales referentes integraron listas.
- No apoyaron: una importante organización campesina llamó al voto protesta, como crítica al “electoralismo”.

La principal diferencia entre quienes apoyaron la candidatura del ex obispo giró en torno al ingreso o no a la Alianza Patriótica para el Cambio. Mientras que algunas organizaciones se sumaron a la misma sin muchos cuestionamientos, otras consideraron que no podían llegar a acordar con los sectores políticos que habían aprobado leyes y políticas contra los

El oportunismo, la poca visión estratégica, la competencia por los cargos y el sectarismo provocaron la participación de militantes en más de diez listas para pugnar por los escaños parlamentarios

sectores populares, por lo que optaron por la construcción de espacios propios de unidad de acción. Algunas organizaciones sociales, a pesar de no concordar plenamente con el programa electoral de Lugo, decidieron apoyarlo dada la necesidad imperiosa de iniciar un nuevo proceso político en el país.

Los argumentos de quienes no apoyaron la candidatura del actual presidente fueron básicamente tres: el temor —especialmente en sectores feministas— que generaba su vinculación con la iglesia católica, que se percibía como una amenaza a la garantía de un Estado laico y al avance en reivindicaciones vinculadas a derechos sexuales y reproductivos; la crítica a los procesos electorales, ya que reducen la participación política al simple hecho de votar; y la diversidad político-partidaria existente en el seno de

la organización, por lo que ratifican su carácter puramente gremial.

Se ganó la presidencia, se perdió el Parlamento

Si bien muchos fueron los intentos de unidad de los sectores progresistas y de izquierda, los viejos vicios primaron y ésta no fue posible. El oportunismo, la poca visión estratégica de construir un espacio alternativo progresista, la competencia por los cargos y el sectarismo, entre otros factores, provocaron la participación de militantes políticos y sociales *en más de diez listas* para pugnar por los escaños parlamentarios. Esta es una de las principales críticas y autocríticas que se hacen los diferentes actores de la dispersión. Pareciera ser que los resultados de estas elecciones sí han sido una lección para muchos de ellos.

La falta de unidad quedó reflejada en que, aunque el 10% de la población que participó del proceso electoral votó a sectores progresistas y de izquierda sólo tres senadores de esa corriente forman parte del nuevo Parlamento. En el caso de que hubie-

ran ido unidos, al menos habría ingresado el doble. Si se tienen en cuenta los resultados obtenidos en la capital del país, la situación es aún peor. Los sectores progresistas y de izquierda en su conjunto representan el 22,6%. Sin embargo, se obtuvo una sola banca en la Cámara de Diputados.

Cuadro 1 Distribución de los votos, por sector

Sectores		Senadores		Diputados	
		Nacional	%	Capital	%
Lista	Partido*				
1	ANR	509.907	27,2	65.049	25,1
2	PLRA	507.413	27,1	32.390	12,5
7	UNACE	336.763	18,0	40.761	15,7
8	PPQ	151.991	8,1	44.503	17,2
Sectores progresistas y de izquierda**		188.096	10,0	58.703	22,6
Otros		60.133	3,2	8.301	3,2
Blancos		73.135	3,9	4.142	1,6
Nulos		45.122	2,4	5.617	2,1
Total de votos		1.872.560	97,6	259.466	100

Fuente: Elaboración propia.

* Las siglas del cuadro corresponden a la Asociación Nacional Republicana, conocida como el Partido Colorado, de carácter conservador y nacionalista; el Partido Liberal Radical Auténtico, liberal conservador; la Unión Nacional de Colorados Éticos, desprendida del Partido Colorado, nacionalista y ultraconservador; y al Partido Patria Querida, conservador y neoliberal.

** Entre los sectores progresistas, se halla el País Solidario, socialdemócrata; el Movimiento Popular Tekojoja, progresista; el Partido Democrático Progresista, socialdemócrata; el Partido del Movimiento al Socialismo; la Alianza Democrática Tricolor, socialdemócrata; la Unidad Popular, que incluye a comunistas y socialistas; el Partido Humanista Paraguayo; el Frente Amplio, socialista; y el Partido de los Trabajadores, socialista.

En este nuevo escenario, las cosas no serán fáciles. El nuevo presidente no cuenta con el apoyo suficiente en el Parlamento. Es más, éste puede constituirse en el principal freno para implementar muchas de sus propuestas, dado que –independientemente de su pertenencia partidaria– la gran mayoría ha jugado un papel de defensa de los intereses de las minorías privilegiadas del país.

Así pues, un muy posible escenario de disputa es el Parlamento Nacional, que tiene el poder tanto de apoyar propuestas de ley orientadas a promover los cambios que necesita el país o de rechazarlas sistemáticamente para aumentar las diferencias y tensiones entre los sectores de derecha y del campo popular.

Esta tensión entre intereses contrapuestos ya quedó evidenciada –antes de que el nuevo presidente asumiera su cargo– con la designación de los ministros y las ministras del futuro gabinete. Organizaciones, tanto políticas como sociales, que trabajaron y apoyaron la campaña electoral, comienzan a cuestionar los nombramientos y a expresar su decepción porque muchos de ellos representan intereses conservadores. Pareciera que Lugo no está logrando –como lo había hecho durante la campaña electoral– un cierto equilibrio que permita a todos los sectores cierto grado de satisfacción. Las designaciones más decepcionantes fueron la del Ministerio de Agricultura y Ganadería y la del Ministerio de Educación y Cultura, la primera de ellas dada la expectativa del movimiento campesino de contar en esa importante cartera con alguien comprometido con el sector y en quien se pudiera confiar para la implementación de la reforma agraria (una de las banderas luguistas durante la campaña electoral); la segunda, por su cercanía con el Partido UNACE.

Lugo se encuentra así con un gabinete extremadamente heterogéneo, dentro del cual el consenso para definir políticas nacionales será una tarea difícil, con un Parlamento mayoritariamente conservador y con sectores sociales y una ciudadanía que en general no están dispuestos a abandonar el programa por el que votaron. Señal de ello son las muchas ocupaciones de tierra que se produjeron a días de conocerse los resultados electorales.

El futuro: tiempo de disputas

Pocas semanas después de conocerse la victoria, se conformó el Frente Social y Popular, un importante espacio de aglutinamiento de una gran gama de organizaciones que representa el gran abanico de la sociedad paraguaya. Este frente se planteó como tareas urgentes elaborar y consensuar propuestas para el nuevo gobierno, así como también sugerir candidatos para ocupar los diferentes cargos, que a partir de la asunción de Lugo (el 15 de agosto) quedarían vacantes. La idea que subyace a este emprendimiento es lograr una mejor organización y centralización de los reclamos y consolidarlo para que sea una referencia de las organizaciones sociales. La agrupación apuesta a participar en el gobierno mediante propuestas de personas que pudieran estar ocupando algún cargo, para garantizar la ejecución de las promesas de Lugo al movimiento social. Muchas expectativas

se han generado, diferentes mesas se pusieron a trabajar, pero pocos han sido los resultados hasta el momento. Parecería ser que este frente fue más que nada un espacio –impulsado por sectores muy cercanos al nuevo presidente– para descomprimir la presión que iba en aumento.

Sin embargo, algunos actores importantes no son parte de él, tal como la Federación Nacional Campesina (FNC) o la Coordinadora de Agricultores de San Pedro Norte. Por otro lado, las luchas sociales, principalmente las campesinas, tampoco se disciplinan a este espacio. Es más, muchas actúan al margen de sus direcciones nacionales reflejando una emergencia cuasi espontánea de sus reclamos.

Las demandas de las organizaciones sociales, ya sea canalizadas por el Frente o reivindicadas de manera sectorial, giran en torno a problemas urgentes que han sido largamente postergados. Las organizaciones campesinas exigen la implementación de la reforma agraria integral; las centrales sindicales, la generación de empleo y el cumplimiento de leyes laborales; las mujeres, políticas con equidad de género y paridad en los cargos, mientras que las organizaciones barriales demandan políticas habitacionales.

Cuadro 2

Demandas de las organizaciones

Organizaciones	Demandas urgentes
Campesinas	Reforma agraria integral Plan de emergencia nacional Catastro nacional Política productiva Soberanía alimentaria
Centrales sindicales	Políticas de generación de empleo Cumplimiento de leyes laborales Reactivación económica y productiva
Mujeres	Paridad en la designación de cargos Políticas públicas con enfoque de género Garantizar el Estado laico
Barriales	Participación en decisiones que los afectan Políticas habitacionales

Fuente: Elaboración propia.

Además, ni las organizaciones ni la ciudadanía parecen dispuestas a olvidar las propuestas de gobierno esgrimidas durante la campaña electoral, principalmente aquellas vinculadas a la lucha contra la corrupción y la impunidad, la recuperación de la soberanía energética, la reforma del Estado y la reactivación económica, entre otras.

Hasta el momento, son pocas las señales que ha dado el gobierno de que éstas serán satisfechas en lo inmediato, al tiempo que las organizaciones populares están decididas a continuar con su histórica lucha. Si bien en este momento se plantean la elaboración y presentación de propuestas y el acompañamiento a las acciones positivas que se generen desde el gobierno, muchas de ellas ya indicaron que en caso de necesidad están decididas a presionar y movilizarse para que los reclamos sean atendidos. Así, el apoyo que le brindan a Lugo está condicionado al cumplimiento del programa, es decir, a generar políticas orientadas a los sectores populares.

El sector más activo es el movimiento campesino que –más allá de su fragmentación y las diferencias entre las organizaciones– coincide en la urgencia de la reforma agraria, y de hecho fue el primer sector que se movilizó pocas semanas después de que Lugo fuera proclamado el ganador de las elecciones. Con una serie de ocupaciones de tierra, colocaron la urgencia de la reforma agraria en el debate público, provocando de inmediato la reacción de los sectores latifundistas y tensiones entre Fernando Lugo y su vicepresidente.

El futuro del gobierno de Lugo se presenta tal como fue su campaña electoral, entre la esperanza de avanzar y la incredulidad de que ello sea posible. La esperanza de cambio es una constante en casi todos los sectores organizados y de la ciudadanía en general. Las diferentes organizaciones apuestan a aprovechar esta histórica oportunidad, pero reconocen que no será una tarea fácil, no sólo por lo que implica desmontar un aparato estatal que por más de sesenta años ha estado bajo el control del Partido Colorado, sino principalmente por una correlación de fuerzas que aún está por definirse.

El peor escenario sería el de la llamada ingobernabilidad, en el que el Parlamento bloquee las acciones del Poder Ejecutivo y éste, en lugar de apoyarse en las fuerzas populares, claudicara ante las presiones de los sectores empresariales y latifundistas. La disputa será en el plano institucional, en el terreno construido por el Partido Colorado según la horma de su zapato. Si Lugo traicionara las expectativas, sería un duro golpe para un pueblo al que mucho le costó decidirse a no votar simplemente los colores de las banderas partidarias.

Un escenario un poco más optimista sería aquel en el que Lugo mantuviera la habilidad demostrada durante la campaña electoral de dar un poco a cada cual y cumplir, al menos en parte, sus propuestas de reforma agraria, soberanía energética y combate a la corrupción, entre otras. Se evitarían las disputas, y habría un momento para que cada actor del nuevo proceso representara su papel en el escenario que le correspon-

de. Hasta el momento, Lugo ha sabido jugar en medio de intereses contrapuestos sin un alto costo.

El panorama más optimista –para los intereses populares– sería aquel en el que Lugo cumpliera a cabalidad con su programa electoral, apoyándose en las fuerzas sociales y políticas organizadas que trabajaron para que su victoria sea posible. Éste se desarrollaría con una fuerte presencia de la movilización popular. Que ésta pueda darse, no sólo depende de la

Las luchas sociales, principalmente las campesinas, en muchos casos actúan al margen de sus direcciones nacionales, reflejando una emergencia casi espontánea de sus reclamos

voluntad política del nuevo presidente, sino particularmente de la fuerza real del movimiento popular, de que sea capaz de unificar criterios y dar signos de la madurez que le faltó en las recientes elecciones generales.

En cualquiera de los escenarios posibles, la gobernabilidad no debe estar fundada en las negociaciones a puertas cerradas, y debe combatir el carácter de mercado de compra-

venta de adhesiones en el que se constituyó el Parlamento Nacional durante la llamada transición en pos de una supuesta gobernabilidad. Esta nueva etapa, debe apoyarse en la participación activa de los sectores populares y fomentarla por medio de nuevos mecanismos que garanticen la incorporación de sus experiencias y necesidades, elementos históricamente ausentes de los debates políticos. Se debe continuar con los “ñemonqueta guazú” (grandes diálogos) –inaugurados durante la campaña electoral– y potenciarlos como espacios de debate y consulta permanentes con quienes, en última instancia, van a jugarse por el nuevo país que tiene posibilidades ciertas de iniciar su construcción.

El tiempo juega en contra del nuevo presidente. El pueblo paraguayo esperó –ciertamente luchando de diferentes maneras y con muchas limitaciones– demasiado tiempo. Los sectores conservadores también van reacomodándose rápidamente. Las señales que Lugo pueda dar durante los primeros meses de su gobierno serán entonces clave para poder prever cuál será el Paraguay que entregará dentro de cinco años.

Bibliografía

- Boron, Atilio 2008 "Paraguay: el fin de un ciclo" en <jaquevedo.blogspot.com/2008/04/paraguay-el-fin-de-un-ciclo-por-atilio.html>.
- Lachi, Marcello 2008 "La izquierda paraguaya frente al desafío de gobernar" en *Acción* (Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guasch) N° 283, mayo.
- Lamarque, Cécile 2008 "Fernando Lugo y los desafíos de Paraguay" en <www.rebelion.org/noticia.php?id=68838>.
- Richer, Hugo 2006 "Paraguay: crisis y expectativas de cambio" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 21, septiembre-diciembre.
- Rivarola, Milda 2008 "Gobernabilidad y participación social" en *Acción* (Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guasch) N° 283, mayo.
- Ruiz Díaz, Estela 2008 "Una nueva página en la historia política" en *Acción* (Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guasch) N° 283, mayo.
- Sader, Emir 2007 "Paraguay: ¿el fin del Partido Colorado?" en <www.rebelion.org/noticia.php?id=57918>.
- Vera, José Antonio 2008 "Paraguay: tropezones y alertas" en <www.rebelion.org/noticia.php?id=69716>.
- Zibechi, Raúl 2008 "Paraguay: el fin de la dictadura colorada" en <www.rebelion.org/noticia.php?id=66555>.

Notas

1 Integrada por las siguientes organizaciones: Partido Liberal Radical Auténtico, Partido Revolucionario Febrerista, Partido Demócrata Cristiano, Partido Democrático Progresista, Partido Movimiento al Socialismo, País Solidario, Partido Encuentro Nacional, Movimiento Resistencia Ciudadana, Movimiento Fuerza Republicana y Bloque Social y Popular (conformado por la Central Nacional de Trabajadores, la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica, el Frente Amplio, el Partido Socialista Comunero y la Coordinadora de Desarrollo Comunitario).

2 El Movimiento Tekojoja (igualdad) es el que impulsó con más fuerza la candidatura de Lugo y al que el ex obispo se encuentra más cercano.

3 En 2002 logró importantes resultados en las elecciones municipales. Una de sus principales dirigentes ingresó a la Junta Municipal.

4 Estas informaciones corresponden a una investigación en curso que vienen realizando los autores del presente artículo.

Análisis de casos

*Una fábrica patagónica
en autogestión obrera*



Aires de libertad: Zanon bajo gestión obrera
Laura Meyer y María Chaves

Aires de libertad

Zanon bajo gestión obrera

Laura Meyer y María Chaves

Sociólogas y profesoras de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Resumen

El artículo se refiere a la experiencia de lucha de los obreros de la ex fábrica Zanon, actualmente FaSinPat, en Neuquén, Argentina. Indaga sobre las razones por las cuales el ejemplo de los ceramistas se perpetúa en el tiempo. Explica que ello se debe a la importancia de mantener su organización basada en la democracia obrera, a que cuentan con un sindicato *clásista* y al hecho de que durante todo el proceso nunca dejan de establecer una relación entre las reivindicaciones inmediatas y las soluciones de fondo.

Abstract

The article refers to the experience of the workers' struggle in the ex Zanon factory, currently FaSinPat, in Neuquén, Argentina. It looks into the reasons why the potters' example lasts over time. It explains that this is due to the importance of maintaining an organization based on worker democracy, to have a clasist union and the fact that throughout the whole process a relationship between immediate claims and deeper solutions never ceases to exist.

Palabras clave

Movimiento obrero, fábricas recuperadas, Zanon, asambleísmo, gestión obrera, clasismo, comité de fábrica, solidaridad de clase, izquierda.

Keywords

Workers movement, recovered factories, Zanon, assemblies, worker management, social classes, factory committees, class solidarity, the left.

“Porque Zanon es un ejemplo de trabajo y libertad”¹

La experiencia de lucha de los trabajadores de Zanon (una gran fábrica de cerámicos situada en el parque industrial de la provincia de Neuquén, Argentina) se ha relatado y transmitido de diferentes formas en cantidades de artículos de revistas, diarios y libros; numerosos investigadores han elaborado diversas tesis sobre la experiencia de estos trabajadores que ocuparon la planta, destronaron a la vieja dirigencia sindical propatrontal, comenzaron a producir por sus propios medios, contrataron nuevos trabajadores vinculados a distintos movimientos de desocupados y tuvieron una activa política hacia la comunidad, no sólo de aquella provincia patagónica sino también de otras regiones del país. Esta experiencia inédita, al igual que la del resto de las empresas recuperadas, trasciende los límites de su temporalidad, ya que es parte de la experiencia y la conciencia que los trabajadores harán valer a la hora de nuevas crisis capitalistas.

Zanon bajo gestión de los trabajadores inspiró letras de canciones de populares bandas de rock y cantautores argentinos y también se pueden conocer aspectos de la trayectoria de esta gestión obrera mediante numerosas películas que han recorrido el país y el mundo como *Corazón de fábrica* de Virna Molina y Ernesto Ardito –que se entrega junto a este ejemplar–, *La toma* de Naomi Klein, *Escuela de planificación* del grupo documentalista Contraimagen, *FaSinPat* de Daniel Incalcaterra, *No retornable* de Sebastián Cáceres y Damián Parisotto, entre otras. Los ceramistas también recibieron un gran apoyo de las Madres de Plaza de Mayo y de intelectuales de renombre mundial², y cientos de jóvenes de todo el mundo realizan durante todo el año visitas para conocer este ensayo obrero.

Todo este reconocimiento contribuyó a la difusión y el fortalecimiento de Zanon bajo gestión obrera. Algo que no podría haber ocurrido si estos ceramistas no hubiesen construido una fuerte alianza social con el conjunto de los trabajadores y la comunidad, con el apoyo activo de los movimientos de desocupados en la región, docentes, estudiantes, intelectuales y partidos políticos de la izquierda, quienes resistieron junto a los trabajadores todos los intentos de desalojo y represión estatal, e impulsaron fondos de huelga y movilizaciones, entre otras acciones solidarias.

Estos trabajadores llevaron a cabo una de las primeras tomas de fábricas dentro del llamado proceso de *fábricas recuperadas* que

recorrió la Argentina, producto de la profunda crisis económica, política y social iniciada en el marco de la histórica recesión de 1999, demostrando que los trabajadores pueden producir sin patrones.

Ante el intento de vaciamiento y el *lock out* que realizó la patronal de Zanon para imponer un plan de reestructuración de la fábrica con sólo 62 operarios, los trabajadores –después de meses de acampe frente a la fábrica y sin cobrar el salario– el 2 de octubre de 2001 votaron en asamblea y por mayoría absoluta quedarse en la fábrica junto a las máquinas, es decir, proceder a la *toma* de la fábrica, para impedir el vaciamiento y en defensa de sus puestos de trabajo. Exactamente 5 meses más tarde, el 2 de marzo de 2002, 240 trabajadores encendieron los hornos y empezó a funcionar la *fábrica sin patrones*³, comenzando, además de la producción, a librar una lucha contra la empresa y la dirección del sindicato⁴.

Para comprender esta experiencia, es necesario tener en cuenta un proceso de organización previo en el cual estos trabajadores anticiparon lo que comenzó a llamarse luego, desde mediados de 2004, *sindicalismo de base*, con la realización creciente de las asambleas y el surgimiento de nuevos dirigentes sindicales y conducciones alternativas, un proceso de recuperación de algunas comisiones internas y cuerpos de delegados y hasta ciertas seccionales de sindicatos “que se plantean como alternativa y en oposición a las conducciones de los sindicatos nacionales –tanto los que integran la CGT como la CTA, desde una posición que reivindica una tradición antiburocrática y clasista” (Cotarelo, 2007)⁵.

En el año 2000, los ceramistas dan un paso muy importante en la pelea por defender su forma de organización democrática e independiente de los empresarios con la recuperación del Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Neuquén (SOECN), Seccional 21, que integra la Federación de Obreros Ceramistas de la República Argentina (FOCRA) constituyendo, dentro de la rama industrial, la primera seccional sindical *clasista* desde 1983.

Estos trabajadores se transformaron en un ejemplo nacional e internacional para la lucha de la clase obrera contra la explotación capitalista. No sólo por las formas de lograr la *autogestión obrera* de la producción sino también por su organización independiente y *clasista*, que unifica los problemas de la producción y de la política. Y porque con su experiencia local demostraron que los trabajadores, imponiendo su hegemonía, podrían dar respuestas a los problemas que sufre la comunidad, como el de la vivienda, la desocupación y la salud, si la producción nacional estuviera racionalmente planificada para satisfacer las necesidades de la sociedad, en lugar de estar destinada al enriquecimiento individual de unos pocos.

La pregunta que intentaremos contestar aquí es por qué los ceramistas y el SOECN, luego de casi ocho años de iniciado su ensayo, siguen siendo un referente de lucha y organización, en contraste con la *pasivización* de la mayoría de los movimientos sociales surgidos al calor del desastre económico de 1999-2003 y de la rebelión popular que derrocó al gobierno de Fernando De la Rúa el 20 de diciembre de 2001⁶.

Consideramos que, centralmente, la respuesta está en la conjunción de tres elementos, que van a ir conformando dos características fundamentales de esta experiencia.

- En su génesis, producto de la profunda crisis económica y social, al igual que en centenares de empresas de toda la Argentina, los trabajadores se vieron obligados, para defender su fuente de trabajo, a llevar adelante métodos de acción directa con acciones radicalizadas como la *toma de fábrica*, debiendo enfrentar así no sólo a la patronal sino también al Estado y la burocracia sindical.
- En segundo lugar, porque los ceramistas de Zanon, en una provincia que contaba desde mediados de los noventa con grandes experiencias de lucha social⁷, desarrollan un proceso previo de organización en lo que fue la pelea por la Comisión Interna (CI) y el SOECN.
- Y, por último, estos hechos por sí mismos no habrían decantado en una experiencia como la de Zanon si no fuera por la influencia dentro de la fábrica de las ideas de un ala de la izquierda trotskista argentina (encarnadas al comienzo por Raúl Godoy⁸) que desde el *asambleísmo* como aspecto clave de la experiencia ceramista confluyen con activistas combativos junto a quienes, desde los momentos más difíciles, lograron la unión de la fábrica para defender los derechos de todos los trabajadores. Estos sectores más decididos conformaron un *activismo obrero* –un hecho novedoso luego de la derrota sufrida por el movimiento obrero con la dictadura militar de 1976–, dando lugar a una militancia *clasista*⁹ que fomentó las discusiones políticas y las formas de autoorganización del conjunto de los trabajadores manteniendo su independencia, y le dio así una dirección a esta gran gesta obrera.

Entre otros factores, estos elementos fundamentales han hecho que se constituyan dos características muy importantes, que abordaremos aquí porque consideramos que explican en gran parte la persistencia de la experiencia *ceramista*:

- La importancia de mantener su organización basada en la democracia obrera, ligando sus reclamos al conjunto de los trabajadores, pensando su lucha como parte de una clase y, en ese sentido, de haber sostenido la *independencia política* frente a todas las instituciones y poderes del Estado, tanto en la organización y contenido *clasista* del sindicato como en el seno de la fábrica con la elección de los coordinadores, junto a los delegados de la CI, que garantizan la gestión obrera, siendo la asamblea el órgano máximo de discusión y decisión.
- En relación a esto, el hecho de mantener de distintas maneras una lógica *transicional* que establece una relación entre las reivindicaciones inmediatas y las soluciones de fondo, logrando hacer carne la idea de que los trabajadores hagan su propia política.

La democracia obrera y la organización independiente. Sindicato *clasista* y comité de fábrica

La conquista de la Comisión Interna y la recuperación del SOECN

En 1998 —aún no se había iniciado en toda su dimensión el ocaso del gobierno neoliberal de Carlos Menem—, cuando las asambleas estaban prohibidas en la fábrica, un grupo de trabajadores formó una lista opositora al sindicato, la “Lista Marrón”, que levantó entre sus consignas la igualdad salarial, iguales derechos para los contratados, la toma de las decisiones en asamblea y la revocabilidad de los cargos, entre otras reivindicaciones. Sorteando cada uno de los obstáculos que les impuso la ex conducción del sindicato (que apeló a todo tipo de proscripciones y persecuciones), lograron ganar la CI por 177 votos contra 44 de la lista del oficialismo liderada por el secretario general del gremio en ese entonces, Alberto Montes, que tenía una postura propatronal, dejaba pasar los despidos y sostenía un “mecanismo de toma de decisiones burocrático y autoritario, combinando la ‘entrega’ de todo aquel sospechado de ‘revoltoso’” (Favaro y Aiziczon, 2003). Los comienzos de este proceso fueron difíciles.

Organizando campeonatos de fútbol y otras actividades creativas un grupo de jóvenes activistas, el principal de ellos

integrante del PTS, empieza a tejer clandestinamente las primeras redes de solidaridades y debates por fuera del disciplinamiento fabril, tanto patronal como sindical (Rebón, 2007).

Este proceso deriva primero en la recuperación de la CI y luego en la conquista del SOECN, que agrupa a cuatro fábricas: Cerámica Zanon, Stefani de Cutral-Có, Del Valle y Cerámica Neuquén.

Luego de recuperar la CI, sus dirigentes se abocaron a dos tareas fundamentales: por un lado, llegar al conjunto de los obreros de la fábrica y organizarlos; y, por otro, intentar recuperar el SOECN como herramienta de lucha para el conjunto de los trabajadores de la provincia, ocupados y desocupados. Esta nueva forma de organización sindical fue formando un activismo politizado que permitió ir creando y consolidando una militancia antiburocrática, combativa y *clasista*.

Esta pelea se extiende y los obreros atraviesan momentos de duras huelgas, hasta que logran la recuperación del sindicato, en septiembre de 2000, mediante una lucha durísima, ya que la burocracia no quería reconocer a los nuevos afiliados. Los ceramistas eligen a Raúl Godoy como secretario general para la conducción del sindicato durante un primer período. En un segundo momento, Godoy pasa a ser el secretario adjunto y el cargo de secretario general es asumido por Alejandro López¹⁰.

Así es que fueron construyendo un sindicato que rompe con los límites sindicales corporativos y se transforma en un referente no sólo de la izquierda sindical *clasista*. Ante cada atropello a los derechos de los trabajadores de la ciudad de Neuquén y sus alrededores y diversos problemas sociales de la población, se acude a los obreros de Zanon y a su sindicato.

Las reuniones de la comisión directiva del sindicato son abiertas, los cargos son revocables, las decisiones siempre se toman en base al mandato de la asamblea y los dirigentes cobran lo mismo que cualquier trabajador. Una institución que a su vez busca la relación y coordinación con otros sectores de trabajadores y unir los reclamos de todos.

Comité de fábrica

*Las dos patas sobre las que nos movemos son
la producción y la política.*

Carlos "Manotas" Saavedra
Coordinador de la producción

Luego de una larga lucha, en agosto de 2005, los trabajadores logran que se declare la quiebra de Zanon y, en octubre, el reconocimiento tran-

«Ante cada atropello a los derechos de los trabajadores de la ciudad de Neuquén y sus alrededores y diversos problemas sociales de la población, se acude a los obreros de Zanon y a su sindicato»

sitorio de la gestión obrera, bajo la figura de la cooperativa FaSinPat¹¹. Llevan casi siete años de gestión obrera. Eran 240 cuando empezaron la producción con 10 mil m² de cerámicos, hoy llegan casi a 400 mil m², habiendo incorporado con igual salario a 230 trabajadores y trabajadoras. A diferencia de muchas de las experiencias cooperativistas, en las que los trabajadores que se incorporan lo hacen como empleados, en Zanon los obreros entran a trabajar como miembros

plenos de la cooperativa con iguales condiciones y los mismos derechos y obligaciones, haciendo efectivas las ideas de igualdad entre los trabajadores que los ceramistas defienden¹².

Para emprender la gestión obrera de la producción, los ceramistas aplicaron en el plano de la producción el mismo método de organización y democracia obrera con que encararon

la lucha desde los comienzos en su pelea contra la CI ligada al empresario Luis Zanon.

Para ello, era necesario que el conjunto de la fábrica estuviera organizada, decidiendo entre todos cada paso de la producción y también cómo defenderla. Empezaron con las asambleas periódicas, pero como con ello no alcanzaba para generar la participación de todos, pensaron diferentes mecanismos que les permitieran este desarrollo. Fueron creando una fuerte organización al interior de la fábrica, construyendo una nueva institución obrera: los *coordinadores de la producción*¹³.

Estos coordinadores son votados en asamblea y representan las diferentes comisiones que formaron en relación a los distintos sectores y tareas de la fábrica: la comisión de compras, de ventas, de seguridad, de producción y de prensa; de esta manera se relacionan las discusiones acerca de la organización de la producción (como los turnos, niveles de producción, salarios, gastos y ventas) con las discusiones políticas, que ellos suelen llamar *hacia fuera*.

Se fueron formando distintas comisiones de compañeros. Empezamos con la producción, a hacer una cadena para conseguir los insumos y cuando nos quedamos sin insumos la cadena estaba organizada. Ahora se maneja todo con coordinadores, compañeros que se han puesto al frente, votados por los mismos compañeros del sector y compañeros delegados de la CI [...] la asamblea es la que aprueba o desaprueba si el trabajo que se está realizando está bien y siempre la tarea del coordinador es informar constantemente al resto de los compañeros los gastos que se hacen, en qué situación estamos, cómo nos vamos proyectando [...] el coordinador trabaja a la par de todos los compañeros. Esa es la diferencia de no tener un patrón, que el patrón hablaba con la radio colgando y daba órdenes nomás. Acá trabajamos todos, y coordinamos todos (entrevista a Andrés Blanco, coordinador de la comisión de compras).

Así es que la integración de los nuevos coordinadores a la organización que ya venía actuando en el terreno de la lucha va a dar origen a este nuevo organismo de dirección de la fábrica, sujeto al control de la asamblea general, y que tiende a integrar objetivamente todos los planos de la actividad obrera: laboral, social, reivindicativo y político. Fueron buscando diferentes instrumentos y mecanismos para mantener el activismo, la participación y la politización obrera. Esto podemos verlo en su práctica cotidiana, por ejemplo, siendo los coordinadores elegidos en asamblea y rotativos y llevando los informes de los problemas de cada comisión a la *asamblea general*, donde las decisiones se toman entre todos.

En este sentido, la realización de las Jornadas de Discusión mensuales ha mostrado ser un muy importante instrumento para contrarrestar las presiones alienantes; en ellas todos los trabajadores dedican un día al debate y la reflexión acerca de todos los problemas, logros y desafíos, y durante ese día se paraliza la producción en los tres turnos porque la discusión política es tomada como parte necesaria de la producción obrera.

Tienen todo tipo de iniciativas para intentar contrarrestar las presiones de la corriente general, como por ejemplo el hecho de instalar la biblioteca y videoteca de la fábrica al lado del comedor, cuestión que facilita la organización de actividades sociales y políticas.

En las distintas comisiones se tratan el aspecto político y el productivo. Político en cuanto a la realidad nacional y provincial. En lo productivo [...] se habla de las compras, las ventas

(cómo van), lo que es la disciplina dentro de la planta, una disciplina de trabajo, que no se trata de que la imponga nadie sino de que surgiera de las comisiones [...] Y ahí, inclusive tomar decisiones [...] que se vote en asamblea en qué lucha se puede colaborar, qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante [...] A su vez, la organización básica es la asamblea de cada sección, donde se votan los coordinadores que son revocables y se deciden todos los pasos a seguir por el grupo de trabajadores y los problemas generales. Estos coordinadores no son capataces, trabajan a la par de todos (entrevista a Andrés Blanco, coordinador de la comisión de compras).

Es lo único que nos mantiene vivos. Si no, hubiésemos sido derrotados. Sin asamblea no hay gestión obrera que valga. El patrón te puede hacer producir con el látigo, pero la gestión obrera depende del convencimiento que tenga cada uno de que todos tiramos para el mismo lado. Nuestra principal inversión es la asamblea (Raúl Godoy en *Revista MU*, 2008).

Esta nueva organización creada por los ceramistas se asemeja a lo que en la historia de la lucha de los trabajadores se conoce como *comité de fábrica*¹⁴ o *consejo obrero de fábrica*¹⁵ que ha sido la mejor forma que adoptó históricamente la organización obrera en su lucha contra la explotación capitalista. Se trata de una forma de *autoorganización democrática* que crean las masas para llevar adelante la pelea por sus reivindicaciones cuando la lucha de clases desborda las organizaciones tradicionales del proletariado, como son los sindicatos. Estos últimos se constituyen para defender las reivindicaciones específicas y corporativas de los trabajadores de un gremio. En cambio, al organizarse en comités de fábrica, los obreros realizan una experiencia de autodeterminación y administración, de dirección y planificación.

El control obrero llevado adelante por estos comités muestra elementos de *doble poder* en la fábrica que se pueden ver en la búsqueda de ponerle freno al aumento de la explotación o, como en el caso de Zanon, cuando los obreros toman la fábrica y se hacen cargo de la producción y este control pasa a ser una *administración obrera directa* o la llamada gestión obrera¹⁶. En este sentido, escribe Ernest Mandel:

Toda lucha conjunta de trabajadores que rebasa los objetivos inmediatos y estrechamente corporativos plantea el problema de las formas de organización de la lucha, problema que contiene en germen un desafío al poder capitalista¹⁷ [...] la

Al tomar en sus manos la tarea de *dirigir y organizar* el proceso productivo, los trabajadores muestran que no hace falta la propiedad privada de los medios de producción

forma más democrática que se puede dar a la dirección de la lucha es evidentemente la de un comité de huelga elegido por el conjunto de los huelguistas, sean sindicalizados o no, y que se somete democráticamente a las decisiones de las asambleas generales de huelguistas que se convocan con toda regularidad (Mandel, 1974)¹⁸.

Como vemos, los ceramistas han creado y sostienen esta forma de *autoorganización independiente* que nuclea al conjunto de los trabajadores y rebasa los objetivos inmediatos y corporativos de negociación del valor de la fuerza de trabajo propia de los sindicatos, pero eso no los hace ajenos a estos proble-

mas; no abandonan la pelea por las reivindicaciones materiales y los derechos democráticos del conjunto de los trabajadores.

Por ello lucharon por conquistar el sindicato *clasista* que, además de reagrupar los problemas de las cuatro fábricas ceramistas de la región, se enfrenta a las direcciones burocráticas que tiene la clase obrera con la subordinación de los sindicatos al Estado, e intenta constantemente dar una respuesta desde el sindicato a los problemas del conjunto de los trabajadores y la comunidad y tomar diferentes iniciativas que procuran unir a los trabajadores –ocupados y desocupados– y coordinar con todos los sectores independientes combativos y antiburocráticos el denominado “sindicalismo de base”.

Es esta una muestra más de cómo ellos se piensan como parte de una clase, ya que teniendo que preocuparse por organizar la administración de la fábrica y las cuestiones del sindicato, no se quedaron sólo en su problema corporativo.

Sin embargo, sin dejar de ser altamente significativos, aún son minoritarios los casos en

que los trabajadores lograron desbordar a las organizaciones tradicionales y burocráticas del movimiento obrero y recuperaron seccionales sindicales o cuerpos de delegados. En la Argentina se agudiza aún más la necesidad de organizaciones que unan las fuerzas de los trabajadores, debido a la enorme fragmentación de la clase trabajadora entre ocupados y desocupados, efectivos y contratados, inmigrantes y nativos, profundizada por las políticas neoliberales en concurso con la tradicional burocracia sindical peronista durante los ochenta y noventa, no en vano preservada incluso por la dictadura genocida (1976-1983)¹⁹.

Aunque la situación de los trabajadores argentinos no es aún de ascenso, la experiencia de los ceramistas tiene el valor de expresar una tendencia obrera y anticapitalista, nacida en el nervio mismo de la producción y que pone en evidencia la potencia de la democracia obrera para conquistar la unidad de los trabajadores (Werner y Aguirre, 2002).

La gestión obrera

*Sin capitalistas se puede producir;
sin trabajadores, no.*

Andrés Blanco
Coordinador de la comisión de compras

Los comienzos de la producción en la fábrica ocupada por los trabajadores no fueron fáciles y no lo son tampoco hoy, pero con la organización democrática, las convicciones de la mayoría y la participación de todos, los protagonistas de esta historia pudieron enfrentar –no sin muchas discusiones y contrapuntos varios– cada uno de los innumerables obstáculos que se les fueron presentando hasta la fecha.

Ellos [los proveedores] no pueden concebir que un trabajador se organice y les compre materias primas que antes se las compraba un empresario; ese fue el problema más grande con el que nos encontramos. Porque si nosotros hubiésemos entrado como empresarios, nos venden [...] Lo que pasa es que nosotros somos obreros y ellos no se bancan que los trabajadores que le tomaron la fábrica a un colega les vengan a comprar materia prima (entrevista a Paco, miembro de la comisión de compras).

No nos querían vender cajas [...] Hicimos una nota en el diario de Neuquén, y un hombre que hacía cajas de pizzas se acercó y se puso a trabajar con máquinas del 1900 y hoy es nuestro principal proveedor (entrevista a Rulo, miembro de la comisión de compras).

Desde que comenzaron con la producción, en 2002, los ceramistas estuvieron asediados por el mercado y por el Estado que –ante todo, para respetar el derecho a la propiedad privada– buscaba que las eventuales expropiaciones de las empresas vaciadas por sus ex dueños fueran pagadas por los trabajadores o en última instancia por el Estado, pero nunca por los empresarios vaciadores. Los ceramistas plantearon su pelea por la *expropiación sin pago*, explicando que los trabajadores no deben hacerse cargo de la deuda patronal, colocando su lucha por el derecho al trabajo y a una vida digna por sobre el enriquecimiento individual de unos pocos.

Al tomar en sus manos la tarea de *dirigir y organizar* el conjunto del proceso productivo, los trabajadores muestran que no hacen falta los patrones para producir, desmintiendo la ideología dominante que naturaliza la necesidad de la propiedad privada de los medios de producción. Bajo el capitalismo, esta propiedad es la base para que se lleve a cabo la expropiación del producto social. Así, la gestión obrera puso en evidencia –aunque a nivel de una fábrica– el manto que se cierne sobre esta expropiación bajo la aparente y “natural” relación entre diferentes factores de la producción (capital, trabajo y medios de producción).

Otra de las potencialidades que se manifiestan en la gestión obrera –aun con todos los límites que implica la pequeña escala en una región marginal de la Argentina– es el hecho de que los trabajadores son la única clase que para producir y reproducir su vida no necesita de la propiedad privada individual de los medios de producción, que estos pueden ser utilizados como medios para la realización del trabajo y no para la explotación del trabajo ajeno. Pero ahí no termina este potencial.

Los ceramistas explicitan su lucha por producir para la comunidad y no para las ganancias individuales, aunque son conscientes de los límites que la misma tiene al encontrarse bajo las presiones de un mundo de relaciones capitalistas. Aun con el corsé que impone este límite, son una muestra viva de cómo los trabajadores pueden evitar que el excedente de su producción sea acaparado por el capitalista, reinvertiendo en la producción y luego destinándolo a obras públicas al servicio de las necesidades del pueblo.

Esto lo vemos desde el comienzo cuando los trabajadores de Zanon donaron cerámicos para construir salas de primeros auxi-

lios en uno de los barrios más pobres de Neuquén, a escuelas y hasta para la reconstrucción de un hospital de la ciudad de Santa Fe –sita a más de 1.500 kilómetros de la fábrica– devastada por una inundación en 2003. O también cuando impulsaron un plan de obras públicas junto a los desocupados, peleando juntos por “trabajo para todos”.

“Hemos abierto centros de salud y acabamos de terminar una casa con tres habitaciones para ocho chicos que quedaron huérfanos tras la muerte de sus padres en un accidente automovilístico” (entrevista a Andrés Blanco, coordinador de la comisión de compras). En agradecimiento, los docentes de la escuela a la que concurren estos niños les donaron árboles para la fábrica. Se mantienen donaciones mensuales a comedores, hospitales (la última fue al hospital Heller de la zona oeste de la capital neuquina). Actualmente, se está realizando una campaña conjunta con docentes, estudiantes secundarios y ceramistas, exigiendo la construcción de un centro de deportes para la zona oeste de los barrios neuquinos.

En las Jornadas de Discusión, al analizar entre todos el proceso productivo, los problemas y los logros, surgen y se potencian en conjunto las iniciativas y la creatividad de los obreros que conocen mejor que nadie su trabajo. El hecho de tener que conocer el conjunto del proceso productivo permite que en su trabajo pueda irrumpir la creatividad.

Se han hecho productos nuevos, tanto en la cocción como en porcelanato [...] Eso se debe a la inventiva de los compañeros del laboratorio, que es donde se expresan sus ideas, las ganas que tienen de hacer cosas. Eso es uno de los ejemplos. Después en los distintos sectores los compañeros han visto en qué podíamos ahorrar [...] para achicar gastos innecesarios y bueno, se mejora muchísimo [...] La creatividad de los trabajadores es producto de la libertad conquistada: inventamos una fórmula matemática. Fue algo impresionante. Entonces hicimos una prueba en el laboratorio [...] Ahora reemplazamos las fórmulas viejas por las nuevas y a partir de salir con cada modelo, lo fuimos estandarizando. Por ejemplo “el Obrero” o “el Mapuche” que son modelos que se crearon con la gestión obrera (entrevista a Eduardo, trabajador del laboratorio).

Además, los ceramistas se enfrentan en algunos aspectos a la separación del trabajo manual e intelectual, que tiene su máxima expresión en la separación de la ciencia del trabajo del hombre.

En esta gestión obrera, los ingenieros, técnicos o contadores aportan su conocimiento como parte de la clase obrera, y establecen

una relación con los obreros, colaborando con sus *saberes* específicos para llevar adelante la gestión obrera²⁰.

Tenemos un convenio marco con la Universidad del Comahue, y ellos nos dieron cursos tanto de administración como de economía. Eso nos sirvió muchísimo, porque al ir haciéndonos más grandes, más cosas aparecían (entrevista a Rulo, miembro de la comisión de compras).

Es necesario aclarar en este punto que producir sin patrones en una fábrica individual y la democratización de las relaciones al interior de ella, que constituyen la gestión obrera, no implica evitar la competencia, por más que esta experiencia se enfrente a dicha lógica.

Los nuevos estatutos del SOECN: retomando las mejores experiencias del sindicalismo clasista

La experiencia de los obreros ceramistas de Neuquén trasciende una vez más, con la redacción y posterior aprobación de los nuevos estatutos del sindicato, el 16 de julio de 2005. Luego de meses de debates en asambleas y de la realización de un plenario de delegados, los obreros de las cuatro fábricas de cerámicas del SOECN votan las distintas propuestas de artículos del estatuto. Los nuevos estatutos del SOECN son el resultado de una experiencia de más de seis años de lucha ininterrumpida.

Con las nuevas normas que rigen a su sindicato, los trabajadores logran el objetivo de “poner a disposición nuestro nuevo estatuto como una herramienta de trabajo y debate para empezar a poner en pie una nueva tradición clasista en este movimiento obrero que se está despertando” (*Nuestra Lucha*, 2005)²¹.

Lo absolutamente innovador del “Estatuto Social del SOECN”, como expresión escrita que plasma y *crystaliza* una práctica política, radica básicamente en que “hace ley” a tres cuestiones:

- La democracia obrera: “El SOECN es un sindicato que tiene como principio y forma de trabajo la asamblea de trabajadores. Las asambleas de fábrica y del sindicato son la autoridad máxima” (SOECN, 2005: 1). Se incorpora a los cuerpos de delegados por sector, se establece una proporcionalidad en los cargos directivos y la libertad para todas las tendencias que se reivindican de la clase trabajadora y defienden sus intereses y no

- los empresariales. Asimismo, los dirigentes cobran igual que cualquier trabajador y son revocables, a la vez que aquellos referentes que hayan estado rentados durante un período deben volver al puesto en la máquina.
- La independencia de clase: “El SOECN es una organización sindical de lucha y defensa de los intereses económicos y sociales de los trabajadores ceramistas en la actual sociedad capitalista. En la sociedad hay cada vez más una reducida minoría que disfruta de todas las ventajas del desarrollo económico, social y tecnológico; mientras el resto está condenada a la sobreexplotación, la desocupación y los bajos ingresos. Por eso el SOECN reconoce, se orienta y basa su práctica en la lucha de clases y bajo los principios del sindicalismo clasista, conservando su plena independencia del Estado y sus instituciones, del gobierno y de todas las organizaciones patronales” (SOECN, 2005: 1).
 - El internacionalismo y el antiimperialismo: “El SOECN reconoce que la clase obrera no tiene fronteras. Somos hermanos de los trabajadores y los pueblos pobres y oprimidos de América Latina y el mundo. Luchamos contra la dominación de las potencias imperialistas que saquean al mundo con su secuela de hambre y guerras. La fraudulenta deuda externa o la intromisión del imperialismo en las principales fuentes de riqueza nacional, como es el caso del petróleo y el gas en nuestra región, consolida su dominio sobre los instrumentos y medios de reproducción, impidiendo el desarrollo nacional independiente y soberano. El SOECN libra una lucha consecuente por los legítimos intereses de la clase trabajadora” (SOECN, 2005: 1).

Las definiciones que se incluyen en esta reforma son inéditas para la tradición hegemónica de los sindicatos en la Argentina. Si con su práctica los obreros de Zanon rompen con la lógica imperante de los tradicionales sindicatos argentinos absolutamente burocratizados y ligados al poder estatal y a sus intereses, definitivamente con la redacción y aprobación de sus nuevos estatutos cristalizan la experiencia de Zanon como un ejemplo de lucha para el conjunto de los trabajadores.

Pero lo más significativo de la reivindicación del sindicato ceramista como *clasista* y antiburocrático es que rompe con el mo-

delo sindical peronista fuertemente implantado en la Argentina desde la segunda mitad del siglo XX. Esto implicó una creciente subordinación del sindicalismo al Estado y, tal como señala Daniel James (1999), “cada vez más, los sindicatos se incorporaron a un monolítico movimiento peronista y fueron llamados a actuar como agentes del Estado ante la clase trabajadora, que organizaban el apoyo político a Perón y servían como conductos que llevaban las políticas del gobierno a los trabajadores”.

Esta idea se enfrenta por las antípodas al planteo de “independencia de clase” que defienden los ceramistas. Sostiene que, para el desarrollo de la sociedad capitalista, es fundamental promover la conciliación entre “el capital y el trabajo” y unir los intereses de los sectores capitalistas con los de la clase trabajadora, cuestión que es promovida y defendida desde el mismo Estado y sus instituciones. Para defender estas premisas, se impone un modelo sindical absolutamente regimentado y digitalizado desde arriba, en el cual las bases no tienen injerencia. En un documento presentado para la discusión de la reforma de los estatutos del SOECN, se afirma:

La amplia mayoría de los sindicatos en Argentina han dejado de cumplir el rol para el que fueron creados. En sus cúpulas se enquistan los llamados burócratas sindicales que actúan como verdaderos agentes de las patronales o de los gobiernos dentro de las filas de los trabajadores. Son dirigentes que ya no defienden plenamente los intereses de los trabajadores sino que lo hacen –cuando lo hacen– obligados por las circunstancias y no como convicción y decisión propias. Para atornillarse a los sillones y que se vuelva casi imposible que las bases de los sindicatos puedan removerlos cuentan con la ayuda inestimable del Estado. Con la legislación laboral, y la que rige a las organizaciones sindicales, los funcionarios de turno de los ministerios de trabajo y los jueces laborales. Es que toda la andanada jurídica y represiva sirve para preservar en primer lugar la propiedad privada de los patrones y en segundo término los privilegios de los dirigentes sindicales. La otra gran fuente de la perpetuidad a la que se atornillan los dirigentes sindicales son los propios estatutos de los sindicatos. En algunos casos hay tantos requisitos para ser secretario general de un gremio que es más difícil que ser presidente de la República. Es que los estatutos actuales de los sindicatos argentinos son verdaderos manuales para formar burócratas sindicales (Primer borrador con algunas de las propuestas para el inicio del debate sobre reforma del estatuto del SOECN).

De esta manera, los obreros de Zanon retoman elementos fundamentales de la tradición del movimiento obrero combativo y *clasista* en nuestro país. Una de las expresiones más emblemáticas de la época fue la de los sindicatos clasistas cordobeses del SiTraC-SiTraM, que “después de más de treinta años de ideología de conciliación de clases y dominio hegemónico sobre el movimiento obrero” (Torraz y Moretti, 2007), hicieron suya la idea de independencia de clase²².

Así, los dirigentes ceramistas afirman que “reformamos los estatutos heredados de la burocracia sindical y los adaptamos a nuestro programa y práctica clasista” (*La Verdad Obrera*, 2005). Señala el actual secretario general del SOECN, Alejandro López:

Lo importante fue plasmar en ese estatuto lo que hacemos todos los días, porque podés tener el mejor estatuto, pero si no sos consecuente con la lucha no te sirve de nada. Todo lo que hacemos [es] buscar la coordinación, tener solidaridad de clase con los que están en lucha, la unidad entre desocupados y ocupados, que los dirigentes no seamos rentados, que el mandato en vez de cuatro años lo achiquemos a tres, que la representación de las minorías esté manifestada en las direcciones, la representación en las listas de las compañeras (*La Verdad Obrera*, 2006).

“Si tocan a uno nos tocan a todos”²³

Desde el inicio, los ceramistas unieron sus reclamos a los del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) de Neuquén y otras organizaciones de desocupados. La primera resolución que tomó la comisión directiva en un plenario abierto, apenas recuperada la seccional, fue viajar a la localidad de Mosconi, Salta, a solidarizarse con la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD), que había sido reprimida por pedir trabajo. De esta manera, establecieron relaciones fraternales con distintos movimientos de desocupados y sociales²⁴.

El 2 de diciembre de 2001, junto al MTD y la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER), convocaron dentro de la fábrica a un encuentro regional de organizaciones obreras de ocupados y desocupados en lucha y sectores combativos, que permitió sentar las bases de lo que luego tomó la forma organizativa de la Coordinadora del Alto Valle²⁵.

Junto a otras organizaciones sociales, políticas y culturales realizan el Primer Encuentro de Fábricas Recuperadas en el año 2002, y al año siguiente el Segundo Encuentro de Fábricas Recuperadas. Desde el

inicio, han llevado a cabo múltiples acciones en solidaridad con otras fábricas recuperadas, y en la actualidad también se encuentran apoyando a los trabajadores de la cooperativa del Hotel Bauen en Buenos Aires.

Nosotros somos parte de un fenómeno nacional de fábricas ocupadas por sus trabajadores, que desafiamos el flagelo de la desocupación, tomando mediante la acción directa la resolución de la crisis en nuestras manos. Por eso apoyamos a todos los trabajadores que ocupan las fábricas y las ponen a producir, con distintas modalidades. Y por eso adoptamos el lema *si tocan a una nos tocan a todas*, para popularizar en forma sencilla la necesidad de defendernos mutuamente (declaraciones de Raúl Godoy, marzo de 2002, durante el viaje que realizan varios ceramistas a Buenos Aires para asistir al Encuentro Nacional de Asambleas Populares, en donde profundizan la unidad con las mujeres de la fábrica textil Brukman que había sido ocupada el 18 de diciembre de 2001).

Los que luchan por mantener su fuente de trabajo se preguntan qué hay que hacer. Los que hemos dado un paso adelante tenemos que marcar el camino. Entonces, queremos que haya mociones, queremos debatir qué hay que hacer frente a la desocupación (Alejandro López, abril de 2002, durante la apertura del Primer Encuentro de Fábricas Recuperadas, donde más de 700 trabajadores ocupados y desocupados se juntaron frente a la fábrica Brukman para resolver los pasos a seguir).

Además, los obreros de Zanon fueron los impulsores —junto a otras organizaciones como el Cuerpo de Delegados de Subterráneos de Buenos Aires— de la primera coordinación efectiva de sectores antiburocráticos que habían comenzado a organizarse, en lo que denominaron Encuentro Obrero, que se realizó el 2 de abril de 2005. A fines de ese año, instalaron una carpa durante una semana frente al Congreso de la Nación, en Buenos Aires, exigiendo el reconocimiento de la gestión obrera FaSinPat y por una ley nacional de expropiación definitiva.

Esta pelea por unir la lucha de los trabajadores ocupados y desocupados y el conjunto de sus reclamos es una constante que recorre toda la experiencia ceramista. Su accionar supera los límites de la fábrica, *rompiendo con el corporativismo* y las divisiones que el sistema fomenta entre los trabajadores. Los ceramistas también cumplen un rol importante en

la lucha de los docentes de Neuquén. En la actualidad, junto a la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) y los gremios de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) neuquinos, impulsan activamente la campaña por juicio y castigo a los responsables materiales y políticos del asesinato del docente Carlos Fuentealba, ocurrido el 5 de abril de 2007.

En los últimos años Zanon viene apoyando el proceso de luchas obreras protagonizado por jóvenes trabajadores que pelean contra los despidos, por mejores condiciones laborales y en defensa de las organizaciones antiburocráticas que vienen sufriendo la represión: como los trabajadores de la ex Jabón Federal en la zona oeste del Gran Buenos Aires en 2006; los obreros de la textil Mafissa, cercana a la ciudad de La Plata; y los del Casino Flotante de Buenos Aires²⁶.

Desde el SOECN se enfrentan los ataques a los delegados y organizaciones antiburocráticas por parte del gobierno nacional y las burocracias sindicales, y en julio de 2008 lanzan una convocatoria bajo la consigna "Basta de ataques a los luchadores obreros".

Una vez más el gobierno se prepara para descargar el desastre de las crisis sobre los trabajadores y el pueblo. Como lo vienen haciendo, con la excusa de la "crisis energética", o en su pelea por la renta con el campo al aumento de los precios se le suman despidos, suspensiones, adelanto de vacaciones, etcétera [...] Consideramos necesaria una reunión urgente de todas las organizaciones obreras, estudiantiles, de DD.HH. y políticas para analizar esta situación, y sobre todo para lanzar un plan de acción por el desprocesamiento de todos los compañeros, por la li-

Si con su práctica los obreros de Zanon rompen con la lógica de los sindicatos burocratizados, con la aprobación de sus nuevos estatutos cristalizan su experiencia como un ejemplo de lucha

bertad de los presos políticos y en defensa de las libertades democráticas (Convocatoria SOECN, 2008).

Ante la crisis abierta entre las entidades patronales del campo y el gobierno de Cristina Fernández por la renta extraordinaria en marzo de 2008, el SOECN planteó una salida independiente de la pelea entre ambas fracciones dominantes, luchando por las reivindicaciones de los trabajadores de la ciudad y el campo. En una reciente declaración emitida por este sindicato, sostienen:

Reafirmamos nuestra posición independiente de las peleas patronales, convocando a los trabajadores a no ser furgón de cola de ningún empresario o patrón grande o chico, del campo o de la ciudad, sino a organizarnos en forma independiente peleando por los intereses de nuestra clase. Repudiamos la represión de este Gobierno, el trabajo en negro y la explotación infantil, así como el Convenio de Trabajo de Videla que rige hoy en los campos, aplicado por las entidades y sostenido por el gobierno de los Kirchner [...] Hacemos un llamado a todas las organizaciones obreras, sociales, estudiantiles y políticas a llevar este debate a cada sector y sobre todo a las organizaciones nacionales, a multiplicar los esfuerzos para lograr una respuesta unitaria de todas y todos los que levantamos una política de clase independiente de las patronales, el gobierno y la burocracia sindical (Declaración del SOECN, 2008).

Mantener lo conquistado sin perder de vista la solución de fondo

Los ceramistas intentan mantener una articulación entre los problemas económicos inmediatos, las conquistas transitorias y las soluciones de fondo, pensando su situación concreta, en relación a los problemas de los trabajadores de conjunto, y transmitiendo la idea de que comparten los mismos intereses.

La tensión constante entre la experiencia que realiza la gestión obrera con las relaciones sociales capitalistas es transitada entablando una relación entre los objetivos de fondo y los pasos dados en cada situación concreta, según la correlación de fuerzas entre las clases establecida en cada momento.

Podemos advertir esta lógica en muchas de las perspectivas que los ceramistas muestran ante los problemas de los trabajadores y el pueblo, como el hecho de haber incorporado casi el doble de puestos de trabajo en la fábrica –en acuerdo con los movimientos de deso-

cupados provinciales—, manteniendo el planteo de reparto de las horas de trabajo con igual salario, estatización y un plan de obras públicas.

En el mismo sentido, mientras hacen las gestiones y dan la lucha por la expropiación definitiva para continuar con la gestión obrera, sostienen la cooperativa como una salida transitoria y discuten los problemas y las posibles soluciones de fondo.

Por ello, fueron buscando los mecanismos para pasar de la “autoexplotación” que significó la constitución de una cooperativa que les fue impuesta y que debe manejarse y competir en el mercado capitalista, a una estatización bajo administración democrática de los trabajadores. En este aspecto, el tema de la deuda que dejaron los patrones es una de las claves, ya que desde el punto de vista de la normativa vigente en la Argentina la cooperativa debería hacerse cargo de su peso. Lo mismo ocurre con algunas imposiciones que quiso forzar el juez del concurso, como por ejemplo que la cooperativa estaba impedida de tomar nuevos trabajadores, contrariamente al programa por el que bregaron estos ceramistas desde el comienzo de su lucha: la unidad de empleados y desempleados. Ante esta tensión entre lo impuesto por la legalidad imperante y aquello a lo que aspiran, los ceramistas mantienen su organización democrática y sus asambleas como órgano máximo de decisión²⁷, lejos de la forma jerárquica de dirección que marca la ley de cooperativas vigente²⁸.

Así, los trabajadores más conscientes han buscado siempre que el conjunto de la fábrica, a pesar de las diferentes coyunturas de avances y retrocesos, no olvide los objetivos que tienen.

Hoy necesitamos la ley de expropiación; puede que consigamos en algún momento la estatización bajo control obrero, pero sabemos que lo que conseguimos hoy lo podemos perder mañana. Siempre van a intentar avanzar sobre nuestras conquistas. En el fondo vamos por esa, la producción social, y ahí repartir las horas de trabajo y las riquezas según las necesidades de la sociedad, no de un grupo de parásitos [...] pero eso no lo podemos hacer nosotros solos (entrevista a Raúl Godoy).

De esta manera, en esta experiencia abordan una tensión constante que se ha expresado en la organización de diferentes corrientes y estrategias en la lucha de los explotados a lo largo de la historia. Esto es, la tensión entre las posiciones que sostienen que la clase obrera sólo puede conseguir conquistas parciales dentro del régimen burgués —argumentando que lo propio del movimiento obrero es luchar “en lo cotidiano” por me-

jores condiciones laborales— y, en el otro extremo, quienes desdeñan las conquistas parciales con una postura ultimativista que plantea sólo los objetivos de máxima sin saber cómo alcanzarlos o que estos llegarán solos sin necesidad de luchar hoy.

Al enfrentar en muchos aspectos esta dicotomía, retoman y reactualizan importantes lecciones que ha dejado la lucha de la clase obrera en la historia de la lucha de clases. En este sentido, el historiador Fernando Aiziczon plantea que los ceramistas retoman en varias de sus consignas la tradición de la izquierda clasista.

Esta tendencia emerge en cuestiones clave de organización de la resistencia ceramista, en especial con la introducción de consignas ligadas a la tradición de izquierdas que antes vimos como *la revocabilidad de representantes y mandatos por la asamblea*, la acentuación del asambleísmo en los primeros comunicados de la CI, las consignas “*democracia obrera*”, “*apertura de los libros de contabilidad*”, el ataque a la “*burocracia sindical*”, la identificación del enemigo “*de clase*”. Los obreros de Zanon serán la clase obrera explotada que lucha por su independencia en compañía de sus “hermanos de clase” (los desocupados) (Aiziczon, 2007; énfasis propio).

Lo político permea toda la estructura ceramista. “Sin embargo, sería una ingenuidad pensar en que la formulación de ‘lo político’ es resultado de la sola experiencia obrera, menos aún si hablamos de la significación del control obrero”²⁹ (Aiziczon, 2007).

El estado actual

Los ceramistas continúan la pelea por la expropiación definitiva de la fábrica, ya que en octubre de 2008 se vence el plazo de la cooperativa transitoria, lo que habilitaría a la justicia a proceder al remate de FaSinPat a favor de los acreedores de la familia Zanon, entre los que se encuentra el Banco Mundial y el Estado provincial. En la legislatura neuquina, los trabajadores presentaron un proyecto de ley de expropiación con el aval de 90 mil firmas, y están impulsando una Campaña por la Expropiación Definitiva con comisiones de solidaridad en las que participan docentes, estatales, estudiantes secundarios y universitarios, artistas y partidos políticos de izquierda³⁰.

Bibliografía

- Aiziczon, Fernando 2007 "El clasismo revisitado. La impronta del trotskismo en la politización del sindicato ceramista: Zanon Bajo Control Obrero, Neuquén 1998-2006" en <www.iisg.nl/labouragain/documents/aiziczon.pdf>.
- Cotarelo, María Celia 2007 "Movimiento sindical en Argentina 2004-2007: ¿anarquía sindical?", XI Jornada Interescuelas de Historia, Tucumán, septiembre.
- Fajn, Gabriel 2003 *Fábricas y empresas recuperadas* (Buenos Aires: IMFC).
- Favaro, Orietta y Aiziczon, Fernando 2003 "Al filo de la cornisa. La resistencia obrera en la fábrica Zanon, Neuquén" en *Realidad Económica* (Buenos Aires) Nº 197, julio-agosto.
- Gilly, Adolfo 1986 *La Anomalía Argentina. Estado, corporaciones y trabajadores* (Buenos Aires: Tierra del Fuego).
- Gramsci, Antonio 2004 "El movimiento turinés de los consejos de fábrica (julio 1920)" en *Antología* (Buenos Aires: Siglo XXI).
- James, Daniel 1999 (1988) *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina 1946-1976* (Buenos Aires: Sudamericana).
- La Verdad Obrera* 2005 (Buenos Aires) Nº 169, 8 de noviembre.
- La Verdad Obrera* 2006 (Buenos Aires) Nº 212, 11 de septiembre.
- La Verdad Obrera* 2008 (Buenos Aires) Nº 284, 7 de marzo.
- Mandel, Ernest 1974 (1970) *Control obrero, consejos obreros, autogestión* (México DF: Era).
- Meyer, Laura 2006 "Fábricas recuperadas: Zanon, un potencial poder contrahegemónico" en Neuhaus, Susana y Calello, Hugo (comps.) *Hegemonía y emancipación* (Buenos Aires: Herramienta).
- Neuhaus, Susana y Calello, Hugo (comps.) 2006 *Hegemonía y emancipación* (Buenos Aires: Herramienta).
- Nuestra Lucha* 2005 (Neuquén) Nº 22, 22 de julio.
- Rebón, Julián 2007 *La empresa de la autonomía. Trabajadores recuperando la producción* (Buenos Aires: Picaso).
- Revista MU* 2008 "Zanonizate" (Buenos Aires) Nº 15, junio.

SOECN 2005 "Estatuto Social", Neuquén.

SOECN 2008 "Convocatoria Nacional a Reunión de Organizaciones en Buenos Aires-Zona Norte" y "Declaración ante la crisis nacional", Neuquén, julio.

Torraz, Mónica y Moretti, Walter 2007 "La experiencia del clasismo cordobés" en Werner, Ruth y Aguirre, Facundo *Insurgencia obrera en la Argentina 1969-1976: clasismo, coordinadoras interfabriles y estrategias de la izquierda* (Buenos Aires: IPS Karl Marx).

Trotsky, León 1938 *El programa de transición para la revolución socialista* (La Paz: Crux).

Werner, Ruth y Aguirre, Facundo 2002 "Sindicatos y consejos de empresa. La experiencia de los ceramistas de Neuquén" en *Lucha de Clases* (Buenos Aires: IPS Karl Marx) N° 1, noviembre.

Werner, Ruth y Aguirre, Facundo 2007 *Insurgencia obrera en la Argentina 1969-1976: clasismo, coordinadoras interfabriles y estrategias de la izquierda* (Buenos Aires: IPS Karl Marx).

Notas

1 Estas palabras son parte de una de las canciones que desde el año 2002 entonan en Neuquén cientos de jóvenes, trabajadores, estudiantes, vecinos y maestras durante las movilizaciones en apoyo a los obreros de Zanon.

2 Como Eduardo Galeano, Osvaldo Bayer y James Petras, entre otros.

3 Los trabajadores han institucionalizado la fecha en que comenzó la gestión obrera como el 1 de octubre de 2001.

4 "El proceso de Zanon se expresará en un doble frente: lucha económica contra los patrones y lucha por la conducción de los trabajadores contra la burocracia sindical" (Rebón, 2007).

5 Cabe aclarar que la Confederación General del Trabajo (CGT) es la histó-

rica central única, peronista, reconocida por el Estado y nuclea a los principales sindicatos industriales y de los servicios. La Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) es una central alternativa sin reconocimiento estatal, y nuclea centralmente a docentes y trabajadores estatales, con una orientación que oscila entre la doctrina social de la iglesia y tendencias socialdemócratas.

6 A partir de la asunción de Néstor Kirchner como presidente en mayo de 2003, y de manera coincidente con la recuperación económica que se desarrolla no sólo a escala nacional sino también internacional, se produce un proceso de institucionalización y cooptación significativo de gran parte de las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos.

7 Por tomar sólo un hecho, es en esta provincia en donde se lleva a cabo la primera pueblada de los desocupados, los *fogoneros* de Cutral-Có.

8 Trabajador de Zanon desde el año 1994 y militante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).

9 Una explicación detallada de este proceso puede leerse en el exhaustivo trabajo realizado por Fernando Aiziczon (2007).

10 "Con la fortaleza que nos da el nuevo estatuto fuimos a la asamblea de la Marrón para elegir los candidatos y definir la lista. Yo tenía la posición de no volver a tener un cargo en el sindicato y la idea de llevar adelante una renovación total de los dirigentes. Que volviésemos al puesto de trabajo y, desde ahí, seguir luchando y ayudando a forjar una nueva camada de activistas y dirigentes obreros. Pero por la situación del conflicto de Zanon los compañeros nos venían planteando a Alejandro López y a mí que teníamos que seguir a la cabeza de la comisión directiva. Así fue que en la asamblea de la Marrón expliqué que me parecía bien el criterio de los compañeros pero que para ir al hueso con los nuevos estatutos, en esta situación, lo mejor era que López rote de su cargo de secretario gremial a candidato a secretario general. Se votó por unanimidad y el compañero López mocionó que yo fuera candidato a secretario adjunto para seguir con la línea de trabajo. Esto también se votó por unanimidad" (Raúl Godoy en *La Verdad Obrera*, 2005).

11 Es el nombre que le ponen los ceramistas a la cooperativa, que significa Fábrica Sin Patrón.

12 Los ceramistas llevaron a los hechos una iniciativa inédita: en el año 2002, con la incorporación de los primeros puestos de trabajo de la gestión obrera, propusieron incorporar a compañeros desocupados de todos los movimientos combativos de la zona para que trabajen bajo las mismas condiciones y salario que ellos. Esta propuesta fue votada masivamente por asambleas en todos los turnos de la fábrica. Ante esto, la juventud del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD), repartió un volante que decía: "Demostrarles a todos los trabajadores del país que no hacen falta los patrones, ya que ellos explotan y cierran las fábricas. Mientras hoy el gobierno nos muestra las cifras escalofriantes de la desocupación, los obreros al tener el control de la fábrica ven que sí pueden controlar y generar más puestos de trabajo, pueden gobernar el país. La juventud del MTD está orgullosa de entrar a trabajar en una fábrica bajo control obrero, y entendemos que ya somos parte de la historia, porque antes lo defendíamos desde afuera y hoy lo hacemos desde adentro. GRACIAS SINDICATO CERAMISTA. GRACIAS A LOS OBREROS DE ZANON". Luego, también a propuesta de los ceramistas, ingresaron a trabajar integrantes de las diferentes organizaciones y partidos de izquierda.

13 La nueva organización, por ejemplo, permitió planear un proyecto mensual para incrementar la producción, así como la discusión de la incorporación

de los nuevos trabajadores provenientes del movimiento piquetero o emprendimientos para la comunidad.

14 "Hoy [...] la moderna empresa capitalista es un colectivo más complejo que ya no se define sólo por sus funciones productivas sino también por las tareas técnico-científicas, intelectuales, comerciales, comunicacionales y financieras, que han dado origen a un nuevo asalariado, que acompaña en su suerte al obrero industrial y es parte constitutiva de la clase obrera, es decir, una masa humana que debe vivir de la venta de su fuerza de trabajo. Esto obliga a pensar el consejo de fábrica como un consejo de empresa, y a las articulaciones internas que permitan recomponer la unidad y la fuerza de la clase trabajadora" (Werner y Aguirre, 2002).

15 Estos consejos son como aquellos que surgieron en Turín, Italia, en los años veinte, durante el ascenso revolucionario que se dio en Europa luego de la victoria de los soviets y el Partido Bolchevique en Rusia. Estos consejos italianos nucleaban a todos los trabajadores de una fábrica, sindicalizados o no, con una organización democrática para resolver todos los problemas. Han surgido históricamente en momentos de ascensos revolucionarios de la clase obrera y, cuando se generalizaron, mostraban la emergencia al nivel de las unidades de producción de un "doble poder" (ver Gramsci, 2004).

16 "La importancia primordial del comité reside, sin embargo, en que se convierte en el estado mayor para la entrada en combate de capas de la cla-

se obrera que los sindicatos son habitualmente incapaces de movilizar [...] A partir del momento en que el comité aparece, en la fábrica se establece de hecho un doble poder. Por su esencia misma, representa la situación de transición, porque lleva en su seno dos regímenes irreconciliables, el capitalista y el proletario" (Trotsky, 1938).

17 Mandel explica en relación a la huelga *amplia, duradera y combativa*, que son muchas las exigencias requeridas para que este poder de impugnación al poder del capital en germen se desarrolle, y plantea que "entre la impugnación potencial y la impugnación efectiva del régimen capitalista no sólo existe una diferencia de grado, una diferencia de amplitud del movimiento, del número de huelguistas, del impacto que produce la huelga sobre la economía capitalista nacional. La diferencia que existe entre una impugnación potencial y una impugnación efectiva es un determinado nivel de conciencia de los trabajadores: si no se toma toda una serie de decisiones concientes, ninguna huelga puede poner en discusión el régimen capitalista" (Mandel, 1974).

18 Cuando Mandel publica el libro *Control obrero, consejos obreros, autogestión* a inicios de los años setenta, se extienden en diferentes países procesos políticos que dan origen al control obrero, comités de fábricas y consejos obreros. Además de Italia, el autor menciona otras experiencias como Hungría, Polonia, Francia, Argentina, Colombia, entre otros. Para Mandel, el control obrero es una *reivindicación transitoria*

que surge centralmente en períodos revolucionarios, o puede ser un momento episódico en un proceso revolucionario superior, y desarrollarse como una gran experiencia que prepara a los obreros más intensamente para las luchas por venir, al poder convertirse en una primera experiencia práctica, una enorme escuela concentrada de economía planificada y lucha anticapitalista. Muestra a escala reducida que los trabajadores pueden dirigir el conjunto de la economía, para lo cual es preciso expropiar a los propietarios capitalistas y enfrentar a sus estados y fuerzas represivas, y de allí la necesidad de la unidad de los trabajadores como clase con el resto de los sectores oprimidos, en nuevas organizaciones democráticas como coordinadoras que superen los estrechos marcos de los viejos sindicatos.

19 Este tema se desarrolla en profundidad en Adolfo Gilly (1986).

20 "Sólo los comités de fábrica pueden llevar a cabo un verdadero control de la producción recurriendo como consejeros, no como tecnócratas separados de los trabajadores, a especialistas, sinceramente integrados al pueblo" (Trotsky, 1938).

21 El periódico *Nuestra Lucha* fue otra de las inéditas experiencias protagonizadas por este sindicato, en un intento de agrupar tras esta publicación no sólo al movimiento de fábricas recuperadas sino también a todas las comisiones internas y cuerpos de delegados que se reivindicaban antiburocráticos. Esta publicación contó con el apoyo de inte-

lectuales y periodistas de distintas vertientes políticas.

22 Torraz y Moretti (2007) sostienen que "tanto el SiTraC como el SiTraM se definían como antiburocráticos, a partir de defender la ruptura, es decir, la independencia, de los sindicatos en relación con el Estado burgués; y como clasistas, a partir de considerar a la patronal como enemigo de clase".

23 Contra la ideología imperante del "sálvese quien pueda", los trabajadores acuñan esta frase durante el Primer Encuentro de Fábricas Recuperadas, y aún hoy es difundida en los conflictos.

24 Esta solidaridad continuará en diferentes circunstancias, como cuando los ceramistas construyeron una placa en homenaje a los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en el aniversario de su asesinato a manos de la policía.

25 Esta coordinadora llegó a agrupar a más de 64 organizaciones y mil asistentes durante un plenario que se realizó en las instalaciones de Zanon en agosto de 2002. Estaba integrada por ceramistas, desocupados del MTD, estatales de la rama salud de la Asociación de Trabajadores del Estado-Central de los Trabajadores Argentinos (ATE-CTA), docentes de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) de varias localidades, obreros de la construcción, organismos de derechos humanos y estudiantiles y personalidades de la región, además de partidos políticos de izquierda.

26 Este apoyo activo de los ceramistas puede verse tanto con los aportes

económicos al *fondo de lucha*, como en los aportes políticos, al ir transmitiendo su experiencia, intentando unir los conflictos y rodearlos de solidaridad e impulsando instancias de coordinación permanentes.

27 Este tema puede verse desarrollado en Meyer (2006).

28 Detrás de esos requisitos legales, lo que intentó el Estado es que los trabajadores salgan del terreno de la lucha, obligándolos a preocuparse solamente por producir y producir, para “sacar adelante la empresa”; sacarlos de la solidaridad con otros trabajadores ocupados y desocupados y que no se dediquen a hacer política.

29 Fernando Aiziczon desarrolla una especie de tipología de identidades políticas y de procesos de politización: “Obreros que eran de izquierda antes del conflicto: apenas Godoy (PTS) y algún militante del Partido Obrero (PO). Obreros que se afiliaron a partidos de izquierda luego de estallar el conflicto: el grueso lo hizo al PTS [...] Obreros que pertenecen a organizaciones de desocupados [...] Obreros que se mantienen prescindentes de alguna filiación

partidaria pero que se autodenominan como activistas ‘independientes’ y ocupan cargos directivos [...] los cuales se subdividen en dos bandos: los ‘independientes’ de los partidos de izquierda que más adelante se agrupan en torno al liderazgo de Alejandro López, y los ‘independientes’ de participación política alguna” (Aiziczon, 2007).

30 Esta campaña se está haciendo extensiva a algunas localidades del interior de Neuquén, como Cutral-Có y Chos Malal, entre otras. Desde allí se realizan charlas, proyecciones de videos, volantes, pegatinas, pintadas y distintos eventos. En la capital neuquina prácticamente se está llevando a cabo una actividad grande por semana, con movilizaciones a la Legislatura y a la Casa de Gobierno. Durante el XXIII Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó el pasado mes de agosto en Neuquén, se realizó un acto dentro de las instalaciones de la fábrica –convocado desde la Comisión Organizadora del Encuentro– en defensa de la gestión obrera de Zanon y de los derechos de las mujeres trabajadoras. Del mismo participaron cerca de 2 mil personas.

Aportes del pensamiento crítico latinoamericano

*El '68 estudiantil en México
El '69 obrero en Argentina*



**1968: a 40 años del movimiento estudiantil
en México**

Massimo Modonesi

**Nuestra bandera
¿Qué es la autogestión académica?
Autogestión académica y
universidad crítica**

José Revueltas

El Mayo argentino

Horacio Tarcus

1968: a 40 años del movimiento estudiantil en México

Massimo Modonesi

Maestro en Sociología. Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Resumen

Esta presentación de José Revueltas y sus escritos se refieren al movimiento estudiantil desatado en México como contrapunto del Mayo francés de 1968. Massimo Modonesi relata brevemente lo que fue ese movimiento y traza una biografía de Revueltas. Los textos del dirigente estudiantil mexicano abordan las aspiraciones del movimiento, la autogestión académica y la universidad crítica.

Abstract

This presentation of José Revueltas and his writings refers to the student movement developed in Mexico as a counterpoint to the french May 1968. Massimo Modonesi briefly relates what this movement was and outlines a biography of Revueltas. The texts of the leader of the Mexican students express the aspirations of the movement, the academic self-management and the university criticism.

Palabras clave

Movimiento estudiantil, Mayo del '68, autogestión académica, universidad crítica, José Revueltas.

Keywords

Student movement, May '68, academic self-management, university criticism, José Revueltas.

El '68 mexicano es parte del '68 mundial, una pieza de un mosaico que representa un movimiento revolucionario lleno de potencialidades y contradicciones, cuya voluntad transformadora quedó atrapada entre las inercias sociales conservadoras y la capacidad reaccionaria de las estructuras de dominación existentes, pero logró abrir brechas que marcaron caminos de reformas, más socioculturales que políticas y económicas. Como en otras partes del mundo, el movimiento estudiantil en México expresó un quiebre generacional, cimbró los mitos integradores del capitalismo de bienestar, desenmascaró la metástasis del autoritarismo de lo estatal a lo societal y lanzó un grito libertario que resuena con un timbre creciente en nuestros tiempos de refundación conservadora. Vista desde el presente, la "marcha del silencio" de septiembre de 1968 evoca la posibilidad de un antídoto, una pausa reflexiva frente a la cacofonía pseudoinformativa, consumista, espectacular y electoralista que tiende a banalizar, trivializar y confundir todos los discursos, las palabras y sus significados.

Los acontecimientos mexicanos de ese año eufórico y trágico son conocidos. El movimiento nació en julio, con el paro de varias escuelas en respuesta a los abusos policiales. La posterior entrada de los granaderos en los planteles y, en particular, en la preparatoria de San Ildefonso –donde tiraron con un bazucazo una puerta del siglo XVIII– provocó la condena del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien izó a media asta la bandera nacional y encabezó una marcha en defensa de la autonomía universitaria y por la liberación de los estudiantes presos. El movimiento creció en agosto y las marchas ocuparon el Zócalo de la Ciudad de México, donde los manifestantes fueron dispersados por la intervención del ejército. En septiembre, luego de la "marcha del silencio" en contra de la desinformación y la criminalización por parte de la prensa y el gobierno, el ejército ocupó la Ciudad Universitaria de la UNAM y el Casco de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional, y se retiró el 1 de octubre. El 2 de octubre, una masiva manifestación en la Plaza de las Tres Culturas fue atacada por el ejército y por un grupo paramilitar (el Batallón Olimpia), provocando un número todavía desconocido de muertos y heridos. Días después de la masacre de Tlatelolco, el presidente Díaz Ordaz inauguró los juegos olímpicos. Y siguió la larga noche de la guerra sucia.

El 2 de octubre constituye un parteaguas de la historia mexicana y una columna portante de la memoria colectiva. A nivel histórico, marca el fin de una época, con el derrumbe de la hegemonía posrevolucionaria –autoritaria pero progresista, clientelar pero integradora, patrimonialista pero redistributiva– y la apertura de otra, caracterizada por el recurso descarado y sistemático a la imposición sin mediaciones, desde la represión de los setenta, pasando por el fraude de 1988 hasta la contrarreforma neoliberal. Queda doblemente en la memoria. Por una parte, recuerda que la acción colectiva es el motor de la historia, que sólo la movilización social y política sacude las estructuras de dominación. En particular, el '68 ronda la conciencia estudiantil que cíclicamente sale del campus a la calle para interpelar y criticar a las miserias de la sociedad mexicana, como ocurrió en 1986-1987, en 1994 y en 1999. Por la otra, evoca la indignación frente al terrorismo de Estado y la defensa de las libertades y los derechos humanos, lo que no deja de ser un tema de candente actualidad en el México de hoy.

A 40 años de distancia, recordar el '68 permite volver a pensar el presente. Los textos históricos que se ofrecen a continuación son documentos fundamentales para la comprensión del '68 mexicano en la medida en que muestran la profundidad y el alcance de la crítica y la imaginación política del movimiento estudiantil. Al mismo tiempo, son testimonios de la lucidez de un intelectual marxista revolucionario que influyó y fue influenciado por los acontecimientos: Pepe Revueltas.

José Revueltas (1914-1976) es un icono del '68 por haber sido uno de los pocos intelectuales orgánicos del movimiento estudiantil, militando en el Comité de Lucha de la Facultad de Filosofía y Letras, y por haber sido encarcelado bajo la acusación de ser el "autor intelectual" de la rebelión. En realidad, Revueltas fue una expresión madura de la "inteligencia colectiva" de la juventud movilizada. Como profesor y filósofo marxista, estaba sumergido en la animada vida universitaria de estos años. Su sofisticada sensibilidad literaria, que se expresó en una intensa producción de novelas y guiones, lo vinculaba con el perfil intelectual de una época de florecimiento de la militancia artística. Su trayectoria política de comunista errante lo posicionaba en un lugar privilegiado para captar y sintonizarse con los rasgos novedosos de la politización y radicalización estudiantil. Después de conocer la prisión, siendo todavía menor de edad, fue delegado del Partido Comunista de México (PCM) al VII Congreso de la Internacional Comunista en 1935; fue expulsado del partido en 1943, para reingresar en 1955; y participó en el movimiento ferrocarrilero de 1958, terminando nuevamente en la cárcel de las Islas Marías. En 1960, anticipando el florecimiento de la "nueva izquierda" sesentista,

fue expulsado por segunda vez del PCM por sostener críticas izquierdistas posteriormente resumidas en su famoso “ensayo sobre el proletariado sin cabeza”. Este mismo año fundó la Liga Leninista Espartaco, de la que fue expulsado en 1963, y se acercó al trotskismo hacia finales de los sesenta, para alejarse en los últimos años de su vida.

Su destacada participación en el movimiento del ‘68 queda registrada en un conjunto de escritos políticos que fueron publicados por primera vez en 1978 y entre los cuales escogimos tres breves textos que ilustran tanto el brillo de Revueltas como la radicalidad del movimiento del ‘68 y la brecha simbólica que abrió en la ciudadela del régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El primer texto es un documento aprobado el 26 de agosto de 1968 por el Comité de Lucha de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en el que se explicitan las razones y los objetivos de fondo de la lucha estudiantil. El segundo texto, de septiembre de 1968, contiene un planteamiento programático sobre la autogestión académica que muestra la combinación entre crítica radical y construcción alternativa propia del pensamiento que acompañaba el movimiento. En el tercero, recién salido de la cárcel de Lecumberri, Revueltas traza un balance del movimiento y retoma sus desafíos a tres años de distancia de 1968, pocos días antes de otra masacre que cierra definitivamente el ciclo de la protesta estudiantil, la del 10 de junio de 1971, conocida como el Halconazo, por el nombre del grupo paramilitar que la realizó.

En ellos trasluce el espíritu de una época militante, la agudeza de la crítica marxista, y resuena el eco de un llamado a la lucha revolucionaria.

Nuestra bandera¹

José Revueltas

Se ha dicho que el Movimiento Estudiantil Julio-Agosto de 1968 carece de una bandera –es decir, de objetivos precisos y “miras elevadas”, conforme al trasnochado lenguaje de los monitores editorialistas de la prensa más corrompida del mundo, la mexicana– y que, junto a esta falta de bandera, índice de gratuidad de nuestro Movimiento, éste se ampararía en una su-puesta situación de privilegio social y económico de que el estudiante goza en violento contraste con otras capas de la sociedad menos favorecidas, que sin embargo son las que pagan en su mayor parte la educación superior.

Con esto se quiere tender una cortina de humo que oculte no sólo el contenido real de nuestros propósitos, sino la raíz y razón de los mismos, condicionados por una situación general de imposturas políticas, de ejercicio arbitrario y monopolista del Poder, de negación de las libertades y derechos ciudadanos, de falsificaciones jurídicas y procesos amañados que, en cualquier otro país, acreditarían al poder judicial como reo de asociación delictuosa; situación general, condicionante de nuestros objetivos, repetimos, que tiene largos años de existir y no se circunscribe tan sólo a la etapa que como jefe del Ejecutivo lleva en su desempeño el licenciado Díaz Ordaz al frente de la República.

Tenemos, pues, una bandera de principios, aparte la reclamación de agravios que representan los seis puntos de nuestra demanda en contra de las autoridades. En sus comienzos, quizá nuestro Movimiento se hubiese satisfecho con la reparación de daños y la remoción de los culpables de aquéllos. Pero en México se ha totalizado a tal extremo el sistema de opresión política y de centralismo en el ejercicio del Poder –desde a nivel de gendarme hasta al de Presidente– que una simple falta a los “reglamentos de policía y buen gobierno” confronta al más común de los ciudadanos con todo el aplastante aparato del Estado y de su naturaleza de dominio impersonal, anónimo, despótico, inexorable y sin apelación posible, sobre el individuo y la comunidad en su conjunto. Los sindicatos obreros regimentados, amordazados, sin el menor resquicio mediante el cual ejercer su independencia; el derecho de huelga convertido en una cínica ficción; la capacidad de corrupción, de amoralidad y de renuncia al espíritu crítico, como requisito forzoso e inexcusable, para todos aquellos que aspiren a dirigir una federación sindical, una liga de comunidades agrarias, un comité de partido, oficial o no, una empresa o, lo que ya es el colmo (y entre nosotros se llegaron a dar los casos), hasta una simple sociedad

de alumnos de alguna facultad o escuela. Inútil señalar más ejemplos de esta increíble degradación social a la que sus dirigentes, ensoberbecidos y ciegos, pueden conducir a un país.

Cada agrupación –no importa de la que se trate ni de lo que se proponga– que quiera luchar en México de un modo independiente y fuera de los canales “autorizados” por el régimen, ha de comprobar por su propia experiencia esta situación insufrible e irrespirable que vive nuestro país desde hace mucho, pero que no sólo no se deteriora con el tiempo sino que cada vez se afina y perfecciona más.

Por supuesto, tal tipo de agrupaciones, si han intentado existir, desaparecen apenas nacidas o se corrompen, pero lo cierto es que ya no pueden darse en el México de nuestros días.

Nuestros detractores tienen razón: los estudiantes somos una capa social “privilegiada”. Tenemos el privilegio político de ser los únicos –o casi los únicos– a quienes en México aún se les puede permitir el delito de la honradez y la independencia, no porque la clase gobernante quiera ni mire con buenos ojos que así sea, sino porque no se ha logrado mediatizarnos ni uncirnos a su maloliente carro de infamias.

Practicamos este deber y ejercemos este derecho para que en el futuro inmediato, para que *hoy mismo*, el pueblo entero, la clase obrera, los campesinos, los intelectuales, se conviertan también en esas capas “privilegiadas” capaces de pelear en defensa de su propia dignidad humana y junto a las cuales nosotros lucharemos siempre con orgullo.

Una infracción a los reglamentos de policía (una reyerta de poca monta entre dos escuelas) que atrajo en su contra la más desproporcionada, injustificada y bestial de las represiones, tuvo la virtud de desnudar de un solo golpe lo que constituye la esencia verdadera del poder real que domina en la sociedad mexicana: el odio y el miedo a la juventud, el miedo a que las conciencias jóvenes e independientes de México, receptivas y alertas por cuanto a lo que en el mundo ocurre, entraran a la zona de impugnación, de ajuste de cuentas con los gobernantes y estructuras caducos, que se niegan a aceptar y son incapaces de comprender la necesidad de cambios profundos y radicales. Este miedo de las viejas generaciones corrompidas fue lo que apareció con toda su brutal claridad ante nuestros ojos al solo contacto con los acontecimientos de julio, que nos han enseñado más que todo lo que pudiéramos haber aprendido en las aulas.

Nuestro Movimiento, por ello, no es una algarada estudiantil más. Esto deben comprenderlo muy bien las viejas generaciones cuyas mentes se obstinan en querer ajustar las nuevas realidades a los viejos esquemas obsoletos de su “revolución mexicana”, de su “régimen

constitucional”, de su “sistema de garantías” y otros conceptos vacíos, engañosos, de contenido opuesto a lo que expresan y destinados a mantener y perfeccionar la enajenación de la conciencia colectiva de México a la hipocresía social que caracterizan al régimen imperante.

Correspondemos con esta actitud al sacrificio que las capas más necesitadas de la sociedad, la clase obrera y los campesinos (y, entre ellos, pertenezcan al nivel económico que sea, nuestros padres) tienen que hacer para el sostenimiento de la educación superior. Esta es la única forma de agradecerles: nuestra lucha por una sociedad nueva, libre y justa, en la cual se pueda pensar, trabajar, crear, sin humillaciones, sobresaltos, angustias y mediatizaciones de toda especie. Estudiamos precisamente para obtener esto y no creemos que la dedicación a la cultura pueda tener ninguna otra razón de ser que la de colocar al hombre, al ser humano vivo, tangible y sufriente, en el centro de todas las preocupaciones.

A las otras clases sociales no les debemos nada ni les estamos obligados con nada. A los miembros de la oligarquía, a los satisfechos burgueses viejos y nuevos, a la clase dominante surgida de la revolución mexicana, no tenemos ninguna otra cosa que plantearles sino la obligación que tienen de *pagar* y pagar *cada vez más*, en dinero, por lo pronto, en tanto que llega la hora en que paguen con su desaparición histórica del panorama humano.

Que nadie pretenda llamarse a engaño. No estudiamos con el propósito de acumular conocimientos estáticos y sin contenido humano. Nuestra causa como estudiantes es la del *conocimiento militante*; refuta y transforma, revoluciona la realidad social, política, cultural, científica. No se engañen las clases dominantes:

¡Somos una Revolución!
Esta es nuestra bandera.

Comité de Lucha de la Facultad de Filosofía y Letras
Ciudad Universitaria, 26 de agosto de 1968

Nota

1 El 22 de agosto de 1968, el gobierno, por medio del secretario de Gobernación Luis Echeverría, acepta entablar el diálogo con los representantes de los

estudiantes. Estos últimos exigen que ello se realice públicamente. Se realizan contactos, sin llegar a un acuerdo.

¿Qué es la autogestión académica?

José Revueltas

1. La autogestión académica es, ante todo y esencialmente, una toma de conciencia.

2. Conciencia de lo que es el estudiar y el conocer, no como un ejercicio abstracto y al margen del tiempo y la sociedad que nos rodean, sino como algo que se produce dentro de ellos y como parte de nosotros, en relación y condicionamiento recíprocos.

3. Esta relación y condicionamiento no obran en virtud de su sola y simple presencia, sujetos a su mero impulso espontáneo. Requieren el impulso de la parte que representa el factor conciente de la relación, o sea, del que estudia y conoce, cuyo impulso no puede ser sino Revolucionario, cualesquiera que sean las características dominantes de la sociedad y de nuestro tiempo.

4. Una sociedad conservadora y reaccionaria, tanto como una sociedad avanzada y progresista, deberán condicionar siempre y en todo caso el carácter revolucionario de la conciencia universitaria (entendida como de la educación superior en general). Esto es, la conciencia de quienes estudian, aprenden y conocen (en la universidad y demás centros de educación superior) deberá mantener siempre una relación crítica e inconforme hacia la sociedad, cualquiera que sea la naturaleza de ésta.

5. Si la conciencia universitaria (la conciencia de la universalidad) del estudiantado se conforma acriticamente con la sociedad en que vive (se trate de una sociedad burguesa o de una sociedad socialista), deja de ser conciencia activa, deja de tener el atributo que define a la conciencia misma como movimiento y transformación revolucionarios, para convertirse en un espejo inmóvil de la sociedad, es una negación de toda conciencia, en el apéndice académico de la sociedad.

6. La autogestión transforma a los centros de educación superior en la parte autocrítica de la sociedad. Es decir, si la educación superior anteriormente sólo desempeñó un papel crítico, ahora, mediante la autogestión deberá desempeñar un papel transformador y revolucionario. La crítica representa una acción paralela, dirigida desde fuera, hacia la sociedad, sin compromiso alguno, como una clasificación inerte, del mismo modo en que se define o clasifica el fenómeno de la naturaleza. La autogestión, en cambio, cuestiona a la sociedad desde dentro, como parte

de ella que es, y que, en tal condición, asume la conciencia autocrítica de dicha sociedad. Esta conciencia, como crítica, es la negación de la sociedad que sea (burguesa o socialista), y como autocrítica, es la negación de la negación: subvierte dicha sociedad, representa lo nuevo e implacable, lucha contra lo viejo.

7. Para el concepto de autogestión, el conocer es transformar. No se trata tan sólo de adquirir una concepción determinada del mundo, sino de que tal concepción, al mismo tiempo, actúe como desplazamiento revolucionario de lo caduco, lo ya no vigente, lo obsoleto que se resiste a desaparecer. La autogestión plantea un conocimiento militante, en todo caso inconforme con los valores establecidos.

8. La autogestión socializa y politiza al máximo de su capacidad a la educación superior. La socializa en tanto que la compromete con todos los problemas vitales de la sociedad en que vive y la politiza en tanto que tal compromiso obliga de inmediato a la acción pública.

9. La autogestión, basada en razones de principio, se pronuncia desde el primer momento en contra del criterio de una educación superior como productora de valores de cambio. Este criterio pragmático y estrecho se sustenta sobre la prioridad que se concede a la satisfacción de necesidades tecnológicas de la sociedad industrial (así en el capitalismo como en la sociedad socialista stalinizada), con la consiguiente desnaturalización y deshumanización del conocimiento. El valor de cambio más cabalmente deshumanizado que crea la enseñanza tecnológica es el especialista, destinado única y exclusivamente a formar una parte, enajenada en absoluto de sí misma, dentro del engranaje industrial. La autogestión presupone una enseñanza técnica integral, subordina a los valores humanos del conocimiento, en oposición a la destreza y eficacia que constituyen el fin último y único del aprendizaje y el adiestramiento técnicos.

10. La autogestión se propone de inmediato una revisión profunda de todos los planes de enseñanza en el campo de la educación superior, dentro del concepto de una verdadera revolución de los sistemas vigentes.

Ciudad Universitaria, 11 de septiembre de 1968

Autogestión académica y universidad crítica¹

José Revueltas

1. Para entender la problemática que implican los conceptos de *universidad crítica* y *autogestión*, es necesario acudir al examen de las significaciones del Movimiento de 1968 y analizar su contenido interno. En realidad hoy, en 1971, no podríamos estar hablando de tales conceptos como una *praxis a la vista* sin este ayer de 1968.

La *universidad crítica* y la *autogestión* son la resultante teórico-práctica del Movimiento del '68. Más aún, el Movimiento mismo de 1968 no fue sino la forma concreta, peculiar y propia con que se expresaron en México la *universidad crítica* y la *autogestión* como la actividad viviente, inexcusable, de las masas estudiantiles en el cuestionamiento social y político del país, cuestionamiento necesario, forzoso, que sigue en pie, pero que, además, *debe seguir en pie* y que, no cabe la menor duda, *seguirá en pie* a pesar de todos los obstáculos presentes y futuros que se interpongan. Sin obstáculo no hay combate; y el combate, la lucha de contrarios, es la vida, única afirmación real y suprema del hombre, del ser humano.

En este cuestionamiento reside nuestra gran tarea.

Con lo anterior, he querido afirmar la naturaleza esencial del Movimiento de 1968. El Movimiento de 1968 fue esencialmente un *acto teórico*, una *acción teórica*. ¿Qué se quiere decir con esto que, por otra parte, tiene una enorme importancia? Ante todo no se trata de desvalorizar la teoría subordinándola al practicismo y al activismo cegatones y vacíos de contenido. Tampoco se trata de afirmar que la teoría se haga en la calle –como piensan algunos– y nazca de la turbamulta: fue todo lo contrario de una turbamulta.

Lo que le da a nuestro Movimiento del '68 la naturaleza de un *acto teórico*, de una *acción teórica*, es exactamente la naturaleza misma de la teoría, su propia forma de ser, su razón de ser, su modo de actuar. La teoría es vindicativa: castiga a quien la mistifica y se venga inexorablemente de quienes la traicionan y abandonan. Decía Lenin algo muy ingenioso y certero refiriéndose a los extremistas de izquierda y a los anarquistas: “El anarquismo –decía– es el castigo con que el movimiento obrero paga sus pecados oportunistas”.

¿Y qué ocurría, qué ocurrió en 1968, no sólo en México sino en el mundo entero? Ocurría que el mundo llevaba más de 50 años

«Nuestro Movimiento de 1968 en México ha de considerarse un acto, una acción teórica, como punto de partida para comprender otras de sus significaciones»

de falsificaciones, deformaciones, mistificaciones y traiciones a la teoría revolucionaria, a las teorías revolucionarias, desde la muerte de Lenin. En 1968 los anquilosados partidos comunistas y socialistas, los burócratas sindicales, los jefes de Estado en países de economía estatalizada, escucharon –sólo escucharon, desgraciadamente– el anuncio –nada más que el anuncio, también por desgracia– del castigo histórico. Esto fue el movimiento de la juventud en Francia, en Japón, en

Estados Unidos, en México.

La juventud, así, recogió todas las banderas pisoteadas, desgarradas, escarnecidas. Todas eran banderas rojas. Siguen siendo banderas rojas. Tomó otra vez del brazo y la condujo entre los millones de manifestantes a la delicada, dulce, enérgica Rosa Luxemburgo; llevó consigo a

Carlos Liebknecht; rescató a Trotsky del frío silencio de una historia falsificada y fementida; el rostro noble y la hermosa cabeza de Ho Chi Minh presidían aquí y allá todas las asambleas en todos los puntos cardinales. Lo mismo la imagen de Mao como la de los comunistas checos de la primavera de Praga.

¿Qué significaba esto? Que la juventud tomaba por sí misma y la restituía en la acción, con el más creador y viviente contenido, la democracia socialista, suprimida por la burocracia mundial de todos los partidos. La antigua democracia del cuestionamiento libre, del juego de tendencias, del derecho a discrepar en el seno de todos los partidos obreros y revolucionarios, cualquiera que sea la plataforma política de estos. Tal es el extraordinario contenido teórico de 1968 en todas partes, en Tokio, en Berlín, en París, *en México*.

2. Repito, entonces, que nuestro Movimiento de 1968 en México ha de considerarse un acto, una *acción teórica*, como punto de partida para comprender otras de sus significaciones. Acto teórico, de un lado, por lo que ya hemos visto en cuanto a su inserción dentro de un contexto internacional; y del otro, por cuanto a sus

características propias y nacionales. El hecho de que se haya producido como un movimiento de la gran masa intelectual explica y hace más claro el problema, pero no lo esclarece por completo. Alguien acaso pudiera preguntarse: ¿Pero qué más nos da el que se califique de teórico o no teórico al Movimiento del '68? ¿Y en dónde reside la trascendencia de todo eso, fuera ya de la significación que tuvo —o tiene— y de los resultados prácticos políticos y sociales que ha acarreado? Esta pregunta no tendría razón, pues aquí no se trata, evidentemente, de una disquisición.

Entendamos aquí el *acto teórico* como el encuentro de ese tipo de ideas que, al entrar en contacto con una realidad dada, tienen la virtud de remover —trastornar— sus estratos más profundos. Tales ideas pueden no ser teóricas necesariamente. Lo que sí constituye el *acto teórico*, la acción teórica en *profundidad*, es la remoción, el trastorno de la realidad interna, trastorno y remoción que pueden adoptar las más diversas formas exteriores, al parecer ajenas al fenómeno interno y sin conexión con él. Ahora bien; este acto, acción o, en términos de dimensión más elevada, *movimiento teórico*, es precisamente lo que hace ser a la historia; lo que ha de convertirse en *historia real* proviene de allí, de este acto genético humano, pues ya sabemos que son los hombres quienes hacen la historia y es la historia la que los hace a ellos. El que los hombres tengan una conciencia precisa del tipo de historia que están haciendo, el que no la tengan o el que dicha conciencia no coincida con el curso histórico es un fenómeno aparte, que aquí no podremos tratar. Lo que quiero decir con esto es que si bien no puede hablarse, en términos de totalidad, de que existiera en el Movimiento del '68 un nivel teórico de cierta elevación, lo que sí puede afirmarse con toda certeza es que *todos* participábamos en un hacer de la historia; todos, sin distinciones jerárquicas. La jerarquía estaba por dentro del proceso revolucionario; lo más elevado, lo que se encontraba por encima de todo y de todos era —es— el contenido del Movimiento, o sea, el acto teórico colectivo, la acción histórica.

Ahora bien, ¿en qué consistía —en qué consiste, pues se trata de una tarea que sigue en pie— esta *acción histórica*? Consistía en desmitificar la historia del país; en iniciar, por primera vez, la apertura hacia la existencia de la *historia real* de México.

No veo por qué no deba decirse con una impiadosa objetividad quirúrgica: *México carece de historia real*; no tenemos una historia real: racional y real en sentido hegeliano; pero tampoco racional y real en el sentido más humilde y simple de la cotidianidad, de la inmediatez más pobre y menos humillante de no tenerle miedo al gendarme de la esquina.

3. La acción teórica, el acto histórico, no puede comprenderse sino en su fluir, unido a una sucesión de momentos que jamás ofrecen una continui-

dad lineal ni resisten una definición unívoca. Hay una especie de geología de las corrientes históricas, en que éstas se subsumen, recorren un trayecto subterráneo y tortuoso, para emerger años más tarde, bajo formas diferentes y actuadas por otros personajes.

A esta geología histórica es a la que debe nuestro Movimiento del '68 el haber podido expresarse como Universidad crítica y autogestión. Para entender esto, se hace preciso un breve examen del decenio de 1958-1968.

«Universidad crítica y autogestión académica se revierten, así, en otros dos conceptos: conciencia libre y democracia cognoscitiva. No hay ninguna distancia entre ellos»

Derrotada y reprimida la huelga ferroviaria de 1958-1959, se liquida de modo completo cualquier vestigio de independencia política y sindical del movimiento obrero, pero todavía más, cualquier expresión o actividad independientes de no importa cuáles fueran los grupos o clases sociales que aspiraran a dicha

independencia, por precaria y relativa que fuese. Puede decirse que es en este decenio donde el monopolio de la elite del poder llega a su punto más elevado. Se desencadena, dentro de estas condiciones, el Movimiento Estudiantil de 1968.

De este modo, la Universidad, el Politécnico, Chapingo, las Normales y todo el estudiantado se encuentran de pronto ante la tarea gigantesca de desempeñar el papel, impuesto por las circunstancias, de convertirse en la conciencia nacional del país. Esa inmensa parte de la conciencia nacional en la cual se encontraban sus propios padres y el conjunto, aunque no ligado a la educación superior, de las clases medias, conciencia herida en sus aspiraciones a la libertad, a la democracia y la cultura y que no aspira únicamente al solo goce del bienestar económico.

Resulta así perfectamente explicable y lógico que esta conciencia colectiva nacional –conciencia democrática, que aspira a la independencia política y a la libertad– se exprese, a través del Movimiento del '68, con el lenguaje del proletariado, con el lenguaje de la clase obrera, pues se actuaba bajo el

efecto de la derrota ferrocarrilera de 1958-1959, que era indispensable superar con el triunfo del Movimiento Estudiantil, pues la pérdida total de la independencia obrera había sido también la pérdida de la independencia política de todos aquellos grupos sociales deseosos de actuar en un ambiente democrático, al margen del monopolio ejercido por la elite del poder. De aquí el contenido avanzado, revolucionario y socialista del Movimiento del '68. No es un accidente en modo alguno: indica la profunda naturaleza histórica que tiene el camino que le falta todavía por recorrer. Su perspectiva espléndida.

4. Examinemos esto último dentro del marco de lo expuesto. El cometido desempeñado por el Movimiento del '68 como conciencia colectiva representó de modo más cabal, dentro de las condiciones existentes, lo que constituye la *universidad crítica*, que no es solamente el perpetuo manifestarse por las calles o el hacer pancartas. Eso está bien, pero no es todo. La universidad crítica es una conciencia colectiva, pero además es una conciencia de la cultura (en su sentido más amplio) que ha de asumirse en sus dos aspectos: como conocimiento y como transformación (esto es, precisamente como crítica) de la realidad.

Pero el término *conciencia de la cultura* parecería no indicar nada. Añadámosle el concepto de *totalidad*: totalidad de la conciencia de cultura, en el mismo sentido desmitificante y desenajenante en que se habla de *totalidad* de la filosofía, *totalidad* de la historia o *totalidad* del hombre. El hombre prehumano (Neandertal o Cromañón) es el hombre (y no estamos tampoco muy seguros de que no siga siendo prehumano como hombre actual); la historia es la realización y desrealización del transcurrir de sus momentos; la filosofía es el pensamiento abstracto racional que arranca desde Tales de Mileto —o antes— hasta Hegel y después. Es decir, la totalidad —su concepto— nos preserva de fetichismos, nos salva de los dioses, nos defiende contra la eternidad. El fuego de Heráclito, lo sabemos, se enciende y apaga, aquí y allá, en los más diferentes puntos del universo. Precisamente no es el fuego eterno; es, nada más, el fuego *total*. Las *no totalidades* nos enjaulan en el trazo de sus coordenadas, nos someten a un progreso o a un retroceso, a un subir a los cielos o a un descender a los infiernos, a un ir y venir, a un dar vueltas incesantes en torno de nuestra propia cola atómica de perros termonucleares.

Aquí reside, pues, el sentido que encierra la conciencia de cultura como totalidad y que resume todo el ser y el hacer de la universidad crítica. Penetrar el conocimiento —estético, filosófico, científico—, padecerlo, gozarlo (o incluso dejarse crucificar en su defensa), lo mismo con Sófocles que con Picasso; de igual modo con Heberto Padilla que con Jorge Luis Borges; lo mismo con León Trotsky que con Solzhenitsyn; en

igual forma con Descartes que con Bergson, con Marx que con Heráclito. No se trata de ningún eclecticismo: *se trata de la libertad*.

Universidad crítica y autogestión académica se revierten, así, en otros dos conceptos: conciencia libre y democracia cognoscitiva. No hay ninguna distancia entre ellos. Se nutren y sostienen mutuamente. La libertad de la conciencia tiene un sentido unívoco, no admite coordenadas, no acepta que la enjaulen, no puede vivir encerrada en el "apando". Nada de establecer la escisión maniquea de que hay una conciencia burguesa y una conciencia proletaria, una conciencia contrarrevolucionaria y una conciencia pura, una conciencia buena y otra mala. Estas no son sino puras majaderías puramente ideológicas que tratan de escamotear el problema de la conciencia racional y, por ende, de la crítica, mediante la manipulación subjetiva de oscuros sentimientos religiosos de la beatería seudomarxista. La democracia cognoscitiva constituye, precisamente, la democracia del conocimiento; el acceso del mayor número a las esferas del conocimiento, pero ante todo la confrontación de tendencias, la impugnación de situaciones, la lucha de clases.

Sin universidad crítica y sin autogestión académica la universidad, nuestra universidad, no podrá cuestionar a fondo, ni eficazmente, a la sociedad mexicana. Estos dos principios deben ser considerados básicamente con todo rigor académico dentro de la perspectiva de reformas a la educación superior, tarea en que ustedes y su comité de lucha, sin duda alguna, desempeñarán un gran papel.

Nota

1 N. del E.: Este artículo fue escrito por Revueltas al salir de la cárcel el 13 de mayo de 1971. Se presume –por una carta– que es el texto de una conferencia dictada el 8 de junio de 1971 en el auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El Mayo argentino

Horacio Tarcus

Doctor en Historia. Director del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina (CeDInCI). Profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Resumen

El artículo relata, a partir de la experiencia del Cordobazo, la recepción en Argentina del Mayo francés, en particular entre la izquierda peronista y el comunismo, al igual que los proyectos editoriales que inspiró entre socialistas, comunistas y anarquistas.

Abstract

The article relates, from the experience of the civil uprising in Córdoba, Argentina (Cordobazo), the reception in Argentina of May 1968, in particular between the Peronist left and the Communists, as well as the editorial projects it inspired among socialists, communists and anarchists.

Palabras clave

Movimiento estudiantil, Mayo del '68, recepción política e intelectual, producción editorial.

Keywords

Student movement, May '68, political and intellectual reception, editorial production.

Eric Hobsbawm ha señalado que la revuelta estudiantil de fines de los años sesenta fue global, no sólo porque se inscribía en la tradición del internacionalismo revolucionario, sino porque por primera vez el mundo era realmente global.

Los mismos libros aparecían, casi simultáneamente, en las librerías estudiantiles de Buenos Aires, Roma y Hamburgo [...] los mismos turistas de la revolución atravesaban océanos y continentes, de París a La Habana, a São Paulo y a Bolivia [...] Los estudiantes de los últimos años sesenta no tenían dificultad de reconocer que lo que sucedía en la Sorbona, en Berkeley o en Praga era parte del mismo acontecimiento en la misma aldea global (Hobsbawm, 1995: 445).

En efecto, la Argentina fue parte de esa fiebre. Hubo, pues, a su modo, un "68 argentino". Como veremos, aunque haya sido un poco más proletario y más plebeyo que los '68 europeos, y aunque hundiera raíces en las tradiciones de lucha de los obreros, los estudiantes y los intelectuales de la Argentina, no puede entenderse cabalmente fuera de su marco internacional.

Desde ya, el "68 argentino" tiene su propio *tempo* y, un poco como el "otoño caliente" italiano, se proyecta sobre 1969 y estalla en el mes de mayo.

Recordemos brevemente las coordenadas históricas. Desde junio de 1966 la Argentina se encontraba bajo una nueva dictadura militar, de carácter corporativista y conservador. El peronismo estaba proscripto desde 1955, pero un sector del sindicalismo peronista, que abogaba por lo que se llamaba un "peronismo sin Perón", apoyó el golpe militar. Al poco tiempo, la creciente represión gubernamental a los reclamos obreros, las cesantías en las empresas públicas y la intervención de algunos gremios pondrán en entredicho el idilio entre gobierno y sindicatos. Y fortalecerán un sector del sindicalismo peronista más combativo, antidictatorial y más abierto a los estudiantes, los intelectuales y los artistas enrolados en las izquierdas. Es el que va a constituir, en marzo de 1968, una central sindical alternativa a la CGT tradicional: la CGT de los Argentinos (James, 1990).

Aquel 1968 había sido también el año de la constitución del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, que desoyó la prohibición de la jerarquía católica y se solidarizó con las luchas obreras y estudiantiles.

También fue el año de una serie de acciones estético-políticas de los artistas plásticos, que comenzaron cuestionando con diversos actos a la institución que albergaba el arte de vanguardia en la Argen-

tina (el Instituto Di Tella) para terminar rompiendo con ella y montando la muestra de arte conceptual "Tucumán arde" en la propia sede de la CGT alternativa (Longoni y Mestman, 2000).

Finalmente, fue un año de intensa movilización estudiantil. El régimen militar, con su política de censura a la prensa, de control de la vida cotidiana y de brutal intervención a las universidades, empujó a los estudiantes a la lucha antidictatorial y al encuentro con la resistencia de los trabajadores. Tan sólo dos meses después del golpe militar, una manifestación estudiantil en Córdoba fue reprimida por la policía y murió el estudiante y obrero Santiago Pampillón, que devendrá un símbolo de la unidad obrero-estudiantil en los años que siguen. Es así que en septiembre de 1968, en el segundo aniversario del asesinato, la CGTA y el Frente Estudiantil en Lucha lanzan en Córdoba una semana de protesta que también fue violentamente reprimida. En marzo de 1969 la lucha estudiantil volvió a encenderse, ahora en la ciudad de Corrientes, cuando los estudiantes llamaron a la huelga para el 15 de mayo de ese año en protesta por la privatización de los comedores universitarios. Hubo una fuerte represión policial que se cobró la vida del estudiante de medicina Juan J. Cabral. Las huelgas estudiantiles se extendieron a las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Tucumán y Córdoba (González Trejo, 1969).

Pero fue en esta última donde todas estas líneas convergieron y eclosionó el movimiento popularmente bautizado como Cordobazo. Es que en esta ciudad, sede de una antigua universidad y epicentro de un nuevo desarrollo industrial, se conjugaron y se potenciaron un movimiento estudiantil cuyas tradiciones combativas remitían a la Reforma Universitaria de 1918, una nueva clase trabajadora y una intelectualidad crítica que transitaba desde el comunismo ortodoxo hacia la nueva izquierda.

El 26 de mayo de 1969 las dos CGT dispusieron un paro nacional para el día 30, mientras las regionales cordobesas, más combativas, decretaron un paro activo para los días 29 y 30. El gobierno militar amenazó con recurrir a las fuerzas armadas. Sin embargo, el jueves 29 comenzó en Córdoba el paro activo de 37 horas. A las 11 de la mañana, las columnas de trabajadores partieron de distintos puntos de la ciudad hacia la sede de la CGT, en el centro, siguiendo las rutas establecidas el día anterior. Los estudiantes desde un comienzo, y progresivamente los vecinos, fueron engrosando las columnas a lo largo de la marcha. Al mediodía comenzaron las escaramuzas con la policía. Cayó asesinado el obrero de IKA-Renault Máximo Mena, lo que precipitó los combates callejeros. Los manifestantes erigieron barricadas y encendieron fogatas para protegerse de los gases lacrimógenos; respondieron con piedras y botellas a los disparos policiales. La policía debió

Para la recepción argentina del Mayo francés, la cultura política peronista constituyó una barrera, pues lo percibió como una gesta estudiantil, tendiendo a difuminar las tomas de fábrica, la huelga general

replegarse, hasta que se retiró en desbandada mientras los manifestantes tomaban virtualmente la ciudad. Ardie- ron las oficinas de algunas empresas multinacionales y edificios identificados con el poder estatal.

A las cinco de la tarde entraron a la ciudad las tropas del ejército, que fueron convergiendo sobre el Barrio Clínicas, donde se había replegado la resistencia. En horas de la noche, el avance de las tropas militares fue resistido por francotiradores ubicados en los

techos. Cerca de las 23 hs, hombres del sindicato de la electricidad provo- caron un apagón en la ciudad, lo que desconcertó a las fuerzas represivas y prolongó por dos horas la resisten- cia. Cerca de la 1 de la mañana, el ejército reanudó su ofensiva.

El viernes 30 se cumplió el paro nacional dispuesto por las dos CGT. Córdoba fue, desde la madrugada, una ciudad tomada por el ejército,

aunque los francotiradores aún ofrecían resistencia. A pesar de todo, se realizaron las manifestaciones previs- tas por el paro activo y se volvieron a construir barrica- das. A las 10 hs el ejército disolvió una manifestación. Obreros y estudiantes edificaron barricadas y se reanu- daron los enfrentamientos. A las 17 hs rigió el toque de queda, y el ejército ingresó definitivamente en el Barrio Clínicas. Comenzaron los allanamientos en las pensio- nes estudiantiles y los locales sindicales. Un Consejo de Guerra comenzó por la noche a dictar las primeras condenas. Los diarios calcularon catorce muertos y un centenar de heridos. Otros medios hablaron de treinta y aún de sesenta muertos.

El Cordobazo había concluido. Pero comenzaba el mito del Mayo argentino. El gobernador de Córdoba debió renunciar. Las movilizaciones se ex- tendieron a otras regiones del país. Un año después del Cordobazo, será depuesto el presidente de facto. La dictadura militar había quedado herida de muerte y ter- minará aceptando lo que parecía imposible: elecciones libres, esto es, sin la proscripción del peronismo¹.

Aproximación desde la memoria

Los acontecimientos de París del año 1968 han quedado en los registros periodísticos, en los debates políticos y en la memoria colectiva de los argentinos como "El Mayo francés". La construcción es a primera vista obvia. Sin embargo, "El Mayo francés" alude a la existencia de otros "mayos": si se habla de un "Mayo francés", es porque en la historia del país hubo un Mayo argentino. O, más precisamente, dos.

Me explico: cuando el periodista Gregorio Selser reunió para la revista *Cuadernos de Marcha* de Montevideo una serie de intervenciones sobre el Cordobazo, la tituló "Otro mayo argentino". Si bien ya comenzaba a designarse a la movilización obrero-estudiantil de mayo de 1969 como "Cordobazo", Selser señalaba en el prólogo que prefería retomar la expresión de monseñor Jerónimo Podestá, el obispo progresista que comparaba al Mayo de 1969 con el Mayo de 1810, año del primer gobierno criollo. La diferencia consistía, según el obispo, en que en aquella fecha patria el pueblo "quería saber", mientras que ahora "el pueblo quiere estar" (Selser, 1969: 11-12).

Pero entre los dos mayos argentinos, el propio monseñor Podestá coloca al Mayo francés. Para explicar el Mayo argentino de 1969, señala, hay que acudir al "movimiento de mayo de 1968 en Francia". Y se pregunta qué sucedió "de mayo del '68 a mayo del '69", tratando de responder a una pregunta acuciosa: ¿Por qué ese desfase de un año? ¿Por qué "las manifestaciones de protesta estudiantil siguen produciéndose en todas partes menos en Argentina"?

Entonces, dos mayos argentinos se superimprimen en la memoria colectiva: mayo de 1810, mayo de 1969. Y dos mayos contemporáneos: el francés y el argentino. Los dos mayos, el parisino y el cordobés, remiten el uno al otro, al punto de superponerse en la memoria de los argentinos.

Cuando François Gèze y Alain Labrousse se esforzaban en introducir a los lectores franceses a la historia política argentina, escribían: "Como mayo de 1968 en Francia, el Cordobazo ha tomado, en la Argentina, las proporciones de un mito"².

Sin embargo, no sólo para los lectores franceses el Cordobazo tenía que ser pensado en relación al Mayo francés. Dos décadas después de los acontecimientos, el historiador argentino Carlos Altamirano lo recordaba en palabras que eran casi un eco de las de Gèze y Labrousse.

Períodos así suelen ser períodos de gran efervescencia mítica y el Cordobazo adquirió muy pronto esa dimensión, la dimensión de un mito. Teníamos nuestro Mayo, que se

comunicaba con aquel otro del '68, el Mayo francés, pero el nuestro, que no había hecho proliferar grafittis tan imaginativos, había sido más proletario, más plebeyo, más duro (Altamirano, 1994).

En la misma época, otro hombre de la generación del sesenta y también historiador de las ideas, Oscar Terán, articulaba los dos mayos, el francés y el argentino, observando que el año que va de mayo de 1968 a mayo de 1969 marcó el clivaje entre la nueva izquierda intelectual y la izquierda de los grupos político-militares.

El corte en cuanto al pasaje en el campo intelectual de una relación cultural-política a otra político-cultural está [...] nítidamente instalado en los años '68-'69 alrededor de aquellos grandes acontecimientos. Porque el Mayo francés fue vivido como un acontecimiento local y el Cordobazo venía a reabrir la posibilidad de un proceso revolucionario en la Argentina (Terán citado en Hora y Trímboli, 1994: 60).

Un último testimonio de otra exponente de la generación del sesenta, la crítica cultural Beatriz Sarlo reconstruía en su memoria la relación entre los mayos del siguiente modo:

Del Mayo francés tengo recuerdos tan intensos como contradictorios. Las fotos de la insurrección parisina se superponen con las fotos del Cordobazo, que sucede en la Argentina exactamente un año después. En ambos recuerdos, la gente es muy joven y está en la actitud de arrojar algo a la policía o a un edificio cercano. Las fotos tienen mucho humo y las imágenes están algo borrosas, porque se trata siempre de personas en movimiento, gesticulando, saltando o corriendo³.

Sarlo complejiza aún más los planos de la memoria cuando señala:

Otra capa de sentidos venía del lado de la Revolución Cubana y, sobre todo, de lo que comenzaba a ser el "guevarismo". El Mayo argentino tuvo lugar en 1969, un año después del francés; un año antes, en 1967, había muerto el Che comandando un movimiento guerrillero. Estas dos fechas enmarcan al Mayo francés y lo convierten en el volante de un tríptico formado por la revolución campesina y juvenil iniciada en Cuba,

la revolución estudiantil de Francia, la insurrección obrera y estudiantil del Cordobazo. Las tres fechas quedan unidas imaginariamente por la juventud de sus protagonistas.

Y concluye:

Como en los sueños o en los mitos, en la Argentina de fines de los sesenta los jóvenes del peronismo radicalizado o de la "nueva izquierda" disponíamos de estas imágenes culturalmente afines y políticamente contradictorias. Es lo que se llama un clima de época. Ese final de la década del sesenta fue un tiempo de síntesis arrolladoras (Sarlo, 1998).

Una recepción negativa

Sin embargo, el Mayo francés no tiene una presencia visible en el Mayo argentino. Nicolás Casullo lo ha señalado de modo tajante: "París del '68 nunca fue pancarta, cartel, slogan o estribillo estudiantil, barrial, gremial de las corrientes, armadas o no, insurreccionales o guerrilleras, ni aquí ni en América Latina, como lo fueron Cuba, Vietnam, Argelia" (Casullo, 1998: 46).

Para la recepción argentina del Mayo francés, la cultura política peronista constituyó una barrera difícil de sortear. La misma lo percibió sobre todo como una gesta estudiantil tendiendo a difuminar la participación obrera, las tomas de fábrica, la huelga general. Por otra parte, el nacionalismo peronista, de corte antinorteamericano, simpatizaba con el nacionalismo gaullista, al punto que el general Perón se había declarado, desde su exilio en Madrid, admirador del general francés. Recordemos además que De Gaulle, en el marco de una gira latinoamericana, había visitado la Argentina en octubre de 1964 y que el sindicalismo peronista, acatando las instrucciones de su líder de que fuera acogido como si hubiera regresado él mismo, lo recibió con volantes y cánticos que coreaban "Perón-De Gaulle, un solo corazón", o "Perón-De Gaulle, Tercera Posición"⁴. El objetivo del general exiliado era aprovechar la visita del francés para mantener proyectada su fantasmática figura sobre la vida política argentina, dentro del marco del llamado "Operativo retorno". El sagaz De Gaulle no dejó de advertir la maniobra y le habría señalado a su comitiva la "ridícula" pretensión de Perón de "colgarse en la cola de su avión" (Page, 1984: 157-158 y 324).

Tampoco el peronismo combativo fue más receptivo respecto de Mayo del '68. En las corrientes agrupadas en la CGT de los Argentinos las relaciones entre trabajadores peronistas y estudiantes comenzaron a hacerse más fluidas. Sin embargo, en el periódico de esta corriente, *CGT*, que dirigió Rodolfo Walsh, si bien se narran con minucio-

alidad las luchas estudiantiles argentinas contra la dictadura militar, no hay el menor registro del Mayo francés. Y si lo hay, aparece “en negativo”. Esto es, los estudiantes entrevistados por el periódico insisten en el carácter nacional de cada movimiento estudiantil, así como en el carácter proletario del proceso revolucionario.

Así se expresaba Roberto Grabois, líder del Frente Estudiantil Nacional:

Las características de las luchas del movimiento estudiantil de cada país dependen de las particularidades de los procesos históricos nacionales. Lo que me interesa señalar enfáticamente es que las imitaciones de los procesos de otros pueblos nunca generaron avances reales para el movimiento popular en cualquiera de sus expresiones. El avance del movimiento estudiantil argentino hacia una conciencia nacional antiimperialista se está dando a ritmo acelerado y ello lo llevará sin duda a estrechar sus lazos con el movimiento obrero y popular. Aquí serán los trabajadores los que dirijan la lucha, los que coordinen el aporte de los otros sectores sociales y entre ellos el del movimiento estudiantil. Los estudiantes apoyarán la Revolución de los Trabajadores. Quienes piensan que los trabajadores deben apoyar la revolución de los estudiantes seguirán soñando en París mientras la historia se gesta en Avellaneda, en Tucumán y en cada barrio y provincia de la patria (CGT, 1968: 3).

La Juventud Peronista, poco antes de la creación de Montoneros, también miraba con desdén el Mayo francés. Así, cuando Nicolás Casullo regresó a la Argentina de un viaje en el que le tocó asistir a las jornadas de mayo en París, su amigo Leonardo Bettanin, dirigente de esa corriente, se ocupó de mitigar su entusiasmo:

Nicolás, acá también pasaron cosas interesantes, que entusiasman. Y perdoname que te lo diga así, pero me parece que son mucho más importantes. No es la paja de los estudiantes franceses, sino un movimiento sindical de liberación que comprende a la clase trabajadora (Anguita y Caparrós, 1997: 234).

Las imágenes que llegaban del Mayo francés tampoco se encuadraban felizmente en la perspectiva del Partido Comunista Argentino. Aunque entre

sus bases juveniles los hechos de París quizás despertaron expectativas, su prensa evitó el tema todo lo que pudo. La revista de los intelectuales comunistas, *Cuadernos de Cultura*, se limitó a traducir un artículo de Roger Garaudy, "La revuelta y la revolución", en el que se repetían las conocidas tesis acerca del carácter revolucionario de la clase trabajadora y del carácter pequeñoburgués del estudiantado. Sobre esta plataforma, Garaudy cuestionaba el "extremismo" de ciertos sectores del movimiento estudiantil y hacía votos para que "la clase obrera y su partido" facilitaran el paso de los estudiantes a una "verdadera conciencia revolucionaria". Para ello, dedicaba la última parte de su artículo a discutir las tesis de Herbert Marcuse, por entonces la *bête noire* de los comunistas (Garaudy, 1968: 60-70).

Casi dos décadas después, un comunista argentino enfatizaba las diferencias entre la "revuelta" francesa, pequeñoburguesa y marcuseana, y la "verdadera rebelión popular argentina". Leamos:

En libros y artículos sobre el tema es frecuente encontrar la afirmación de que el "Cordobazo" tuvo como fuente de inspiración el Mayo francés del '68 o fue una especie de onda sísmica originada por aquel acontecimiento. Sería absurdo negar que el Mayo francés tuvo influencia entre los estudiantes. Pero es igualmente absurdo hacer una similitud entre ambos acontecimientos. Ni Córdoba es París, ni el desarrollo capitalista es el mismo. Y lo fundamental de la diferencia reside en que en París fueron los estudiantes quienes desataron un movimiento impulsados por ideas de inspiración marcuseana, a los que se sumaron luego los trabajadores, y en Córdoba fue una verdadera rebelión popular, originada por el proletariado [...] a la que se sumaron los estudiantes (Bergstein, 1986: 106).

Si bien el maoísmo le dio una acogida mayor en su prensa, la asimilación tampoco era sencilla. Como señalara Beatriz Sarlo, quien por entonces era una intelectual maoísta:

En mayo de 1968 [...] creí que los estudiantes franceses ensayaban un acto insurreccional que sólo se cumpliría definitivamente en América. Ellos habían tomado la delantera, pero de este lado del Atlántico se preparaba la verdadera, definitiva, lucha revolucionaria [...] La idea de que había reservas insurreccionales en los más grandes países capitalistas [...] chocaba, sin que yo tuviera demasiada conciencia teórica,

con otra idea: la de que la revolución iba a avanzar de la periferia hacia el centro, traída por los condenados de la tierra, como Franz Fanon llamaba a los campesinos (Sarlo, 1998).

El principal partido trotskista local, entonces llamado Partido Revolucionario de los Trabajadores, fue desde luego el más receptivo. Vinculado a las Jeunesses Communistes Révolutionnaires y al Parti Communiste Internationaliste por medio de la Cuarta Internacional, dio a conocer los pronunciamientos del Secretariado Unificado, ensayos de Ernest Mandel y diversos análisis de la situación francesa⁵. Sin embargo, en la medida en que el trotskismo participaba, de un modo semejante al peronismo revolucionario y al comunismo, del imaginario de la revolución proletaria, tendió a ver a Mayo de 1968 sobre todo como una huelga general del proletariado francés. El estudiantado aparecía como un catalizador de la lucha obrera. La crítica de la vida cotidiana, la crítica de la familia tradicional, de la escuela y demás instituciones burguesas, los intentos por rearticular arte y política, en fin, toda la dimensión contracultural del '68, que despreciaban peronistas y comunistas, era imposible de percibir desde el prisma obrerista de los trotskistas argentinos.

Pero una importante fracción del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) se sentía crecientemente atraída por el guevarismo y los sucesos de mayo también aparecerían ante sus ojos como una "rebelión estudiantilista". A principios de mayo de 1968 llegó a París Mario Roberto Santucho, el líder máximo de esta fracción del PRT, que iba a dar origen al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Según el testimonio de Daniel Bensaïd a una periodista argentina, Santucho llegaba para mantener una reunión con la dirección de la Cuarta Internacional y se encontró con la rebelión en las calles.

Jean Pierre Beauvais [...] fue su principal acompañante en la ciudad. Lo llevó a las barricadas del Barrio Latino, a las marchas obreras, a las manifestaciones más violentas sobre Les Champs Elysées [...] Santucho hizo pocos comentarios políticos, solía callar cuando no comprendía. Pero al final de una de esas jornadas de mayo, la única reflexión que nos transmitió fue: "ustedes tienen un bajísimo nivel de violencia en las acciones de masas" (Seoane, 1991)⁶.

Rastros de una recepción intelectual

El Mayo francés no aparece, entonces, como bandera en las luchas sociales y políticas argentinas, del mismo modo que Cuba, Vietnam o Argelia. Es

necesario seguir las pistas de las diversas líneas de recepción y difusión de las ideas y las imágenes del Mayo francés en la Argentina para mostrar cómo, por la mediación de los editores, los traductores, los divulgadores, se extienden, de modo molecular pero sin duda efectivo y actuante, sobre el campo de los intelectuales de la nueva izquierda, los artistas politizados y los estudiantes.

Una serie de fascículos, revistas y libros traducidos inmediatamente después de los hechos de Mayo demuestran el poderoso interés de los lectores argentinos. Un simple registro de esas traducciones nos permite inferir quiénes fueron los receptores del Mayo francés en la Argentina y cuáles fueron sus canales de difusión.

- En primer lugar, ya en agosto de 1968 aparece *La imaginación al poder*, un pequeño libro de tapas rojas a cargo de la editorial Insurrexit. Incluía una cronología de los acontecimientos, un dossier fotográfico y textos de Daniel Cohn-Bendit, Jean-Paul Sartre y Herbert Marcuse.
- En julio de 1968 había aparecido en Montevideo el ejemplar de *Cuadernos de Marcha* titulado "Los estudiantes", de amplia difusión en la Argentina. En noviembre lo reproduce una publicación similar de Buenos Aires: *Cuadernos de América Latina*. El dossier incluía textos de los protagonistas de Mayo, como Cohn-Bendit y Sauvageot, lecturas de los hechos de Sartre y Marcuse, al mismo tiempo que visiones críticas de figuras tan diversas como Garaudy, Malraux y Aron.
- A fines de 1968, la editorial Anarquía de Buenos Aires lanzó el volumen *La insurgencia estudiantil en el mundo*, con notas sobre las rebeliones estudiantiles en Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, Bélgica, Holanda y Europa del Este, además de una sección final con artículos de Rudi Dutschke y Cohn-Bendit⁷.
- En marzo de 1969 aparece en Córdoba el volumen *Francia 1968: ¿una revolución fallida?*, que reúne textos publicados en el número de agosto-septiembre de *Les Temps Modernes* (N° 266/67) y en el especial de *Problemi del socialismo* (N° 32/33, julio/agosto 1968) que editaba Lelio Basso en Roma.
- Buena parte del mismo número de *Les Temps Modernes* dedicado a las jornadas de Mayo apareció en junio de 1969, menos de un año después, editado

- por Tiempo Contemporáneo, bajo el título *París Mayo 1968. La prerrevolución francesa*.
- *Combats étudiants dans le monde*, el volumen que prepararon anónimamente seis estudiantes franceses después de los acontecimientos de Mayo y que publicó Seuil en 1968, apareció menos de un año después como *Las luchas estudiantiles en el mundo* (Buenos Aires: Galerna, 1969).
 - *Le mouvement de mai ou le communisme utopique* de Alain Touraine, publicado a fines de 1968 en París por Seuil, un volumen de casi trescientas páginas, apareció dos años después publicado por la editorial Signos.
 - *L'anarchie et la révolte de la jeunesse* de Maurice Joyaux, que publicó Casterman en 1970, aparece en Buenos Aires dos años después bajo el título *El anarquismo y la rebelión de la juventud* (Buenos Aires: Freeland, 1972).
 - Retoños un poco más tardíos fueron el volumen *Los intelectuales y la revolución después de Mayo de 1968* (Buenos Aires: Rodolfo Alonso, 1973) que reunía textos de Sartre, Bernard Pingaud y Dionys Mascolo aparecidos en revistas francesas dos años antes⁸, y la edición pirata de *La sociedad del espectáculo* del situacionista Guy Debord (Buenos Aires: De la Flor, 1974), que incluía también otro texto muy citado durante los días de mayo: "Sobre la miseria del medio estudiantil".

Finalmente, si bien no está referido a los acontecimientos de Francia, *El estudiantado antiautoritario* de Rudi Dutschke, editado en 1969 por La Rosa Blindada, forma parte del universo de los libros sobre la insurgencia estudiantil.

La velocidad de la recepción, que va desde los dos meses para las antologías a los dos años para los volúmenes mayores, no deja de ser sorprendente.

Las ideas del Mayo francés llegan a la Argentina por medio de autores que serán traducidos, leídos y discutidos febrilmente por la generación de los años sesenta y setenta: Jean-Paul Sartre (una figura ya reconocida por los lectores argentinos desde la década del cuarenta), André Gorz, Roland Barthes, Henri Lefebvre, Ernest Mandel, Alain Touraine, Guy Debord y Cohn-Bendit. Dentro de este universo no podemos dejar de mencionar la recepción de Rudi Dutschke y el extraordinario influjo que ejerció en esos años Herbert Marcuse⁹.

Sin embargo, hay un imaginario potente del Mayo que excede las ideas y los libros. En primer lugar, como queda de manifiesto en el recuerdo de Sarlo, las imágenes fotográficas de las barricadas, de las luchas callejeras, de los estudiantes arrojando proyectiles contra la policía aparecieron en la prensa de esos días y luego fueron reproducidas en las revistas de la nueva izquierda.

En segundo lugar, el papel desempeñado por los graffitis. El volumen *La imaginación al poder*, ya citado, incluía una sección, "Las paredes hablan", donde se recogían casi doscientos graffitis. A partir de entonces, fueron reproducidos en diversos medios y a menudo utilizados por los estudiantes argentinos en sus propias luchas¹⁰.

En tercer lugar, la potencia de los afiches que hacían los estudiantes de Bellas Artes. La edición argentina del libro de Joyeux, por ejemplo, reproducía veinte de aquellos afiches. Además, el afiche de la fábrica cuya chimenea se erigía como un puño en alto y decía "La lutte continue" sirvió como tapa del fascículo "El Mayo francés" de Diana Guerrero, que alcanzó enorme popularidad, con un tiraje superior a los 10 mil ejemplares. En su interior se reproducían otros afiches, fotos y graffitis.

La recepción fue obra de editores independientes. Uno de los receptores que se esconde tras el sello Insurrexit es el escritor, editor y librero Mario Pellegrini, hijo del poeta y ensayista Aldo Pellegrini, uno de los introductores del surrealismo en la Argentina. Padre e hijo editaron mediante los sellos Insurrexit y Argonauta textos de las vanguardias artísticas francesas y argentinas, así como a sus precursores: Sade, Nerval, Lautréamont, Artaud. Rodolfo Alonso también fue un poeta y editor atento sobre todo a las novedades de la cultura francesa, cobijando en su sello, por un lado, a los escritores "malditos" como Sade y Bataille y, por otro, a marxistas críticos como Sartre, Henri Lefebvre, Edgar Morin y Marcuse.

Otra vía de recepción fueron las revistas *Eco contemporáneo* y *Contracultura* que entonces editaba Miguel Grinberg. Aquí los textos de Cohn-Bendit y el "Llamado a los estudiantes" del Centro Censier convivían con otros textos sobre el poder joven, la *beat generation*, el pacifismo, el hippismo, el rock, las luchas por las libertades sexuales y la anti-psiquiatría. Este conglomerado era postulado como una suerte de "tercera vía" alternativa tanto a la "sociedad de consumo" como a los regímenes comunistas. Por su parte, Daniel Alegre difundía entre nosotros, con su revista *En cuestión* (1971) los textos situacionistas.

Otro de los receptores, que está tras los sellos Signos y Pasado y Presente, es José María Aricó, intelectual gramsciano y una de las figuras clave de la nueva izquierda argentina. Su antología del Mayo francés apareció en la colección *Cuadernos de Pasado y Presente* (fundada preci-

samente en la ciudad de Córdoba), que constituyó sin duda el mayor esfuerzo de renovación de la cultura marxista latinoamericana. Tras el sello La Rosa Blindada está el poeta y editor José Luis Mangieri. Tanto Aricó como Mangieri formaron parte de la generación de los intelectuales que rompieron con el comunismo para enrolarse en las filas de la nueva izquierda.

Otros receptores fueron el ensayista independiente Juan José Sebreli y la socióloga, crítica cultural y periodista Diana Guerrero.

Insurrexit, Rodolfo Alonso, Signos, Pasado y Presente, La Rosa Blindada, Galerna, Tiempo Contemporáneo, De la Flor y Centro Editor de América Latina se contaron entre las experiencias editoriales que contribuyeron de modo decisivo a crear el clima político-intelectual de la nueva izquierda de fines de los años sesenta y principios de los setenta. Sus libros, fascículos y revistas —donde confluían el neanarquismo, el surrealismo libertario y el marxismo crítico— fueron la lectura obligada de los artistas plásticos de las acciones del año '68, de los intelectuales de la nueva izquierda y de los estudiantes que se movilizaban en Corrientes, Rosario, Buenos Aires, Tucumán y Córdoba.

Bajo la última dictadura militar, estas editoriales sufrieron censura o directamente la clausura. Pellegrini y Aricó debieron exiliarse y exiliar con ellos sus proyectos editoriales. Diana Guerrero es una de las desaparecidas por el terrorismo de Estado¹¹.

De la fiesta a la tragedia

Cada una de estas corrientes políticas, cada una de estas formaciones culturales, con sus análisis, sus ediciones, sus traducciones y sus prólogos, hizo su apropiación (ya sea negativa, ya sea positiva) del Mayo francés y estableció su propia vinculación entre Mayo del '68 y Mayo del '69. Esto es, cada una, al apelar ya sea a la centralidad obrera de la revolución, o al poder joven, o al marxismo renovado, o a la dimensión utópico-libertaria, o a la dimensión artística y contracultural, realizaba su propia operación de lectura del Mayo francés. Lo mismo sucedía respecto del Cordobazo. Hubo quienes vieron en él una rebelión obrera y popular contra una dictadura, otros que lo leyeron como un ensayo de insurrección obrera y otros, finalmente, que quisieron entenderlo como el punto de partida de una guerra revolucionaria en la Argentina.

Mayo del '68 y el Cordobazo han adquirido la dimensión de mitos colectivos y suelen ser recordados por sus propios protagonistas como grandes fiestas populares, con sus acciones de masas, sus calles ocupadas y la alegría desbordante de desafiar y ver retroceder al poder. Tienen también una dimensión de fiestas rabelesianas, con su burla a los hombres del poder, su utopía popular y hasta su orden invertido, donde los estudiantes corren a los policías.

"París era una fiesta" titularon en Mayo del '68 muchos periodistas en distintos lugares del mundo, apelando al título de la novela de Hemingway. Así recordaba también Héctor Schmucler, otro de los hacedores de Pasado y Presente, el acontecimiento argentino: "El Cordobazo fue una fiesta". Y añadía: "en el recuerdo de los pueblos hay actos fundantes que sólo se explican en la alegría desbordante de la fiesta. Momentos de fusión, de reconocimiento colectivo, de restitución de lo absoluto, de esperanza realizada. Como toda fiesta [...] el Cordobazo fue fugaz" (Schmucler, 1994).

Son coyunturas fugaces de la historia en las que los sujetos salen de sus rutinas laborales, estudiantiles, institucionales, momentos históricos donde las formas dejan de corresponderse con los contenidos, donde estalla la "normalidad", en que predomina ese sentimiento colectivo de que los poderosos no son tan poderosos, de que las masas populares no están condenadas por fuerza alguna del destino a la pasividad y a la obediencia. Momentos históricos donde parece que todo es posible, que basta con desearlo colectivamente para que pueda hacerse realidad.

Aricó señalaba en la "Advertencia" a su antología *Francia 1968* que esos textos hablaban a los lectores argentinos y latinoamericanos de la actualidad de la revolución, de una revolución que adquiría contornos internacionales y que sacudía al primer mundo, como también al segundo y al tercero. "Todo era posible en mayo de 1968", escribe. Pero se corrige y afirma, ahora en tiempo presente: "todo es posible". Es que Aricó está escribiendo esperanzado estas líneas en marzo de 1969, en la misma ciudad de Córdoba, en los días mismos que el Cordobazo se está gestando, cuando obreros y estudiantes, como en el Mayo francés, iban convergiendo unos con otros en sus demandas y sus luchas. Aricó preguntaba irónicamente respecto de las jornadas de Mayo: "¿Un sueño de anarquistas alemanes? ¿Un sueño de jóvenes obreros ajenos a la tradición de luchas del pueblo francés, un sueño de intelectuales enfebrecidos?". Y respondía negativamente, porque entendía que la convergencia entre el movimiento estudiantil y cultural contestatario con la clase trabajadora era la condición de posibilidad de la actualidad de la revolución. Debía tomarse, al contrario, "debida cuenta de la repercusión que las luchas estudiantiles y la huelga proletaria francesas han tenido en el tercer mundo".

En ese sentido, el Cordobazo, como el Mayo francés, más allá de sus evidentes diferencias, fueron momentos singulares de encuentro y mutua potenciación entre dos sujetos, dos movimientos y, por lo tanto, dos tradiciones: la obrera y la juvenil. Sin duda, en cada acontecimiento se han anudado de modo diverso.

Juan Carlos Torre, otro de los exponentes de Pasado y Presente, explicó el Cordobazo como el momento de encuentro de esos

dos sujetos. Sostuvo que fue, al mismo tiempo, la culminación de una resistencia de los trabajadores iniciada quince años antes, por un lado, y por otro el comienzo de una gesta de la generación de los jóvenes.

Para los trabajadores, representaba la culminación de la prolongada resistencia que, a partir de 1955, habían opuesto a los más diversos proyectos políticos que se propusieron, desde el poder, dismantelar los cambios sociales e institucionales promovidos durante los diez años que duró el régimen peronista. Para los jóvenes era el comienzo desafiante de la vasta empresa que apuntaba a subvertir a sangre y fuego un orden que aparecía a sus ojos como moralmente injusto y políticamente cínico y corrupto (Torre, 1994).

Sus móviles eran, por lo tanto, diversos:

Si la política de los intereses de clase era la que había inspirado a los trabajadores la defensa de sus posiciones adquiridas frente a los intentos por arrebatarlas, la revuelta moral era, entretanto, la que guiaría con pulso firme la cruzada armada que los jóvenes lanzarían contra las prácticas y los valores establecidos (Torre, 1994).

Fueron estos hijos de la clase media los que leían los libros y las revistas del Mayo francés, los que se miraban en el espejo de otras juventudes insurgentes en el mundo mientras se constituían como sujeto colectivo. Fue esa generación de los años sesenta, forjada en un vertiginoso proceso de modernización cultural y social, la que emergió rebelándose contra el extrañamiento respecto de los valores y las instituciones en la que se había formado. Esa juventud, hija del antiperonismo, tuvo que consumir un parricidio para acercarse a la clase obrera peronista. Y apeló a la violencia revolucionaria en nombre de la vuelta de Perón a la Argentina.

Si bien en 1969 se había abierto una brecha entre la dirigencia sindical y la clase trabajadora que permitió una eclosión como el Cordobazo, aquella resistió siempre dentro de los valores de la cultura política peronista. Sus ideas-fuerza fueron el nacionalismo, la justicia social y la conciliación de clases. Los jóvenes, en cambio, levantaron su condena moral al régimen político argentino apelando al mito de un peronismo revolucionario. A pesar de ello, su utopía armada no concitó el apoyo de los trabajadores peronistas ni de las clases medias que las habían prolijado.

Aricó escribía en marzo de 1969 desde una visión esperanzada sobre la actualidad de la revolución, que era el encuentro entre la clase trabajadora con la juventud y los sectores medios, la realización de la hegemonía gramsciana. Torre ofrecía, veinte años después, esta reconstrucción tan lúcida como desencantada. El Cordobazo fue una fiesta porque fue el momento feliz del encuentro entre esos actores. En cambio, la tragedia argentina de mediados de los años setenta hunde sus raíces en su desencuentro.

Bibliografía

- Altamirano, Carlos 1994 "Memoria del 69" en *Punto de Vista* (Buenos Aires) N° 49, agosto.
- Anguita, Eduardo y Caparrós, Martín 1997 *La Voluntad* (Buenos Aires: Norma) Vol. I.
- Balvé, Beba; Marín, Juan Carlos et al. 1973 *Lucha de calles, lucha de clases* (Buenos Aires: La Rosa Blindada).
- Bergstein, Jorge 1986 *El "Cordobazo"* (Buenos Aires: Cartago).
- Brennan, James P. 1996 *El Cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba* (Buenos Aires: Sudamericana).
- Caballero, Oscar 1968 "Ideólogos. Los mil ojos del doctor Marcuse" en *Primera Plana*, N° 283, 28 de mayo.
- Casullo, Nicolás 1998 *París 68. Las escrituras, el recuerdo y el olvido* (Buenos Aires: Manantial).
- CGT 1968 "Hablan los dirigentes estudiantiles" (Buenos Aires) N° 33, 12 al 19 de diciembre.
- Delich, Francisco 1970 *Crisis y protesta social. Córdoba, mayo de 1969* (Buenos Aires: Signos).
- Estrategia* 1968a "Francia" (Buenos Aires) N° 7, septiembre.
- Estrategia* 1968b (Buenos Aires) N° 8, diciembre.
- Garaudy, Roger 1968 "La revuelta y la revolución" en *Cuadernos de Cultura*, N° 7, septiembre-octubre.
- Gèze, François y Labrousse, Alain 1975 *Argentine. Revolution et contre-revolutions* (París: Seuil).
- González Trejo, Horacio 1969 *Argentina: tiempo de violencia* (Buenos Aires: Carlos Pérez).

- Gordillo, Mónica 1996 *Córdoba en los '60. La experiencia del sindicalismo combativo* (Córdoba: UNC).
- Guerrero, Diana 1973 "El Mayo francés" en *Transformaciones* (Centro Editor de América Latina) N° 42.
- Hobsbawm, Eric 1995 *Historia del siglo XX* (Barcelona: Crítica).
- Hora, Roy y Trímboli, Javier 1994 *Pensar la Argentina* (Buenos Aires: El Cielo por Asalto).
- James, Daniel 1990 *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina 1946-1976* (Buenos Aires: Sudamericana).
- Longoni, Ana y Mestman, Mariano 2000 *Del Di Tella a "Tucumán Arde". Vanguardia artística y política en el '68 argentino* (Buenos Aires: El Cielo por Asalto).
- Page, Joseph 1984 *Perón* (Buenos Aires: Javier Vergara) Tomo II, N° 32.
- Sarlo, Beatriz 1998 "Mayo 68/Mayo 98. Tríptico revolucionario" en *La Nación* (Buenos Aires) 12 de abril.
- Schmucler, Héctor 1994 "El Cordobazo, la Universidad, la memoria" en *Estudios* (Córdoba) N° 4, julio-diciembre.
- Selser, Gregorio 1969 "El Cordobazo: vísperas y rescoldos del estallido" en *Cuadernos de Marcha*, N° 27, julio.
- Seoane, María 1991 *Todo o nada. La historia secreta y la historia pública del jefe guerrillero Mario Roberto Santucho* (Buenos Aires: Planeta).
- Torre, Juan Carlos 1994 "A partir del Cordobazo" en *Estudios* (Córdoba) N° 4, julio-diciembre.

Notas

- 1 Sobre el Cordobazo, ver Delich (1970), Balvé et al. (1973), Brennan (1996) y Gordillo (1996).
- 2 "Comme mai '68 en France, le 'Cordobazo' a pris, en Argentine, les proportions d'un mythe" (Gèze y Labrousse, 1975: 118).
- 3 La célebre foto de tapa de *L'Express* de mayo de 1968 con el estudiante que arroja un proyectil en dirección al objetivo ha recorrido el mundo, quedando grabada en la memoria colectiva como una de las imágenes emblemáticas del Mayo francés. Hay, efectivamente, numerosas imágenes del Cordobazo que se asemejan.
- 4 El general francés viajó incluso a la ciudad de Córdoba, donde surgieron

incidentes entre los peronistas movilizados y la policía, quedando un saldo de 29 heridos.

5 Ver el dossier "Francia" en *Estrategia* (1968a) y el dossier sobre movimiento estudiantil en *Estrategia* (1968b).

6 Continúa Bensaïd: "Nos sorprendió porque para nosotros ardía el mundo. Creo que en ese comentario hay una síntesis precisa de lo que él entendía por violencia. ¿Existe acaso mayor tensión violenta que el momento en que millones han decidido romper el diálogo político y pasar a la acción directa al movilizarse? Pero Santucho pensaba en la violencia de la guerra de guerrillas, estratégica, de las élites. En cierto sentido, una fuerza de choque que superara la voluntad inmediata de millones, para asaltar el poder" (Seoane, 1991: 113).

7 La antología lleva una "Advertencia" del editor firmada con las iniciales "E.L." y un estudio introductorio del anarquista uruguayo Rubén G. Prieto. Es probable que se trate de un libro de edición uruguayo pero impreso en Buenos Aires.

8 Otros textos clave de este universo político-intelectual arribaron al mercado de libros argentino desde otros países latinoamericanos: el libro de Daniel Bensaïd y Henri Weber, *Mai 68: une répétition générale que había editado Maspero* en 1968 y que apareció como *Mayo 68: un ensayo general*, traducido por la editorial Era de México en 1969; el volumen de Alexander Cockburn y Robin Blackburn, *Student Power*, que publicó Penguin en 1969 y que tradujo Tiempo Nuevo de Caracas un año des-

pués como *Poder estudiantil*; la antología *Revolución en Europa. No es más que el comienzo*, con textos de Giorgio Backhaus, Rudi Dutschke, Cohn-Bendit y Vigier, editado por Aportes de Montevideo en 1969; y el volumen de Daniel y Gabriel Cohn-Bendit, *Le Gauchisme. Remède a la maladie senile du communisme*, que editó Senil en 1968 y que fue traducido como *El izquierdismo: remedio a la enfermedad senil del comunismo* (Montevideo/Buenos Aires: Acción Directa, 1971). A pesar del declive que había conocido el anarquismo medio siglo atrás en toda América Latina, en el Uruguay aún se mantenía viva una corriente político-cultural libertaria. Los dos últimos textos citados, así como el *Cuaderno de Marcha* sobre los estudiantes, son un testimonio de ello.

9 Durante los días de mayo de 1968, el influyente semanario político-periodístico *Primera Plana* le dedicaba una página a Marcuse, presentándolo como el "rector ideológico" de los estudiantes "que acaban de conmover París y Madrid, El Cairo, Roma, Berlín, Praga, Varsovia" (Caballero, 1968: 61). Aunque en esos días su nombre alcanzó los diarios y revistas de actualidad, su obra era conocida entre nosotros al menos desde mediados de la década, gracias a las ediciones mexicanas de Joaquín Mortiz. Si bien la primera edición argentina de Marcuse data de 1967, las ediciones de sus libros se van a precipitar entre 1968 y 1969. Aunque la recepción argentina de Marcuse escapa a los marcos de esta presentación, una simple relación de sus ediciones argentinas de aquellos

años brinda una idea de su vertiginosa irradiación: *Cultura y Sociedad* (Buenos Aires: Sur, 1967); *Marcuse polémico* (Buenos Aires: Jorge Álvarez, 1968); *La sociedad industrial y el marxismo* (Buenos Aires: Quintaria, 1969); *Marx y el trabajo alienado* (Buenos Aires, 1969); *Ensayo sobre la liberación* (Gutiérrez, 1969); *La sociedad carnívora* (Buenos Aires: Galerna, 1975); *Discusión con los marxistas* (Buenos Aires: Proceso, 1970); Jean-Michel Palmier, *Introducción a Marcuse* (Buenos Aires: De la Flor, 1970).

10 Así, una antología de textos de Deodoro Roca, “el verbo de la Reforma Universitaria”, que reunió Horacio Sanguinetti, se tituló *Prohibido Prohibir* (Buenos Aires: La Bastilla, 1972).

11 Diana Guerrero había publicado en 1973 “El Mayo francés” en el número 42 de *Transformaciones*, del Centro Editor de América Latina. Posteriormente, fue detenida-desaparecida el 27 de julio de 1976.

Experiencias de los movimientos sociales

Venezuela: construyendo otra cultura



La educación en Venezuela: batallas
por la descolonización cultural
Entrevista a Silio Sánchez
por Claudia Korol

La educación en Venezuela: batallas por la descolonización cultural

Entrevista a Silio Sánchez

Claudia Korol

Silio Sánchez es abogado, graduado en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Actualmente se desempeña como Coordinador Nacional del Programa de Formación de Grado en Estudios Jurídicos de la Universidad Bolivariana de Venezuela, una experiencia creada en el año 2003 en el marco del proceso bolivariano. En este diálogo, Silio Sánchez reflexiona sobre los desafíos que implican las batallas por la descolonización y democratización de los saberes, como parte de los esfuerzos de creación de un poder popular.

Palabras clave

Educación, descolonización cultural, Misión Cultura, mujer, Universidad Bolivariana.

Keywords

Education, cultural decolonization, Misión Cultura, women, Bolivarian University.

Las misiones: universalización del acceso a la educación

¿Cuáles son los ejes centrales de las batallas por una educación liberadora en el contexto del proceso bolivariano?

Es un debate muy interesante y complejo. Chávez propone la *universalización del acceso a la educación*. Dentro del gobierno hay posturas de derecha y de izquierda. Lo importante es que el modelo educativo de la derecha no funciona para incluir a todos. Entonces el objetivo planteado de hacer *una educación para todos y todas* que no excluya, que no sea para una elite, ha implicado que los enfoques, los métodos, los principios que resultan más propicios son los que propone la izquierda, la educación popular: el rescate de lo colectivo, el docente no como transmisor de conocimientos sino como un facilitador de un proceso que reconoce el saber de la comunidad.

En la batalla por la universalización del derecho a la educación, desde el gobierno bolivariano se ha generado una educación pública alternativa por medio de las “misiones educativas”. En tres años, desde la Misión Robinson, se logró alfabetizar a 1.800.000 personas, declarando al país libre de analfabetismo. Se lanzó la Misión Ribas para las personas que no hubieran podido ingresar a la escuela básica, al bachillerato. En la escuela media se incluyó a más de 2 millones de personas; y en la universidad, mediante la Misión Sucre, a 400 mil personas. Hablamos de más de 4 millones de personas sobre una población de 20 millones.

Todas estas misiones empezaron a competir con la educación privada, que era un gran negocio. Porque si la educación pública no funciona, entonces es tremendo negocio montar en cualquier espacio un salón con unos profesores mal pagados y, además, sin ningún patrón de calidad educativo.

Dentro del proceso de descolonización en la universidad, hay una misión —que creo es la más avanzada— que es la Misión Cultura, que promueve que el estudiante sea un activista cultural de la comunidad —o deba serlo dentro del proceso de estudio. El estudiante inicia la Misión realizando su propia autobiografía, con lo que se intenta sistematizar su historia. Es un proceso muy significativo: gente que nunca pensó que su historia podría tener un valor narrativo, como cuento, como vivencia, como experiencia. Así, ves autobiografías que son literatura. La gente recoge sus anécdotas de vida de una manera impresionantemente hermosa. Es un proceso muy rico en el rescate cultural, para que la gente valore lo que es, su esencia, su vida, su historia.

Todas las misiones educativas tendieron a la socialización, aunque reproduciendo también mucho del modelo colonial. El sentido colonial de nuestra educación todavía es muy duro. Seguimos evaluando con nota, lo que es patético, pero el sistema legal lo sigue imponiendo. Hay cierta parcialización del conocimiento, pero hay un enfoque mucho más latinoamericano.

Esos procesos educativos tienen avances fundamentales que se dan en la comunidad, y eso ha implicado en buena medida una reconstrucción del sujeto colectivo. Plantean el trabajo con los problemas de la comunidad, el aprendizaje significativo a partir de la solución de problemas reales, y fundamentalmente están basados en metodologías que han surgido en Latinoamérica como la Investigación-Acción Participativa, que tienen un sentido muy político. Son métodos que parten de desconocer la educación colonial –donde la comunidad es mirada como un objeto de estudio– para plantearse la comunidad como un sujeto investigador, parte de la investigación, constructor de la investigación junto con el estudiantado. Es una educación no para hacer tesis y guardarlas, sino para solucionar problemas reales de la comunidad.

Estas misiones han ayudado muchísimo a la reconstrucción del sujeto colectivo: una comunidad donde ya casi nadie se veía, ya nadie se hablaba, ahora se encuentra para estudiar, discutir sus problemas. Las misiones se dan dentro de los mismos espacios de la comunidad. En una casa grande, o en la iglesia, o en algún espacio que sirva para el encuentro colectivo. Mayoritariamente son los espacios de los liceos los que se usan para este proceso educativo dentro de la comunidad.

Dentro de la realidad de las mayorías nacionales que no están organizadas, que no participan históricamente de los procesos –la mayoría nacional lamentablemente es la movida por el sentido común impuesto por los medios de comunicación y la cultura de consumo–, las misiones se convirtieron en un espacio de movilización social impresionante y de construcción de sujeto colectivo. En esa mayoría no orgánica, no colectiva, individualizada, las misiones se han transformado justamente en espacios de empoderamiento, de participación social y política de las comunidades.

En cada comunidad hay un espacio donde sus integrantes están aprendiendo a leer y a escribir; hay un espacio donde la gente está estudiando bachillerato, donde está la universidad, un comité de salud que discute cómo se administra el centro de salud del barrio; hay un comité de agua que decide cómo se administra este elemento. Y han sido los principios, la metodología propuesta desde la educación popular, los que han dado la posibilidad real de concretar la universalización del acceso a la educación.

Esto es importante porque, en mi opinión y en la de algunos compañeros, en el proceso político venezolano el sector principal de la lucha es el comunitario. No es el sector de los trabajadores —que, aunque lógicamente tiene importancia en el escenario público y de debate político, no es el sector fundamental. Tampoco lo son los movimientos sociales en este momento. El movimiento campesino —el Frente Campesino Ezequiel Zamora, la coordinadora agraria— tiene una importancia indiscutible; pero es sumamente evidente que el sujeto fundamental de la transformación es el comunitario. Entonces se viene promoviendo la creación del Consejo Comunal en las comunidades. El tema territorial ha sido fundamental en la construcción del sujeto histórico de la lucha y transformación revolucionaria venezolana.

Y es interesante ver que en esa construcción de sujeto histórico la mujer cobra un valor esencial, porque en la realidad machista, en la que es la mujer la que se queda en la casa y el hombre sale a trabajar, la mujer está en la comunidad. Entonces las casas de la alimentación de la comunidad son impulsadas por mujeres; los espacios educativos, el Consejo Comunal, todos estos espacios de construcción comunitaria tienen como protagonistas a muchísimas mujeres que antes no tenían participación política y que empiezan a asumir un papel protagónico, esencial.

La experiencia de la Universidad Bolivariana de Venezuela

¿Cómo se han dado estos debates en la experiencia de la Universidad Bolivariana?

Esto resulta muy interesante para ver cómo es el proceso: Chávez crea la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV). Cuando la va a inaugurar, pregunta: “¿Cuánta gente entra acá?”. Le dicen: “En las cuatro sedes, 12 mil, pero podemos llegar a 20 mil en unos dos años”. Pregunta: “¿Cuántos hay por fuera?”, y le responden: “400 mil”. Menos del 5% se lograba incluir. Entonces Chávez dice: “Esto no da respuesta al problema”, y en ese mismo acto político propone hacer un programa de gobierno, una misión (propuso que se llamara Misión Sucre), y dice que *hay que incluir a los 400 mil en tres años*. Al ministerio que le toca dice: “¿Cómo hacemos? Esto es una locura, no se puede...” y otros dicen, desde el miedo del burócrata: “No, cómo le vas a decir que no al presidente. Eso es lo que hay que hacer. Habrá que pedirle más presupuesto. Miremos... de dónde vamos a sacar profesionales para tantos espacios educativos”.

Había quienes preguntaban: “¿Con qué docentes lo hacemos? ¿En qué espacios lo hacemos? ¿Cómo hacemos con el transporte, con la comida?”.

La propuesta de la izquierda termina siendo la que da solución. ¿De dónde sacamos para construir tantos edificios? Bueno, las mismas comunidades tienen edificios. No hagamos más espacios, mejoremos los espacios de nuestros propios chicos, de nuestra comunidad. Usemos los recursos endógenos de la gente. ¿Y el problema del transporte? Si la gente estudia donde vive, no necesita transporte; no necesita un comedor.

«¿De dónde sacamos para construir tantos edificios? Bueno, las mismas comunidades tienen edificios. No hagamos más espacios, mejoremos los espacios de nuestros propios chicos, de nuestra comunidad»

Frente al desafío, se lograron realmente posicionar las posturas de izquierda con las propuestas de Paulo Freire, de Simón Rodríguez –un luchador independentista y maestro de Simón Bolívar que plantea el *aprender haciendo*. Dichas propuestas educativas cobran mucha fuerza para lograr esas metas.

En el caso de la Universidad Bolivariana de Venezuela, dentro del currículo, nosotros en estudios jurídicos y también en algunos otros

programas de formación hemos dado un debate mucho más serio sobre el carácter intercultural de la educación, reconociendo que existe una diversidad cultural evidente, no sólo desde los grupos étnicos que componen originalmente estos pueblos y el mestizaje que se dio durante la invasión y colonización que vivimos, sino también a partir de la movilización social de los mismos latinoamericanos. Es el caso de los bolivianos, de los peruanos, de los 6 millones de colombianos que viven en Venezuela. Hay barrios completos de colombianos que tienen una realidad cultural diferente.

La educación bolivariana se plantea el reconocimiento de esa diversidad cultural. Nos hemos planteado un reto mucho más radical, que es construir un currículo en el área del derecho, que plantee realmente el reconocimiento del derecho propio, del poder de las comunidades para hacer sus normativas, sus formas de convivencia, sus sanciones sociales. Esto nos ha implicado cambiar hasta la denominación de lo que se llamaba “materia” y replantear el sentido del estudio, a partir no

de elementos teóricos que vienen de parámetros occidentales y de la fragmentación del conocimiento que se propone desde la cultura eurocéntrica, sino del reconocimiento de elementos de la realidad.

Decimos, por ejemplo, existe una sociedad, un Estado y una Constitución, pero ese Estado y esa Constitución dependen de la sociedad en la que vivimos, de las relaciones de poder que allí se juegan. Entonces la unidad curricular no se llama “Derecho Constitucional” sino “Sociedad, Estado y Constitución”.

Si estudiamos el “Derecho del Trabajo”, vas a estudiar el derecho de la explotación que se creó en Europa, fundamentalmente a partir de la Revolución Francesa, que se traslada a todos nuestros países desde los mecanismos de poder del neoliberalismo y del capitalismo. Nosotros decimos: estudiemos “Sistema Económico, Financiero y Mundo Productivo”, porque el trabajo está muy ligado al sistema económico, al sistema financiero y a las formas de producir en un país. Estudiemos primero qué es el hecho del trabajo en la sociedad. Si lo hacemos así, nos vamos a encontrar con que en Venezuela hay mil formas de trabajo que no son reguladas jurídicamente por las normas del trabajo; por ejemplo, encontramos el trabajo del hombre y de la mujer en la casa –ahora con la reforma constitucional, Chávez pretendía que fuera reconocido como trabajo y que tuviese derecho a una jubilación, a una especie de pensión laboral. Encontramos también las formas de trabajo colectivo de nuestros pueblos originarios que perviven enteramente. El *ganando lomo* de los pueblos nuestros, o la *cayapa*, que son formas de trabajo colectivo de la comunidad. *Ganando lomo*, en la zona de Falcón, implica que la comunidad en las épocas de cultivo o de cosecha se ayudan unos entre otros, y en la medida en que yo ayudo a otro estoy ganando *el lomo del otro* para mi propio trabajo.

La construcción de normas, de mecanismos de convivencia y de sanciones sociales se expresa en toda cultura. En una unidad curricular, lo que se estudiaba como “Derecho Penal”, lo estudiamos como “Aspectos Coercitivos de la Norma y Sanción Social”. Yo puedo estudiar los aspectos coercitivos de los tres principios básicos de la cultura Inca, puedo ver cuáles son los aspectos coercitivos de un pueblo originario nuestro y las sanciones sociales que ellos imponen; pero no puedo estudiar derecho penal de una comunidad indígena, ni derecho penal de una cultura que probablemente no sea penalista. Entonces decimos: *estudiemos desde la realidad*, que debe ser el punto en el cual se ponga a prueba y se reflexione la teoría que se está estudiando.

No podemos estudiar el derecho desde las teorías del derecho más formalistas y más positivistas. Si se sigue estudiando el dere-

cho al trabajo desde los libros escritos hasta ahora, continuaremos formando gente para la derecha, para el capitalismo.

Una postura fue: estudiemos el derecho desde las distintas disciplinas sociales. Entonces ya con la sociología, las ciencias políticas y la economía, se entiende más qué es el derecho. Y si sé que en la Asamblea Nacional, en el Congreso, quienes están son principalmente hombres y no mujeres, son principalmente patronos, dueños de tierra y no trabajadores o campesinos, pues empiezo a entender cómo es que se configura la ley y cómo es una expresión de las elites.

Desde las ciencias sociales podemos entender algunas cosas más, pero para nosotros el punto no es cómo entenderlo multidisciplinariamente. Todas las semanas los estudiantes tienen ocho horas de trabajo comunitario, sobre la base de la Investigación-Acción Participativa, como metodología fundamental. Con la comunidad los estudiantes y los profesores tienen que definir los objetivos y los logros que se pretenden alcanzar con la investigación. Pretendiendo decir que no es la universidad la que debe decirse a sí misma cómo transformarse sino que son *la comunidad y la universidad* las que deben hacerlo. El conocimiento debe ser una herramienta para la decisión de la comunidad. El planteamiento final es estudiar el derecho desde una realidad y no desde una teoría. El derecho como expresión de la cultura.

¿Con qué dificultades se enfrentan al intentar desarrollar esta experiencia?

Tenemos serios inconvenientes, porque esta es una visión innovadora que de alguna manera nuestros profesores egresados de las universidades tradicionales no manejan. Muchas veces los estudiantes están más dispuestos a asumirla. Entonces trabajamos mucho con los estudiantes en discutir la metodología, para que ellos la manejen también.

La crisis en la que vivimos también se relaciona con temas complejos. Este proceso de universalización de la educación, con estos nuevos métodos que reconocen el saber popular, tiene que asumir también, por ejemplo, que nosotros tenemos estudiantes indígenas que siguen estudiando nuestro derecho. Aunque incluimos unidades de antropología jurídica, de complejidad jurídica, el tema del sistema jurídico y pueblos indígenas sigue siendo en gran medida una reproducción de lo colonial. Es un debate bien duro que estamos dando.

Nuestro último consejo de coordinación, con participación estudiantil y docente de todo el país –porque este es un programa municipalizado que se encuentra en 250 municipios–, planteó caminar

«Estudiemos primero qué es el hecho del trabajo. Si lo hacemos así, nos vamos a encontrar con que en Venezuela hay mil formas de trabajo que no son reguladas jurídicamente por las normas del trabajo»

hacia un currículum base, un currículum mínimo y un currículum complementario que se construye en cada comunidad, en cada contexto, por los estudiantes, los docentes y la comunidad.

El otro debate es que, dentro de la teoría social, o dentro de los debates de la teoría sobre los problemas sociales o de la realidad social, nos encontramos con que los sociólogos y los investigadores son en alguna medida una elite. Nos encontramos con

la intervención de este sujeto, el profesional de la universidad tradicional, transculturizado por esa educación dominadora (aunque vemos también investigadores muy comprometidos con realidades concretas).

Mucha de la teoría con la que se puede estudiar derecho se escribe con una visión de clase que no se corresponde con las mayorías. Justifica todo un ordenamiento de la

violación de derechos humanos y de la esclavitud.

Siempre han existido luchas sociales detrás de la construcción del derecho, pero paralelamente avanza en el mundo la criminalización de estas luchas cuando se monta el Estado burgués como nuevo modelo de represión y de poder que viene criminalizando tales procesos. Es un debate duro y difícil el que establecemos con compañeros profesionales para asumir esta premisa, y para que estén dispuestos a acompañar las luchas sociales más allá de su legalidad o incluso contra su legalidad. Entonces ¿desde dónde construimos teoría que nos sirva para que un nuevo profesional esté comprometido de verdad con esa realidad? Sólo construyendo esas teorías con los excluidos, con los oprimidos, sistematizando la realidad a partir de la propia experiencia, podemos hacerlo.

Si la teoría social no se construye desde las mismas comunidades, desde el mismo sujeto excluido y oprimido, tampoco se logrará una educación para la liberación, de compromiso con la construcción de justicia social.

Se asumen todos estos paradigmas, pero encontramos limitaciones grandísimas: por ejemplo, yo trabajo con los conserjes de edificios, y puedo describirles una gran cantidad de cuestiones de las problemáticas de los conserjes que no están en ningún libro de derecho. Esto lo discuto con los estudiantes y los profesores: en los contratos les prohíben a los hijos del conserje visitar las áreas comunes del edificio. A las mujeres les prohíben quedar embarazadas mientras sean conserjes; les prohíben salir en sus quince horas de servicio. Eso es esclavitud, porque ellas duermen en ese sitio; las otras nueve horas son las de descanso. Si alguien roba ellas tienen que salir, porque tienen función de vigilancia; y si no salen son presumidas culpables y son las primeras a las que llaman en una investigación. En una relación obrero-patrón, normalmente hay un patrón y un obrero, o un patrón y varios obreros. Pero aquí casi todos los propietarios de apartamentos se creen jefes y patrones del conserje. Son entonces treinta, cuarenta patrones y un solo trabajador. Se trata de una relación de esclavitud profunda; y eso no está en ningún libro de derecho.

Entonces, venimos haciendo una alianza con diferentes sectores en lucha, pidiéndoles que nos ayuden a sistematizar esos conocimientos y que ellos formen parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos abogados, a ver si logramos que respondan realmente a un sentido y a una lógica de necesidad comunitaria y popular.

El papel de la universidades tradicionales

¿Cuál es el papel que están teniendo las universidades tradicionales, y específicamente el movimiento estudiantil, en el proceso bolivariano?

La universidad tradicionalmente no ha hecho más que reproducir el modelo colonial de explotación, eurocéntrico, que se impuso en todas las universidades latinoamericanas. Yo participé particularmente en 2000-2001, junto con otros compañeros, en la toma del Consejo Universitario, que fue una de las últimas expresiones fuertes –radicales– que se vivieron contra la exclusión en la universidad.

Las universidades venezolanas hacen pruebas internas para el ingreso y las cobran (llegan a cobrar hasta 50 dólares por una prueba interna). Entonces se transforma en una especie de lotería: el joven que tiene dinero presenta varias, hasta que queda. Además hace cursos que cuestan hasta 500 dólares para presentar las pruebas internas. El que tiene dinero tiene muchas más opciones.

Por otra parte, es difícil sostenerse en la universidad. Después de Mayo del '68 –que tuvo algunas repercusiones en las universidades latinoamericanas–, se terminó en Venezuela con una intervención militar en la que quitaron las residencias estudiantiles, y se produjo el desmejoramiento de todos los servicios de comida, etc. El que estudia en una universidad y no tiene dinero no se puede sostener. La universidad se ha ido elitizando muchísimo.

El mismo Consejo Nacional de Universidades –que es el organismo de todos los rectores de universidades públicas y privadas– reconoce que la universidad pública tiene un problema gravísimo de exclusión. La relación está en un 80% de estudiantes de clase media y media-alta y un 20% de clase media-baja y baja. Entonces la universidad hoy es un espacio de las elites fundamentalmente económicas del país.

En ese proceso, el tema de la autonomía se ha aprovechado mucho, y es un elemento bien contradictorio, porque al final no es sólo autonomía del gobierno –que yo defendería mucho–, sino autonomía de la comunidad, del país. Es no rendirle cuentas a nadie. Es autonomía para ponerle una barrera al pobre, cobrándole una prueba interna al ingreso. Tenemos posturas del gobierno como la prohibición de las pruebas internas, que ellos acusan de constituir una violación a la autonomía. Pero la prueba interna implica una violación a un derecho humano, y además es una forma de ingresos propios para la universidad, porque cobrando pruebas internas (con 5 mil jóvenes que se presentan, de los cuales quedan 100 ó 200) la universidad obtiene un ingreso cuantioso. Es una forma de renta de la universidad; es un proceso especulativo y de exclusión muy fuerte. Algo justificado por algunas federaciones de estudiantes dentro de la universidad, que ni siquiera se pronuncian, que se han convertido en parte del aparato de la derecha del país y que juegan un papel fundamental en la derecha venezolana.

También dentro de este proceso general hay enormes contradicciones. Sólo por dar un ejemplo, en el tema presupuestario, el programa con el que yo trabajo tiene 60 mil estudiantes en más de 250 municipios del país, y un presupuesto menor a los 50 mil dólares. Pero la Universidad Central de Venezuela, que es una universidad autónoma, maneja 400 mil dólares. Entonces hay una diferencia garrafal entre el presupuesto que tiene una universidad como ésta, que tiene muchos más gastos, que es municipalizada, y la universidad autónoma. Son contradicciones que el gobierno, por no enfrentar a esa derecha que lo ataca permanentemente, no asume.

La inversión en un estudiante de la municipalización es de 2 mil dólares y la que se hace en un estudiante de las universidades autónomas llega a los 10 mil dólares. Son contradicciones en el mismo proceso.

¿Qué experiencias van desarrollando en la creación de teoría social desde las comunidades?

Un ejemplo de esto es el trabajo de unos materiales de información discutidos con los inquilinos. Un grupo social que es usualmente desalojado de sus viviendas, porque se prioriza el derecho a la propiedad por encima del derecho al hogar, el derecho a la familia, a la cultura.

Tú tienes toda una historia (25, 30, 40 años viviendo en la misma vivienda) y de pronto el propietario te va a sacar porque no tienes para pagarle el bien. Ya lo has pagado cuatro veces con el alquiler, pero igual te desalojan.

Nosotros damos un debate muy duro, y trabajamos con ellos. Paramos desalojos con una actuación masiva del movimiento social y el apoyo de algunos universitarios comprometidos. En el debate, vamos sistematizando esta experiencia y podemos decir: "no hay libro" que plantee el problema del derecho a la vivienda con el sentido de hogar, de historia, de cultura. Vamos viendo cómo toda esta teoría se construye desde esos grupos sociales oprimidos y excluidos, para que realmente sirva a un proceso de formación en función de la justicia social y no a la reproducción de un modelo, que es lo que viene haciendo la universidad tradicionalmente.

El programa con el que trabajo (Programa de Formación de Grado en Estudios Jurídicos) plantea el estudio del derecho indígena, el estudio de antropología, para entender el derecho como una construcción cultural. Tenemos muchas unidades curriculares que tratan ese tema; pero igual se enseña el derecho del Estado, el derecho positivista, porque también tenemos que darles esa herramienta a los estudiantes. Además ellos lo exigen, porque responden a la cultura tradicional en alguna medida, al sentido común que imponen hoy los medios de comunicación.

Tenemos estudiantes en algunas comunidades indígenas a las que hay que ir en un bote durante tres y hasta diez horas, y en las que debe quedarse un profesor dos días trabajando con varias unidades curriculares y con el proyecto comunitario desde el cual se estudia.

A pesar de estos esfuerzos, yo estoy seguro de que nosotros todavía estamos haciendo un ejercicio colonizador en nuestro pueblo. Y eso a mí me genera crisis, porque soy parte de ese Estado interventor. Pero también ese mismo Estado y ese modelo educativo ha dicho en nuestro país: "es mentira que el derecho a la educación superior no sea exigible como un derecho humano".

Cuando la derecha dice: "pero es que no todos pueden estudiar, porque una persona que no rinda bien académicamente no puede estudiar para ser médico porque va a ser un mal médico"; nosotros

les decimos: “ustedes son unos falsos, porque si vendieron los derechos humanos y el derecho a la educación como un derecho humano, por qué dicen que no todos pueden ahora”.

En este debate, el gobierno asume la posición de que todos deben tener derecho a la profesionalización. Claro, todavía estamos hablando de una profesionalización en parámetros de esa educación tradicional en muchos sentidos.

Ahora, nosotros le estamos demostrando a Occidente, a Estados Unidos y a Europa que ellos, que plantean el derecho humano a la educación, se lo niegan a muchos de sus conciudadanos porque supuestamente no tienen recursos económicos, a pesar de que tienen esas supuestas “economías favorecidas”. Nosotros decimos: “sí es posible” y todos la pueden tener. Es un problema de política. Entonces hay una verdadera lucha contrahegemónica. Contra la hegemonía que dice que no es posible, que dice que la exclusión tiene que existir. Nosotros le decimos: “eso es mentira”.

Pero hay otra lucha, que es emancipatoria, en la que afirmamos que el problema no es decir que sí pueden ingresar todos a ese tipo de educación. El problema es decir que hay otros tipos de educación muy diversos que pueden existir en nuestras poblaciones y que son tan válidos como todos esos otros modelos que nos vendieron desde Europa. Eso es lo realmente emancipatorio. Una educación que surja realmente de la gente, del empoderamiento, de comprender nuestra capacidad de construir conocimientos útiles para nuestra vida y nuestra convivencia, de construir colectivamente valores sociales.

Criminalización y derechos humanos

En defensa del MST brasileiro



**O caráter da criminalização dos movimentos
sociais no Brasil**

Cesar Sanson

O crime de ser MST

Leandro Gaspar Scalabrin

O caráter da criminalização dos movimentos sociais no Brasil

Cesar Sanson

Pesquisador do Centro de Pesquisa e Apoio aos Trabalhadores (CEPAT).
Mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Resumo

A fraqueza do governo transformou-o em repressor dos movimentos sociais.

Abstract

Government weakness turned it into social movements' repressor.

Palavras-chave

Rio Grande do Sul, movimentos sociais, reforma agrária, Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra.

Keywords

Rio Grande do Sul, social movements, agrarian reform, Movement of Rural Workers without Land.

O movimento social sempre cumpriu um papel civilizatório na sociedade brasileira. É ele quem impulsiona e provoca rupturas junto aos setores que concentram e se negam a distribuir riquezas. O golpe militar de 1964 no Brasil foi um golpe contra o movimento social. Uma reação à ascensão dos setores populares que lutavam pelas “reformas de base” e ameaçavam os privilégios da elite nacional associada ao capital transnacional.

Não é de hoje que o movimento social brasileiro é tratado como caso de polícia. A célebre afirmação de que “a questão social é uma questão de polícia” atribuída ao ex-presidente da República Velha, Washington Luís, permanece mais viva do que nunca. A direita brasileira demoniza os movimentos sociais. Acusa-o de violento, de baderneiro, de fora da lei. Pretende com isso assustar a sociedade, principalmente os setores da classe média, e ganhar o seu apoio. A direita assusta-se quando o povo sai às ruas e utilizando os meios de comunicação procura criminalizar os movimentos sociais e jogá-los contra a sociedade.

É o que está acontecendo nas últimas semanas¹ no sul do país. Uma articulação política, jurídica, econômica e militar promove uma ofensiva contra o movimento social da região. Essa ofensiva de tentativa de criminalização do movimento social não é isolada, acontece em outras regiões do país, mas nesse momento vem ganhando destaque no Estado do Rio Grande do Sul.

Os ataques ao movimento social no sul do país é uma resposta dos setores conservadores contra as lutas sociais que os movimentos vêm travando pela Reforma Agrária e contra grandes empresas transnacionais como Aracruz, Stora Enso, Syngenta, Monsanto e Bunge. O governo do Estado do Rio Grande do Sul é um governo de direita, corrupto e anti-ambiental. A governadora do Estado, Yeda Crusius, do PSDB, vem acumulando desgastes. Desde o início do seu mandato, a governadora atropelou todos os procedimentos legais para favorecer as empresas de celulose. O governo flexibilizou as exigências para liberação de plantio de eucalipto no Estado. Simultânea à briga com ambientalistas e movimentos sociais, gravações interceptadas pela Polícia Federal revelaram um forte esquema de corrupção no aparelho do Estado utilizando-se de empresas públicas.

As denúncias e os escândalos mergulharam o governo de Yeda no caos. Os movimentos sociais saíram às ruas pedindo o *impeachment* da governadora. Acusado de corrupção, o governo gaúcho, associando-se aos setores conservadores do Estado, o latifúndio e o agrogócio, elegeu como inimigo N^o 1 do seu governo o movimento social. Um governo ilegítimo e emparedado transformou-se em repressor. A governadora nomeou como comandante das forças policiais do Estado um conhecido inimigo dos movimentos sociais. Defensor da pena de morte e da reação a assaltos por parte dos cidadãos, o coronel e comandante Paulo Mendes é autor da máxima: “bandido tem que ir pro paredão mesmo”.

Articulado a esse processo de enfrentamento ao movimento social, o Conselho de promotores do Rio Grande do Sul, uma instância do judiciário do Estado, aprovou um relatório em que pede a dis-

solução do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Um dos promotores chegou a classificar o MST como “organização criminosa”.

Segundo o MST, trata-se da ofensiva jurídica mais dura da sua história. “Se retiramos o massacre de Eldorado do Carajás, esse é o fato mais marcante da história do movimento”, afirma Juvelino Strozake, advogado do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, para quem o relatório “é significativo por ser instância do Estado tentando limitar a organização popular. Só tivemos situações como essa, de proibir marchas, na ditadura”, afirma ele. No lugar do Ministério Público investigar os crimes que as empresas de celulose estão cometendo no Rio Grande do Sul persegue o MST. O pecado do MST é o de ser um movimento anti-capitalista e de esquerda. Algo não tolerado pela direita brasileira.

Movimentos sociais e governo Lula

A tentativa de desqualificação e criminalização do movimento social não se restringem ao Rio Grande do Sul. A estratégia dos setores conservadores ficou evidente ao longo da “Jornada Nacional de Lutas” puxada em todo o país pela Via Campesina e pela Assembléia Popular no mês de junho. O tom dado pela grande mídia foi de associar as iniciativas que tinham como foco o capital transnacional como ações de flagrante desrespeito a Lei. Os adjetivos utilizados foram “atrasados”, “invasores”, “violentos”.

Neste contexto, chama atenção a postura vacilante do governo Lula. Lula é a metasíntese do Brasil dos últimos 70 anos: um país moderno e conservador. A grande aposta foi a de que Lula no poder faria um governo sintonizado com o seu histórico de movimento social. Porém, o que se vê é a opção de Lula pela continuidade da modernização conservadora. Prevaleceu o Lula da lógica do desenvolvimentismo associado ao capital transnacional ajustado aos tempos da globalização, um governo que pratica o Pós-consenso de Washington, ou seja, junta o social com a ortodoxia econômica. Por um lado, mantém os fundamentos da disciplina fiscal e monetária e, por outro, políticas sociais de caráter compensatórias como o Bolsa-Família que resultam num apaziguamento da miséria.

O movimento social não transformou Lula em seu adversário político, mas as suas lutas são contra os rumos que o governo tomou e contra o que deixou de fazer. É nessa perspectiva que devem ser compreendidas as lutas sociais contra os grandes projetos encabeçados pelo governo, como as usinas hidrelétricas, a transposição do São Francisco e os temas dos transgênicos e do etanol.

Engana-se quem pensa que a criminalização dos movimentos sociais perdeu força no governo Lula. Pelo contrário, na medida em que o governo do Partido dos Trabalhadores (PT) optou por uma grande

coalizão que vai de setores da esquerda à direita, dissimulou os conflitos de classe e deu espaços para que os setores conservadores retomassem as suas velhas práticas de criminalizar as lutas sociais e as suas lideranças.

O ataque da direita às lutas sociais manifesta a força do movimento social brasileiro. Ao atingir os interesses dos setores privilegiados, questiona as profundas injustiças e a desigualdade e propõe medidas concretas para tornar o país melhor para todos e todas e não apenas para uma minoria. O caráter anti-capitalista e anti-imperialista do movimento social desperta a ira da direita. Ainda mais. É o movimento social que mantém aceso no país o debate político de um projeto de Nação, algo que os partidos deixaram para trás.

Nota

1 O artigo foi escrito fins de junho-princípios de julho.

O crime de ser MST

Leandro Gaspar Scalabrin

Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Subseção Passo Fundo (RS).

Resumo

O artigo mostra que a criminalização do MST utiliza métodos e argumentos iguais aos da ditadura militar.

Abstract

The article develops that MST's criminalization uses methods and arguments equal than those of the military dictatorship.

Palavras-chave

Movimentos sociais, Rio Grande do Sul, estratégia institucional.

Keywords

Social movements, Rio Grande do Sul, institutional strategy.

*Há 500 anos caçamos índios e operários
Há 500 anos...
não somos nada violentos
Há 500 anos...
sonhamos a paz da Suécia
com suíças militares,
Há 500 anos
a polícia nos dispersa.*

Que país é este?

Affonso de Romano de Sant'Anna

Criminalizar significa considerar como crime. Considerar como crime atos e protestos ou os integrantes e líderes de movimentos sociais não é nenhuma novidade no Brasil ou na América Latina onde assassinatos, ameaças, difamação pela imprensa, prisões e espionagem de defensores de direitos humanos são fatos comuns que acontecem todos os dias.

Agora criminalizar a existência de um movimento social sob a acusação de “defender o socialismo”, “desenvolver a consciência revolucionária”, possuir uma “opção leninista” ou cultuar personalidades do comunismo como Karl Marx e Che Guevara eram fatos que não aconteciam no Brasil há mais de 20 anos, quando a campanha pelas “diretas já” anteciparam a derrocada da ditadura militar.

O Estado do Rio Grande do Sul (RS), conhecido no mundo todo por ter sediado os primeiros Fóruns Sociais Mundiais em Porto Alegre, passou a ter sobre si o foco de atenção dos democratas de todo o país por ser o palco de um conjunto de ações obscurantistas, dignas do auge da guerra fria e das ditaduras militares na América latina.

Em 11 de março de 2008 o Ministério Público Federal de Carazinho ingressou com ação criminal, aceita pela justiça federal, contra oito supostos integrantes do Movimento de Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) pelo cometimento de delitos contra a “Segurança Nacional”, com base na Lei de Segurança Nacional (LSN) promulgada em 1983, no final da ditadura militar. Segundo a denúncia, nos anos de 2004, 2005 e 2006, os grupamentos dos quais faziam parte os acusados “constituíram um ‘Estado paralelo’, com organização e leis próprias”, teriam resistido ao cumprimento de ordens judiciais, “ignoraram a legitimidade da Brigada Militar”, teriam utilizado táticas de “guerrilha rural” e estariam recebendo apoio de organizações “estrangeiras” tais como a Via Campesina e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC)². “Eles (os sem-terra) afrontaram o Estado de direito de forma sistemática” declarou a procuradora que ingressou com a ação em entrevista à imprensa. Estes fatos são

enquadrados nos 16, 17 e 20 da LSN, cujas penas máximas somadas são de 30 anos de reclusão e tratam dos “integrantes de grupamentos” que tenham por objetivo a mudança do Estado de Direito com uso de violência e de atos de terrorismo por inconformismo político.

Se todo mal traz um bem consigo, o mérito desta ação penal foi divulgar a existência de três documentos “secretos” que a procuradora usa como “provas” contra os acusados. O primeiro deles intitulado “Situação do MST na região norte do RS”, de maio de 2006, elaborado pelo coronel Waldir João Reis Cerutti, comandante do Comando Regional do Planalto da Brigada Militar (BM) do RS. Neste relatório do serviço secreto da BM (PM2), de caráter “Reservado”, demonstra que órgãos públicos federais como o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), um deputado estadual e movimentos sociais –MST, Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA)– são alvos de investigações dos serviços secretos da Polícia. Nas conclusões são apresentadas várias “teses”: vinculação do governo federal ao MST; do MST com o Primeiro Comando da Capital (PCC); do MST com as FARC; presença de estrangeiros nos acampamentos para dar treinamento militar; e a mais espetacular de todas, a de que o movimento objetiva criar uma “zona de domínio” territorial no sul do Brasil, na região compreendida entre a Fazenda Anoni (onde 400 famílias estão assentadas) e a Fazenda Guerra (área cuja desapropriação para reforma agrária é reivindicada), por ser um região “estratégica” do ponto de vista geopolítico por sua localização que permitiria acesso às fronteiras com a Argentina e por ser uma das mais ricas e produtivas regiões do estado. O coronel³, que é a principal testemunha na ação por crime contra a segurança nacional, qualifica a maioria dos sem-terra como “massa de manobra” de líderes da Via Campesina.

O segundo deles, o relatório de inteligência “reservado” Nº 1124-100-2007, elaborado pelo serviço secreto da BM (a PM2) a pedido do sub-comandante geral do Estado Maior, cel. Paulo Roberto Mendes Rodrigues, conclui que a atuação da Via Campesina –em especial o MST– afronta a ordem pública e a ordem constituída, os caracterizando como movimentos que deixaram de realizar atos típicos de reivindicação social para realizar ações criminosas, taticamente organizadas como se fossem operações paramilitares.

O coronel Mendes é o principal articulador desta visão sobre os movimentos sociais do RS dentro do Estado Maior da Polícia Militar e do atual governo estadual, tendo sido promovido ao cargo de comandante geral da corporação em 11 de junho de 2008, mesma data em que

comandou o maior episódio de repressão visto no estado nos últimos 10 anos. Uma passeata com 400 pessoas pelas ruas de Porto Alegre contra a corrupção no governo estadual foi violentamente dissolvida com gás lacrimogênio, bombas de efeito moral, disparos de balas de borracha e cavalaria, deixando 12 manifestantes feridos (um gravemente, com hemorragia interna) e outros 12 presos. “Não podemos aceitar baderna” e “não vamos abrir mão do uso de energia” foram as declarações do coronel à imprensa ao se referir sobre os movimentos sociais.

O conhecimento do relatório 1124-100 permitiu aos movimentos sociais do RS compreender o motivo a atuação da Polícia Militar passou a ser abusiva, desproporcional, violenta e militarizada, como se estivesse atuando numa guerra contra um “inimigo interno”, nos últimos dois anos (2007 e 2008). Neste período foram descobertos inúmeros grampos telefônicos clandestinos, ocorreram apreensões ilegais de documentos e agendas de manifestantes, infiltração de agentes da PM2 como agitadores em protestos, monitoramento de pessoas e sedes de entidades e identificação criminal “massiva” dos participantes de atos públicos sejam de estudantes, sindicalistas ou integrantes de movimentos sociais⁴. Na maioria dos despejos e protestos ocorreu a mobilização de grandes contingentes de policiais (de 100 e 800 policiais) do BOE (Batalhão de Operações Especiais) com uso de fardamento camuflado (semelhando ao do exército), aquartelamento das tropas, mobilização da banda marcial e formação de pelotões com cavalaria e matilhas de cães.

Alguns fatos são ilustrativos deste “novo jeito de governar” protestos populares: em 23 de março de 2007 seiscentos policiais militares foram mobilizados para despejar 36 famílias sem teto que ocupavam um prédio em Porto Alegre; em 24 de abril de 2007 três comerciantes ficaram feridos ao serem expulsos da frente de um loja onde realizavam ato da campanha salarial; em 28 de novembro de 2007 trezentos integrantes do Movimento dos Trabalhadores Desempregados (MTD) foram forçados marchar “em passeata” até a delegacia; em 14 de março de 2008 estudantes e professores foram *impedidos* de protestar em frente a Secretaria Estadual de Educação, uma professora é retirada algemada do local; em 4 de abril de 2008 cinquenta mulheres camponesas (duas grávidas) ficaram feridas num protesto contra o “deserto verde” e a multinacional Stora Enzo; uma foi presa e as trezentas participantes ficaram detidas e sem comida por quase dez horas; em 4 de junho de 2008 cem PMs e um helicóptero sob o comando do cel. Mendes foram mobilizados para que 27 sem-terra (4 crianças) fossem *impedidos* de montar um acampamento na beira de uma rodovia estadual; todos receberam voz de prisão e depois de “fichados” foram liberados.

Porém o fato mais significativo de todos talvez tenha sido a atuação conjunta da Polícia Civil (60 agentes), Polícia Militar (800 policiais), Polícia Federal, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Estadual, para *empastelar*, desbaratar, dissolver, 40 anos depois da ditadura militar brasileira ter dissolvido o Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE) em Ibiúna –São Paulo (SP), o XXIV Congresso Estadual do MST. O *álibi* para a dissolução foi o cumprimento do mandado de busca e apreensão de R\$200, uma máquina fotográfica e um anel. Este exército de mil homens e aproximadamente cem viaturas, helicópteros, cavalaria, cercou todos acessos à comunidade da Cooperativa de Comercialização Regional (COANOL), no assentamento da Fazenda Annoni (berço do MST no Brasil). A área ficou “congelada” o dia inteiro. Desde as seis horas da manhã nenhum dos mil e quinhentos participantes do congresso pode entrar ou sair do local. Todas as atividades programadas para o último dia, quando seriam tomadas as principais deliberações, foram suspensas. Os presentes queriam fazer valer seu direito de reunião; a PM queria ingressar e identificar criminalmente todos participantes. No final da tarde, cerca de 200 policiais ingressaram no local e revistaram os ônibus e alojamentos: nada foi encontrado. O congresso estava encerrado. No quente 17 de janeiro de 2008 lá estava o cel. Mendes comandando a operação de guerra no “quartel general” de seu “inimigo”.

O terceiro documento revela que o Conselho Superior do Ministério Público do RS, órgão independente dos outros três poderes da república, cuja missão é defender a constituição federal, instaurou um procedimento administrativo e designou dois promotores para realizar um levantamento de dados sobre as atividades do MST. Os investigadores enfocaram em sua tarefa a “atividade de inteligência”, “fundamental para [...] planejamento estratégico”, formulando relatório com os seguintes tópicos: “1. Compreensão do fenômeno MST; 2. Identificação de seus focos de atuação; 3. Esclarecimento de seu *modus operandi*; 4. Levantamento das conseqüências de sua atuação, fáticas e jurídicas; 5. Propositura de linhas de enfrentamento do problema”. As conclusões da investigação, muito mais políticas do que jurídicas, são semelhantes as do serviço secreto da PM. O MST é caracterizado como “organização criminosa”, de “caráter paramilitar” que estaria buscando a estruturação de um “Estado paralelo”. Ao apresentar o relatório conclusivo das investigações ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), o conselheiro-relator, procurador Gilberto Thums, defendeu a necessidade de “desmascarar o MST”, por tratar-se, segundo ele, de uma organização criminosa, com nítida inspiração “leninista”, que se utiliza de “táticas de guerrilha rural”. O procurador criticou a complacência do poder público, notadamente dos “governos de esquerda” que se limitariam a “fornecer cestas básicas, lonas para as barracas, cachaça,

treinamento em escolas para conhecer a cartilha de Lenin, etc". O procurador chama de "vagabundos" e "invasores movidos a cachaça" os sem terra e propõe que sejam ingressadas com ações judiciais para a "dissolução do MST e a declaração de sua ilegalidade"; "suspender marchas, colunas, ou outros deslocamentos em massa de sem-terras"; "investigar os integrantes de acampamentos e a direção do MST pela prática de crime organizado"; intervir "nas três 'escolas' [...] de influência externa do MST"; desativar os acampamentos "que estejam sendo utilizados como 'base de operações' para invasão de propriedades"; investigar os "assentamentos promovidos pelo INCRA ou pelo Estado do Rio Grande do Sul". Por fim, sugere a "formulação de uma política oficial do Ministério Público [...] com a finalidade de proteção da legalidade no campo".

Na reunião de 3 de dezembro de 2007 o voto e os encaminhamentos propostos pelo procurador foram submetidos e aprovados por *unanimidade* pelo CSMP. O conselho decidiu ainda "que o referido expediente [o processo administrativo Nº 16315-09.00/07-9] tem caráter confidencial".

Após ter sido denunciado publicamente o teor desta deliberação, o CSMP esclareceu que em 7 de abril de 2008 reuniu-se em nova sessão, solicitou informações sobre o cumprimento das medidas aprovadas, quando seus membros manifestaram "total apoio aos Promotores de Justiça designados por tratar de tema de segurança pública" e ao final, decidiram por desclassificar o processo administrativo quanto a seu caráter sigiloso e retificar a ata de 3 de dezembro de 2007, para suprimir a determinação anterior de ajuizamento de ação civil pública para dissolução do MST e a declaração da sua ilegalidade. Tamanha foi a repercussão e reação dos setores democráticos da sociedade brasileira, inclusive do próprio Ministério Público do RS, que em 30 de junho de 2008, em nova reunião do CSMP, houve nova retificação da famosa ata e novamente retificou a ata de 3 de dezembro, afirmando que tudo não passou de um equívoco, tudo que constou na ata não foi aprovado, fazendo constar que a deliberação do conselho teria sido somente a de designar "Promotores de Justiça para conhecer do expediente e levar a efeito as medidas legais cabíveis" e não os encaminhamentos propostos pelo procurador Thums.

Equívocos a parte, cabe questionar o porque o CSMP decidiu investigar o MST. Ou melhor, porque não decidiu investigar outros "movimentos" que também poderiam ser considerados "ações criminosas" e "formação de quadrilha", com peculiar *modus operandi*, como a atuação de empresas transnacionais e de latifundiários no contrabando de sementes transgênicas, na implantação do "deserto verde" ou na construção de hidrelétricas. Cabe questionar também se compete ao CSMP,

órgão administrativo da instituição, tomar definições vinculantes para seus membros, fato que a constituição federal veda e ainda, questionar o por que o fiscal da lei não processou os comandantes da PM por terem invadido a esfera de competência de outras polícias e por ter realizado procedimentos ilegais, similares aos da época da ditadura militar. Porque não investiga as terras públicas apropriadas ilegalmente pelo latifúndio? Porque não investiga os integrantes da Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul (FARSUL) que estão ameaçando de morte proprietários que se dispõem vender terras para reforma agrária?

Questionamentos de lado, o fato é que várias decisões propostas pelo relator do processo foram executadas por integrantes do MP em todo estado do RS. Várias ações visando impedimento de marchas, proibindo marchas de ingressar na Comarca de Carazinho, visando o cancelamento de títulos eleitorais, retirando crianças de marchas, solicitando despejos de acampamentos já haviam sido ingressadas. No dia 11 de junho de 2008, mesmo dia que o cel. Mendes dispersava uma manifestação nas ruas da capital gaúcha, vários promotores ingressaram com uma ação judicial e obtiveram liminar para o despejo de dois acampamentos do MST existentes sobre áreas particulares, propriedade privada legalmente cedida pelos seus proprietários para os acampados e no dia 17 de junho de 2008, os mesmos Promotores de Justiça, ingressaram com outras três ações nas Comarcas de São Gabriel, Canoas e Pedro Osório, criando zonas de restrição de direitos ao redor de três fazendas que são reivindicadas para fins de reforma agrária pelo MST. Isso demonstra que estas ações são resultado da decisão aprovada pela instância máxima do Ministério Público do Rio Grande do Sul e compõe uma estratégia institucional que tem por finalidade “desmontar” o MST. A lógica de todas as ações parte de um argumento central: o MST é uma organização criminosa, paramilitar, é preciso “desmontar bases” não por acaso as quatro Ações Cíveis se dirigem contra os quatro principais pólos de acampamento do MST atualmente existentes no Estado. Na prática as ações criaram zonas especiais, onde o direito de ir e vir, direito de reunião e manifestação estão suspensos, e colocam em risco a integridade física de cerca de 800 famílias que estão a mercê da violência e abuso de poder da PM que agora tem respaldo judicial para “combater” seu “inimigo”.

Os fatos que estão acontecendo no RS, materializados em três “fronts de luta” simultâneos contra o MST, mostram que historicamente os movimentos sociais são combatidos de três maneiras: ignorando-os, cooptando-os ou criminalizando-os. Quando não se consegue cooptá-los, depois de terem sido ignorados e continuarem existindo, o remédio é considerá-los crime. E ao considerá-los crime não é porque se é contra o

“movimento” em si, este ser abstrato, mas é por serem contra aquilo que ele propõe de concreto.

No RS a reação que se assiste é contra a reforma agrária, essa minguada reforma agrária que o MST pouco tem conseguido ajudar a fazer, a conta-gotas, conta-grãos. Esse é o crime do MST. E se é verdade que a melhor forma de defender um direito é exercendo-o, não há jeito; para se “descriminalizar” o MST vai ter que continuar fazendo reforma agrária, vai ter que continuar sendo MST.

Notas

1 Denominação da Polícia Militar do RS.

2 Cabe destacar que, a pedido da procuradora, a Polícia Federal de Passo Fundo, investigou o MST do RS durante o ano de 2007 e não conseguiu encontrar provas da existência de vínculos do movimento com as FARC ou presença de estrangeiros realizando treinamento de guerrilha nos acampamentos do movimento, concluindo pela inexistência de crimes contra a segurança do Estado, não indiciando nenhum acusado e requerendo o arquivamento do inquérito policial.

3 Quando de sua passagem para a reserva em 2007, em entrevista ao jornal Periódico Central de Passo Fundo, o coronel declarou que durante a ditadura militar brasileira, nos anos 80, permaneceu cerca de 3 anos infiltrado no

MST, no Acampamento da Encruzilhada Natalino. Com o codinome Toninho, representou um funcionário barbudo e cabeludo do INCRA, que conquistou a simpatia de parte dos acampados e deixou 34 afiliados de batismo e casamento: “Fiquei cerca de três anos no Serviço de Inteligência. Morava nas barracas junto com os sem-terra. Quando tinha oportunidade, passava informações para o comando através de um rádio escondido numa borracharia das proximidades. Meu objetivo era convencer as pessoas a irem para os assentamentos oferecidos pelo governo. Assentei muita gente no Mato Grosso”.

4 Estima-se que mais de 2.000 manifestantes e lideranças foram “fichados” pela PM2 nestes dois anos. Pelo menos 200 responderam processos judiciais.

Reseñas bibliográficas y documentos



Estado y marxismo
Un siglo y medio de debates
por Claudio Katz

Crítica y Emancipación
Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales
por Juan Chaves

Las disyuntivas de la izquierda
en América Latina
por Jorge Marchini

Conflicto agrario
Otro camino para superar la crisis

No somos campo, somos tierra y territorio
Red Puna
Movimiento Nacional Campesino Indígena
Jujuy, 2 de junio de 2008

Proclama campesina indígena

Coordinación de pequeños campesinos
y pueblos indígenas
Rosario, 24 de junio de 2008

Los productores invisibles

Comunicado del Frente Nacional Campesino
Buenos Aires, 3 de junio de 2008

**Las soluciones mágicas y las inevitables
catástrofes subsiguientes**

Grupo de Reflexión Rural
Julio de 2008

**El capital internacional está dominando
la agricultura brasileña**

João Pedro Stedile
São Paulo, 30 de julio de 2008

Programas estructurantes de curto prazo

Plataforma da Via Campesina

Detener la guerra

Orlando Fals Borda

**Declaración Política del VII Foro
Mesoamericano de los Pueblos**

Managua, 16 de julio de 2008

Reseña bibliográfica



Estado y marxismo *Un siglo y medio de debates*

Mabel Thwaites Rey (comp.)

Buenos Aires: Prometeo, 2008

Claudio Katz

Economista. Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La excelente compilación *Estado y marxismo* retoma importantes debates teóricos, que el *establishment* académico ignoró en las últimas décadas. Comienza con un retrato de José Castillo sobre las propuestas de Marx para liberar a la sociedad de la opresión estatal y un análisis de Hernán Ouviaña sobre el lugar asignado por Engels a la acción parlamentaria en la búsqueda de ese objetivo. Continúa con una interpretación del enfoque de Lenin –de Ouviaña y Martín Cortés–, estimando que su carácter libertario en la temática estatal se inspiraba en la expectativa de avanzar rápidamente hacia una emancipación social.

El recorrido de autores clásicos sigue con un artículo de Mabel Thwaites Rey, que incorpora una descripción del análisis de Gramsci del Estado, como instrumento de coerción y consentimiento tendiente a estabilizar la hegemonía de las clases dominantes. Se discute la aplicación de esta tesis para los países periféricos y se establece un interesante contrapunto entre Weber y Gramsci, para diferenciar el concepto de legitimidad –concebido para justificar un sistema de dominación– del de hegemonía, destinado a cuestionar esa opresión.

En la sección dedicada al estudio de autores contemporáneos, el capítulo de Clara Bressano y Nicolás Freibrun refuta la imagen de Althusser como un teórico dogmático del estructuralismo. Se ilustra cómo el filósofo francés recurrió a los conceptos de base-superestructura y aparatos ideológicos del Estado para resaltar la compleja articulación de las distintas instancias de la dominación estatal.

La actualización de viejas controversias continúa con un acertado análisis de Thwaites Rey de las convergencias presentes en

el debate entre Poulantzas y Miliband. Mientras que el teórico griego formuló una teoría del Estado como condensación de relaciones sociales de fuerza –muy distante del estructuralismo básico–, su colega inglés desarrolló un modelo asociativo de burocracias y capitalistas, muy alejado del instrumentalismo básico.

En la parte final del libro, Alberto Bonnet aborda el debate sobre la derivación analítica del Estado desde el concepto capital, contrastando el contexto político que rodeó a esta reflexión en Alemania y en Inglaterra. Esta caracterización reabre la controversia sobre la factibilidad de analizar una entidad histórica como es el Estado, desde un nivel de abstracción semejante al utilizado para estudiar el valor, el dinero o la mercancía.

En otra indagación significativa, Rodolfo Gómez contrasta la concepción de Habermas y Offe con sus antecesores de la Escuela de Frankfurt, destacando la ruptura con esa tradición a favor de una mirada elogiosa hacia el Estado de Bienestar. Finalmente, el libro concluye con una revisión de Bonnet de las tesis de Holloway (cambiar el mundo sin tomar el poder) y Negri (extinción de las soberanías nacionales en el imperio global).

La compilación brinda un apropiado punto de partida para futuras investigaciones en contraposición a la concepción liberal del Estado mínimo y en polémica con las visiones heterodoxas, que reivindican el papel de esa institución como estructura insoslayable o como organismo complementario de la sociedad civil. Entre los nuevos pensadores marxistas se observa una tendencia a desarrollar modelos más integradores, que combinan los méritos de cada tradición precedente para indagar la dominación de clase y los mecanismos de reproducción del capital.

Pero la prueba de fuego para esta teoría se ubica en su capacidad para aportar una caracterización adecuada del funcionamiento del actual Estado neoliberal, guiado por principios de competitividad y destrucción de las conquistas sociales que socavan su legitimidad. Desentrañar también la dinámica del Estado imperial estadounidense, en su doble papel de estructura nacional y global, constituye otro desafío, que ya ha sido encarado por varios estudiosos de Europa y Estados Unidos.

La agenda para América Latina ubica otro plano: interpretar las peculiaridades del Estado regional, revisando categorías históricas (Estado colonial y oligárquico) y conceptos tradicionales (Estado populista, desarrollista y burocrático-autoritario). Esta evaluación constituye el punto de partida para analizar la combinación específica de neoliberalismo y constitucionalismo que ha signado el curso de los estados latinoamericanos en las últimas dos décadas. Como los autores de la compilación se orientan a estudiar estos temas, habrá que seguir con mucha atención sus próximos trabajos.

Reseña bibliográfica



Crítica y Emancipación

Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales

Año 1, N° 1, junio

Emir Sader y Pablo Gentili (directores)

Buenos Aires: CLACSO, 2008

Juan Chaves

Comunicólogo. Miembro del equipo del Observatorio Social de América Latina (OSAL).

Con la aparición de *Crítica y Utopía Latinoamericana de Ciencias Sociales*, en 1979, cuando el continente atravesaba una oleada de dictaduras militares que pusieron fin al modelo del Estado keynesiano —y también atacaron al movimiento popular en alza— mediante el terror, la persecución y la muerte, algunos pensadores críticos latinoamericanos no dejaron de dedicarse a estudiar el modo de salir de un contexto opresivo, aun desde el refugio de los márgenes de la academia. Un conjunto de intelectuales, reunidos por Francisco Delich, en el marco de la tradición socialista y progresista, entre los que se encontraban Juan Carlos Portantiero, Aldo Ferrer, Waldo Ansaldi, Fernando Henrique Cardoso, Armand Mattelart, Héctor Schmucler, Oscar Landi, Oscar Ozlak, Aníbal Ford, Torcuato Di Tella, Félix Schuster, Alain Rouquié e Immanuel Wallerstein, abordó la naturaleza de las dictaduras latinoamericanas en pos de refundar un orden democrático en el continente. De este modo, sus análisis antecedieron al retorno de los regímenes democráticos ocurridos en la década del ochenta, aunque la forma representativa de esta democracia no corrió por los cauces que ellos esperaban sino que sirvió a la implementación del modelo neoliberal, conjugando la democracia con el capitalismo. Se supo entonces que las fuerzas militares se hubieron retirado no sin antes haber logrado su objetivo: secuestrar, asesinar, torturar, desaparecer y quebrar al movimiento social y a la izquierda política que habían alcanzado conquistas históricas y que apuntaban a transformar el continente al socialismo, inspirados en buena medida por la Revolución Cubana. Una vez desarticulado el movimiento popular y la izquierda política, los militares pudieron volver a los cuarteles

y dejar que la democracia se encargase de implementar el Consenso de Washington. El socialismo era tabú y el capitalismo, intocable. Por gracia de las armas y mediante la democracia, el neoliberalismo iniciaba sus pasos hacia la hegemonía. Así fue que gobiernos de origen nacionalista, como el de Carlos Menem en Argentina, y socialdemócratas y socialistas, como el del Partido Socialista chileno, la Acción Democrática venezolana o el Partido Socialista de Brasil favorecieron un desarrollo comandado por el capital extranjero, privatizaron empresas públicas, entregaron los recursos naturales, flexibilizaron el mercado de trabajo y abrieron las fronteras a la importación, lo que condujo a la recesión y a la desocupación, además de a las ganancias extraordinarias del capital transnacional y financiero. En ese marco, la avanzada teórica neoliberal logró cierto consenso en relación al fin de la historia y las ideologías, haciendo prevalecer la idea de que la democracia capitalista era el único camino posible, desmereciendo a la historia y las luchas sociales, planteando la desaparición del sujeto, entronizando los pequeños relatos fragmentarios en desmedro de las grandes narrativas e instando al pensamiento social a dedicarse a seguir a lo real en vez de a plantear su deconstrucción y reformulación, a conjugar una teoría acorde con el *statu quo*. Así fue ignorado por los dominantes de la academia el rol hegemónico de Estados Unidos como superpotencia mundial, desmerecida la lucha de clases, enarbolada la figura del consumidor, reducido el ciudadano a su calidad de votante, asediado el Estado como incompetente y como traba a las relaciones de librecomercio, ensalzada la sociedad civil como un todo homogéneo en el que no se destacaban sus contradicciones internas. La crítica perdió su potencia y se enclaustró en la academia, incapaz de formular alternativas al modelo del pensamiento único.

No obstante, comenzaron a surgir fisuras en el idilio del neoliberalismo. Los zapatistas se alzaron en 1994; los campesinos e indígenas aparecieron como fuerza movilizada en el continente; emergieron los piqueteros argentinos; huelgas docentes y de trabajadores públicos sacudieron la región. El Foro Social Mundial, a partir de la consigna "Otro mundo es posible", inició un quiebre en el consenso neoliberal que junto a las crisis del modelo en México en 1994, en Brasil en 1999 y en Argentina en 2001 lograron una victoria, al menos en el plano ideológico, que fue la antecesora de la instalación de gobiernos discordantes, de algún modo, con el neoliberalismo, como el de Hugo Chávez en Venezuela, Lula da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina, Tabaré Vázquez en Uruguay, Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua, Rafael Correa en Ecuador y Fernando Lugo en Paraguay. Aunque sus tensiones con el modelo dominante no hayan sido aún resueltas por un sendero de izquierda, marcan un quiebre en las diatribas halagadoras del neoliberalismo, que pudo antes

desplegarse sin oír las voces en su contra. Así es como se han abierto los procesos de integración regional, que disputan la supremacía de EE.UU., como la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), o los que efectúan Brasil, Argentina, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Cuba. De allí que pueda hablarse de una crisis hegemónica del modelo comandado por EE.UU. en el continente, una vez sepultado el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), lo que lleva a algunos entre la crítica a pensar en una alternativa posneoliberal. Es en ese sentido que surge *Crítica y Emancipación*, asumiendo la necesidad de una reelaboración teórica que oriente el rumbo latinoamericano en una tradición socialista. Es en el camino de conocer la realidad latinoamericana para hacer parir lo nuevo, a la vez que lo viejo desfallece, que esta revista afina sus objetivos. Entre ellos está la democratización de las estructuras del poder, la tierra, el dinero y la comunicación social. También la emancipación social, política, económica, cultural, étnica, de género y ecológica y la participación popular, a raíz de un diagnóstico según el cual ciertos procesos políticos en el continente, las rebeliones populares, apuntan a rearticular las fuerzas sociales en una lucha por superar la dicotomía entre reforma y revolución mediante la refundación de los estados latinoamericanos. Repensar la trayectoria latinoamericana y elaborar modelos teóricos de salida a la crisis es el esfuerzo que se propone *Crítica y Emancipación*. Alentar el debate, la capacidad de reflexión y de formulación del pensamiento crítico para orientar el sentido académico nuevamente desde la teoría hacia la práctica política. Abandonar la posición teórica defensiva que la izquierda sostuvo para plantear formulaciones alternativas, acordes a los procesos políticos de respuesta al orden neoliberal.

De allí la composición de este primer número de la revista. En él, Álvaro García Linera y Raúl Prada analizan la Constituyente boliviana, entendiendo al momento actual del país como un punto de bifurcación en el cual podría darse un desempate que resuelva las tendencias contrapuestas en relación a la dirección del gobierno nacional, así como se analiza la nueva Constitución Política del Estado. La cultura y la política en América Latina son abordadas por Marilena Chaui, con su artículo "Cultura y democracia", por Eduardo Subirats en "Las poéticas colonizadas de América Latina" y Heraclio Bonilla, con "Los Andes: la metamorfosis y los particularismos de una región". La sección "Diálogos latinoamericanos" incluye una entrevista a Tomás Moulián, en la que el pensador y militante chileno repasa su biografía intelectual y política a la luz de los avatares de la historia de las últimas décadas de su país, tomando en cuenta lo que antecedió a la Unidad Popular, su gobierno, el golpe militar pinochetista y la sucesión de la democracia. En las "Perspec-

tivas”, Perry Anderson traza una mirada sobre el acontecer declinante de Francia, a raíz de la implementación del neoliberalismo, en el cual se ha deslucido el brillo cultural emanado por París. También rastrea la organización ideológica liberal y los avatares de los partidos políticos, de derecha a izquierda, al igual que los nichos de respuesta que han surgido contra el orden. Por otro lado, Fernando Martínez Heredia recuerda a la revista *Pensamiento Crítico* en un homenaje por los cuarenta años de su aparición. La publicación concluye con una lectura crítica de *A propósito del proyecto decolonial o las cadenas de la esperanza*, de Walter D. Mignolo, realizada por Marcel Velázquez Castro, y con el discurso de Rafael Correa en el 50º aniversario de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), que es analizado por Jorge Rovira Mas.

Reseña bibliográfica



Las disyuntivas de la izquierda en América Latina

Claudio Katz

Buenos Aires: Ediciones Luxemburg, 2008

Jorge Marchini

Economista y profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

¿Qué enseñanzas políticas han dejado las rebeliones populares recientes en América Latina? ¿Podrían abrir un camino hacia el socialismo? ¿Cuáles son las estrategias que implementa la izquierda? Partiendo de estos interrogantes, el autor indaga el escenario regional mediante comparaciones históricas, contrastes con otras zonas y evaluaciones de los nuevos gobiernos.

Katz combina reflexiones sobre la actualidad con revisiones de los temas clásicos de la ruptura y la revolución, evaluando la correlación de fuerzas y el nivel de la conciencia popular. Indaga la crisis del neoliberalismo y la disminución de la influencia norteamericana en la coyuntura reciente de bonanza exportadora y aumento de la desigualdad. Pero en las cinco partes del ensayo ubica estas caracterizaciones en las controversias que actualmente suscitan los distintos proyectos de emancipación social.

El libro presenta una mirada original sobre la izquierda latinoamericana. Ilustra la revitalización de este segmento, junto al despunte de la conciencia antiliberal (rechazo de las privatizaciones y del librecomercio) y el resurgimiento de un antiimperialismo sin componentes étnicos o religiosos regresivos. Estima que la ofensiva neoliberal no logró quebrar las identidades políticas de los oprimidos y ha coexistido con inéditos avances en el terreno de las libertades democráticas.

Con este enfoque compara las rebeliones recientes de Sudamérica con las grandes revoluciones del siglo XX. Destaca que la unanimidad derechista de los años noventa ha quedado reemplazada por una combinación de gobiernos conservadores (Uribe, Calderón), centrozquierdistas (Lula, Kirchner) y nacionalistas radicales (Chávez, Morales). Plantea

esta clasificación, en oposición frente al contraste convencional entre administraciones republicanas y populistas, recordando que el presidencialismo y el clientelismo no constituyen patrimonios exclusivos de ningún régimen.

La principal preocupación del autor es el futuro de las experiencias nacionalistas radicales. Considera varios escenarios negativos (desenlaces golpistas, retorno electoral de la derecha, estabilización del capitalismo de Estado) y también desenlaces inversos de radicalización socialista, en la senda inaugurada por la Revolución Cubana.

Para Katz, los procesos anticapitalistas constituyen opciones abiertas para toda una época, que pueden debutar en distintos momentos del ciclo económico. Reconoce que la visibilidad del modelo socialista ha decaído, pero relativiza los efectos del descalabro de la URSS sobre la izquierda regional y asigna gran importancia a la supervivencia de la Revolución Cubana.

El autor polemiza con la estrategia de las etapas que postula transitar por un período de capitalismo regulado antes de arribar al socialismo. Afirma que esa orientación impide lograr mejoras populares significativas y conduce a solventar con fondos públicos la expansión de las clases dominantes. Aplica estas caracterizaciones a la coyuntura de Venezuela y Bolivia y analiza el concepto de “gobiernos en disputa” para Brasil y Argentina.

El libro incluye varias discusiones de creciente interés. En el debate con la propuesta de “cambiar el mundo sin tomar el poder”, destaca la imposibilidad de eludir la acción estatal, subrayando la gravitación de esta institución como referente de las demandas populares. En la controversia con el reformismo, señala que las mejoras son factibles, pero no se acumulan ni son irreversibles y, traspasada cierta frontera, conducen a serias confrontaciones con las clases dominantes. En la polémica con el dogmatismo, critica la simplificación de la crisis y la ausencia de mediaciones para alcanzar los objetivos anticapitalistas.

Katz analiza también el problema de la democracia en confrontación con las interpretaciones elitistas –que justifican la apatía ciudadana– y en debate con los enfoques institucionalistas, que propugnan una ingenua extensión de las mejoras cívicas o políticas al plano social. Estima que la participación ciudadana es insuficiente para inclinar el funcionamiento del sistema constitucional a favor de los intereses populares y evalúa especialmente la experiencia participativa de Porto Alegre. Postula construir una democracia socialista diferenciada del totalitarismo burocrático y, partiendo de un balance del antecedente soviético, argumenta a favor del pluripartidismo socialista.

Finalmente aborda el espinoso problema de la revolución en un contrapunto con las teorías gradualistas. Evalúa los procesos

inconclusos del siglo XIX y la combinación de conquistas y frustraciones que registró América Latina en la última centuria. Traza varias hipótesis para el futuro, afirmando que los regímenes constitucionales han modificado los tiempos y las formas de gestación de un poder popular. Destaca cómo podría integrarse la acción en las trincheras institucionales con una política anticapitalista.

El libro complementa las reflexiones sobre la sociedad poscapitalista que el autor expuso en *El porvenir del socialismo* (Herramienta/Mago Mundi, 2004) y las tesis sobre la integración regional que desarrolló en *El rediseño de América Latina* (Ediciones Luxemburg, 2006).

Claudio Katz es economista, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y profesor en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ha contribuido con numerosos textos a la interpretación del capitalismo contemporáneo y de la realidad latinoamericana y participa activamente en los foros continentales de impugnación del librecomercio, el endeudamiento externo y la militarización. Como integrante de Economistas de Izquierda (EDI), ha publicado además varios ensayos sobre la coyuntura política y social de la Argentina. Su nueva obra sobre *Las disyuntivas de la izquierda en América Latina* constituye otro importante jalón de su elaboración teórica.

Documento

Publicamos cuatro documentos emitidos durante el *lock-out* agrario realizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confederación Rural Argentina (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), que representan, respectivamente, a los terratenientes y grandes exportadores, a los medianos propietarios, a los arrendatarios y rentistas y a las cooperativas rurales.

Conflicto agrario Otro camino para superar la crisis

Desde el 11 de marzo, cuando el gobierno nacional tomó la decisión de aumentar las retenciones y hacerlas móviles en función de los precios internacionales, escaló un conflicto que ha concluido instalando una polarización política entre el gobierno y las entidades del campo. No es verdad que debamos aceptar a libro cerrado los argumentos y las propuestas de ambos sectores, como si no hubiera propuestas y medidas superadoras.

Detrás de las demandas de eliminación de las retenciones móviles, las entidades del campo han enarbolado un programa de liberalización del mercado exportador de alimentos, con el fin del acaparar el máximo posible de las rentas extraordinarias, mientras difunden el planteo ideológico de que el Estado no debe meterse con los negocios privados.

Bajo la cobertura de un falso federalismo, se promueve una plataforma de medidas afín a los intereses del agronegocio y la Sociedad Rural, con el acompañamiento y la fuerza social de los pequeños productores que han quedado entrampados en un *lock-out* agrario que favorece a los grandes capitalistas del sector y apunta a crear las condiciones favorables a una restauración neoliberal.

Las clases propietarias y los grupos agrarios más concentrados no toleran siquiera una tibia e inconsecuente regulación estatal y distribución de renta, enarbolando sus intereses privados y su ganancia creciente por sobre la alimentación, el salario, la educación y la salud de todo el pueblo argentino. Hoy el campo acumula superganancias que no se encuentran en ninguna otra rama de la producción. Esa situación impar es la que permitió batir records año tras año, incluso a costa de desplazar de sus tierras ancestrales a los campesinos pobres del norte argentino y de las condiciones laborales precarias e irregulares de más de un millón de peones rurales.

La derecha cuestiona las retenciones móviles en tanto mecanismo regulador que permite divorciar los precios internacionales de los locales y amortiguar el impacto inflacionario de un encarecimiento de las exportaciones. El *lock-out* se ha transformado también en una trinchera política desde donde promueven regresivamente el retorno al período previo a 2001.

Los cacerolazos que hemos visto en la Capital y otros centros urbanos, pese a su heterogeneidad inicial, se han ido configurando en la antítesis de la rebelión de 2001, motorizados por sectores altos de la sociedad, muchos de ellos rentistas, y por la oposición de derecha que ya se había manifestado en las elecciones legislativas y en las presidenciales de octubre pasado.

La mayoría de los medios de comunicación, grandes grupos concentrados que detentan el poder comunicacional y el cuasi monopolio de la palabra y la imagen, han jugado un rol protagónico como aglutinantes de una derecha invertebrada, distorsionando la realidad, creando una atmósfera política artificial y una opinión popular ficticia.

La principal preocupación del gobierno frente al *lock-out* ha sido reafirmar su autoridad política frente a un desafío sectorial que rompe el equilibrio de alianzas que ha sostenido su gestión, que desde el inicio se ha apoyado en el modelo sojero que ahora cuestiona. Recurrió a todas las variantes posibles: discursos agresivos y temporizadores, amenazas y negociaciones, y ha quedado políticamente debilitado. Incapacidad política y errores de implementación

técnica unificaron el campo opositor y le hicieron perder al gobierno sus aliados naturales.

Además, profundizó este esquema con el consiguiente desplazamiento de productores, afectando la soberanía alimentaria, fortaleciendo los *pools* de siembra y los grupos exportadores (Dreyfus, Cargill, Nidera, Bayer), permitiendo la escandalosa apropiación diferencial entre los impuestos pagados por los productores y lo realmente ingresado a las arcas del Estado. No casualmente estos grupos económicos no han sido casi mencionados en la crisis actual ni por el gobierno ni por las entidades del campo.

El gobierno tampoco cambió la estructura tributaria regresiva, ni adoptó ninguna iniciativa para recuperar el patrimonio nacional rematado durante el menemismo.

A pesar de las fenomenales tasas de crecimiento del actual ciclo económico, de la fuerte creación de empleo y de la recuperación salarial, persisten la segmentación y la precarización en el mercado de trabajo, se conservan muchas de las peores leyes laborales de los noventa —e incluso de la dictadura, como la de los peones rurales. Al no adoptar medidas para modificar efectivamente la distribución del ingreso, la brecha entre ricos y pobres continúa ensanchándose.

La políticas en curso no pueden asegurar, ni tampoco se lo proponen, la reconstrucción de un sistema de transporte ferroviario barato y ecológicamente sustentable, aunque se proyecta un “tren bala” que nos vuelve dependientes de tecnologías que no poseemos, que es inservible para el transporte de cargas y que sólo podrá ser utilizado por una elite de pasajeros de altos ingresos.

Argentina posee el raro privilegio de ser el único país que enajenó su renta petrolera y, a contrapelo de las tendencias latinoamericanas —Bolivia, Ecuador, Venezuela—, no hay proyecto alguno para recuperarla; por el contrario, asistimos a la profundización de la política menemista en materia de hidrocarburos. Lo mismo sucede con las empresas privatizadas de servicios públicos y la generación y distribución de energía. Los grupos de medios de comunicación hoy denunciados por su papel en la crisis son los mismos que ayer fueron beneficiados con la renovación de las licencias, basados en la Ley de Radiodifusión de la época de la última dictadura militar.

Debajo de toda la parafernalia de acusaciones cruzadas se advierten divergencias al interior del bloque de las clases dominantes: mientras los sectores agrofinancieros tradicionales exigen darle prioridad a un proceso de acumulación basado en la exportación de bienes primarios y son indiferentes al consumo y el mercado interno, los sectores industriales, al contrario, aspiran a liderar dicho proceso con apoyo subordinado del sector agroindustrial.

El modo en el que se resuelva esta disputa no resulta ocioso ni indiferente para el movimiento obrero y las clases subalternas, como tampoco lo es la intervención estatal, aun a sabiendas de que lo más probable sea un acuerdo en el que el modelo primario-extractivo-exportador no será modificado sustancialmente, con las consecuencias sociales y ambientales y el tipo de desarrollo que lleva implícitos, lo que exige desarrollar por parte de todo el movimiento popular un planteo de transformaciones profundas más allá de dichos acuerdos.

No puede haber neutralidad ante la amenaza de que la derecha logre parte de sus demandas y coloque sobre la agenda futura su programa de restauración neoliberal. Una liberalización de las exportaciones como demandan los ruralistas y los ideólogos del *establishment* dispararía los precios de los alimentos con el consiguiente efecto sobre los salarios reales de los trabajadores y las condiciones de vida y existencia de las clases populares.

Rechazamos enérgica y categóricamente su chantaje y defendemos el derecho del gobierno a implementar retenciones móviles y cupos de exportación. Pero sostenemos que el curso que ha tomado hasta el día de hoy, lejos de ser una palanca para iniciar un cambio efectivo del modelo, cohabita con él, favorece a los grandes propietarios y *pools* sojeros y a los grandes exportadores, mientras afecta a su propia base popular al mostrarse impotente para un control eficaz de la inflación.

Los abajo firmantes pretendemos contribuir a cambiar los ejes del debate y discutir soluciones populares efectivas para el agro.

Sin que sea una enumeración taxativa:

- Creemos necesario afectar las ganancias de los grandes propietarios, los grupos exportadores, comercializadores y *pools* de siembra, que se quedan con el grueso de los beneficios. También comenzar a discutir la nacionalización de varios segmentos de estos sectores.
- Elaborar un plan agrario que permita organizar la producción de acuerdo a un programa racional que posibilite contar con alimentos baratos y de calidad para todo el pueblo. Que contemple una política de fomento a los pequeños campesinos y de garantía de sus tierras, así como medidas protectoras del ambiente y una política de estatización de los insumos de los productores medianos y pequeños y de impuestos diferenciados según el tamaño de sus exportaciones.
- Regular el comercio exterior y los precios mediante una junta nacional de granos y carnes; adoptar una clara reforma fiscal desgravando las cargas tributarias al consumo, modificando las alícuotas del impuesto inmobiliario y a las ganancias.
- Eliminar el IVA de los productos esenciales en el consumo popular y aplicar efectivamente la Ley de Abastecimiento.

Es imperioso también derogar la ley de Videla del peón rural y garantizar el blanqueo de todos los trabajadores en negro, así como asegurar la capacidad adquisitiva de los salarios para todos los trabajadores y del subsidio a los desocupados.

Con esta declaración apuntamos a que una tercera voz a favor de las mayorías populares comience a cobrar cuerpo frente a la crisis actual.

Primeras firmas

Claudio Katz, Guillermo Almeyra, Maristella Svampa,
Hugo Calello, Susana Neuhaus, Guillermo Gigliani,
Alejandro Bercovich, Mabel Bellucci, Eduardo Faletty,
Ezequiel Adamovsky, Claudia Korol, Clara Algranati,

José Seoane, Antonio Bitto, Jorge Marchini, Jorge Sanmartino, Eduardo Lucita, Bruno Fornillo, Martín Bergel, Hernán Ouviaña, Diana Mauri, Ricardo Orzi, Guido Galafassi, Agustín Santella, Gustavo Robles, Emilio Taddei, Judith Feldman, Leandro Sowter, Mabel Thwaites Rey, Aldo Casas, Nora Ciapponi, Antonio Por, Beatriz Morales, Claudio Pandolfi, Pablo Guillermo Frisco, Irene Muñoz, Herman Schiller, Guillermo Caviasa, Julio Vergara, Ariel Petruccelli, Alejandro Medici, Franco Catalani, Manuel Gonzalo Navarro, Aníbal Viguera, Alberto Wiñaszki, Eduardo Gorostegui, Nicolás Lion, Meriem Choukroum, Mariano Félix, Liliana Soto, Daniel Pereyra, Octavio del Valle, Fernando Stratta, Joaquín S. Gómez, Carlos M. Herrera, Hernán Camarero, Silvana Ferreira, Omar Acha, Hernán Apazza, Agustín Nieto, Leandro Andrini, Héctor Menéndez, José Luis Heller, Luis Galand, Luciano Alonso, Natalia Vega, Alejandro Andreassi Cieri, Diego Heluani, Ernesto Javier Díaz, Daniel de Santis, Alan A. Rusch, Francisco G. Pavan, Oscar Martínez, Daniel Ximénez, Virginia Ciffarelli, Guillermo Pérez Crespo, Roberto Fornari, Darío Balvidares, Martín Ogando, Cecilia Rikap, Fernando Lizárraga, Sergio Arelovich, Juan Grijera, Carlos Morchio, Silvia Santos y Liliana Daunes.

Representantes sindicales y organizaciones sociales

Carlos "Perro" Santillán, Fabio Resino (Presidente de FACTA), Cooperativa del BAUEN, Luciana Santillán (Coordinadora de la Corriente del Pueblo-Jujuy), Bloque Piquetero Nacional, Frente de Trabajadores Combativos-Movimiento 29 de Mayo (FTC-M29), Movimiento Teresa Rodríguez-La Dignidad (MTR-La Dignidad), Unión de Trabajadores en Lucha (UTL), Movimiento Brazo Libertario (MBL), Trabajadores Ocupados y Desocupados Unidos (TODU), Movimiento Teresa Rodríguez-12 de Abril (MTR 12 de Abril), Enrique Gandolfo (Secretario General de SUTEBA Bahía Blanca y de la CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego), Susana Altamirano (Secretaria de Acción Social-CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego), Norberto Señor (Secretario General de la Seccional Gran Buenos Aires Sur de ATE), Alejandro

Mascareño (Secretario General Seccional Almirante Brown-
Presidente Perón, de ATE), Susana Ancarola (Secretaria de
Prensa de la Seccional Gran Buenos Aires Sur de ATE), Luis
Angió (Delegado General de la Comisión Interna Seccional
Buenos Aires del Banco Provincia de Buenos Aires), Jorge
Montero (Delegado General de la Comisión Interna de
Destilería Shell de Dock Sud), Carlos González (Delegado
General de la Comisión Interna de SIDERAR Haedo-UOM),
Juan Pablo Casiello (Secretario Adjunto de la Seccional
Rosario de AMSAFE), Comisión Interna de Acetatos Quilmes-
AOT, Gustavo Ibaldi y Jorge Pérez (integrantes de la
Agrupación Verde de SUTEBA Almirante Brown), Marcos
Britos y Pablo Goodbar (integrantes de la Agrupación Semilla
Ramírez de Trabajadores de la Universidad de Buenos Aires),
Raúl Wanzo (Agrupación Negra de Mineros de Río Turbio
de ATE), Jerónimo Altschuller (Unión de Trabajadores
Piqueteros), Miguel Ángel Ruocco (MTR-12 de Abril),
Cristina Martín (Delegada ATE-Justicia), Carlos Penoncello
(Delegado UEPC Córdoba), Jorge Urruchua (Secretario de
la Unión Ferroviaria-TBA-Mitre), Oscar Arturo (Agrupación
de Trabajadores del Subte "Los topos"), Eduardo Barragán
(Presidente de la Asociación de Profesionales del Hospital
Arcades-CICOP), Cuerpo de Delegados APA-AR-Aeroparque,
Gustavo Brufman (Secretario General de la Asociación de
Docentes de la UNR), Militancia Comunista, Corriente Praxis,
Colectivo Rompecabezas, Organización Estudiantil "Lobo
Suelto", Corriente José Antonio Mella-UBA, Foro de Debate
para la Acción (FDPA), Grupo Frente Comunista, Juventud
Guevarista, Bases Socialistas, Red de Encuentro Social,
Centro Político "Tinta Roja" La Plata, Centro Social y Cultural
Flores Sur, Frente Popular Darío Santillán (FPDS).

Documento

No somos campo, somos tierra y territorio

Red Puna

Movimiento Nacional Campesino Indígena
Jujuy, 2 de junio de 2008

Durante las últimas semanas hemos visto con desolación y con desesperanza el conflicto planteado por las entidades empresarias del campo: la Sociedad Rural, Federación Agraria, Confederaciones Rurales y CONINAGRO, y la primera pregunta que nos hicimos en nuestras comunidades fue: “¿mejorará algo para nosotros, los excluidos de siempre, los de la Puna y la Quebrada? ¿Los que trabajamos la tierra todos los días al sol y con nuestras manos?”.

Pasados los días nos fuimos dando cuenta de que estábamos viviendo en “el mundo al revés”. Los que estaban reclamando por las retenciones de la soja y el girasol eran los empresarios del campo, que desde que nuestro país dejó la convertibilidad en 2002 se vienen enriqueciendo y mejorando su situación económica, y en muchos casos son los mismos que desalojan cientos de familias campesinas y comunidades indígenas en nuestro país, desmontando y arrasando con total impunidad para sembrar soja.

Las llamadas “entidades del campo” (SRA, FAA, CRA y CONINAGRO) sólo pronuncian los dictados de los agronegocios. Su símbolo actual es la soja transgénica, que por su alta rentabilidad ha devastado bosques, desalojado comunidades campesinas e indígenas, contaminado suelos y aguas y aumentado los precios de los alimentos en el mercado interno. Quieren paralizar al país reclamando una baja en las retenciones a la exportación de soja y girasol, diciendo que así se mejorará la situación del “campo”, pero sabemos que estos empresarios cada día ganan más y pasan una muy buena situación económica, comprándose camionetas, casas y campos.

Por ello nosotros como Comunidades Aborígenes Indígenas de la Puna y Quebrada Jujeña, miembros de la Red Puna, queremos expresar:

- Los campesinos, indígenas y pequeños productores representamos el 70% de los productores de nuestro país. Sembramos alimentos y criamos animales que comemos o comen nuestros vecinos en los pueblos, fortaleciendo nuestra economía campesina y no para exportar.
- Somos parte de la tierra y no la consideramos sólo un medio para hacer negocios. La tierra es parte de nuestra cultura y nuestra identidad. No tenemos nada que ver con la soja ni con los agronegocios.
- Somos quienes impulsamos la producción agroecológica cuidando nuestra salud ambiental.
- Somos la agricultura de los campesinos en profunda crisis social, económica y productiva, la agricultura de los que aún estamos lejos de ecuaciones con grandes ganancias. Lo nuestro es una forma de producción y un modo de vida que, pese a su invisibilidad histórica, reviste gran importancia para el país, entre otras cosas por el aporte que hacemos a la soberanía alimentaria, la generación de empleo y el arraigo rural.
- No estamos en las rutas, no formamos parte del reclamo por bajar las retenciones, porque no son el motivo de nuestras angustias y nuestros problemas. Porque antes de disputar mayores márgenes de ganancias, todavía hoy continuamos reclamando por el acceso a derechos básicos elementales como la tierra, el agua, el manejo de los recursos naturales, la salud, la educación, los caminos, en suma: ¡queremos justicia!
- Estamos en contra del *lock-out* empresario del campo y a favor de las retenciones a las exportaciones, como medida para frenar el avance del actual modelo agropecuario de los agronegocios y la soja transgénica.

- Pero esto no es suficiente para lograr justicia económica en nuestro país. Es necesario distribuir la riqueza, frenar los desalojos de campesinos y comunidades aborígenes y que el Estado entregue las tierras que ancestralmente nos pertenecen.
- Es necesario establecer un modelo de producción agroalimentaria que garantice los alimentos para toda la población y a precios accesibles. Ello significa garantizar la Soberanía Alimentaria de nuestro país, o sea, que como país podamos decidir sobre las siguientes cuestiones: ¿Qué producir y para quiénes producir? ¿Para alimentar a nuestro pueblo o para exportar forraje para el ganado europeo?
- Algunas de esas entidades empresarias pretenden representar a los “pequeños productores” para disfrazar sus oscuras negociaciones. Nosotros nada tenemos que ver con los reclamos que hacen. En este sentido también queremos denunciar que el Foro de la Agricultura Familiar es una pantalla con la cual la Federación Agraria Argentina negocia sus intereses y cargos en el gobierno, usando nuestro nombre.

Esta es una oportunidad para redefinir las estrategias de desarrollo en función de la agricultura campesina indígena, del pequeño agricultor que vive en el campo y del trabajador rural. Esa estrategia debe contar como actores fundamentales a las organizaciones campesinas y los pueblos originarios; destinar recursos a subsidios que mejoren la infraestructura comunitaria, productiva y de servicios sociales en el campo real; detener los desalojos de familias campesinas e indígenas; planificar la redistribución de la tierra y el repoblamiento del campo; garantizar la producción de alimentos sanos para la población; y centralizar en el Gobierno las exportaciones para regular los precios internos y redistribuir los ingresos.

Porque tenemos derechos y porque queremos vivir con dignidad en nuestras tierras: Reforma agraria integral que garantice la tierra para quien la trabaja y alimentos para todo el Pueblo Argentino.

Documento

Proclama campesina indígena

Coordinación de las organizaciones
de pequeños campesinos y pueblos
indígenas

Rosario, 24 de junio de 2008

Proclama del encuentro nacional de organizaciones campesinas, pueblos indígenas, pequeños productores y agricultores familiares.

Nosotros y nosotras, delegados y representantes de organizaciones campesinas, indígenas, pequeños productores y agricultores familiares, nos reunimos en la ciudad de Rosario el día 24 de junio de 2008 y acordamos:

1) Conformar una Mesa Coordinadora Nacional que represente las reivindicaciones y reclamos comunes de todas las organizaciones presentes.

2) Facultar a los delegados y delegadas establecidos en esta asamblea para reunirse con funcionarios y parlamentarios para expresar nuestras reivindicaciones y demandas, sintetizadas en:

- Facilitar la participación efectiva de las organizaciones campesinas y de pueblos indígenas en el diseño de políticas agrarias y el fortalecimiento de las organizaciones y el desarrollo integral de nuestro sector. Apoyo económico y tecnológico a las comunidades campesinas indígenas y cooperativas.
- Efectivizar la suspensión inmediata de los desalojos de campesinos, pueblos originarios y pequeños productores.
- Exigir nueva legislación de acceso a la tierra para la recuperación de territorio campesino y de pueblos indígenas.

3) Continuar trabajando en el desarrollo de este nuevo espacio de representación plural del sector campesino, pueblos originarios y de Agricultores Familiares.

Además, dejamos constancia de:

Las comunidades campesinas, pueblos originarios, pequeños productores y agricultores familiares no estamos representados por ninguna de las entidades ruralistas. Es decir, nos diferenciamos de SRA, CRA, FAA y CONINAGRO. No apoyamos su paro patronal ni sus reivindicaciones. Han sido serviles a las grandes corporaciones transnacionales de los agronegocios.

Son cómplices de graves violaciones a los derechos humanos de miles y miles de familias campesinas e indígenas. Miembros de APREESID, SRA, CRA, CONINAGRO y hasta la FAA han utilizado todo tipo de métodos criminales ilegales para expulsar por la violencia, incluso armada, a comunidades enteras campesinas e indígenas, con el accionar cómplice de jueces, policías y dirigentes políticos, violando y contaminando territorios, aguas, bosques, biodiversidad.

Repudiamos la manipulación de la información por parte de muchos medios de comunicación que han ocultado la diversidad del campo argentino y han desfigurado los rostros del genuino trabajador y trabajadora rural.

Las organizaciones presentes entendemos que debemos caminar hacia una transformación profunda del modelo agropecuario, que avance hacia la reforma agraria integral, la agroecología y la soberanía alimentaria.

Para que pueda ser posible la distribución de la riqueza y la alimentación de todo el pueblo argentino es necesaria la distribución y democratización del acceso a la tierra y los bienes naturales y el fortalecimiento de las economías campesinas, los pueblos indígenas y la agricultura campesina.

Continuaremos encontrándonos para formular propuestas concretas de desarrollo rural sustentable que contemplen a toda la diversidad de nuestros territorios.

Convocamos a todas las organizaciones que se sientan identificadas a sumar sus fuerzas y continuar delineando nuestro plan de acción y movilización.

Entendemos humildemente que, desde el 11 de marzo a esta parte, este espacio es la síntesis más consensuada y autónoma que expresa los intereses del sector.

Entendemos que las retenciones móviles, con reintegros, constituyen una herramienta válida de regulación de los mercados y de distribución de la riqueza.

Parte de esas retenciones deben reorientarse a dinamizar la agricultura familiar, la agricultura campesina y la agricultura de los pueblos originarios, en inversiones de infraestructura predial, fortalecimiento y desarrollo de las comunidades, asegurando la diversidad productiva que fortalezca las economías territoriales.

¡Soberanía alimentaria: tierra, territorio, trabajo, justicia!

Frente Nacional Campesino (MOCASE JURIES, MOCAFOR, MOCAJU, Hijos del Monte)

Ligas Agrarias

Movimiento Nacional Campesino Indígena-MNCI (MOCASE VC, Movimiento Campesino de Córdoba, Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra de Mendoza, Movimiento Campesino de Misiones, Encuentro Calchaquí de Salta, Comunidades Unidas de Molinos de Salta, Red Puna de Jujuy, SERCUPO, organizaciones de Buenos Aires)

COCITRA

Poriajhu Vía Campesina

Consejo Asesor Indígena (CAI)

Coordinadora Mapuche Neuquina

Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita

Cooperativa Nor Patagónica Movimiento Evita

CEPAR

Mesa de PP-Chaco

Asociación de Mujeres Campesinas-Entre Ríos

UNPEPROCH-Chaco

Productores Minifundistas "La Nueva Estrella"

Fuerza Criolla

Consejo Asesor Cooperativa Río Negro

Comisión Central de Campesinos

Unión Trabajadores Rurales (UTR)-Misiones

Unión de Trabajadores Técnicos Rurales de Misiones (UTTERMI)

Agrupación Padre Mugica
ICECOOP-Cooperativa de trabajo
Pequeños productores Villar Berm
Foro de Agricultura Familiar-Entre Ríos
Observatorio del Sur
Taller Ecologista
CPN-asesora
EFA JAHA ITATU
Mesa de Agricultura Familiar Norte Santa Fe
Movimiento Norte Grande
Asociación Biodinámica Argentina (ABDA)
Huerteros urbanos de Rosario
Cooperativa Surco (Bosque de Org.ch Sur Río Negro)
Lof. Mapuche "Mariano Solo"
CAUDAL-Salta
Em Renguedo-Rosario-La Colmena
UFA
EFA Mensú Peguera
Desarrollo Rural-Chaco
Efa Ñamembae
AF Cooperativa Agropecuaria
EFA COEMBOTA
PUSALI (Productores Unidos Santiago Liniers)
Foro de Agricultura Familiar-Chaco
UOCB
APPO
EFA (Pejú Porá)
Organización Tierra Nuestra
Cooperativa de Productores de Hermoso Campo Ltda.
MAC (Movimiento Agrario Correntino)
MAM (Movimiento Agrario de Misiones)
ARCAN Río Negro
Frente Campesino Por Tierra y Trabajo el INTI-Jujuy

Listado de referentes de la mesa coordinadora

Carlos Cremona, Américo Barúa, Oscar Matot,
Marcos Reina, Ángel Strapazzón, Ariel Méndez,
Benigno López, Osvaldo Lovey, Coco Egger,
José Raúl Aramayo, Beatriz Centeno, Marcela Jaramillo,

Inés Londra, José Franco Río, Rigoberto Lagos, Fabio Abábile,
Raúl Galván, Isabel Maza, Ángel Machuca, Francisca Ibarra,
Sergio Méndez, Antonio Zamora, Esteban Wurschmint y
María del Carmen Arina

Documento

Los productores invisibles

Comunicado del Frente Nacional
Campesino
Buenos Aires, 3 de junio de 2008

Los delegados y delegadas campesinos e indígenas, agricultores familiares, trabajadores de la tierra, de doscientas organizaciones de dieciséis provincias de la República Argentina, reunidos en el segundo plenario del Frente Nacional Campesino (FNC), en la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo, resolvemos lo siguiente.

- El FNC expresa su más enérgico repudio al paro patronal que ejecutan las cuatro entidades agropecuarias más poderosas del campo argentino y que defienden los intereses de las seis multinacionales más poderosas del mundo, que controlan el comercio exterior agropecuario, y los cinco grupos económicos más poderosos de la Argentina, que monopolizan el comercio interno agroalimentario del país. Rechazamos que unas pocas empresas agroexportadoras decidan por la vida de 40 millones de argentinos. Nos oponemos a cualquier intento de golpe de Estado económico y a la intención de subordinar al gobierno argentino bajo los dictados de los agronegocios.
- El FNC entiende que el paro patronal pretende abortar el Plan Estratégico de Desarrollo Agropecuario que queremos y necesitamos los argentinos para garantizar la soberanía alimentaria, la regulación del comercio exterior e interior y la justicia tributaria; medidas indispensables para

apuntalar la redistribución de la riqueza con justicia y equidad para una Argentina con soberanía económica e independencia política integrada a la región.

- El FNC sostiene que nuestro país no puede seguir siendo meramente la chacra para la producción de materia prima para alimentación de animales y la producción de agrocombustibles para los países más poderosos del planeta, que es la función que nos quieren seguir imponiendo las potencias del mundo. En el actual contexto mundial, nuestro país debe planificar la producción, industrialización y comercio de alimentos para los argentinos y para la exportación, ya que reunimos todas las condiciones necesarias para producir alimentos para nuestro pueblo y para exportar con valor agregado.
- El FNC alerta a la sociedad y autoridades acerca de los atropellos que llevan adelante empresas nacionales y extranjeras contra familias campesinas y comunidades originarias que han decidido resistir en las tierras que ancestralmente les pertenecen. Los atropellos forman parte de la campaña sistemática que desarrollan empresas agropecuarias y mineras para apropiarse de las tierras, los montes y las aguas que defienden los campesinos e indígenas. Instamos a las autoridades a tomar las medidas que correspondan para frenar los desplazamientos forzados y desalojos compulsivos de familias de pequeños y medianos productores agropecuarios.
- El FNC denuncia los desmontes masivos e ilegales que realizan empresas agropecuarias con topadoras, pisamontes y fuego, en varias regiones del país, para extender la frontera agropecuaria, destruyendo la flora y fauna autóctonas y provocando destructivos cambios climáticos.
- El FNC denuncia que ríos, arroyos, riachos, lagunas, esteros, pozos, represas y napas de agua son envenenados por el uso masivo e indis-

- criminado de agrotóxicos en los monocultivos extensivos, particularmente por la aplicación de glifosato en los sembradíos de cultivos transgénicos en regiones donde habitan campesinos e indígenas.
- El FNC reclama como propias de todos los pequeños productores agropecuarios, movimientos campesinos e indígenas las herramientas del Estado que tienen la función de diseñar, acompañar, implementar el Modelo de Desarrollo Rural Estratégico para la Argentina. Por ejemplo, la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Programa Social Agropecuario (PSA), PRODERNEA, PRODERNOA y SENASA.
 - El FNC define a la empresa cooperativa como una herramienta de unión, organización y solidaridad indispensable para mejorar la producción, transformación, comercialización, consumo y servicios públicos para los pequeños productores agropecuarios. Es decir, el cooperativismo es un instrumento clave para una Política Estratégica de Desarrollo Rural y Redistribución de la Riqueza. El cooperativismo puede y debe cumplir una función de gran trascendencia en la transformación del campo y de la economía argentina.
 - El FNC sostiene que es urgente profundizar la intervención del Estado para mejorar la diversidad, calidad, cantidad, continuidad y rentabilidad de la producción de los pequeños productores de todas las regiones del país. Queremos lograr precios justos para los productores y consumidores y evitar de esa manera las terribles distorsiones que se dan actualmente en los productos alimentarios.
 - El FNC considera de trascendental importancia el fortalecimiento de los bancos de semillas para recuperar, mantener y multiplicar la rica biodiversidad.

- sidad agrícola y alimentaria, por la importancia cultural, económica, social y política para un modelo de país serio y democrático.
- El FNC reclama la urgente regularización dominial de las posesiones de tierras de familias campesinas y comunidades indígenas de diferentes puntos del país, para lo cual es necesario un relevamiento minucioso de posesiones y propiedades de tierras agropecuarias. Al mismo tiempo, son necesarias reglas claras que limiten la propiedad de la tierra tanto a empresas nacionales como extranjeras, que tengan por objeto garantizar la unidad económica productiva, pero evitar la excesiva concentración de la tierra y los recursos naturales, fuente de graves injusticias en el país. La tierra es para quien la trabaja con sus manos, respetándola, cuidándola y amándola.
 - El FNC propone el fortalecimiento sistemático de la educación rural con la participación de las organizaciones, rescatando, respetando y resaltando la cultura, historia, geografía de cada pueblo rural.
 - El FNC propone el cuidado integral de la salud, atendiendo especialmente a enfermedades como el mal de Chagas y la tuberculosis –que golpean con particular dureza a la población campesina– entendiendo que la salud es un derecho y no un negocio.

Documento

Las soluciones mágicas y las inevitables catástrofes subsiguientes

Grupo de Reflexión Rural
Julio de 2008

Nos preguntamos en estos momentos, y luego de la crisis, si lo que concluyó es una etapa, y en ese caso si comienza otra cosa, o si acaso tendremos más de lo mismo o una profundización del mismo modelo. El hecho de que pudiera resolverse un conflicto de más de cuatro meses de duración, generado por un retoque en el porcentaje de las retenciones a la exportación, y que esa "resolución" se haya logrado de manera pacífica y mediante mecanismos institucionales produce un alivio en la población. Pero, ¿cambia las cosas? ¿Se dejará de sembrar soja? ¿Se distribuirá mejor la renta agrícola? ¿Se preservarán las tierras agrícolas sometidas a gravísimas amenazas de pérdida de fertilidad? ¿Se dejarán de fumigar los campos y las poblaciones que resultan víctimas inermes de los paquetes agrotóxicos? Se abre una nueva ventana al futuro, pero ¿a qué futuro? Los legisladores y los funcionarios tienen un nuevo desafío por delante, el de poner en práctica los discursos realizados en estos últimos meses. ¿Cómo lo harán? ¿Será posible alcanzar situaciones de cambio en el universo agropecuario? ¿O sólo se tratará, según parece, de dar un nuevo impulso a la biotecnología, como propone un reciente proyecto de ley para la creación de un fondo para la soberanía biotecnológica?

Las enseñanzas de las últimas décadas nos muestran que tanto los administradores políticos como los dirigentes agropecuarios siguen una marcada tendencia a la búsqueda de "soluciones mágicas". La resolución 125 fue un intento de solución mágica. Su aplicación derramaría riqueza sobre una sociedad golpeada, y salud sobre una

sociedad enferma. Es pensamiento mágico. Un retoque en el porcentaje de una retención traería una cascada de beneficios. Lo cierto es que aquí la magia falló, y lo que trajo es un prolongado conflicto y por último la marcha atrás y la derogación de la medida.

Los sistemas ecológicos funcionan según sus propias reglas, y esas reglas están dadas por el conjunto de la biodiversidad, los componentes físicos y las particularidades climáticas de cada región. Las distintas formas de intervención del hombre dentro de estos sistemas deberían tener una coherencia con la totalidad. Tales intervenciones deberían estar regidas por una conciencia del todo y de sus sentidos más íntimos. De lo contrario, el sistema como un todo seguramente reaccionará negativamente. Las apetencias humanas, especialmente las económicas, normalmente se despliegan dentro de la ilusión de no necesitar ajustarse a las restricciones del ecosistema. En las últimas décadas, tanto los pensamientos políticos como los económicos parecen guiarse por la regla de forzar los ecosistemas hasta sus límites y, en ocasiones, a empujarlos fuera de ellos mismos. Lo que sobreviene es inevitablemente un desastre, lo que llamamos una situación de catástrofe.

Esas "soluciones mágicas" que fueron medidas circunstanciales para atacar un síntoma, un paliativo para salvar una profunda incomprensión del hombre con su entorno, a través de la costumbre se transforman en verdades monolíticas, en cuestiones fuera de discusión, en indiscutibles y temibles dogmas, de manera tal que nadie dentro del sistema académico y de producción podría hallar un espacio de reflexión como para que sean revisadas. Ahora bien, dado que no resuelven los desequilibrios iniciales, esas soluciones mágicas generan dependencia; son adictivas, porque trabajan fuera del sistema, porque son incorporadas sin un conocimiento apropiado para manejarlas. Las soluciones mágicas fueron siempre adoptadas en función de validaciones económicas; luego la industria y el Estado se ocuparon de buscarles algún beneficio social o ecológico, que por supuesto no tienen en el mediano-largo plazo, pero que en la simulación que crean los medios de comunicación resuenan como verdades establecidas.

Ejemplo de ello es el uso de agroquímicos. Desde los inicios de la revolución verde, la promesa de un aumento de la producción y de un triunfo en la guerra contra las plagas, más que una promesa, consistió en una solución mágica. ¿Hay chinches? Ponerle Endosulfán. ¿Hay malezas? Echarle Tordón. Así de sencillo, así de mágico, así de irreal, así de antiecológico, así de brutal y de absolutamente criminal con el entorno. La soja transgénica fue otra solución mágica, acogida con esperanzas como una simplificación en las tareas, un ahorro de combustible y una garantía de ventas, con precios crecientes, en medio de un panorama de deudas y de empresas quebrando.

Los nuevos desarrollos biotecnológicos, el maíz Bt-RR por ejemplo, son nuevas soluciones mágicas. Se supone que controlan plagas, que tiene buenos rendimientos; las malezas son combatidas con glifosato y encima no hay que hacerse problemas por la venta, total no es para alimento... ¡es para biocombustibles...! ¡Y los biocombustibles! La última y más prometedora solución mágica para la escasez del petróleo, la volatilidad de su precio, el calentamiento global y la conciencia negra de los consumidores europeos.

Las soluciones mágicas pasaron en su momento por explotar el quebracho colorado en el bosque chaqueño en épocas de La Forestal Argentina; una sola especie de las miles que tiene este bosque fue talada inmisericordiosamente. Ya sabemos sus consecuencias. Ese tipo de "soluciones" creyeron encontrar sólo en el tanino, en la cabra, o en los postes y durmientes, o en el carbón, los recursos de tan magníficos bosques. Hasta que llegaron los sojeros con la solución mágica más reciente, y lo único que vieron del bosque fue su suelo bajo la cubierta vegetal, un suelo que en el monte no es sino apenas una pequeña parte de un todo, y con esa mirada parcial y economicista justificaron tanta barbaridad, y con ella impulsaron las topadoras, las quemas y las fumigaciones, que tanta devastación y muertes han provocado entre las poblaciones locales. Las soluciones mágicas fueron las de cambiar toda esa riquísima biodiversidad, eliminarla de los campos y del pensamiento de los argentinos, sólo para encontrar un recurso a explotar, aquello que justifique transformar el bosque en dinero. Quebracho colorado, algarrobo, palo santo, postes, leña, carbón, suelo. Un solo recurso en medio de un conjunto

extraordinario de posibilidades. Las extracciones de corte madero sobre su masa forestal y su suelo fueron las soluciones mágicas recurrentes para el Chaco. Y podríamos repetir estos ejemplos en cada bioma de la geografía argentina.

Cuando la ciencia produce soluciones mágicas

Estas políticas se instalan y se facilitan mediante el recurso de ir dejando paulatinamente sin financiamiento a la investigación en ciencias básicas y gracias a un extendido desprecio hacia la cultura y la educación popular. Se generan así lagunas profundas en el conocimiento de los ecosistemas, y en la capacidad de apreciar aquellos "campos" en los que se trabaja y de los que se toma la "riqueza". Al no concebir la complejidad de los ecosistemas, al no comprender a fondo su funcionamiento, al estar limitados en las decisiones por esta ignorancia básica que configura un menosprecio por el entorno, surgen con naturalidad las soluciones mágicas, aquellas que presuponen no necesitar esos conocimientos previos.

Al mismo tiempo, en las universidades se ha logrado, por complejos mecanismos de selección desde lo económico y lo ideológico, una desvalorización de la ciencia básica, que fue reemplazada por la sobrevaloración de las ciencias "aplicadas", que sólo cobran valor si "pueden generar ganancias" para el autosustento de la propia investigación científica. Y este fenómeno se da tanto en las universidades privadas como en las públicas. Esta situación ha forzado a los científicos a buscar fondos en los capitales de la industria y del mundo financiero, introduciéndose de esta manera en un círculo vicioso de intereses ajenos a la investigación científica. De esta forma, durante las últimas décadas, la industria y las finanzas han tomado las riendas de las investigaciones y determinan las estrategias, fijando qué conviene investigar en las universidades. Esta burbuja de intereses se ha generado dentro de un sistema que sólo da mérito científico a las investigaciones que pueden ser publicadas en ciertas revistas internacionales reconocidas, que a su vez están involucradas o manipuladas directa o indirectamente desde los intereses de la industria y las finanzas.

Los científicos, por su parte, pueden contar con más subsidios si tienen suficientes publicaciones en es-

tas mismas revistas. Y así se genera una espiral creciente de intereses y complicidades entre lo público y lo privado. Para que la investigación sea "competitiva" se necesita de la "confidencialidad" de los resultados científicos. El mundo científico, casi sin darse cuenta, ha terminado envuelto en una maraña de intereses que le eran ajenos, y que lo obligan a seguir los pasos dictados por las empresas, para poder continuar existiendo como actividad y como corporación en el sistema académico. La industria y las finanzas han comprobado que, si ayudan a la formación de cuadros científicos, esos mismos cuadros les pueden ser útiles como instrumentos de sus lobbies. Estos cuadros científicos pasan a tener entonces más fondos para más resultados publicables, que a su vez generan más fondos. Muchos científicos promocionan sus ideas en los medios de comunicación, en los que trabajan asimismo cuadros periodísticos, también financiados por la industria y los capitales de especulación, que dan a conocer los "beneficios" magníficos de las investigaciones de estos científicos que lograron afianzarse en el modelo. Así, de esa manera, los cuadros científicos cobran notoriedad y reconocimiento en el sistema y, desde el pedestal alcanzado de "científicos neutros", logran convencer a los políticos de turno de la importancia que tiene la ciencia aplicada para la economía nacional.

Es entonces por medio de los cuadros formados desde los subsidios de la industria y las agencias de desarrollo europeas y norteamericanas, influenciadas por los mismos científicos lobbistas, creyentes en el crecimiento y el progreso, que la investigación aplicada comienza a ser subsidiada desde el Estado también, y se confunde de manera obscena con la investigación básica en biotecnología, tal como ocurre en nuestras universidades, en los organismos de Ciencia y Tecnología y en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). A partir de ahí, los cuadros científicos formados por la industria y las finanzas pasan a tomar cargos públicos con poder de decisión en ministerios, secretarías, agencias, institutos nacionales, etc. Estos mismos científicos lobbistas llegan incluso a representar a nuestro gobierno en reuniones internacionales donde se deciden las políticas y protocolos de bioseguridad, desestimando, ridiculizando e incluso desmin-

tiendo en forma descarada las denuncias sobre los resultados desastrosos de sus propias investigaciones, que sólo pueden seguir escondiéndose con la complicidad de los medios de comunicación involucrados.

En forma paralela, otras áreas de las ciencias son marginadas por los intereses de la industria y las finanzas, tales como por ejemplo, la ecoepidemiología y la ecología, debido a que el objeto de su ciencia es la investigación preventiva y no aplicada a intereses económicos industriales. O peor aún, se utilizan sus conceptos, como "responsabilidad social empresarial", de modo propagandístico, pero vaciándolos de contenidos, generando esquemas de autorregulación y cerrando el paso al control social o estatal. En este cada vez más complejo proceso de formación de cuadros científicos lobbistas es que la biotecnología ha pasado de ser una mera herramienta de laboratorio, entre muchas otras posibles, a ser un objetivo en sí mismo de la investigación científica. Los descubrimientos devienen en "invenciones" que pueden ser "patentables" y comercializadas. Estos descubrimientos, promocionados hasta el cansancio por los medios, pasan a ser las futuras soluciones mágicas contra el hambre, las enfermedades, los déficit energéticos, la contaminación y demás males generados por muchos de los mismos "progresos" científicos mágicos que los antecedieron.

Las soluciones mágicas traen problemas...

Las nuevas soluciones mágicas no son, entonces, más que ideas y procedimientos reduccionistas sacados de su contexto biológico y que pretenden no necesitar un conocimiento de los ambientes naturales en donde se liberarán los organismos modificados genéticamente. El proceso de cooptación de los científicos y de la colonización de las instituciones técnicas del Estado por parte de las corporaciones se ha consumado y ya no necesitamos como antaño tropas de ocupación; ahora, muchos de nuestros investigadores y técnicos comparten plenamente los valores de la globalización y los intereses de las corporaciones.

Pero las soluciones mágicas generan problemas inesperados. Y como somos dependientes de estas soluciones e invenciones patentables, asumimos los problemas

como parte “natural” de los procesos de prueba y error a los que nos domesticaron y en los que los sufrimientos a que nos somete la permanente improvisación no son visualizados por la casta política como una gravísima falta a sus propios deberes. La revolución verde generó mortandades, envenenamientos, residuos químicos que hasta hoy nos enferman, problemas que se extienden a lo largo de sucesivas generaciones, y lo peor es que ni siquiera pudo cumplir con su cometido originario, que era la promesa de alcanzar mayores rindes de producción en crecimientos programados. Las plagas ganaron resistencia y siguen atacando los cultivos, y cada vez somos más dependientes de los insumos químicos y de las empresas que los producen. Sin embargo, sorprendentemente, en los círculos académicos y políticos no se discute siquiera si fue o no conveniente entrar en la revolución verde que derivó en los cultivos transgénicos —es decir, genéticamente modificados— como su más novedosa expresión, y mucho menos se debate si, acaso, debiéramos abandonarla.

Ahora está ocurriendo lo mismo con la soja transgénica... y con sus devastadores e indiscutidos impactos, que ambas partes del reciente conflicto reconocen, aunque asombrosamente sólo se diferencian entre sí en la disputa por su renta o en proponer diversos caminos para ampliar las extensiones de los monocultivos. Estas soluciones mágicas son el negocio de las grandes empresas y, por ello mismo, las preferidas por muchos políticos y decisores, que ubicados detrás de sus escritorios son influenciados por los lobbies de la agroindustria, de la industria biotecnológica y del mundo financiero, resolviendo imprudentemente, sin conocimiento alguno fundado y teniendo en cuenta sólo las voces más audibles, que son siempre manipuladas desde los medios masivos de comunicación, allegados a los intereses de la agroindustria y la industria biotecnológica. Lo peor tal vez es que, al no reconocer a estas soluciones inicialmente como “fuera de los sistemas”, somos incapaces de combatir sus causas primarias: los desequilibrios; y nos dedicamos a buscar nuevas soluciones mágicas para resolver los problemas causados por las primeras. A estos problemas, generados por medidas circunstanciales, forzadas y adictivas, proponemos nuevas soluciones circunstanciales, más forzadas y adictivas

todavía. Este pensamiento lineal y secuencial es propio de las empresas agrícolas y aun de la ciencia empresarial; a cada efecto colateral se nos propone más de las mismas medicinas que los ocasionaron, supuestas soluciones que significan nuevos negocios para las empresas. Muchas veces sólo se trata de "subir la dosis". Y así vamos, de "solución mágica" en "solución mágica"; y mientras tanto, los gobiernos se suceden, los funcionarios se reciclan, los pobres siguen creyendo en poder salir alguna vez del infierno social y ambiental en el que se encuentran, y los ecosistemas (el ambiente) retroceden de manera irreversible.

Muchos funcionarios están encontrando una nueva solución mágica. Una solución que presuntamente no tendría conflictos con la producción de alimentos, que permitiría producir en tierras "marginales", que sería de manejo simple, y con durabilidad en el tiempo. Las tierras "marginales" son en general aquellas en las que hubo sobreexplotación ganadera, o actividades extractivas, tales como obtención de postes, varillas, carbón, leña. Cuando no quedan árboles aptos para sacar, y el piso está sobrepastoreado por cabras, las tierras se vuelven "improductivas", es decir, no rentables. La solución sensata pasaría por permitir que el bosque se regenerara, acompañando al tiempo con tareas de remediación y reforestación. Todo lo contrario, para esas tierras degradadas, los funcionarios chaqueños encontraron que sería posible aprovecharlas para cultivos energéticos. La jatropha y el tártago o ricino ya están siendo promocionados por una empresa suiza y se han firmado contratos por cinco años con productores familiares minifundistas y pequeños productores, para llegar a 20 mil has en esta primera etapa. Es casi obvio decir que estas "soluciones" aisladas del conjunto de lo ecológico, de lo social y lo económico, y pretendiendo la producción de agrocombustibles, no sólo no mitigarán el cambio climático sino que producirán todavía mayores expulsiones de campesinos, que seguirá concentrándose la riqueza y que se sumarán miles de hectáreas de nuevos desmontes a la actual deforestación. No se solucionará la pobreza, ni el hambre, ni la tuberculosis, ni el Chagas, ni la leishmaniasis, ni la fiebre amarilla, ni las riquetsias; y, para peor, se instalarán y se trabajará con especies extremadamente invasoras, cuyo impacto

sobre la biodiversidad chaqueña será quizás mucho mayor que el de la soja transgénica. Y todo para obtener, tan sólo, un puñado de dólares, que jamás se transformarán en desarrollo para las comunidades, sino que serán índices que harán crecer el producto bruto del que se vanaglorian en el gobierno nacional. Otra vez, seguiremos confundiendo el “crecimiento” con el desarrollo.

Crecimiento, desarrollo y necesidad de decrecer para desarrollarnos

Tendríamos que diferenciar el “crecimiento” del “desarrollo”, ya que *los cementerios también crecen, lo mismo que las cárceles y los petroleros hundidos* que contaminan los océanos y hacen crecer los índices del Producto Bruto. Los modelos macroeconómicos de crecimiento ya se aplicaron cuando se pasó de 25 millones de toneladas de granos en la década del setenta a los casi 70 y pico de millones en los noventa, y nada de eso resolvió los problemas microeconómicos, microsociales, microambientales, al contrario... los agravó. Por ende, esa propuesta es exactamente lo que se espera de un modelo basado en una economía de mercado, teniendo como meta la globalización. Es decir, seguimos con las mismas recetas y nos olvidamos del Desarrollo, de la Sostenibilidad y, en especial, de la Calidad de Vida, que nada tiene que ver con la productividad.

Las soluciones mágicas necesariamente van acompañadas de ignorancia y de oportunismo. En realidad, las soluciones mágicas no funcionan y nunca van a funcionar, en la medida en que no trabajen a partir del conocimiento integral de los ecosistemas en los que vivimos y que usamos para producir y cuyo origen no sea el desarrollo armónico sin afán de lucro excesivo. ¿Quién podría imaginar o acordar hoy que se elimine la soja transgénica o cualquier otro evento transgénico, OGM (organismo genéticamente modificado), de la Argentina? Sólo un idealista... ¿Quién podría proponer seriamente que se vuelva a una agricultura de procesos, sin aportes de agroquímicos? ¿Qué biólogo se atrevería hoy, desde los regímenes universitarios e institucionales imperantes actuales, a proponer soluciones integrales ecológicas o ecoepidemiológicas? Nadie sensato, sin lugar a dudas; sólo algunos pocos

animosos con espíritu heroico, bajo el riesgo de ser tildados como irrealistas o idealistas no serios, o de no ser oídos...

¿Quién podría proponer que es necesaria todavía una discusión a fondo sobre la validez ética de manipular genes de otros organismos, saltar las barreras de los reinos de la Naturaleza y mezclarlos alegremente en la alquimia insensata de los biotecnólogos, para seleccionar por descarte aquello que luego dirán que era lo que buscaban, invirtiendo el resultado en hipótesis, con una moral de dudosa humanidad? Sólo un místico o, de nuevo, algunos idealistas. La intensificación del actual modelo de agronegocios, que involucra al sector de la ciencia y de la tecnología y a no pocos intelectuales urbanos, es una consecuencia directa de las nuevas formas de colonización que la globalización económica genera en los países del tercer mundo. Así, el Estado argentino, y con él todo nuestro presente y futuro, está siendo administrado por una forma de *cogobierno* integrado por las autoridades, las empresas de biotecnología, los grupos exportadores y el sector agrícola, y cuyo objetivo es el crecimiento económico más allá de todo límite social y natural. Ellos están determinando hoy las políticas que nos guían hacia un futuro que se hunde en la más profunda catástrofe de nuestra historia.

La adicción al crecimiento encubre nuevas formas de colonialismo

Para el año 2010 se esperaba alcanzar una producción de 100 millones de toneladas de granos, para que nuestro país resurgiera. Alcanzado ese límite casi dos años antes, el gobierno anuncia que confía en alcanzar un crecimiento de la producción de granos de un 55% para 2015, es decir, llegar a 150 millones de toneladas. Este crecimiento, festejado junto al gobierno por los sectores rurales, las empresas de biotecnología y las grandes exportadoras, parece ser en sí mismo la nueva solución mágica que nos sacará de la actual inequidad social, pobreza, desnutrición, deterioro ambiental y catástrofes generadas por los anteriores crecimientos. Ante esas recientes propuestas de aumentar la producción de granos, tanto como de las cadenas relacionadas a la producción de carne y leche para exportación, con las consecuentes promesas de reactivación económica y generación

de empleo en los próximos seis años, el Grupo de Reflexión Rural considera que la ciudadanía tiene el derecho y la obligación de conocer las consecuencias que habrán de producir estas políticas. Estamos convencidos de que los males que genera el crecimiento no pueden combatirse con más crecimiento. El crecimiento es *adictivo* para las autoridades, para las grandes empresas exportadoras y, lamentablemente, para la mayor parte del sector agropecuario argentino. Al igual que un adicto al “paco”, que, en su desesperación, es capaz de robar a su madre o matar a su vecino, las grandes empresas y el gobierno son capaces de esquilmar la tierra y destruir la sociedad dejando sin suelo a las próximas generaciones, con tal de alimentar su irrefrenable adicción al crecimiento.

¿Las consecuencias impactantes del crecimiento o los impactos del crecimiento?

El crecimiento de los últimos años produjo una terrible concentración de la riqueza, un avance en la contaminación de campos y pueblos, una pérdida de la calidad alimentaria, un encarecimiento de los alimentos, un colapso en la estructura energética, una mayor desertización y pérdida de fertilidad de la tierra agrícola, un aumento de la violencia en la sociedad, un crecimiento exponencial de formas indignas de vida y una enorme infelicidad en nuestro pueblo. Estos males no se solucionarían con debates sobre la distribución de la renta de un modelo colonial de insumo-dependencia. Por otra parte, un aumento del crecimiento en la producción, como se nos propone, sólo intensificará estos problemas, hipotecando aún más nuestro futuro y el de nuestros nietos.

La producción para exportar recibe subsidios del Estado nacional, que todos pagamos con nuestros impuestos, además de enormes subsidios en la forma de *externalidades*, es decir, consecuencias no deseadas de la producción de las cuales no se hacen cargo los productores ni los exportadores: incidencia de enfermedades, decrecimiento del nivel intelectual, pérdidas del potencial biótico de los suelos, deforestación, contaminación masiva de aire, tierra y agua, pérdida de la capacidad productiva a futuro. Lamentablemente, el Estado tampoco las asume, y se dedica a aplicar paliativos para contrarrestar sus efectos. Los trabajos generados por el

crecimiento que habitualmente se nos propone son trabajos efímeros, que al depender de un ambiente en grave estado de deterioro no pueden sostenerse por muchos años ¿De qué sirve crear un puesto de trabajo hoy si implica eliminar diez puestos en el futuro? Los sectores marginados de la sociedad, las poblaciones enfermas por las fumigaciones de los agricultores industriales, la tierra maltratada por el afán de lucro, los bosques arrasados son las nuevas “joyas de la abuela” que soportan el crecimiento económico argentino.

El crecimiento nos conduce al desastre y a la catástrofe de la insustentabilidad. El desarrollo puede abrir caminos hacia la felicidad de nuestro pueblo

Las nuevas generaciones de argentinos se encuentran en un grave riesgo, si es que continúan cumpliéndose las metas de crecimiento del actual modelo de agronegocios. Ya hay miles de niños que en sus familias no han visto trabajar a sus padres ni a sus abuelos. El coeficiente intelectual está en descenso por problemas de desnutrición y sub-alimentación. El sistema educativo está colapsado, y sus autoridades se encuentran entre la espada y la pared, entre padres furiosos y amenazantes, niños educados por la TV-basura, y un sistema que les impide tomar medidas disciplinarias en un marco de sentido, ya que el país carece de todo Proyecto Nacional. Los hospitales no tienen insumos ni tienen médicos, los transportes públicos empeoran y se encarecen cada día, la justicia tiene el peor descrédito de su historia. Estos males y muchos otros no se solucionan con dinero ni con más crecimiento. Su solución pasa por una planificación del uso de la tierra; por políticas de soberanía alimentaria, producciones al servicio del hombre y no de las ganancias de los mercados; por hacer de la dirigencia una escuela de honestidad intelectual, con integridad moral y sentido de servicio. La noción de Bien Público debe volver a tener su importancia en el tejido social. Con el crecimiento acumulado de todos estos años, hay más que suficiente para ordenar la sociedad y empezar a transitar un camino hacia el desarrollo.

Para nosotros, como Grupo de Reflexión Rural, un ecosistema nos propone siempre un mandato que se hace necesario cumplir, y además, que deberíamos transformar en políticas públicas: el de poder generar la mayor cantidad de biomasa y biodiversidad que ese ambiente permita. Si se quiere, es una función teleonómica. Lamentablemente, los científicos cooptados por la ciencia empresarial ignoran ese mandato y, en todo caso, vinculan estos criterios con la religión, e intentaron ridiculizarlos. Ellos, desde la soberbia de una ciencia que, pese al cambio climático, continúa rindiendo culto al progreso ilimitado, piensan que la remediación de un ecosistema es sólo cuestión de azar o a lo sumo la razón de una propuesta empresarial. Obviamente, estas posiciones devienen en cruces de pensamiento en los cuales no resulta fácil hacer cambiar de parecer al otro, porque ello implicaría que modificaran su cosmovisión. Se trata en esencia de concebir y respetar el modo en que se estructura la vida, y partimos de la convicción de que, si le dan tiempo, el proceso de la vida conduce siempre a una mayor complejidad, a la vez que aprovecha cada salto de energía de un nivel a otro para generar nuevas relaciones y, en especial, mayor conciencia.

Documento

El capital internacional está dominando la agricultura brasileña

João Pedro Stedile

Miembro de la Coordinación Nacional de Vía Campesina, Brasil
São Paulo, 30 de julio de 2008

El movimiento del capital financiero

En los últimos años hubo un proceso intensivo y permanente de concentración y centralización de las empresas que actúan y controlan todo el proceso productivo de la agricultura mundial.

Concentración es el concepto utilizado por la economía política para explicar el movimiento que hacen las grandes empresas, para aglutinar, acumular y constituirse en grandes grupos. Así, en cada rama de producción se va generando una situación de oligopolio, donde unas pocas empresas controlan tal sector. El segundo movimiento del capital es la centralización, en la que una misma empresa pasa a controlar solita varios sectores de producción, a veces incluso sin relación entre sí. Esos dos movimientos lógicos del capital han sido complementados en el sector agrícola con un proceso de internacionalización del control del mercado y del comercio a nivel mundial. Es decir, algunas empresas han pasado a actuar en todos los países y a controlar el mercado a nivel mundial.

Ese movimiento del capital –que era más perceptible, desde la teoría del imperialismo, en las grandes empresas industriales– en los últimos diez años pasó a dominar también el sector agrícola. Y lo más grave, ahora, bajo la hegemonía del capital financiero, la velocidad y el volumen de capital que aportó en la agricultura llegaron con mucha más fuerza y alcance de lo que había acontecido en los demás sectores productivos a lo largo del siglo XX. Y eso ocurrió porque, en los últimos años, se acumuló en los países ricos mucho capital en forma de dinero, es

decir, capital financiero. Y ese capital se fue desplazando a la compra de acciones de las empresas más lucrativas también del sector primario. Así, en pocos años, por efecto de la inversión de ese capital financiero en la compra de acciones, la concentración y la centralización se dieron en forma impresionante.

Resultado

Hoy, casi todas las ramas de la producción agrícola están controladas por grupos de empresas oligopolizadas, que se coordinan entre sí. Así, en la producción y comercio de granos –como la soja, maíz, trigo, arroz y girasol– están solamente Cargill, Monsanto, ADM, Dreyfus y Bunge, que controlan el 80% de toda la producción mundial. En las semillas transgénicas, están Monsanto, Norvartis, Bayer y Syngenta, que controlan toda la producción. En los lácteos y derivados encontramos a Nestlé, Parmalat y Danone. En los fertilizantes, aquí en Brasil, sólo tres empresas transnacionales controlan toda la producción de las materias primas: Bunge, Mosaico y Yara. En la producción del glifosato, materia prima de los pesticidas agrícolas, sólo dos empresas: Monsanto y Nortox. En la maquinaria agrícola también el oligopolio está repartido entre Agco, Fiat, New Holland, etcétera.

Ese movimiento, que se desarrolló a partir de la década del noventa, se aceleró en los últimos dos años, con la crisis del capitalismo en Estados Unidos. Las tasas de interés en los países centrales cayeron al 2% anual, y ello, comparado con la tasa de inflación, llevó a que los bancos perdieran dinero. Entonces, el capital financiero se desplazó a la periferia del sistema para protegerse de la crisis y mantener sus tasas de ganancia. En los últimos dos años, llegaron a Brasil cerca de 330 mil millones de dólares en forma de dinero. Parte de ese recurso fue invertido a través de los bancos locales, para incentivar las ventas en cuotas de inmuebles, electrodomésticos y automóviles, a tasas promedio del 47% anual. Una locura, comparado con las tasas de los países desarrollados.

Otra parte del capital fue destinada a la compra de tierras. Un artículo periodístico aparecido en *Folha de São Paulo* estimó que el capital extranjero compró, en

los últimos años, más de 20 millones de hectáreas. En especial en las regiones del centro-oeste y en la nueva frontera agrícola del llamado Ma-pi-to (Maranhão, Piauí y Tocantís), donde los precios de las tierras estaban mucho más bajos. Otra parte enfiló hacia la Amazonía buscando áreas mineras, proyectos hidroeléctricos y la posesión de inmensas áreas de biodiversidad que más tarde darán frutos, cuando sean explotadas por sus laboratorios. En el área de la celulosa, tres grandes grupos: el noruego (Aracruz), el sueco-finlandés (Stora Enzo) y el estadounidense (International Paper) desplazaron toda su producción hacia las ricas condiciones edafoclimáticas encontradas en Brasil. Así, están previstas una expansión del monocultivo del eucalipto en toda la región que va del sur de Bahía hasta la frontera con Uruguay y seis nuevas fábricas proyectadas. Serán miles de hectáreas de esta plantación industrial que destruye todo y se transforma en un verdadero desierto verde.

Asimismo, hubo una elevada inversión de capital extranjero en la expansión del monocultivo de la caña de azúcar para la producción y exportación de etanol. El área de la caña pasó de 4 a 6 millones de hectáreas. Hay proyectos para 77 nuevas usinas de etanol, que serán construidas a lo largo de cuatro grandes alcoductos planificados para transportar el alcohol del centro-oeste hacia los puertos de Santos y Paranaguá. Y de la región de Palmas (TO) hacia el puerto de São Luis (MA). Dos de esos alcoductos son de Petrobras y dos serán de inversionistas extranjeros.

Las corporaciones trasnacionales aumentaron también sus inversiones en la producción y multiplicación de semillas transgénicas, en especial del maíz. De ahí la presión y el lobby de las empresas Syngenta, Monsanto y Bayer para que el gobierno permita sus variedades de maíz transgénico. Algunas de esas variedades están prohibidas en Europa, pero por aquí... ¡todo vale!

El agronegocio

Esta avalancha del capital extranjero en el control de nuestra producción agrícola, en los insumos y en la expansión de los productos para exportación sólo fue posible por la alianza entre las empresas mencionadas y los grandes hacendados

propietarios de la tierra. Los hacendados intervienen con sus grandes extensiones de tierra, con la depredación del medio ambiente y con la superexplotación del trabajo agrícola, y a veces hasta con trabajo esclavo, y se asocian subordinadamente a estas empresas.

Este modelo agrícola, que denominamos agronegocio, es el matrimonio de las empresas transnacionales con los grandes propietarios de tierras. En él no hay espacio para la agricultura familiar, campesina. No hay espacio para el trabajo agrícola, pues usan alta tecnología, mecanización en todos los niveles y herbicidas¹.

El resultado ya se percibe en las estadísticas. Brasil está girando hacia el gran monocultivo para la exportación. Una especie de recolonización agroexportadora, que recuerda los tiempos del imperio. De las 130 millones de toneladas de granos producidos, nada menos que 110 millones son sólo de soja y maíz. Para la producción pecuaria bovina quedan 300 millones de hectáreas, para producir para exportación. Y lo que sobra es un inmenso desierto verde de eucalipto. ¡Ese es el modelo brasileño! Dará mucha ganancia a algunos hacendados y a unas pocas empresas extranjeras. Pero el pueblo brasileño se quedará con el pasivo ambiental, con el desempleo y la pobreza.

Las contradicciones afloran rápido

Las contradicciones de ese modelo perverso afloraron con rapidez. El precio de los alimentos se disparó –fruto de la especulación del capital financiero en las bolsas y el control oligopólico del mercado por las empresas– y llegó a duplicarse, en dólares, en el último año. Los alimentos están cada vez más contaminados por el uso intensivo de pesticidas. Y el agronegocio no logra producir alimentos sanos, sin herbicidas. Sólo la agricultura familiar y campesina lo consigue. La producción intensiva de etanol por medio del monocultivo de la caña no soluciona los problemas del calentamiento global; al contrario, los agrava. El mayor problema de los combustibles no es sólo el petróleo, sino sobre todo la forma de transporte individual, alentada por el capital financiero que presiona por el aumento de las ventas de vehículos en cuotas. Transformaron nuestras ciudades en un infierno.

Esa forma de monocultivo agota los recursos naturales, el suelo, el agua subterránea y afecta la calidad y localización de las aguas. El monocultivo destruye la biodiversidad y desequilibra el medio ambiente de la región.

Frente a esa situación es que los movimientos sociales reunidos en Vía Campesina de Brasil resolvieron unirse e incrementar sus protestas. En los últimos meses se multiplicaron las protestas de campesinos en todos los estados del país. Contra el modelo y contra la actuación de las empresas transnacionales, como Monsanto, Cargill, Syngenta, Bunge, Bayer, etcétera. Esas protestas han servido como una especie de pedagogía de masas. Una alerta para que la sociedad brasileña despierte, dada la gravedad del problema y sus consecuencias futuras.

La respuesta de las empresas...

Las empresas extranjeras y sus perros guardianes nacionales saben de los problemas sociales y ambientales que causan. Y como no tienen razón en su forma de dominar la naturaleza, resolvieron enfrentar a los movimientos de Vía Campesina con diversas tácticas combinadas. Primero, con campañas publicitarias millonarias, con artistas famosos, en la prensa. Segundo, con la manipulación de sectores derechistas del aparato judicial y del Ministerio Público, que adhieren a ellos por ideología, para que criminalicen, con muchos procesos, a los líderes y militantes sociales. Y donde ninguna de esas políticas dio resultado, apelaron a la represión, en especial en aquellos estados gobernados por partidos derechistas como en Rio Grande do Sul², São Paulo, Rio de Janeiro y Minas Gerais, donde los gobiernos no vacilan en utilizar las policías militares para la represión violenta a los movimientos.

Se engañan al creer que ese tipo de problemas se resuelven con publicidad o con represión. Se trata de una disputa histórica entre dos formas de producir alimentos. Una que sólo busca el lucro, incluso envenenando la naturaleza y sus productos. Y la otra que se orienta a la producción de alimentos saludables como un derecho de toda la población. Muchas batallas habrán, ciertamente.

Notas

1 Sobre el modelo agrícola brasileño, ver el documento "Queremos producir alimentos" de Vía Campesina Brasil, en <<http://alainet.org/active/24605&lang=es>>.

2 En el estado de Rio Grande do Sul, el Movimiento de los Trabajadores Rurales

Sin Tierra (MST) enfrenta una fuerte persecución judicial: el Ministerio Público ha llegado a pedir su disolución y varios militantes de movimientos sociales han sido enjuiciados (ver <<http://alainet.org/active/25134&lang=es>>).

Documento

Programas estruturantes de curto prazo

Plataforma da Vía Campesina

1. Programa de reflorestamento “2 hectares por família camponesa”

Implementar um programa nacional de florestamento e reflorestamento para o conjunto das famílias assentadas e camponesas do Brasil, beneficiando todos os Biomas. Deverá de ser fomentada a adesão das famílias à temática florestal buscando a instalação de sistemas diversificados de manejo florestal que possam produzir madeira, energia, sementes, fibras e produtos não madeireiros, além da preservação da biodiversidade e ampliação das florestas, contribuindo para o combate ao aquecimento global. Para isto é necessário:

- Linha de crédito especial para a implantação das florestas, com carência de 8 anos e 8 anos para pagar, com juro zero e bônus de adimplência de 40%.
- Remuneração de serviço ambiental as famílias, repassando um salário mínimo mensal durante os 12 primeiros meses após o plantio da floresta.
- Assistência técnica florestal de base agroecológica, acompanhada de capacitação técnica para a implantação, manejo e agro extrativismo sustentável.
- Fomento com recursos sem reembolso, para a implantação de pequenos viveiros florestais, descentralizados e cooperados, a fim de pro-

mover o incentivo para coleta de sementes e multiplicação de mudas nativas de árvores de cada região.

- Programa massivo de educação ambiental, inserindo o conjunto das famílias, as escolas e demais estruturas organizativas dos assentamentos.

2. Programa de agroindústria familiar e cooperativa

Implementar pequenas e médias agroindústrias familiares, comunitárias e cooperativadas descentralizando o beneficiamento dos alimentos, gerando emprego e mantendo a juventude nas pequenas cidades. Para isto é necessário:

- Linha de crédito subsidiado com prazos longos.
- Mudanças na legislação sanitária garantindo a qualidade do produto final.
- Assistência técnica específica para acompanhar as empresas comunitárias até sua consolidação.

3. Programa de compra de alimentos pela CONAB, armazenagem, garantia de preço e produção de alimentos básicos

- Ampliação do orçamento do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) para 1 bilhão por ano, garantindo a compra estatal dos produtos da reforma agrária e agricultura camponesa.
- Estudos de viabilidade e implantação de agroindústrias familiares em áreas reformadas viabilizando a agregação de valor e inserção nos mercados locais.
- Aquisição dos produtos da reforma agrária para comporem as cestas básicas distribuídas pelo Governo Federal.
- Garantia de comercialização para os produtos ecológicos, com sobre preço de no mínimo 30% em relação ao mercado convencional.

4. Programas de agroenergia e energias renováveis para agricultores familiares

Implementar pequenas e médias usinas integradas de alimentos e energia para produção de álcool, óleos vegetais e biodiesel, descentralizadas e multifuncionais, tanto em matérias primas como em produtos, priorizando o consumo local e estimulando os consórcios alimentares/energéticos.

Implementar pequenas unidades de produção local de energia elétrica e de economia energética: microcentrais hidrelétricas, biodigestores, micro e pequenos aerogeradores, pequenas termoelétricas de biomassa, placas solares, aquecimento de água com serpentinas em fogões à lenha. Para isto é necessário:

- Projeto piloto com recursos não retornáveis.
- Linhas de crédito com subsídio e de longo prazo.
- Sistema elétrico integrado podendo as unidades locais de produção colocar energia na rede quando produzir excedente e usar da rede quando estiver em déficit.

5. Empresa estatal de fertilizantes minerais, orgânicos e organo-minerais

- Constituição de uma Empresa Estatal Federal para atuar no ramo de fertilizantes minerais e organo-minerais, utilizando-se de pós de rochas, dos resíduos do xisto e matérias primas orgânicas disponíveis.
- Programa nacional para produção descentralizada e em escala, de fertilizantes orgânicos através de cooperativas, comunidades e prefeituras, utilizando material orgânico do lixo urbano e outros resíduos agrícolas e industriais. É necessário:
 - Estatização ou reestatização de todas as minas de fosfato e potássio existentes no país, por ser um insumo estratégico para a soberania alimentar da nação.

- Destinação de recursos financeiros específicos não retornáveis e/ou financiamentos de longo prazo para estruturar pequenas indústrias de fertilizantes orgânicos e dos equipamentos para utilizá-los.

6. Programa de produção de leite/familiar

- Garantia de preços mínimos compensadores para os pequenos produtores através de compras públicas exclusivamente da agricultura camponesa.
- Assistência técnica, capacitação e recursos financeiros para massificar entre as famílias camponesas a produção de leite à base de pasto, diminuindo custos, reduzindo a área utilizada e aumentando a produção.
- Recursos para estruturar cooperativas dos pequenos agricultores para recolher e resfriar localmente o leite das famílias camponesas bem como industrializar para o consumo regional.

7. Programa de investimentos em agroecologia nas escolas técnicas, universidades, etcétera

- Financiamento de projetos de pesquisa e extensão rural pelo Ministério de Ciência e Tecnologia (CNPQ e FINEP), MAPA e MDA nas áreas de agroecologia, agricultura familiar, tecnologias populares, agroflorestas. E que os mesmos sejam construídos em parceria com os movimentos sociais.

Universidades

- Institucionalização dos grupos de agroecologia estudantil existentes nas universidades.
- Reforma Curricular legitimada pelo MEC dos cursos de ciências agrárias que contemple na grade disciplinas como agroecologia, sociologia e extensão rural nos semestres iniciais.

Escola técnicas

- Reconhecimentos pelo MEC do curso de nível Técnico em Agroecologia.
- Legitimar junto ao MEC habilitação do exercício da profissão de Técnico em Agroecologia conforme as atribuições curriculares.
- Investimentos financeiros para que as escolas Técnicas em Agroecologia tenha condições de se manter em área física de no mínimo 50 ha de terra.

8. Programa Água Para Todos, universalização do abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto

- Implementar a lei de Saneamento já aprovada no Congresso Nacional. O saneamento tem recursos garantidos pelo FGTS.
- Implementar as 530 obras do Atlas do Nordeste, propostas pela Agência Nacional de Águas que têm potencial para beneficiar 34 milhões de pessoas do meio urbano na região, exatamente onde o abastecimento de água ainda é mais problemático.
- Implementar as obras de convivência com o semi-árido proposta pela Articulação do Semi-árido no meio rural –cisternas para consumo humano, para produção, caxios, barragens subterrâneas, etc.– já estipuladas nos programas “Um milhão de Cisternas” e “Uma Terra Duas Águas”.

9. Programa Nacional de Habitação camponesa e popular

- Programa nacional de habitação camponesa que possibilite moradia adequada a todas as famílias camponesas, de todas as faixas de renda, em todo o território nacional, de maneira desburocratizada, como política social estratégica para conter o êxodo rural, manter a juventude no campo e repovoar as comunidades campone-

sas, aplicando, em escala crescente, tecnologias de bioconstrução.

Por isto reivindicamos a Implantação de um Amplo Programa de Habitação Camponesa para construir, reformar e ampliar moradias em todo o meio rural brasileiro, tendo como meta construir e reformar 300 mil moradias ano, com valores mínimos de R\$ 16.000,00 por moradia, prazos longos (20 anos) e subsídios adequados (entre 50% a 80%) às faixas de renda das famílias camponesas.

10. Programa de produção de sementes e mudas nativas, crioulas e varietais

- Recursos para multiplicar os bancos populares de Sementes Crioulas e Nativas.
- Recursos para multiplicar viveiros de mudas nativas e para implantação de agroflorestas.
- Implantação massiva de Centros de Preservação e Manejo da Agrobiodiversidade (CIMAS).
- Ampliação da pesquisa, melhoramento e produção de sementes varietais através da Embrapa e outros centros públicos de pesquisa e disponibilização de sementes e mudas básicas para as cooperativas e associações camponesas para multiplicação, com o devido acompanhamento técnico.

11. Programa público de assistência técnica, extensão rural e capacitação

- Fortalecimento da assistência técnica como instrumento estratégico da construção de um novo modelo de produção no campo, implantando massivamente um novo paradigma produtivo ambientalmente sustentável.
- Assistência Técnica, extensão rural e capacitação sistêmica e continuada.
- Ampliar os Programas de Assistência Técnica, incorporando projetos especiais, tais como: transi-

ção agroecológica, produção de sementes crioulas, produção de leite a pasto, diversificação da cultura do fumo, implantação de agroflorestas, crédito assistido com recursos públicos conveniados com as organizações dos camponeses/as.

12. Programa de ampliação da Educação do Campo

- Aumentar significativamente os recursos financeiros das escolas de ensino médio, técnico e superior dos movimentos sociais tendo como base o repasse feito as instituições de ensino federal de estudante/curso.
- Enquadramento das escolas dos movimentos sociais nos PAA-Programa de Aquisição de Alimentos da CONAB.
- Melhorias da infraestrutura.
- Contratação de professores habilitados no curso Pedagogia da Terra para ministrarem aulas em assentamentos rurais.
- Implementação de Medida Provisória que impossibilite o/a estudante ficar sem ter aulas de determinada disciplina por mais de 10 dias.
- Investimento em programas para aquisição de materiais didáticos e audio-visuais e informática.
- Criação de um plano didático-pedagógico construídos por professores, pais, estudantes e movimentos sociais que contemple a realidade das escolas que possuem classes multisseriadas.
- Capacitação didático-pedagógica para professores que ministram aulas em classes multisseriadas.

13. Programa de mecanização agrícola adequada para agricultura camponesa

- Disponibilização de máquinas e equipamentos adaptados às necessidades da agricultura camponesa, leve, simples, resistente, rústica, econômica, barata, eficiente, multiuso e versátil, adaptada

para desempenhar as várias atividades de uma agricultura diversificada. Prioridade para uma mecanização voltada a um novo modelo de agricultura, com produção diversificada, combinação de produção animal com produção vegetal, uso de adubação orgânica e armazenamento de água com irrigação de pequeno porte. É necessário:

- Política industrial de estímulo a este modelo de máquinas agrícolas e financiamento de longo prazo para pagar.
- Além da mecanização familiar e comunitária, necessita Infra-estrutura Pública Coletiva de apoio a mecanização camponesa, para serviços pesados, como terraplanagem, açudagem e outros serviços, de máquinas e equipamentos como trator-esteira, retro-escavadeira poclairn, trator com scaiper, caçambas, adquiridos pelo governo federal, custeados por governos estaduais e prefeituras, sob o controle social dos camponeses através de suas organizações.

Medidas políticas e legislativas

1. Reforma Agrária com retomada de desapropriação de grandes latifúndios.
2. Regularização imediata da terra indígena da Raposa Serra do Sol e a área dos Guaranis, Caiová no MS e Mbiás Guaranis do RS.
3. Aplicação imediata, em nível nacional, da Tarifa Social Baixa Renda de energia elétrica para os consumidores, de acordo com a decisão judicial de maio de 2007, do Desembargador Federal de Brasília Sr. Catão Alves.
4. Isenção de pagamento dos primeiros 100 kw para as famílias camponesas e o que for gasto a mais "equidade" com o preço paga pelos grandes consumidores de energia (R\$ 0,06).
5. Proibição de vender/ceder terras para empresas estrangeiras.

6. Revisar a liberação do milho transgênico no Conselho de Ministros.
7. Revogar a MP da grilagem da Amazônia e o INCRA voltar a regularizar as áreas de Quilombolas.
8. Impedir a expansão do monocultivo de pínus e eucalipto.
9. Pela manutenção da Previdência Pública Universal e Solidária; aprovação imediata do PL 6.852/06 e revogação da MP 410.
10. Limitar a propriedade da terra em 35 módulos fiscais.

Documento

Por su importancia política y social y como modesto homenaje al gran intelectual colombiano recientemente fallecido, publicamos uno de sus últimos trabajos, difundido por *El Heraldo Dominicano*, de Barranquilla, el 8 de junio de 2008.

Detener la guerra

Orlando Fals Borda

Como miembro de la Generación de la Violencia –nacido en 1925– me he preguntado muchas veces, junto a otros, si en el largo período de sesenta años de conflictos internos palpables y agudos Colombia ha perdido definitivamente su reconocido temple de nación tranquila, progresista, sin guerras fronterizas, en una sociedad más bien bucólica y culta, sencilla aunque señorial de postín, para convertirse en un pueblo bélico, espartano, cruel e insensible a los horrores de enfrentamientos fatales, delincuentes, criminales y mercaderes de la muerte.

¿Habremos llegado a tales profundidades culturales, para sentir que la guerra y el conflicto sean cosas tan frecuentes y aceptables que se hayan convertido en expresiones normales de la vida colectiva, sin que produzcan mayores preocupaciones? ¿Quedan aún resquicios de órdenes sociales anteriores donde la cooperación, el altruismo, la construcción, el amor y el respeto a la vida y heredad humanas puedan todavía ser recuperados y activados?

Verá el lector que han habido períodos desiguales en los que el belicismo florece, seguidos de otros caracterizados por búsquedas afanosas de la paz.

Se dirá que ello puede ser lo usual en toda sociedad humana. Pero el caso de Colombia es único en el contexto latinoamericano, y ello no deja de ser motivo de preocupación. Porque sesenta años de guerra casi continua puede ser un récord mundial, del que no podemos enorgullecernos.

Por lo menos, sería conveniente abrir el compás para entender si seguimos hoy aceptando una “normalización de la violencia” con todas sus aberraciones y distorsiones de cultura y personalidad, o si ya hemos tenido suficiente suplido y merecemos llegar a la etapa de la reconstrucción social, moral, política y económica que nos merecemos.

Como se desarrolla en este texto, creo que vamos en esta segunda dirección a causa de fenómenos de saturación guerrerista y acumulación criminosa de los últimos períodos, en especial el actual de “Seguridad Democrática”, para plantear lo que puede ser el renacer de un orden nuevo.

Después del llamado “fracaso pacifista” de Pastrana, el péndulo de la opinión pública se inclinó hacia la intensificación de la guerra. Los electores encontraron un paladín en el ex gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, donde habían nacido, con su venia, los nuevos “pájaros” o “chulavitas”, ahora llamados “paramilitares”, para imponer el orden y control.

No hubo pausa para sopesar mejor esta polémica experiencia. Pero los proyectos continuaron. El país, con Uribe al mando, se embarcó en la más intensa y dura opción bélica de los últimos tiempos. Y este paso fue complejo e intenso, dibujándose como un proceso acumulativo y saturante de todo el instrumental e historial de violencia que provenía del siglo XX, con su trágica espiral.

La pregunta es si seguimos paralizados por el monstruo de la violencia, normalizando todavía su existencia, o si podremos darle el vuelco necesario.

Hay dos perspectivas nuevas que ahora parecen permitir mayor esclarecimiento. La primera es la sensación de que el conflicto interno colombiano no puede dar más, y que ha llegado al nivel de decantación sociocultural, económica y política más allá del cual puede por fin ocurrir la

temida descomposición nacional interna de tipo estructural y superestructural, con pérdidas de soberanía como serían una balcanización territorial-regional o una disolución estatal, con o sin autogolpe, con o sin guerra civil.

A estas temidas posibilidades se puede añadir la guerra externa, con los vecinos Venezuela y Ecuador, que a los *war mongers*, guerreristas nacionales y extranjeros, satisfaría sobremanera por permitirles ensanchar sus negocios. Peligro con el que se ha cortejado de manera ligera en meses recientes. ¡Vaya opciones!

Sesenta años de guerra, un récord mundial, parecen ser más que suficiente. “*Enough is enough!*” decía Churchill en 1945 hacia el final de la Guerra Mundial. Aunque a veces no se vea, tal puede ser el sentimiento mayoritario colombiano de 2008.

“¡Estamos ahítos de la actual situación de milicias, guerras y violencias!” decimos aquí. Y ello puede ser índice de que la disolución nacional es hoy más posible que antes, a causa del autoritarismo imperante. Ahora hay una sumatoria en el destructivo proceso de nuestra violencia múltiple, que sólo se pagaría con la pérdida de las libertades.

Añádanse otros índices de violencia y conflicto, como los usuales sobre delincuencia, pobreza, hambre, desplazamiento, violencia intrafamiliar, etc., más innumerables campos minados, fosas comunes y los patéticos ríos de sangre y cadáveres, y obtendremos un tétrico retrato de la realidad colombiana actual, empeorada desde hace por lo menos dos generaciones.

Así nunca habría ni seguridad ni democracia. Ni la ilusoria paz de las carreteras, apuntalada por tanques y tropas para solaz de bañistas e industrias de turismo.

El clímax de la violencia acumulada

En efecto, puede verse que el régimen del Frente Nacional (orden social burgués que sigue hasta hoy) no cumplió su promesa pacificadora, y que la guerra continuó, adoptando nuevas formas de violencia. Ya ésta no era sólo bipartidista; ahora adquiriría dimensiones económicas, religiosas y del narcotráfico.

La pobreza rural que afectaba a todos los elementos del orden social-burgués se alivió y se frustró la refor-

ma agraria por enésima vez, haciendo que el campesino se refugiara en los cinturones de pobreza de las ciudades y acu-
diera más y más a las armas. Los campesinos se levantaron
en guerrillas contra el sistema y régimen dominantes.

Las políticas neoliberales empeoraron la situa-
ción, sin crear suficientes empleos, pero abrieron cauces para
la introducción e inversión de dineros ilegales que fueron
apoderándose de las industrias nacionales y del Estado. La
delincuencia y criminalidad se agudizaron y llegaron a índices
nunca vistos.

De poco valieron las reformas constitucionales
de 1991, que se dirigían a aliviar, por lo menos, las peligrosas
situaciones creadas, como en el reordenamiento territorial
que buscara un equilibrio regional e interregional. Y el fracaso
del Caguán dramatizó que sus gobiernos habían perdido el
rumbo. Sólo la violencia, ahora múltiple, subía en intensidad,
formas y efectivos.

Se movía hacia un clímax saturante en el que
la militarización de la nación y la socialización de la guerra
fueran políticas aceptadas por gran parte de una población
que prosperaba materialmente, pero se empobrecía espiri-
tualmente. En esta transición empezó a deformarse el *ethos*
cultural y a destruirse el alma del colombiano reconocido.

Con estas nuevas tendencias probéticas en ple-
no auge, apareció en el año 2001 la candidatura presidencial
del doctor Uribe. Él había sido denunciado en 1997 por la re-
vista *Alternativa* como fundador e impulsor de las cooperati-
vas Convivir, que se convirtieron en guaridas de paramilitares,
los más terribles criminales conocidos del país, en adelante
empleados para combatir a las guerrillas con la anuencia di-
recta o indirecta del gobierno. Llenó la copa de la expectación
y barrió las otras candidaturas en la elección de 2002.

Pero aquellas dudosas decisiones en Antioquia,
con sus muestras de ilegitimidad, han perseguido al presiden-
te sin poderlas descartar, como si fuera el trágico destino del
desgraciado navegante a quien le seguía, día y noche, la som-
bra del albatros, el pájaro de la muerte, según el poema de
Coleridge. La posesión del cargo fue premonitoria: cayeron
morteros en el Palacio de Nariño, con la acusación renovada
de tratarse ahora de un régimen ilegítimo de origen, lo que

quedó aún más claro en la reelección de 2006, dominada por los “paramilitares” y congresistas hoy en la cárcel. Y la violencia subió de nivel, y el orden social-burgués se vio en peligro de disolución, por quedarse con un Congreso Nacional sin solvencia moral.

Las tendencias a la intensificación de la guerra estaban marcadas, y el presidente Uribe se encargó de traducirlas a la práctica gubernamental, con relativa eficacia.

Se reforzaron las Fuerzas Armadas. Las dos guerrillas (ELN y FARC) se replegaron a las selvas, y al mismo tiempo se militarizó el espacio nacional con pleno cubrimiento, con ayuda de Estados Unidos. También aumentó la presencia del capital subterráneo y la guerra entre mafias, que pasaron al dominio político y al control territorial. Las grandes comunidades afrocolombianas creadas en el Chocó comenzaron a ser invadidas por los “paras”, fomentando más pobreza y desplazamiento.

Las tensiones estructurales del orden no se aliviaron y sus grietas se abrieron todavía más. La militarización de la sociedad procedió a su plenitud, con el beneplácito de mayorías electorales, que acudieron a reelegir al presidente.

Algo inusitado, porque era apenas el segundo de cinco casos, a partir de Rafael Núñez, en que un mandatario lograba pasar a un segundo período.

Saturación del guerrerismo

Se empiezan a expresar con fuerza las grandes mayorías que ya están cansadas de los procesos de socialización bélica atrás descriptos. Hasta el momento, las mejores pruebas de esta positiva reacción se observaron en las marchas del 4 de febrero y el 6 de marzo de 2008. Por varias veces ya repetibles, la manipulación mediática oficial recibió la tunda que ha venido mereciendo.

El pueblo llano fue más suelto y auténtico; descubrió que estaba aún vivo y que podía pensar y actuar. Resultó más maduro que lo esperado. Presencia activa, que hizo imposible la controlada maniobra que ha buscado mostrar el unanimismo de otras campañas.

Ahora se oye un grito que proviene del magma histórico: “No más guerra”; “Queremos el acuerdo humanita-

rio". Así, inesperadamente, se despolarizó el país en instantes inolvidables. Es lo que en sus comentarios algunos notables periodistas llamaron "el nuevo consenso".

Por último, está más claro que nuestro viejo conflicto interno no sólo llegó a su clímax en estos seis años de régimen uribista, sino que alcanzó a eructar como un volcán para salpicar y llegar a países vecinos.

Aunque esta extensión del conflicto venía de mucho atrás, en especial en forma de refugios guerrilleros y actos de retaliación oficial, contrabando de armas y drogas, los peligros quedaron en evidencia por el incidente fronterizo entre Colombia y Ecuador, por el ataque de las Fuerzas Armadas de Colombia al campamento del comandante "Raúl Reyes", el 1 de marzo de 2008. Este hecho demostró que el conflicto interno ya había desbordado las fronteras nacionales y que se había abierto el cráter del clímax de la violencia acumulada y saturante.

El manejo diplomático subsecuente, que debía destacar los principios universales de soberanía y defensa de los estados sólo dramatizó que se abría paso el inevitable anticlímax.

La notable revista británica *The Economist* vio con claridad el peligro subyacente al sostener que, aunque "Uribe sigue siendo visto por millones de colombianos como salvador, al punto de que pueda ser demasiado popular para el bien del país [citado por *El Tiempo*, 20 de abril de 2008], no nos dejemos engañar con estadísticas y encuestas manipuladas, porque la popularidad no confiere legitimidad, nos lo recuerda el jurista Rodolfo Arango".

Una Asamblea Nacional Constituyente con los lineamientos mínimos de la de 1991—que era un acuerdo de paz—, como lo ha propuesto el Polo Democrático Alternativo, se hace entonces indispensable.

Documento

Declaración Política del VII Foro Mesoamericano de los Pueblos

Managua, 16 de julio de 2008

¡Mesoamérica en Resistencia!
¡No al neocolonialismo del libre comercio!

El Foro Mesoamericano de los Pueblos, desde su primera convocatoria a inicios del siglo XXI, ha recorrido un largo camino, construyendo y articulando las luchas y resistencias contra las diferentes expresiones del neoliberalismo (tratados de libre comercio, acuerdos de asociación comercial, concesiones territoriales para la inversión extranjera como el Plan Puebla Panamá, las privatizaciones, la militarización y la criminalización de los movimientos sociales), en una región con una inmensa riqueza sociocultural y poseedora de recursos naturales estratégicos como tierra, agua, una biodiversidad exuberante, recursos energéticos y minerales, etc., que han sido históricamente codiciados por los grandes imperios en su afán por explotarlos y consolidar su poderío económico, político y militar.

En estos años, observamos claramente dos tendencias convergentes: en primer lugar, se ha profundizado la ofensiva del gran capital por apropiarse de todos los recursos estratégicos que poseen los pueblos de la región; en este sentido, los tratados de libre comercio y los acuerdos de asociación, promovidos por Estados Unidos y por la Unión Europea, son los instrumentos centrales de las grandes potencias para consolidar su posición hegemónica en la economía global. En segundo lugar, ha continuado creciendo el movimiento de resistencia popular frente a un modelo expoliador, excluyente, concentrador de riqueza y poder, movimiento al que se

han ido sumando nuevos sectores con reivindicaciones específicas que se agregan a las históricas demandas por tierra, trabajo, dignidad, respeto a la vida y a los derechos humanos, que nuestras organizaciones han enarbolado en su lucha por otro mundo posible.

En estos años, efectivamente, la hegemonía neoliberal ha sido radicalmente confrontada por los movimientos sociales mesoamericanos, con propuestas construidas desde los pueblos y para los pueblos, propuestas que tienen en común el respeto por la vida y la urgencia de producir nuevas formas de relacionamiento entre las personas y las poblaciones, y de éstas con la naturaleza.

Durante estos días, los debates en las distintas mesas (sectoriales y multisectoriales) muestran el complejo abanico de la resistencia de los movimientos populares en la región, con toda su riqueza política y organizativa, así como sus desafíos. Constatamos que hemos avanzado en la consolidación de muchos espacios de resistencia, pero tomamos nota de que es necesario aún profundizar la articulación en algunos de ellos así como dar todo nuestro respaldo a los nuevos sectores que se han integrado en el proceso del Foro. Como todo proceso de lucha, el Foro Mesoamericano de los Pueblos es un espacio vivo, en permanente transformación, por lo que se hace necesario pensar críticamente este proceso en aras de que sirva para consolidar las luchas populares a nivel regional.

Así, en este VII Foro Mesoamericano de los Pueblos, reafirmando el carácter anticapitalista, antiimperialista y antipatriarcal de nuestro proceso, declaramos:

- Nuestra posición política emana desde nuestra diversidad y nuestra resistencia, frente a un modelo que deshumaniza y mercantiliza la vida, la dignidad y la justicia, jerarquizando las relaciones económicas y sociales y subordinando las demandas y necesidades de la gran mayoría de la población a los intereses de una minoría, lo que favorece al gran capital nacional y transnacional.
- El capitalismo, en su fase neoliberal actual, profundiza la exclusión, la inequidad, la pobreza y

- la desigualdad que sufrimos los pueblos mesoamericanos, pues su objetivo principal es auto-reproducirse mediante la expropiación de nuestras riquezas, fomentando para ello la represión y la dependencia y negando a los pueblos su libre autodeterminación y soberanía.
- Especialmente, el capitalismo reproduce estructuras patriarcales de dominación que afectan la vida de millones de mujeres y hombres en nuestra región, pero muy en particular la de las mujeres, a quienes afecta de manera directa y diferenciada debido a su condición, situación y posición desigual en la sociedad. Asimismo a las niñas y niños, a quienes no se considera plenamente como personas y por lo tanto se violan sus derechos humanos, negándoles la capacidad de hablar y decidir sobre los problemas que los afectan. De igual manera, el patriarcado condena el derecho de las personas a la diversidad sexual, negando a quienes deciden vivir su sexualidad de una forma diferente a la sancionada como "buena" y "correcta" el desarrollo pleno de sus derechos de ciudadanía.
 - Se debe reconocer que existe una deuda ecológica y social que los países del Norte tienen con los del Sur por la explotación de la naturaleza y consecuente destrucción del medio ambiente, y entre ellas se destaca la deuda por el cambio climático. En este sentido, denunciamos la implementación de megaproyectos (minería, hidroeléctricas, carreteras, petroleras) en nuestro territorio, así como la acelerada expansión de monocultivos, que están destruyendo nuestra biodiversidad, los medios de supervivencia de miles de comunidades y comprometiendo el futuro mismo de la humanidad, pues los bosques tropicales son parte fundamental del equilibrio ecológico planetario.
 - En la coyuntura actual, la guerra y la militarización están relacionadas con la necesidad de

EE.UU. y otras potencias de garantizar su acceso permanente a recursos energéticos estratégicos, con los cuales no cuentan en sus territorios (petróleo y gas natural), para sostener el ritmo de crecimiento de sus economías, así como la disputa por recursos como el agua y la biodiversidad. Es por ello que vemos en la reactivación de la IV Flota, en el despliegue de las operaciones continentales del Comando Sur, en el mantenimiento de bases militares por todo el territorio americano y en la adopción y aplicación, en muchos países, de legislaciones “antiterroristas”, hechos contundentes que demuestran que la militarización es parte central de la estrategia de expansión del capitalismo.

- Esto conlleva a que los pueblos que luchan en defensa de sus recursos sean criminalizados por parte de los gobiernos, con el objeto de controlar los territorios a favor de los intereses de las grandes corporaciones transnacionales.
- La aplicación del modelo neoliberal produjo el desmantelamiento de la economía campesina en toda la región, para favorecer los intereses del agronegocio y fomentando la exportación de productos exóticos por sobre la producción de alimentos, lo que ha llevado a nuestros países a perder casi por completo su soberanía alimentaria, generando además una crisis socioeconómica de profundas consecuencias entre el campesinado.
- Los organismos financieros internacionales implementan políticas de cooperación que en realidad buscan crear marcos regulatorios para la operación de las empresas transnacionales a costa del empobrecimiento de las grandes mayorías. La llamada “cooperación para el desarrollo” de los países ricos reproduce patrones coloniales de relacionamiento tipo “centro-periferia”, profundizando la dependencia de nuestros países en relación con los centros hegemónicos del poder global.

- Los pueblos indígenas de toda la región viven en este momento una ofensiva del sistema en contra de sus territorios, sus recursos naturales, su identidad cultural y sus formas de organización y libre determinación. Esta ofensiva se expresa de forma violenta mediante el cerco militar (el caso de Chiapas es crítico), la expropiación de tierras, la destrucción de sus aldeas y comunidades, entre otras cosas, todo lo cual les impide el ejercicio pleno de su autonomía como pueblos, consagrada no sólo por sus propios usos y costumbres sino por convenios internacionales como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
- En el plano de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, vivimos actualmente un proceso de acelerada destrucción de la organización sindical y de sus conquistas históricas, por medio de la flexibilización laboral, como una herramienta para la mayor acumulación de capital por parte de las transnacionales y el empresariado nacional. La precarización de las condiciones de vida de las grandes mayorías se da en un momento en que las tasas de ganancia de las empresas exportadoras e importadoras, que se benefician del modelo, aumenta aceleradamente. Los tratados de libre comercio profundizan esta situación.
- Millones de campesinos y campesinas, indígenas, jóvenes, niños y niñas de nuestra región se han visto forzados a dejar su tierra natal para emigrar hacia EE.UU. y Europa en los últimos treinta años. Este período corresponde, justamente, con la implementación del modelo neoliberal, que expulsa a nuestra población. En los países de destino, las y los migrantes sufren en pésimas condiciones de vida, de trabajo y son discriminados en todos los ámbitos de la vida social. La vergonzosa "Directiva de Retorno" recientemente aprobada por la Unión Europea, así como el "Muro de la Vergüenza" que levanta EE.UU. en su frontera con México, simbolizan el

desprecio que los países del Norte sienten por nuestros hermanos, que con su trabajo enriquecen a los dueños del capital.

- La juventud mesoamericana reafirma su identidad frente al adultocentrismo propio del sistema patriarcal, que criminaliza las formas de ser, saber y hacer de las personas jóvenes. En este sentido, desconoce los espacios oficiales de juventud y las políticas demagógicas de inclusión de las personas jóvenes, en el marco de las cumbres de jefes de Estado y de los gobiernos, por ser no sólo inconsultas y antipopulares sino por promover políticas que ven en la juventud un problema, desde los patrones morales de las clases dominantes. En muchos casos incluso las personas jóvenes son criminalizadas y sufren todo tipo de discriminación, muy especialmente en el plano laboral y académico.
- Finalmente, declaramos que la “democracia” actualmente existente no garantiza la verdadera participación popular en la toma de decisiones y no es por tanto una democracia que permita la autodeterminación de los pueblos. Lo que existe hoy es un sistema electoral que asegura que el poder quede siempre en las mismas manos, mediante lo que algunos gobernantes de la región han llamado una “dictadura en democracia”. Consideramos que la participación política debe asegurarse en un marco auténticamente democrático, lo que significa implementar mecanismos que aseguren que la voz y demandas de las comunidades se incorporen en la definición de las políticas públicas y del modelo económico.

Considerando todo lo anterior, desde el VII Foro Mesoamericano de los Pueblos decimos:

- Rechazamos permanente y radicalmente el libre comercio, en especial las actuales “negociaciones” de un acuerdo de asociación entre la Unión

Europea y Centroamérica que, a pesar de la retórica que los gobiernos de ambas regiones proyectan en sus declaraciones públicas, no es más que un tratado de libre comercio de características semejantes e impactos idénticos a los que acostumbra imponer a los pueblos EE.UU., pero que incluso va más allá al imponer nuevas obligaciones en ámbitos como propiedad intelectual, servicios públicos y protección de las inversiones extranjeras.

- Demandamos que además de manifestarnos contra la violencia, discriminación y exclusión que sufren las mujeres, el carácter antipatriarcal del Foro Mesoamericano de los Pueblos se exprese en adelante, y de manera concreta, mediante metodologías que aseguren la equidad en la participación mediante la incorporación de las mujeres en la toma de decisiones y en los paneles de discusión, así como en las actividades que el Foro promueva en sus planes de acción. Llamamos a las organizaciones y movimientos sociales mesoamericanos a hacer mayores esfuerzos por superar la situación de discriminación que las mujeres viven también a lo interno de nuestras luchas.
- Exigimos garantías para que las niñas, niños y adolescentes puedan expresarse y ser escuchados, asegurando espacios para que ellos y ellas se junten para conocer y compartir los problemas que los afectan y sobre todo aquellos que tengan que ver con firmas, acuerdos y convenios, ya sea que violen sus derechos o que busquen protegerlos, pues los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a usar la palabra para referirse y decidir sobre todo aquello que vaya a afectar sus condiciones de existencia.
- Asumimos nuestro compromiso de integrar el enfoque de derechos de la diversidad sexual en nuestras organizaciones y prácticas diarias, además de exigir políticas públicas a favor de las per-

sonas gay, lesbianas, transexuales y bisexuales. Particularmente, el Foro Mesoamericano de los Pueblos se manifiesta a favor de la aprobación, en Costa Rica, del proyecto de ley que permitiría la unión civil de personas del mismo sexo, considerando que sería un paso muy importante en este sentido.

- En cuanto al problema del cambio climático, consideramos que hay que darle un enfoque político, de justicia y que siente claramente la responsabilidad por la crisis que vive la humanidad y el planeta en su conjunto; exigimos reparación y pago del daño por la deuda ecológica que los países industrializados tienen para con los países del Sur, además de vincular la cuestión del cambio climático con la soberanía alimentaria, el combate a los patrones de consumo depredadores del medio ambiente, el lanzamiento de una campaña de los movimientos a favor de la justicia ambiental y poner realmente la cuestión ecológica como algo fundamental del modelo económico y social por el que estamos luchando.
- Manifestamos enérgicamente nuestro repudio contra la militarización creciente que afecta a nuestros pueblos y contra la criminalización que sufren los movimientos sociales. Concretamente repudiamos a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) que con más de 7 mil soldados somete y humilla al hermano pueblo de Haití, con la participación de tropas de países latinoamericanos como El Salvador, Argentina, Brasil, Bolivia y Chile. Repudiamos también la reactivación de la IV Flota, las operaciones del Comando Sur y muy especialmente nos manifestamos contra el mantenimiento de la Base Militar de Palmerola, en territorio hondureño, por ser una amenaza permanente para los pueblos de nuestra región.
- Demandamos una reforma agraria integral, orientada no simplemente a repartir tierras entre el

campesinado, sino que fomente una verdadera política productiva en beneficio de los pequeños y medianos productores agrícolas, con crédito oportuno, asistencia técnica y protección frente a la invasión de productos agrícolas transgénicos importados, poniendo énfasis en la recuperación de la soberanía alimentaria de nuestros países. Esta reforma agraria debe basarse no en los principios de la agricultura industrial, sino recuperar los conocimientos tradicionales, el rescate de la semilla criolla, establecer prohibiciones para el uso de semillas transgénicas y la construcción de redes de consumo responsable.

- Exigimos que la cooperación para el desarrollo se enfoque en la defensa y promoción de la vida, en la equidad y en la justicia, no en la reproducción del *statu quo*. En ese sentido, consideramos urgente la transformación inmediata de sus prácticas asistencialistas (muchas veces marcadas por la corrupción), de cooptación de líderes y desarticulación de nuestros movimientos, como mecanismo para impedir nuestra lucha por la autonomía y libre determinación.
- Exigimos el respeto al derecho de los pueblos indígenas a su territorio, recursos naturales, formas de organización y autonomía, sustentados y vinculados sobre su propia cosmovisión. Asimismo, condenamos la violencia que actualmente se ejerce sobre los pueblos indígenas, para expropiarlos de sus riquezas naturales y culturales. En el marco de esta Declaración, muy especialmente nos pronunciamos en contra del megaproyecto turístico en Bahía de Tela, en Honduras, como uno de los proyectos más dañinos (aunque no el único) que se impulsan actualmente en la región, provocando un inmenso crimen ecológico y cultural que afecta a las comunidades Garífunas, despojándolas de su territorio y sus derechos ancestrales.
- Como Foro Mesoamericano de los Pueblos demandamos el cese inmediato de las políticas de

inversión y megaproyectos, tales como represas hidroeléctricas, minería, turismo a gran escala, agricultura extensiva e intensiva en manos de las transnacionales, entre otras, que atentan contra la vida de los pueblos.

- Llamamos a fortalecer la lucha ineludible por la defensa de los derechos laborales y humanos de las personas trabajadoras, a decir No a la flexibilización y tercerización laboral en detrimento de los derechos e intereses de los trabajadores y trabajadoras.
- Condenamos a la Unión Europea por la aprobación de la llamada Directiva de Retorno que criminaliza a las personas migrantes, así como a EE.UU. por la construcción del Muro de la Vergüenza, pues las migraciones son causadas por un modelo excluyente que obliga a millones de personas a abandonar su patria en busca de una oportunidad para sobrevivir. Demandamos la inmediata derogación de la Directiva de Retorno así como la construcción de una legislación migratoria que reconozca la Ciudadanía Universal de las personas migrantes.
- Rechazamos los espacios oficiales de juventud al tiempo que reprochamos las políticas demagógicas de inclusión de la juventud, en el marco de las cumbres de Estado, por ser inconsultas y antipopulares. Proponemos frente a esto relanzar la lucha hacia la construcción de un movimiento popular mesoamericano de juventud que pueda articular efectivamente las iniciativas que las organizaciones juveniles impulsan en nuestros países.
- En un contexto de monopolio mediático, luchamos por una comunicación alternativa, desde las bases, hacia una integración mesoamericana, le apostamos a una red de comunicación desde los movimientos sociales, proponemos la apropiación del software libre al servicio de los movimientos sociales y de las comunidades, y nos

- comprometemos a unirnos para seguir comunicando el otro mundo posible y necesario.
- Llamamos a construir un modelo mesoamericano para poder gobernar desde abajo hacia arriba, sin distinciones de ningún tipo; para poder manejar nuestra propia agenda regional es preciso avanzar con nuestro propio concepto de democracia y gobernabilidad; para ello debemos consolidar un verdadero Movimiento Social Mesoamericano que sea capaz de alcanzar estas transformaciones. Nos manifestamos también en contra de la corrupción de los gobiernos de la región, que afecta a millones de personas al negarles sus derechos a una vida digna, con trabajo, salud, educación, agua potable y otros servicios, pues los recursos públicos se consumen en pagar por privilegios para unos pocos.
 - Creemos fundamental la lucha por la construcción de un Estado Laico, con igualdad y equidad de género, que realmente combata la violencia familiar, en pro de los derechos sexuales y reproductivos, con justicia económica y en pro del aborto terapéutico. Necesitamos asimismo promover una espiritualidad liberadora, integradora y restauradora de nuestras culturas e identidades.
 - Finalmente, el VII Foro Mesoamericano de los Pueblos manifiesta su solidaridad para con los Cinco Héroes Cubanos, vilmente encarcelados en las prisiones del Imperio estadounidense, pues su lucha es la de todo un pueblo y la de todo un continente que aspira a un mundo con libertad, justicia y equidad. Nos manifestamos también en solidaridad con todos los presos políticos de toda la región mesoamericana y de todo el continente, en especial los presos políticos en Oaxaca y los estudiantes perseguidos y encarcelados actualmente en Panamá.

La realización del VII Foro Mesoamericano ha sido de vital importancia para continuar la construcción de pensamiento

y articulación de acciones colectivas, pues nos ha permitido reencontrarnos en discusiones y debates necesarios para conocernos mejor y poder pensar en un proyecto social alternativo, de alcance regional.

Reafirmamos la necesidad de seguir profundizando nuestra articulación, pues necesitamos dar pasos que vayan más allá de la celebración del Foro como evento, para construir un Movimiento Social Mesoamericano donde los Foros sean parte de este proceso pero no su objetivo principal. El próximo Foro Mesoamericano de los Pueblos será realizado en México, en 2009, por lo cual desde ahora alentamos la participación popular en este importante espacio de encuentro de luchadores y luchadoras de toda la región.

¡VIVA MESOAMÉRICA UNIDA!

¡OTRA MESOAMÉRICA Y OTRO MUNDO SON POSIBLES!

Documento

Publicamos cuatro documentos emitidos durante el *lock-out* agrario realizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confederación Rural Argentina (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), que representan, respectivamente, a los terratenientes y grandes exportadores, a los medianos propietarios, a los arrendatarios y rentistas y a las cooperativas rurales.

Conflicto agrario Otro camino para superar la crisis

Desde el 11 de marzo, cuando el gobierno nacional tomó la decisión de aumentar las retenciones y hacerlas móviles en función de los precios internacionales, escaló un conflicto que ha concluido instalando una polarización política entre el gobierno y las entidades del campo. No es verdad que debamos aceptar a libro cerrado los argumentos y las propuestas de ambos sectores, como si no hubiera propuestas y medidas superadoras.

Detrás de las demandas de eliminación de las retenciones móviles, las entidades del campo han enarbolado un programa de liberalización del mercado exportador de alimentos, con el fin del acaparar el máximo posible de las rentas extraordinarias, mientras difunden el planteo ideológico de que el Estado no debe meterse con los negocios privados.

Bajo la cobertura de un falso federalismo, se promueve una plataforma de medidas afín a los intereses del agronegocio y la Sociedad Rural, con el acompañamiento y la fuerza social de los pequeños productores que han quedado entrampados en un *lock-out* agrario que favorece a los grandes capitalistas del sector y apunta a crear las condiciones favorables a una restauración neoliberal.

Las clases propietarias y los grupos agrarios más concentrados no toleran siquiera una tibia e inconsecuente regulación estatal y distribución de renta, enarbolando sus intereses privados y su ganancia creciente por sobre la alimentación, el salario, la educación y la salud de todo el pueblo argentino. Hoy el campo acumula superganancias que no se encuentran en ninguna otra rama de la producción. Esa situación impar es la que permitió batir records año tras año, incluso a costa de desplazar de sus tierras ancestrales a los campesinos pobres del norte argentino y de las condiciones laborales precarias e irregulares de más de un millón de peones rurales.

La derecha cuestiona las retenciones móviles en tanto mecanismo regulador que permite divorciar los precios internacionales de los locales y amortiguar el impacto inflacionario de un encarecimiento de las exportaciones. El *lock-out* se ha transformado también en una trinchera política desde donde promueven regresivamente el retorno al período previo a 2001.

Los cacerolazos que hemos visto en la Capital y otros centros urbanos, pese a su heterogeneidad inicial, se han ido configurando en la antítesis de la rebelión de 2001, motorizados por sectores altos de la sociedad, muchos de ellos rentistas, y por la oposición de derecha que ya se había manifestado en las elecciones legislativas y en las presidenciales de octubre pasado.

La mayoría de los medios de comunicación, grandes grupos concentrados que detentan el poder comunicacional y el cuasi monopolio de la palabra y la imagen, han jugado un rol protagónico como aglutinantes de una derecha invertebrada, distorsionando la realidad, creando una atmósfera política artificial y una opinión popular ficticia.

La principal preocupación del gobierno frente al *lock-out* ha sido reafirmar su autoridad política frente a un desafío sectorial que rompe el equilibrio de alianzas que ha sostenido su gestión, que desde el inicio se ha apoyado en el modelo sojero que ahora cuestiona. Recurrió a todas las variantes posibles: discursos agresivos y temporizadores, amenazas y negociaciones, y ha quedado políticamente debilitado. Incapacidad política y errores de implementación

técnica unificaron el campo opositor y le hicieron perder al gobierno sus aliados naturales.

Además, profundizó este esquema con el consiguiente desplazamiento de productores, afectando la soberanía alimentaria, fortaleciendo los *pools* de siembra y los grupos exportadores (Dreyfus, Cargill, Nidera, Bayer), permitiendo la escandalosa apropiación diferencial entre los impuestos pagados por los productores y lo realmente ingresado a las arcas del Estado. No casualmente estos grupos económicos no han sido casi mencionados en la crisis actual ni por el gobierno ni por las entidades del campo.

El gobierno tampoco cambió la estructura tributaria regresiva, ni adoptó ninguna iniciativa para recuperar el patrimonio nacional rematado durante el menemismo.

A pesar de las fenomenales tasas de crecimiento del actual ciclo económico, de la fuerte creación de empleo y de la recuperación salarial, persisten la segmentación y la precarización en el mercado de trabajo, se conservan muchas de las peores leyes laborales de los noventa —e incluso de la dictadura, como la de los peones rurales. Al no adoptar medidas para modificar efectivamente la distribución del ingreso, la brecha entre ricos y pobres continúa ensanchándose.

La políticas en curso no pueden asegurar, ni tampoco se lo proponen, la reconstrucción de un sistema de transporte ferroviario barato y ecológicamente sustentable, aunque se proyecta un “tren bala” que nos vuelve dependientes de tecnologías que no poseemos, que es inservible para el transporte de cargas y que sólo podrá ser utilizado por una elite de pasajeros de altos ingresos.

Argentina posee el raro privilegio de ser el único país que enajenó su renta petrolera y, a contrapelo de las tendencias latinoamericanas —Bolivia, Ecuador, Venezuela—, no hay proyecto alguno para recuperarla; por el contrario, asistimos a la profundización de la política menemista en materia de hidrocarburos. Lo mismo sucede con las empresas privatizadas de servicios públicos y la generación y distribución de energía. Los grupos de medios de comunicación hoy denunciados por su papel en la crisis son los mismos que ayer fueron beneficiados con la renovación de las licencias, basados en la Ley de Radiodifusión de la época de la última dictadura militar.

Debajo de toda la parafernalia de acusaciones cruzadas se advierten divergencias al interior del bloque de las clases dominantes: mientras los sectores agrofinancieros tradicionales exigen darle prioridad a un proceso de acumulación basado en la exportación de bienes primarios y son indiferentes al consumo y el mercado interno, los sectores industriales, al contrario, aspiran a liderar dicho proceso con apoyo subordinado del sector agroindustrial.

El modo en el que se resuelva esta disputa no resulta ocioso ni indiferente para el movimiento obrero y las clases subalternas, como tampoco lo es la intervención estatal, aun a sabiendas de que lo más probable sea un acuerdo en el que el modelo primario-extractivo-exportador no será modificado sustancialmente, con las consecuencias sociales y ambientales y el tipo de desarrollo que lleva implícitos, lo que exige desarrollar por parte de todo el movimiento popular un planteo de transformaciones profundas más allá de dichos acuerdos.

No puede haber neutralidad ante la amenaza de que la derecha logre parte de sus demandas y coloque sobre la agenda futura su programa de restauración neoliberal. Una liberalización de las exportaciones como demandan los ruralistas y los ideólogos del *establishment* dispararía los precios de los alimentos con el consiguiente efecto sobre los salarios reales de los trabajadores y las condiciones de vida y existencia de las clases populares.

Rechazamos enérgica y categóricamente su chantaje y defendemos el derecho del gobierno a implementar retenciones móviles y cupos de exportación. Pero sostenemos que el curso que ha tomado hasta el día de hoy, lejos de ser una palanca para iniciar un cambio efectivo del modelo, cohabita con él, favorece a los grandes propietarios y *pools* sojeros y a los grandes exportadores, mientras afecta a su propia base popular al mostrarse impotente para un control eficaz de la inflación.

Los abajo firmantes pretendemos contribuir a cambiar los ejes del debate y discutir soluciones populares efectivas para el agro.

Sin que sea una enumeración taxativa:

- Creemos necesario afectar las ganancias de los grandes propietarios, los grupos exportadores, comercializadores y *pools* de siembra, que se quedan con el grueso de los beneficios. También comenzar a discutir la nacionalización de varios segmentos de estos sectores.
- Elaborar un plan agrario que permita organizar la producción de acuerdo a un programa racional que posibilite contar con alimentos baratos y de calidad para todo el pueblo. Que contemple una política de fomento a los pequeños campesinos y de garantía de sus tierras, así como medidas protectoras del ambiente y una política de estatización de los insumos de los productores medianos y pequeños y de impuestos diferenciados según el tamaño de sus exportaciones.
- Regular el comercio exterior y los precios mediante una junta nacional de granos y carnes; adoptar una clara reforma fiscal desgravando las cargas tributarias al consumo, modificando las alícuotas del impuesto inmobiliario y a las ganancias.
- Eliminar el IVA de los productos esenciales en el consumo popular y aplicar efectivamente la Ley de Abastecimiento.

Es imperioso también derogar la ley de Videla del peón rural y garantizar el blanqueo de todos los trabajadores en negro, así como asegurar la capacidad adquisitiva de los salarios para todos los trabajadores y del subsidio a los desocupados.

Con esta declaración apuntamos a que una tercera voz a favor de las mayorías populares comience a cobrar cuerpo frente a la crisis actual.

Primeras firmas

Claudio Katz, Guillermo Almeyra, Maristella Svampa,
Hugo Calello, Susana Neuhaus, Guillermo Gigliani,
Alejandro Bercovich, Mabel Bellucci, Eduardo Faletty,
Ezequiel Adamovsky, Claudia Korol, Clara Algranati,

José Seoane, Antonio Bitto, Jorge Marchini, Jorge Sanmartino, Eduardo Lucita, Bruno Fornillo, Martín Bergel, Hernán Ouviaña, Diana Mauri, Ricardo Orzi, Guido Galafassi, Agustín Santella, Gustavo Robles, Emilio Taddei, Judith Feldman, Leandro Sowter, Mabel Thwaites Rey, Aldo Casas, Nora Ciapponi, Antonio Por, Beatriz Morales, Claudio Pandolfi, Pablo Guillermo Frisco, Irene Muñoz, Herman Schiller, Guillermo Caviasa, Julio Vergara, Ariel Petruccelli, Alejandro Medici, Franco Catalani, Manuel Gonzalo Navarro, Aníbal Viguera, Alberto Wiñaszki, Eduardo Gorostegui, Nicolás Lion, Meriem Choukroum, Mariano Félix, Liliana Soto, Daniel Pereyra, Octavio del Valle, Fernando Stratta, Joaquín S. Gómez, Carlos M. Herrera, Hernán Camarero, Silvana Ferreira, Omar Acha, Hernán Apazza, Agustín Nieto, Leandro Andrini, Héctor Menéndez, José Luis Heller, Luis Galand, Luciano Alonso, Natalia Vega, Alejandro Andreassi Cieri, Diego Heluani, Ernesto Javier Díaz, Daniel de Santis, Alan A. Rusch, Francisco G. Pavan, Oscar Martínez, Daniel Ximénez, Virginia Ciffarelli, Guillermo Pérez Crespo, Roberto Fornari, Darío Balvidares, Martín Ogando, Cecilia Rikap, Fernando Lizárraga, Sergio Arelovich, Juan Grijera, Carlos Morchio, Silvia Santos y Liliana Daunes.

Representantes sindicales y organizaciones sociales

Carlos "Perro" Santillán, Fabio Resino (Presidente de FACTA), Cooperativa del BAUEN, Luciana Santillán (Coordinadora de la Corriente del Pueblo-Jujuy), Bloque Piquetero Nacional, Frente de Trabajadores Combativos-Movimiento 29 de Mayo (FTC-M29), Movimiento Teresa Rodríguez-La Dignidad (MTR-La Dignidad), Unión de Trabajadores en Lucha (UTL), Movimiento Brazo Libertario (MBL), Trabajadores Ocupados y Desocupados Unidos (TODU), Movimiento Teresa Rodríguez-12 de Abril (MTR 12 de Abril), Enrique Gandolfo (Secretario General de SUTEBA Bahía Blanca y de la CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego), Susana Altamirano (Secretaria de Acción Social-CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego), Norberto Señor (Secretario General de la Seccional Gran Buenos Aires Sur de ATE), Alejandro

Mascareño (Secretario General Seccional Almirante Brown-
Presidente Perón, de ATE), Susana Ancarola (Secretaria de
Prensa de la Seccional Gran Buenos Aires Sur de ATE), Luis
Angió (Delegado General de la Comisión Interna Seccional
Buenos Aires del Banco Provincia de Buenos Aires), Jorge
Montero (Delegado General de la Comisión Interna de
Destilería Shell de Dock Sud), Carlos González (Delegado
General de la Comisión Interna de SIDERAR Haedo-UOM),
Juan Pablo Casiello (Secretario Adjunto de la Seccional
Rosario de AMSAFE), Comisión Interna de Acetatos Quilmes-
AOT, Gustavo Ibaldi y Jorge Pérez (integrantes de la
Agrupación Verde de SUTEBA Almirante Brown), Marcos
Britos y Pablo Goodbar (integrantes de la Agrupación Semilla
Ramírez de Trabajadores de la Universidad de Buenos Aires),
Raúl Wanzo (Agrupación Negra de Mineros de Río Turbio
de ATE), Jerónimo Altschuller (Unión de Trabajadores
Piqueteros), Miguel Ángel Ruocco (MTR-12 de Abril),
Cristina Martín (Delegada ATE-Justicia), Carlos Penoncello
(Delegado UEPC Córdoba), Jorge Urruchua (Secretario de
la Unión Ferroviaria-TBA-Mitre), Oscar Arturo (Agrupación
de Trabajadores del Subte "Los topos"), Eduardo Barragán
(Presidente de la Asociación de Profesionales del Hospital
Arcades-CICOP), Cuerpo de Delegados APA-AR-Aeroparque,
Gustavo Brufman (Secretario General de la Asociación de
Docentes de la UNR), Militancia Comunista, Corriente Praxis,
Colectivo Rompecabezas, Organización Estudiantil "Lobo
Suelto", Corriente José Antonio Mella-UBA, Foro de Debate
para la Acción (FDPA), Grupo Frente Comunista, Juventud
Guevarista, Bases Socialistas, Red de Encuentro Social,
Centro Político "Tinta Roja" La Plata, Centro Social y Cultural
Flores Sur, Frente Popular Darío Santillán (FPDS).

Documento

No somos campo, somos tierra y territorio

Red Puna
Movimiento Nacional Campesino Indígena
Jujuy, 2 de junio de 2008

Durante las últimas semanas hemos visto con desolación y con desesperanza el conflicto planteado por las entidades empresarias del campo: la Sociedad Rural, Federación Agraria, Confederaciones Rurales y CONINAGRO, y la primera pregunta que nos hicimos en nuestras comunidades fue: “¿mejorará algo para nosotros, los excluidos de siempre, los de la Puna y la Quebrada? ¿Los que trabajamos la tierra todos los días al sol y con nuestras manos?”.

Pasados los días nos fuimos dando cuenta de que estábamos viviendo en “el mundo al revés”. Los que estaban reclamando por las retenciones de la soja y el girasol eran los empresarios del campo, que desde que nuestro país dejó la convertibilidad en 2002 se vienen enriqueciendo y mejorando su situación económica, y en muchos casos son los mismos que desalojan cientos de familias campesinas y comunidades indígenas en nuestro país, desmontando y arrasando con total impunidad para sembrar soja.

Las llamadas “entidades del campo” (SRA, FAA, CRA y CONINAGRO) sólo pronuncian los dictados de los agronegocios. Su símbolo actual es la soja transgénica, que por su alta rentabilidad ha devastado bosques, desalojado comunidades campesinas e indígenas, contaminado suelos y aguas y aumentado los precios de los alimentos en el mercado interno. Quieren paralizar al país reclamando una baja en las retenciones a la exportación de soja y girasol, diciendo que así se mejorará la situación del “campo”, pero sabemos que estos empresarios cada día ganan más y pasan una muy buena situación económica, comprándose camionetas, casas y campos.

Por ello nosotros como Comunidades Aborígenes Indígenas de la Puna y Quebrada Jujeña, miembros de la Red Puna, queremos expresar:

- Los campesinos, indígenas y pequeños productores representamos el 70% de los productores de nuestro país. Sembramos alimentos y criamos animales que comemos o comen nuestros vecinos en los pueblos, fortaleciendo nuestra economía campesina y no para exportar.
- Somos parte de la tierra y no la consideramos sólo un medio para hacer negocios. La tierra es parte de nuestra cultura y nuestra identidad. No tenemos nada que ver con la soja ni con los agronegocios.
- Somos quienes impulsamos la producción agroecológica cuidando nuestra salud ambiental.
- Somos la agricultura de los campesinos en profunda crisis social, económica y productiva, la agricultura de los que aún estamos lejos de ecuaciones con grandes ganancias. Lo nuestro es una forma de producción y un modo de vida que, pese a su invisibilidad histórica, reviste gran importancia para el país, entre otras cosas por el aporte que hacemos a la soberanía alimentaria, la generación de empleo y el arraigo rural.
- No estamos en las rutas, no formamos parte del reclamo por bajar las retenciones, porque no son el motivo de nuestras angustias y nuestros problemas. Porque antes de disputar mayores márgenes de ganancias, todavía hoy continuamos reclamando por el acceso a derechos básicos elementales como la tierra, el agua, el manejo de los recursos naturales, la salud, la educación, los caminos, en suma: ¡queremos justicia!
- Estamos en contra del *lock-out* empresario del campo y a favor de las retenciones a las exportaciones, como medida para frenar el avance del actual modelo agropecuario de los agronegocios y la soja transgénica.

- Pero esto no es suficiente para lograr justicia económica en nuestro país. Es necesario distribuir la riqueza, frenar los desalojos de campesinos y comunidades aborígenes y que el Estado entregue las tierras que ancestralmente nos pertenecen.
- Es necesario establecer un modelo de producción agroalimentaria que garantice los alimentos para toda la población y a precios accesibles. Ello significa garantizar la Soberanía Alimentaria de nuestro país, o sea, que como país podamos decidir sobre las siguientes cuestiones: ¿Qué producir y para quiénes producir? ¿Para alimentar a nuestro pueblo o para exportar forraje para el ganado europeo?
- Algunas de esas entidades empresarias pretenden representar a los “pequeños productores” para disfrazar sus oscuras negociaciones. Nosotros nada tenemos que ver con los reclamos que hacen. En este sentido también queremos denunciar que el Foro de la Agricultura Familiar es una pantalla con la cual la Federación Agraria Argentina negocia sus intereses y cargos en el gobierno, usando nuestro nombre.

Esta es una oportunidad para redefinir las estrategias de desarrollo en función de la agricultura campesina indígena, del pequeño agricultor que vive en el campo y del trabajador rural. Esa estrategia debe contar como actores fundamentales a las organizaciones campesinas y los pueblos originarios; destinar recursos a subsidios que mejoren la infraestructura comunitaria, productiva y de servicios sociales en el campo real; detener los desalojos de familias campesinas e indígenas; planificar la redistribución de la tierra y el repoblamiento del campo; garantizar la producción de alimentos sanos para la población; y centralizar en el Gobierno las exportaciones para regular los precios internos y redistribuir los ingresos.

Porque tenemos derechos y porque queremos vivir con dignidad en nuestras tierras: Reforma agraria integral que garantice la tierra para quien la trabaja y alimentos para todo el Pueblo Argentino.

Documento

Proclama campesina indígena

Coordinación de las organizaciones
de pequeños campesinos y pueblos
indígenas

Rosario, 24 de junio de 2008

Proclama del encuentro nacional de organizaciones campesinas, pueblos indígenas, pequeños productores y agricultores familiares.

Nosotros y nosotras, delegados y representantes de organizaciones campesinas, indígenas, pequeños productores y agricultores familiares, nos reunimos en la ciudad de Rosario el día 24 de junio de 2008 y acordamos:

1) Conformar una Mesa Coordinadora Nacional que represente las reivindicaciones y reclamos comunes de todas las organizaciones presentes.

2) Facultar a los delegados y delegadas establecidos en esta asamblea para reunirse con funcionarios y parlamentarios para expresar nuestras reivindicaciones y demandas, sintetizadas en:

- Facilitar la participación efectiva de las organizaciones campesinas y de pueblos indígenas en el diseño de políticas agrarias y el fortalecimiento de las organizaciones y el desarrollo integral de nuestro sector. Apoyo económico y tecnológico a las comunidades campesinas indígenas y cooperativas.
- Efectivizar la suspensión inmediata de los desalojos de campesinos, pueblos originarios y pequeños productores.
- Exigir nueva legislación de acceso a la tierra para la recuperación de territorio campesino y de pueblos indígenas.

3) Continuar trabajando en el desarrollo de este nuevo espacio de representación plural del sector campesino, pueblos originarios y de Agricultores Familiares.

Además, dejamos constancia de:

Las comunidades campesinas, pueblos originarios, pequeños productores y agricultores familiares no estamos representados por ninguna de las entidades ruralistas. Es decir, nos diferenciamos de SRA, CRA, FAA y CONINAGRO. No apoyamos su paro patronal ni sus reivindicaciones. Han sido serviles a las grandes corporaciones transnacionales de los agronegocios.

Son cómplices de graves violaciones a los derechos humanos de miles y miles de familias campesinas e indígenas. Miembros de APREESID, SRA, CRA, CONINAGRO y hasta la FAA han utilizado todo tipo de métodos criminales ilegales para expulsar por la violencia, incluso armada, a comunidades enteras campesinas e indígenas, con el accionar cómplice de jueces, policías y dirigentes políticos, violando y contaminando territorios, aguas, bosques, biodiversidad.

Repudiamos la manipulación de la información por parte de muchos medios de comunicación que han ocultado la diversidad del campo argentino y han desfigurado los rostros del genuino trabajador y trabajadora rural.

Las organizaciones presentes entendemos que debemos caminar hacia una transformación profunda del modelo agropecuario, que avance hacia la reforma agraria integral, la agroecología y la soberanía alimentaria.

Para que pueda ser posible la distribución de la riqueza y la alimentación de todo el pueblo argentino es necesaria la distribución y democratización del acceso a la tierra y los bienes naturales y el fortalecimiento de las economías campesinas, los pueblos indígenas y la agricultura campesina.

Continuaremos encontrándonos para formular propuestas concretas de desarrollo rural sustentable que contemplen a toda la diversidad de nuestros territorios.

Convocamos a todas las organizaciones que se sientan identificadas a sumar sus fuerzas y continuar delineando nuestro plan de acción y movilización.

Entendemos humildemente que, desde el 11 de marzo a esta parte, este espacio es la síntesis más consensuada y autónoma que expresa los intereses del sector.

Entendemos que las retenciones móviles, con reintegros, constituyen una herramienta válida de regulación de los mercados y de distribución de la riqueza.

Parte de esas retenciones deben reorientarse a dinamizar la agricultura familiar, la agricultura campesina y la agricultura de los pueblos originarios, en inversiones de infraestructura predial, fortalecimiento y desarrollo de las comunidades, asegurando la diversidad productiva que fortalezca las economías territoriales.

¡Soberanía alimentaria: tierra, territorio, trabajo, justicia!

Frente Nacional Campesino (MOCASE JURIES, MOCAFOR, MOCAJU, Hijos del Monte)

Ligas Agrarias

Movimiento Nacional Campesino Indígena-MNCI (MOCASE VC, Movimiento Campesino de Córdoba, Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra de Mendoza, Movimiento Campesino de Misiones, Encuentro Calchaquí de Salta, Comunidades Unidas de Molinos de Salta, Red Puna de Jujuy, SERCUPO, organizaciones de Buenos Aires)

COCITRA

Poriajhu Vía Campesina

Consejo Asesor Indígena (CAI)

Coordinadora Mapuche Neuquina

Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita

Cooperativa Nor Patagónica Movimiento Evita

CEPAR

Mesa de PP-Chaco

Asociación de Mujeres Campesinas-Entre Ríos

UNPEPROCH-Chaco

Productores Minifundistas "La Nueva Estrella"

Fuerza Criolla

Consejo Asesor Cooperativa Río Negro

Comisión Central de Campesinos

Unión Trabajadores Rurales (UTR)-Misiones

Unión de Trabajadores Técnicos Rurales de Misiones (UTTERMI)

Agrupación Padre Mugica
ICECOOP-Cooperativa de trabajo
Pequeños productores Villar Berm
Foro de Agricultura Familiar-Entre Ríos
Observatorio del Sur
Taller Ecologista
CPN-asesora
EFA JAHA ITATU
Mesa de Agricultura Familiar Norte Santa Fe
Movimiento Norte Grande
Asociación Biodinámica Argentina (ABDA)
Huerteros urbanos de Rosario
Cooperativa Surco (Bosque de Org.ch Sur Río Negro)
Lof. Mapuche "Mariano Solo"
CAUDAL-Salta
Em Renguedo-Rosario-La Colmena
UFA
EFA Mensú Peguera
Desarrollo Rural-Chaco
Efa Ñamembae
AF Cooperativa Agropecuaria
EFA COEMBOTA
PUSALI (Productores Unidos Santiago Liniers)
Foro de Agricultura Familiar-Chaco
UOCB
APPO
EFA (Pejú Porá)
Organización Tierra Nuestra
Cooperativa de Productores de Hermoso Campo Ltda.
MAC (Movimiento Agrario Correntino)
MAM (Movimiento Agrario de Misiones)
ARCAN Río Negro
Frente Campesino Por Tierra y Trabajo el INTI-Jujuy

Listado de referentes de la mesa coordinadora

Carlos Cremona, Américo Barúa, Oscar Matot,
Marcos Reina, Ángel Strapazzón, Ariel Méndez,
Benigno López, Osvaldo Lovey, Coco Egger,
José Raúl Aramayo, Beatriz Centeno, Marcela Jaramillo,

Inés Londra, José Franco Río, Rigoberto Lagos, Fabio Abábile,
Raúl Galván, Isabel Maza, Ángel Machuca, Francisca Ibarra,
Sergio Méndez, Antonio Zamora, Esteban Wurschmint y
María del Carmen Arina

Documento

Los productores invisibles

Comunicado del Frente Nacional
Campesino
Buenos Aires, 3 de junio de 2008

Los delegados y delegadas campesinos e indígenas, agricultores familiares, trabajadores de la tierra, de doscientas organizaciones de dieciséis provincias de la República Argentina, reunidos en el segundo plenario del Frente Nacional Campesino (FNC), en la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo, resolvemos lo siguiente.

- El FNC expresa su más enérgico repudio al paro patronal que ejecutan las cuatro entidades agropecuarias más poderosas del campo argentino y que defienden los intereses de las seis multinacionales más poderosas del mundo, que controlan el comercio exterior agropecuario, y los cinco grupos económicos más poderosos de la Argentina, que monopolizan el comercio interno agroalimentario del país. Rechazamos que unas pocas empresas agroexportadoras decidan por la vida de 40 millones de argentinos. Nos oponemos a cualquier intento de golpe de Estado económico y a la intención de subordinar al gobierno argentino bajo los dictados de los agronegocios.
- El FNC entiende que el paro patronal pretende abortar el Plan Estratégico de Desarrollo Agropecuario que queremos y necesitamos los argentinos para garantizar la soberanía alimentaria, la regulación del comercio exterior e interior y la justicia tributaria; medidas indispensables para

apuntalar la redistribución de la riqueza con justicia y equidad para una Argentina con soberanía económica e independencia política integrada a la región.

- El FNC sostiene que nuestro país no puede seguir siendo meramente la chacra para la producción de materia prima para alimentación de animales y la producción de agrocombustibles para los países más poderosos del planeta, que es la función que nos quieren seguir imponiendo las potencias del mundo. En el actual contexto mundial, nuestro país debe planificar la producción, industrialización y comercio de alimentos para los argentinos y para la exportación, ya que reunimos todas las condiciones necesarias para producir alimentos para nuestro pueblo y para exportar con valor agregado.
- El FNC alerta a la sociedad y autoridades acerca de los atropellos que llevan adelante empresas nacionales y extranjeras contra familias campesinas y comunidades originarias que han decidido resistir en las tierras que ancestralmente les pertenecen. Los atropellos forman parte de la campaña sistemática que desarrollan empresas agropecuarias y mineras para apropiarse de las tierras, los montes y las aguas que defienden los campesinos e indígenas. Instamos a las autoridades a tomar las medidas que correspondan para frenar los desplazamientos forzados y desalojos compulsivos de familias de pequeños y medianos productores agropecuarios.
- El FNC denuncia los desmontes masivos e ilegales que realizan empresas agropecuarias con topadoras, pisamontes y fuego, en varias regiones del país, para extender la frontera agropecuaria, destruyendo la flora y fauna autóctonas y provocando destructivos cambios climáticos.
- El FNC denuncia que ríos, arroyos, riachos, lagunas, esteros, pozos, represas y napas de agua son envenenados por el uso masivo e indis-

- criminado de agrotóxicos en los monocultivos extensivos, particularmente por la aplicación de glifosato en los sembradíos de cultivos transgénicos en regiones donde habitan campesinos e indígenas.
- El FNC reclama como propias de todos los pequeños productores agropecuarios, movimientos campesinos e indígenas las herramientas del Estado que tienen la función de diseñar, acompañar, implementar el Modelo de Desarrollo Rural Estratégico para la Argentina. Por ejemplo, la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Programa Social Agropecuario (PSA), PRODERNEA, PRODERNOA y SENASA.
 - El FNC define a la empresa cooperativa como una herramienta de unión, organización y solidaridad indispensable para mejorar la producción, transformación, comercialización, consumo y servicios públicos para los pequeños productores agropecuarios. Es decir, el cooperativismo es un instrumento clave para una Política Estratégica de Desarrollo Rural y Redistribución de la Riqueza. El cooperativismo puede y debe cumplir una función de gran trascendencia en la transformación del campo y de la economía argentina.
 - El FNC sostiene que es urgente profundizar la intervención del Estado para mejorar la diversidad, calidad, cantidad, continuidad y rentabilidad de la producción de los pequeños productores de todas las regiones del país. Queremos lograr precios justos para los productores y consumidores y evitar de esa manera las terribles distorsiones que se dan actualmente en los productos alimentarios.
 - El FNC considera de trascendental importancia el fortalecimiento de los bancos de semillas para recuperar, mantener y multiplicar la rica biodiversidad.

- sidad agrícola y alimentaria, por la importancia cultural, económica, social y política para un modelo de país serio y democrático.
- El FNC reclama la urgente regularización dominial de las posesiones de tierras de familias campesinas y comunidades indígenas de diferentes puntos del país, para lo cual es necesario un relevamiento minucioso de posesiones y propiedades de tierras agropecuarias. Al mismo tiempo, son necesarias reglas claras que limiten la propiedad de la tierra tanto a empresas nacionales como extranjeras, que tengan por objeto garantizar la unidad económica productiva, pero evitar la excesiva concentración de la tierra y los recursos naturales, fuente de graves injusticias en el país. La tierra es para quien la trabaja con sus manos, respetándola, cuidándola y amándola.
 - El FNC propone el fortalecimiento sistemático de la educación rural con la participación de las organizaciones, rescatando, respetando y resaltando la cultura, historia, geografía de cada pueblo rural.
 - El FNC propone el cuidado integral de la salud, atendiendo especialmente a enfermedades como el mal de Chagas y la tuberculosis –que golpean con particular dureza a la población campesina– entendiendo que la salud es un derecho y no un negocio.

Documento

Las soluciones mágicas y las inevitables catástrofes subsiguientes

Grupo de Reflexión Rural
Julio de 2008

Nos preguntamos en estos momentos, y luego de la crisis, si lo que concluyó es una etapa, y en ese caso si comienza otra cosa, o si acaso tendremos más de lo mismo o una profundización del mismo modelo. El hecho de que pudiera resolverse un conflicto de más de cuatro meses de duración, generado por un retoque en el porcentaje de las retenciones a la exportación, y que esa "resolución" se haya logrado de manera pacífica y mediante mecanismos institucionales produce un alivio en la población. Pero, ¿cambia las cosas? ¿Se dejará de sembrar soja? ¿Se distribuirá mejor la renta agrícola? ¿Se preservarán las tierras agrícolas sometidas a gravísimas amenazas de pérdida de fertilidad? ¿Se dejarán de fumigar los campos y las poblaciones que resultan víctimas inermes de los paquetes agrotóxicos? Se abre una nueva ventana al futuro, pero ¿a qué futuro? Los legisladores y los funcionarios tienen un nuevo desafío por delante, el de poner en práctica los discursos realizados en estos últimos meses. ¿Cómo lo harán? ¿Será posible alcanzar situaciones de cambio en el universo agropecuario? ¿O sólo se tratará, según parece, de dar un nuevo impulso a la biotecnología, como propone un reciente proyecto de ley para la creación de un fondo para la soberanía biotecnológica?

Las enseñanzas de las últimas décadas nos muestran que tanto los administradores políticos como los dirigentes agropecuarios siguen una marcada tendencia a la búsqueda de "soluciones mágicas". La resolución 125 fue un intento de solución mágica. Su aplicación derramaría riqueza sobre una sociedad golpeada, y salud sobre una

sociedad enferma. Es pensamiento mágico. Un retoque en el porcentaje de una retención traería una cascada de beneficios. Lo cierto es que aquí la magia falló, y lo que trajo es un prolongado conflicto y por último la marcha atrás y la derogación de la medida.

Los sistemas ecológicos funcionan según sus propias reglas, y esas reglas están dadas por el conjunto de la biodiversidad, los componentes físicos y las particularidades climáticas de cada región. Las distintas formas de intervención del hombre dentro de estos sistemas deberían tener una coherencia con la totalidad. Tales intervenciones deberían estar regidas por una conciencia del todo y de sus sentidos más íntimos. De lo contrario, el sistema como un todo seguramente reaccionará negativamente. Las apetencias humanas, especialmente las económicas, normalmente se despliegan dentro de la ilusión de no necesitar ajustarse a las restricciones del ecosistema. En las últimas décadas, tanto los pensamientos políticos como los económicos parecen guiarse por la regla de forzar los ecosistemas hasta sus límites y, en ocasiones, a empujarlos fuera de ellos mismos. Lo que sobreviene es inevitablemente un desastre, lo que llamamos una situación de catástrofe.

Esas "soluciones mágicas" que fueron medidas circunstanciales para atacar un síntoma, un paliativo para salvar una profunda incompreensión del hombre con su entorno, a través de la costumbre se transforman en verdades monolíticas, en cuestiones fuera de discusión, en indiscutibles y temibles dogmas, de manera tal que nadie dentro del sistema académico y de producción podría hallar un espacio de reflexión como para que sean revisadas. Ahora bien, dado que no resuelven los desequilibrios iniciales, esas soluciones mágicas generan dependencia; son adictivas, porque trabajan fuera del sistema, porque son incorporadas sin un conocimiento apropiado para manejarlas. Las soluciones mágicas fueron siempre adoptadas en función de validaciones económicas; luego la industria y el Estado se ocuparon de buscarles algún beneficio social o ecológico, que por supuesto no tienen en el mediano-largo plazo, pero que en la simulación que crean los medios de comunicación resuenan como verdades establecidas.

Ejemplo de ello es el uso de agroquímicos. Desde los inicios de la revolución verde, la promesa de un aumento de la producción y de un triunfo en la guerra contra las plagas, más que una promesa, consistió en una solución mágica. ¿Hay chinches? Ponerle Endosulfán. ¿Hay malezas? Echarle Tordón. Así de sencillo, así de mágico, así de irreal, así de antiecológico, así de brutal y de absolutamente criminal con el entorno. La soja transgénica fue otra solución mágica, acogida con esperanzas como una simplificación en las tareas, un ahorro de combustible y una garantía de ventas, con precios crecientes, en medio de un panorama de deudas y de empresas quebrando.

Los nuevos desarrollos biotecnológicos, el maíz Bt-RR por ejemplo, son nuevas soluciones mágicas. Se supone que controlan plagas, que tiene buenos rendimientos; las malezas son combatidas con glifosato y encima no hay que hacerse problemas por la venta, total no es para alimento... ¡es para biocombustibles...! ¡Y los biocombustibles! La última y más prometedora solución mágica para la escasez del petróleo, la volatilidad de su precio, el calentamiento global y la conciencia negra de los consumidores europeos.

Las soluciones mágicas pasaron en su momento por explotar el quebracho colorado en el bosque chaqueño en épocas de La Forestal Argentina; una sola especie de las miles que tiene este bosque fue talada inmisericordiosamente. Ya sabemos sus consecuencias. Ese tipo de "soluciones" creyeron encontrar sólo en el tanino, en la cabra, o en los postes y durmientes, o en el carbón, los recursos de tan magníficos bosques. Hasta que llegaron los sojeros con la solución mágica más reciente, y lo único que vieron del bosque fue su suelo bajo la cubierta vegetal, un suelo que en el monte no es sino apenas una pequeña parte de un todo, y con esa mirada parcial y economicista justificaron tanta barbaridad, y con ella impulsaron las topadoras, las quemas y las fumigaciones, que tanta devastación y muertes han provocado entre las poblaciones locales. Las soluciones mágicas fueron las de cambiar toda esa riquísima biodiversidad, eliminarla de los campos y del pensamiento de los argentinos, sólo para encontrar un recurso a explotar, aquello que justifique transformar el bosque en dinero. Quebracho colorado, algarrobo, palo santo, postes, leña, carbón, suelo. Un solo recurso en medio de un conjunto

extraordinario de posibilidades. Las extracciones de corte madero sobre su masa forestal y su suelo fueron las soluciones mágicas recurrentes para el Chaco. Y podríamos repetir estos ejemplos en cada bioma de la geografía argentina.

Cuando la ciencia produce soluciones mágicas

Estas políticas se instalan y se facilitan mediante el recurso de ir dejando paulatinamente sin financiamiento a la investigación en ciencias básicas y gracias a un extendido desprecio hacia la cultura y la educación popular. Se generan así lagunas profundas en el conocimiento de los ecosistemas, y en la capacidad de apreciar aquellos "campos" en los que se trabaja y de los que se toma la "riqueza". Al no concebir la complejidad de los ecosistemas, al no comprender a fondo su funcionamiento, al estar limitados en las decisiones por esta ignorancia básica que configura un menosprecio por el entorno, surgen con naturalidad las soluciones mágicas, aquellas que presuponen no necesitar esos conocimientos previos.

Al mismo tiempo, en las universidades se ha logrado, por complejos mecanismos de selección desde lo económico y lo ideológico, una desvalorización de la ciencia básica, que fue reemplazada por la sobrevaloración de las ciencias "aplicadas", que sólo cobran valor si "pueden generar ganancias" para el autosustento de la propia investigación científica. Y este fenómeno se da tanto en las universidades privadas como en las públicas. Esta situación ha forzado a los científicos a buscar fondos en los capitales de la industria y del mundo financiero, introduciéndose de esta manera en un círculo vicioso de intereses ajenos a la investigación científica. De esta forma, durante las últimas décadas, la industria y las finanzas han tomado las riendas de las investigaciones y determinan las estrategias, fijando qué conviene investigar en las universidades. Esta burbuja de intereses se ha generado dentro de un sistema que sólo da mérito científico a las investigaciones que pueden ser publicadas en ciertas revistas internacionales reconocidas, que a su vez están involucradas o manipuladas directa o indirectamente desde los intereses de la industria y las finanzas.

Los científicos, por su parte, pueden contar con más subsidios si tienen suficientes publicaciones en es-

tas mismas revistas. Y así se genera una espiral creciente de intereses y complicidades entre lo público y lo privado. Para que la investigación sea "competitiva" se necesita de la "confidencialidad" de los resultados científicos. El mundo científico, casi sin darse cuenta, ha terminado envuelto en una maraña de intereses que le eran ajenos, y que lo obligan a seguir los pasos dictados por las empresas, para poder continuar existiendo como actividad y como corporación en el sistema académico. La industria y las finanzas han comprobado que, si ayudan a la formación de cuadros científicos, esos mismos cuadros les pueden ser útiles como instrumentos de sus lobbies. Estos cuadros científicos pasan a tener entonces más fondos para más resultados publicables, que a su vez generan más fondos. Muchos científicos promocionan sus ideas en los medios de comunicación, en los que trabajan asimismo cuadros periodísticos, también financiados por la industria y los capitales de especulación, que dan a conocer los "beneficios" magníficos de las investigaciones de estos científicos que lograron afianzarse en el modelo. Así, de esa manera, los cuadros científicos cobran notoriedad y reconocimiento en el sistema y, desde el pedestal alcanzado de "científicos neutros", logran convencer a los políticos de turno de la importancia que tiene la ciencia aplicada para la economía nacional.

Es entonces por medio de los cuadros formados desde los subsidios de la industria y las agencias de desarrollo europeas y norteamericanas, influenciadas por los mismos científicos lobbistas, creyentes en el crecimiento y el progreso, que la investigación aplicada comienza a ser subsidiada desde el Estado también, y se confunde de manera obscena con la investigación básica en biotecnología, tal como ocurre en nuestras universidades, en los organismos de Ciencia y Tecnología y en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). A partir de ahí, los cuadros científicos formados por la industria y las finanzas pasan a tomar cargos públicos con poder de decisión en ministerios, secretarías, agencias, institutos nacionales, etc. Estos mismos científicos lobbistas llegan incluso a representar a nuestro gobierno en reuniones internacionales donde se deciden las políticas y protocolos de bioseguridad, desestimando, ridiculizando e incluso desmin-

tiendo en forma descarada las denuncias sobre los resultados desastrosos de sus propias investigaciones, que sólo pueden seguir escondiéndose con la complicidad de los medios de comunicación involucrados.

En forma paralela, otras áreas de las ciencias son marginadas por los intereses de la industria y las finanzas, tales como por ejemplo, la ecoepidemiología y la ecología, debido a que el objeto de su ciencia es la investigación preventiva y no aplicada a intereses económicos industriales. O peor aún, se utilizan sus conceptos, como "responsabilidad social empresarial", de modo propagandístico, pero vaciándolos de contenidos, generando esquemas de autorregulación y cerrando el paso al control social o estatal. En este cada vez más complejo proceso de formación de cuadros científicos lobbistas es que la biotecnología ha pasado de ser una mera herramienta de laboratorio, entre muchas otras posibles, a ser un objetivo en sí mismo de la investigación científica. Los descubrimientos devienen en "invenciones" que pueden ser "patentables" y comercializadas. Estos descubrimientos, promocionados hasta el cansancio por los medios, pasan a ser las futuras soluciones mágicas contra el hambre, las enfermedades, los déficit energéticos, la contaminación y demás males generados por muchos de los mismos "progresos" científicos mágicos que los antecedieron.

Las soluciones mágicas traen problemas...

Las nuevas soluciones mágicas no son, entonces, más que ideas y procedimientos reduccionistas sacados de su contexto biológico y que pretenden no necesitar un conocimiento de los ambientes naturales en donde se liberarán los organismos modificados genéticamente. El proceso de cooptación de los científicos y de la colonización de las instituciones técnicas del Estado por parte de las corporaciones se ha consumado y ya no necesitamos como antaño tropas de ocupación; ahora, muchos de nuestros investigadores y técnicos comparten plenamente los valores de la globalización y los intereses de las corporaciones.

Pero las soluciones mágicas generan problemas inesperados. Y como somos dependientes de estas soluciones e invenciones patentables, asumimos los problemas

como parte “natural” de los procesos de prueba y error a los que nos domesticaron y en los que los sufrimientos a que nos somete la permanente improvisación no son visualizados por la casta política como una gravísima falta a sus propios deberes. La revolución verde generó mortandades, envenenamientos, residuos químicos que hasta hoy nos enferman, problemas que se extienden a lo largo de sucesivas generaciones, y lo peor es que ni siquiera pudo cumplir con su cometido originario, que era la promesa de alcanzar mayores rindes de producción en crecimientos programados. Las plagas ganaron resistencia y siguen atacando los cultivos, y cada vez somos más dependientes de los insumos químicos y de las empresas que los producen. Sin embargo, sorprendentemente, en los círculos académicos y políticos no se discute siquiera si fue o no conveniente entrar en la revolución verde que derivó en los cultivos transgénicos —es decir, genéticamente modificados— como su más novedosa expresión, y mucho menos se debate si, acaso, debiéramos abandonarla.

Ahora está ocurriendo lo mismo con la soja transgénica... y con sus devastadores e indiscutidos impactos, que ambas partes del reciente conflicto reconocen, aunque asombrosamente sólo se diferencian entre sí en la disputa por su renta o en proponer diversos caminos para ampliar las extensiones de los monocultivos. Estas soluciones mágicas son el negocio de las grandes empresas y, por ello mismo, las preferidas por muchos políticos y decisores, que ubicados detrás de sus escritorios son influenciados por los lobbies de la agroindustria, de la industria biotecnológica y del mundo financiero, resolviendo imprudentemente, sin conocimiento alguno fundado y teniendo en cuenta sólo las voces más audibles, que son siempre manipuladas desde los medios masivos de comunicación, allegados a los intereses de la agroindustria y la industria biotecnológica. Lo peor tal vez es que, al no reconocer a estas soluciones inicialmente como “fuera de los sistemas”, somos incapaces de combatir sus causas primarias: los desequilibrios; y nos dedicamos a buscar nuevas soluciones mágicas para resolver los problemas causados por las primeras. A estos problemas, generados por medidas circunstanciales, forzadas y adictivas, proponemos nuevas soluciones circunstanciales, más forzadas y adictivas

todavía. Este pensamiento lineal y secuencial es propio de las empresas agrícolas y aun de la ciencia empresarial; a cada efecto colateral se nos propone más de las mismas medicinas que los ocasionaron, supuestas soluciones que significan nuevos negocios para las empresas. Muchas veces sólo se trata de "subir la dosis". Y así vamos, de "solución mágica" en "solución mágica"; y mientras tanto, los gobiernos se suceden, los funcionarios se reciclan, los pobres siguen creyendo en poder salir alguna vez del infierno social y ambiental en el que se encuentran, y los ecosistemas (el ambiente) retroceden de manera irreversible.

Muchos funcionarios están encontrando una nueva solución mágica. Una solución que presuntamente no tendría conflictos con la producción de alimentos, que permitiría producir en tierras "marginales", que sería de manejo simple, y con durabilidad en el tiempo. Las tierras "marginales" son en general aquellas en las que hubo sobreexplotación ganadera, o actividades extractivas, tales como obtención de postes, varillas, carbón, leña. Cuando no quedan árboles aptos para sacar, y el piso está sobrepastoreado por cabras, las tierras se vuelven "improductivas", es decir, no rentables. La solución sensata pasaría por permitir que el bosque se regenerara, acompañando al tiempo con tareas de remediación y reforestación. Todo lo contrario, para esas tierras degradadas, los funcionarios chaqueños encontraron que sería posible aprovecharlas para cultivos energéticos. La jatropha y el tártago o ricino ya están siendo promocionados por una empresa suiza y se han firmado contratos por cinco años con productores familiares minifundistas y pequeños productores, para llegar a 20 mil has en esta primera etapa. Es casi obvio decir que estas "soluciones" aisladas del conjunto de lo ecológico, de lo social y lo económico, y pretendiendo la producción de agrocombustibles, no sólo no mitigarán el cambio climático sino que producirán todavía mayores expulsiones de campesinos, que seguirá concentrándose la riqueza y que se sumarán miles de hectáreas de nuevos desmontes a la actual deforestación. No se solucionará la pobreza, ni el hambre, ni la tuberculosis, ni el Chagas, ni la leishmaniasis, ni la fiebre amarilla, ni las riquetsias; y, para peor, se instalarán y se trabajará con especies extremadamente invasoras, cuyo impacto

sobre la biodiversidad chaqueña será quizás mucho mayor que el de la soja transgénica. Y todo para obtener, tan sólo, un puñado de dólares, que jamás se transformarán en desarrollo para las comunidades, sino que serán índices que harán crecer el producto bruto del que se vanaglorian en el gobierno nacional. Otra vez, seguiremos confundiendo el “crecimiento” con el desarrollo.

Crecimiento, desarrollo y necesidad de decrecer para desarrollarnos

Tendríamos que diferenciar el “crecimiento” del “desarrollo”, ya que *los cementerios también crecen, lo mismo que las cárceles y los petroleros hundidos* que contaminan los océanos y hacen crecer los índices del Producto Bruto. Los modelos macroeconómicos de crecimiento ya se aplicaron cuando se pasó de 25 millones de toneladas de granos en la década del setenta a los casi 70 y pico de millones en los noventa, y nada de eso resolvió los problemas microeconómicos, microsociales, microambientales, al contrario... los agravó. Por ende, esa propuesta es exactamente lo que se espera de un modelo basado en una economía de mercado, teniendo como meta la globalización. Es decir, seguimos con las mismas recetas y nos olvidamos del Desarrollo, de la Sostenibilidad y, en especial, de la Calidad de Vida, que nada tiene que ver con la productividad.

Las soluciones mágicas necesariamente van acompañadas de ignorancia y de oportunismo. En realidad, las soluciones mágicas no funcionan y nunca van a funcionar, en la medida en que no trabajen a partir del conocimiento integral de los ecosistemas en los que vivimos y que usamos para producir y cuyo origen no sea el desarrollo armónico sin afán de lucro excesivo. ¿Quién podría imaginar o acordar hoy que se elimine la soja transgénica o cualquier otro evento transgénico, OGM (organismo genéticamente modificado), de la Argentina? Sólo un idealista... ¿Quién podría proponer seriamente que se vuelva a una agricultura de procesos, sin aportes de agroquímicos? ¿Qué biólogo se atrevería hoy, desde los regímenes universitarios e institucionales imperantes actuales, a proponer soluciones integrales ecológicas o ecoepidemiológicas? Nadie sensato, sin lugar a dudas; sólo algunos pocos

animosos con espíritu heroico, bajo el riesgo de ser tildados como irrealistas o idealistas no serios, o de no ser oídos...

¿Quién podría proponer que es necesaria todavía una discusión a fondo sobre la validez ética de manipular genes de otros organismos, saltar las barreras de los reinos de la Naturaleza y mezclarlos alegremente en la alquimia insensata de los biotecnólogos, para seleccionar por descarte aquello que luego dirán que era lo que buscaban, invirtiendo el resultado en hipótesis, con una moral de dudosa humanidad? Sólo un místico o, de nuevo, algunos idealistas. La intensificación del actual modelo de agronegocios, que involucra al sector de la ciencia y de la tecnología y a no pocos intelectuales urbanos, es una consecuencia directa de las nuevas formas de colonización que la globalización económica genera en los países del tercer mundo. Así, el Estado argentino, y con él todo nuestro presente y futuro, está siendo administrado por una forma de *cogobierno* integrado por las autoridades, las empresas de biotecnología, los grupos exportadores y el sector agrícola, y cuyo objetivo es el crecimiento económico más allá de todo límite social y natural. Ellos están determinando hoy las políticas que nos guían hacia un futuro que se hunde en la más profunda catástrofe de nuestra historia.

La adicción al crecimiento encubre nuevas formas de colonialismo

Para el año 2010 se esperaba alcanzar una producción de 100 millones de toneladas de granos, para que nuestro país resurgiera. Alcanzado ese límite casi dos años antes, el gobierno anuncia que confía en alcanzar un crecimiento de la producción de granos de un 55% para 2015, es decir, llegar a 150 millones de toneladas. Este crecimiento, festejado junto al gobierno por los sectores rurales, las empresas de biotecnología y las grandes exportadoras, parece ser en sí mismo la nueva solución mágica que nos sacará de la actual inequidad social, pobreza, desnutrición, deterioro ambiental y catástrofes generadas por los anteriores crecimientos. Ante esas recientes propuestas de aumentar la producción de granos, tanto como de las cadenas relacionadas a la producción de carne y leche para exportación, con las consecuentes promesas de reactivación económica y generación

de empleo en los próximos seis años, el Grupo de Reflexión Rural considera que la ciudadanía tiene el derecho y la obligación de conocer las consecuencias que habrán de producir estas políticas. Estamos convencidos de que los males que genera el crecimiento no pueden combatirse con más crecimiento. El crecimiento es *adictivo* para las autoridades, para las grandes empresas exportadoras y, lamentablemente, para la mayor parte del sector agropecuario argentino. Al igual que un adicto al “paco”, que, en su desesperación, es capaz de robar a su madre o matar a su vecino, las grandes empresas y el gobierno son capaces de esquilmar la tierra y destruir la sociedad dejando sin suelo a las próximas generaciones, con tal de alimentar su irrefrenable adicción al crecimiento.

¿Las consecuencias impactantes del crecimiento o los impactos del crecimiento?

El crecimiento de los últimos años produjo una terrible concentración de la riqueza, un avance en la contaminación de campos y pueblos, una pérdida de la calidad alimentaria, un encarecimiento de los alimentos, un colapso en la estructura energética, una mayor desertización y pérdida de fertilidad de la tierra agrícola, un aumento de la violencia en la sociedad, un crecimiento exponencial de formas indignas de vida y una enorme infelicidad en nuestro pueblo. Estos males no se solucionarían con debates sobre la distribución de la renta de un modelo colonial de insumo-dependencia. Por otra parte, un aumento del crecimiento en la producción, como se nos propone, sólo intensificará estos problemas, hipotecando aún más nuestro futuro y el de nuestros nietos.

La producción para exportar recibe subsidios del Estado nacional, que todos pagamos con nuestros impuestos, además de enormes subsidios en la forma de *externalidades*, es decir, consecuencias no deseadas de la producción de las cuales no se hacen cargo los productores ni los exportadores: incidencia de enfermedades, decrecimiento del nivel intelectual, pérdidas del potencial biótico de los suelos, deforestación, contaminación masiva de aire, tierra y agua, pérdida de la capacidad productiva a futuro. Lamentablemente, el Estado tampoco las asume, y se dedica a aplicar paliativos para contrarrestar sus efectos. Los trabajos generados por el

crecimiento que habitualmente se nos propone son trabajos efímeros, que al depender de un ambiente en grave estado de deterioro no pueden sostenerse por muchos años ¿De qué sirve crear un puesto de trabajo hoy si implica eliminar diez puestos en el futuro? Los sectores marginados de la sociedad, las poblaciones enfermas por las fumigaciones de los agricultores industriales, la tierra maltratada por el afán de lucro, los bosques arrasados son las nuevas “joyas de la abuela” que soportan el crecimiento económico argentino.

El crecimiento nos conduce al desastre y a la catástrofe de la insustentabilidad. El desarrollo puede abrir caminos hacia la felicidad de nuestro pueblo

Las nuevas generaciones de argentinos se encuentran en un grave riesgo, si es que continúan cumpliéndose las metas de crecimiento del actual modelo de agronegocios. Ya hay miles de niños que en sus familias no han visto trabajar a sus padres ni a sus abuelos. El coeficiente intelectual está en descenso por problemas de desnutrición y sub-alimentación. El sistema educativo está colapsado, y sus autoridades se encuentran entre la espada y la pared, entre padres furiosos y amenazantes, niños educados por la TV-basura, y un sistema que les impide tomar medidas disciplinarias en un marco de sentido, ya que el país carece de todo Proyecto Nacional. Los hospitales no tienen insumos ni tienen médicos, los transportes públicos empeoran y se encarecen cada día, la justicia tiene el peor descrédito de su historia. Estos males y muchos otros no se solucionan con dinero ni con más crecimiento. Su solución pasa por una planificación del uso de la tierra; por políticas de soberanía alimentaria, producciones al servicio del hombre y no de las ganancias de los mercados; por hacer de la dirigencia una escuela de honestidad intelectual, con integridad moral y sentido de servicio. La noción de Bien Público debe volver a tener su importancia en el tejido social. Con el crecimiento acumulado de todos estos años, hay más que suficiente para ordenar la sociedad y empezar a transitar un camino hacia el desarrollo.

Para nosotros, como Grupo de Reflexión Rural, un ecosistema nos propone siempre un mandato que se hace necesario cumplir, y además, que deberíamos transformar en políticas públicas: el de poder generar la mayor cantidad de biomasa y biodiversidad que ese ambiente permita. Si se quiere, es una función teleonómica. Lamentablemente, los científicos cooptados por la ciencia empresarial ignoran ese mandato y, en todo caso, vinculan estos criterios con la religión, e intentaron ridiculizarlos. Ellos, desde la soberbia de una ciencia que, pese al cambio climático, continúa rindiendo culto al progreso ilimitado, piensan que la remediación de un ecosistema es sólo cuestión de azar o a lo sumo la razón de una propuesta empresarial. Obviamente, estas posiciones devienen en cruces de pensamiento en los cuales no resulta fácil hacer cambiar de parecer al otro, porque ello implicaría que modificaran su cosmovisión. Se trata en esencia de concebir y respetar el modo en que se estructura la vida, y partimos de la convicción de que, si le dan tiempo, el proceso de la vida conduce siempre a una mayor complejidad, a la vez que aprovecha cada salto de energía de un nivel a otro para generar nuevas relaciones y, en especial, mayor conciencia.

Documento

El capital internacional está dominando la agricultura brasileña

João Pedro Stedile

Miembro de la Coordinación Nacional de Vía Campesina, Brasil
São Paulo, 30 de julio de 2008

El movimiento del capital financiero

En los últimos años hubo un proceso intensivo y permanente de concentración y centralización de las empresas que actúan y controlan todo el proceso productivo de la agricultura mundial.

Concentración es el concepto utilizado por la economía política para explicar el movimiento que hacen las grandes empresas, para aglutinar, acumular y constituirse en grandes grupos. Así, en cada rama de producción se va generando una situación de oligopolio, donde unas pocas empresas controlan tal sector. El segundo movimiento del capital es la centralización, en la que una misma empresa pasa a controlar solita varios sectores de producción, a veces incluso sin relación entre sí. Esos dos movimientos lógicos del capital han sido complementados en el sector agrícola con un proceso de internacionalización del control del mercado y del comercio a nivel mundial. Es decir, algunas empresas han pasado a actuar en todos los países y a controlar el mercado a nivel mundial.

Ese movimiento del capital –que era más perceptible, desde la teoría del imperialismo, en las grandes empresas industriales– en los últimos diez años pasó a dominar también el sector agrícola. Y lo más grave, ahora, bajo la hegemonía del capital financiero, la velocidad y el volumen de capital que aportó en la agricultura llegaron con mucha más fuerza y alcance de lo que había acontecido en los demás sectores productivos a lo largo del siglo XX. Y eso ocurrió porque, en los últimos años, se acumuló en los países ricos mucho capital en forma de dinero, es

decir, capital financiero. Y ese capital se fue desplazando a la compra de acciones de las empresas más lucrativas también del sector primario. Así, en pocos años, por efecto de la inversión de ese capital financiero en la compra de acciones, la concentración y la centralización se dieron en forma impresionante.

Resultado

Hoy, casi todas las ramas de la producción agrícola están controladas por grupos de empresas oligopolizadas, que se coordinan entre sí. Así, en la producción y comercio de granos –como la soja, maíz, trigo, arroz y girasol– están solamente Cargill, Monsanto, ADM, Dreyfus y Bunge, que controlan el 80% de toda la producción mundial. En las semillas transgénicas, están Monsanto, Norvartis, Bayer y Syngenta, que controlan toda la producción. En los lácteos y derivados encontramos a Nestlé, Parmalat y Danone. En los fertilizantes, aquí en Brasil, sólo tres empresas transnacionales controlan toda la producción de las materias primas: Bunge, Mosaico y Yara. En la producción del glifosato, materia prima de los pesticidas agrícolas, sólo dos empresas: Monsanto y Nortox. En la maquinaria agrícola también el oligopolio está repartido entre Agco, Fiat, New Holland, etcétera.

Ese movimiento, que se desarrolló a partir de la década del noventa, se aceleró en los últimos dos años, con la crisis del capitalismo en Estados Unidos. Las tasas de interés en los países centrales cayeron al 2% anual, y ello, comparado con la tasa de inflación, llevó a que los bancos perdieran dinero. Entonces, el capital financiero se desplazó a la periferia del sistema para protegerse de la crisis y mantener sus tasas de ganancia. En los últimos dos años, llegaron a Brasil cerca de 330 mil millones de dólares en forma de dinero. Parte de ese recurso fue invertido a través de los bancos locales, para incentivar las ventas en cuotas de inmuebles, electrodomésticos y automóviles, a tasas promedio del 47% anual. Una locura, comparado con las tasas de los países desarrollados.

Otra parte del capital fue destinada a la compra de tierras. Un artículo periodístico aparecido en *Folha de São Paulo* estimó que el capital extranjero compró, en

los últimos años, más de 20 millones de hectáreas. En especial en las regiones del centro-oeste y en la nueva frontera agrícola del llamado Ma-pi-to (Maranhão, Piauí y Tocantís), donde los precios de las tierras estaban mucho más bajos. Otra parte enfiló hacia la Amazonía buscando áreas mineras, proyectos hidroeléctricos y la posesión de inmensas áreas de biodiversidad que más tarde darán frutos, cuando sean explotadas por sus laboratorios. En el área de la celulosa, tres grandes grupos: el noruego (Aracruz), el sueco-finlandés (Stora Enzo) y el estadounidense (International Paper) desplazaron toda su producción hacia las ricas condiciones edafoclimáticas encontradas en Brasil. Así, están previstas una expansión del monocultivo del eucalipto en toda la región que va del sur de Bahía hasta la frontera con Uruguay y seis nuevas fábricas proyectadas. Serán miles de hectáreas de esta plantación industrial que destruye todo y se transforma en un verdadero desierto verde.

Asimismo, hubo una elevada inversión de capital extranjero en la expansión del monocultivo de la caña de azúcar para la producción y exportación de etanol. El área de la caña pasó de 4 a 6 millones de hectáreas. Hay proyectos para 77 nuevas usinas de etanol, que serán construidas a lo largo de cuatro grandes alcoductos planificados para transportar el alcohol del centro-oeste hacia los puertos de Santos y Paranaguá. Y de la región de Palmas (TO) hacia el puerto de São Luis (MA). Dos de esos alcoductos son de Petrobras y dos serán de inversionistas extranjeros.

Las corporaciones trasnacionales aumentaron también sus inversiones en la producción y multiplicación de semillas transgénicas, en especial del maíz. De ahí la presión y el lobby de las empresas Syngenta, Monsanto y Bayer para que el gobierno permita sus variedades de maíz transgénico. Algunas de esas variedades están prohibidas en Europa, pero por aquí... ¡todo vale!

El agronegocio

Esta avalancha del capital extranjero en el control de nuestra producción agrícola, en los insumos y en la expansión de los productos para exportación sólo fue posible por la alianza entre las empresas mencionadas y los grandes hacendados

propietarios de la tierra. Los hacendados intervienen con sus grandes extensiones de tierra, con la depredación del medio ambiente y con la superexplotación del trabajo agrícola, y a veces hasta con trabajo esclavo, y se asocian subordinadamente a estas empresas.

Este modelo agrícola, que denominamos agronegocio, es el matrimonio de las empresas transnacionales con los grandes propietarios de tierras. En él no hay espacio para la agricultura familiar, campesina. No hay espacio para el trabajo agrícola, pues usan alta tecnología, mecanización en todos los niveles y herbicidas¹.

El resultado ya se percibe en las estadísticas. Brasil está girando hacia el gran monocultivo para la exportación. Una especie de recolonización agroexportadora, que recuerda los tiempos del imperio. De las 130 millones de toneladas de granos producidos, nada menos que 110 millones son sólo de soja y maíz. Para la producción pecuaria bovina quedan 300 millones de hectáreas, para producir para exportación. Y lo que sobra es un inmenso desierto verde de eucalipto. ¡Ese es el modelo brasileño! Dará mucha ganancia a algunos hacendados y a unas pocas empresas extranjeras. Pero el pueblo brasileño se quedará con el pasivo ambiental, con el desempleo y la pobreza.

Las contradicciones afloran rápido

Las contradicciones de ese modelo perverso afloraron con rapidez. El precio de los alimentos se disparó –fruto de la especulación del capital financiero en las bolsas y el control oligopólico del mercado por las empresas– y llegó a duplicarse, en dólares, en el último año. Los alimentos están cada vez más contaminados por el uso intensivo de pesticidas. Y el agronegocio no logra producir alimentos sanos, sin herbicidas. Sólo la agricultura familiar y campesina lo consigue. La producción intensiva de etanol por medio del monocultivo de la caña no soluciona los problemas del calentamiento global; al contrario, los agrava. El mayor problema de los combustibles no es sólo el petróleo, sino sobre todo la forma de transporte individual, alentada por el capital financiero que presiona por el aumento de las ventas de vehículos en cuotas. Transformaron nuestras ciudades en un infierno.

Esa forma de monocultivo agota los recursos naturales, el suelo, el agua subterránea y afecta la calidad y localización de las aguas. El monocultivo destruye la biodiversidad y desequilibra el medio ambiente de la región.

Frente a esa situación es que los movimientos sociales reunidos en Vía Campesina de Brasil resolvieron unirse e incrementar sus protestas. En los últimos meses se multiplicaron las protestas de campesinos en todos los estados del país. Contra el modelo y contra la actuación de las empresas transnacionales, como Monsanto, Cargill, Syngenta, Bunge, Bayer, etcétera. Esas protestas han servido como una especie de pedagogía de masas. Una alerta para que la sociedad brasileña despierte, dada la gravedad del problema y sus consecuencias futuras.

La respuesta de las empresas...

Las empresas extranjeras y sus perros guardianes nacionales saben de los problemas sociales y ambientales que causan. Y como no tienen razón en su forma de dominar la naturaleza, resolvieron enfrentar a los movimientos de Vía Campesina con diversas tácticas combinadas. Primero, con campañas publicitarias millonarias, con artistas famosos, en la prensa. Segundo, con la manipulación de sectores derechistas del aparato judicial y del Ministerio Público, que adhieren a ellos por ideología, para que criminalicen, con muchos procesos, a los líderes y militantes sociales. Y donde ninguna de esas políticas dio resultado, apelaron a la represión, en especial en aquellos estados gobernados por partidos derechistas como en Rio Grande do Sul², São Paulo, Rio de Janeiro y Minas Gerais, donde los gobiernos no vacilan en utilizar las policías militares para la represión violenta a los movimientos.

Se engañan al creer que ese tipo de problemas se resuelven con publicidad o con represión. Se trata de una disputa histórica entre dos formas de producir alimentos. Una que sólo busca el lucro, incluso envenenando la naturaleza y sus productos. Y la otra que se orienta a la producción de alimentos saludables como un derecho de toda la población. Muchas batallas habrán, ciertamente.

Notas

1 Sobre el modelo agrícola brasileño, ver el documento "Queremos producir alimentos" de Vía Campesina Brasil, en <<http://alainet.org/active/24605&lang=es>>.

2 En el estado de Rio Grande do Sul, el Movimiento de los Trabajadores Rurales

Sin Tierra (MST) enfrenta una fuerte persecución judicial: el Ministerio Público ha llegado a pedir su disolución y varios militantes de movimientos sociales han sido enjuiciados (ver <<http://alainet.org/active/25134&lang=es>>).

Documento

Programas estruturantes de curto prazo

Plataforma da Vía Campesina

1. Programa de reflorestamento “2 hectares por família camponesa”

Implementar um programa nacional de florestamento e reflorestamento para o conjunto das famílias assentadas e camponesas do Brasil, beneficiando todos os Biomas. Deverá de ser fomentada a adesão das famílias à temática florestal buscando a instalação de sistemas diversificados de manejo florestal que possam produzir madeira, energia, sementes, fibras e produtos não madeireiros, além da preservação da biodiversidade e ampliação das florestas, contribuindo para o combate ao aquecimento global. Para isto é necessário:

- Linha de crédito especial para a implantação das florestas, com carência de 8 anos e 8 anos para pagar, com juro zero e bônus de adimplência de 40%.
- Remuneração de serviço ambiental as famílias, repassando um salário mínimo mensal durante os 12 primeiros meses após o plantio da floresta.
- Assistência técnica florestal de base agroecológica, acompanhada de capacitação técnica para a implantação, manejo e agro extrativismo sustentável.
- Fomento com recursos sem reembolso, para a implantação de pequenos viveiros florestais, descentralizados e cooperados, a fim de pro-

mover o incentivo para coleta de sementes e multiplicação de mudas nativas de árvores de cada região.

- Programa massivo de educação ambiental, inserindo o conjunto das famílias, as escolas e demais estruturas organizativas dos assentamentos.

2. Programa de agroindústria familiar e cooperativa

Implementar pequenas e médias agroindústrias familiares, comunitárias e cooperativadas descentralizando o beneficiamento dos alimentos, gerando emprego e mantendo a juventude nas pequenas cidades. Para isto é necessário:

- Linha de crédito subsidiado com prazos longos.
- Mudanças na legislação sanitária garantindo a qualidade do produto final.
- Assistência técnica específica para acompanhar as empresas comunitárias até sua consolidação.

3. Programa de compra de alimentos pela CONAB, armazenagem, garantia de preço e produção de alimentos básicos

- Ampliação do orçamento do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) para 1 bilhão por ano, garantindo a compra estatal dos produtos da reforma agrária e agricultura camponesa.
- Estudos de viabilidade e implantação de agroindústrias familiares em áreas reformadas viabilizando a agregação de valor e inserção nos mercados locais.
- Aquisição dos produtos da reforma agrária para comporem as cestas básicas distribuídas pelo Governo Federal.
- Garantia de comercialização para os produtos ecológicos, com sobre preço de no mínimo 30% em relação ao mercado convencional.

4. Programas de agroenergia e energias renováveis para agricultores familiares

Implementar pequenas e médias usinas integradas de alimentos e energia para produção de álcool, óleos vegetais e biodiesel, descentralizadas e multifuncionais, tanto em matérias primas como em produtos, priorizando o consumo local e estimulando os consórcios alimentares/energéticos.

Implementar pequenas unidades de produção local de energia elétrica e de economia energética: microcentrais hidrelétricas, biodigestores, micro e pequenos aerogeradores, pequenas termoelétricas de biomassa, placas solares, aquecimento de água com serpentinas em fogões à lenha. Para isto é necessário:

- Projeto piloto com recursos não retornáveis.
- Linhas de crédito com subsídio e de longo prazo.
- Sistema elétrico integrado podendo as unidades locais de produção colocar energia na rede quando produzir excedente e usar da rede quando estiver em déficit.

5. Empresa estatal de fertilizantes minerais, orgânicos e organo-minerais

- Constituição de uma Empresa Estatal Federal para atuar no ramo de fertilizantes minerais e organo-minerais, utilizando-se de pós de rochas, dos resíduos do xisto e matérias primas orgânicas disponíveis.
- Programa nacional para produção descentralizada e em escala, de fertilizantes orgânicos através de cooperativas, comunidades e prefeituras, utilizando material orgânico do lixo urbano e outros resíduos agrícolas e industriais. É necessário:
 - Estatização ou reestatização de todas as minas de fosfato e potássio existentes no país, por ser um insumo estratégico para a soberania alimentar da nação.

- Destinação de recursos financeiros específicos não retornáveis e/ou financiamentos de longo prazo para estruturar pequenas indústrias de fertilizantes orgânicos e dos equipamentos para utilizá-los.

6. Programa de produção de leite/familiar

- Garantia de preços mínimos compensadores para os pequenos produtores através de compras públicas exclusivamente da agricultura camponesa.
- Assistência técnica, capacitação e recursos financeiros para massificar entre as famílias camponesas a produção de leite à base de pasto, diminuindo custos, reduzindo a área utilizada e aumentando a produção.
- Recursos para estruturar cooperativas dos pequenos agricultores para recolher e resfriar localmente o leite das famílias camponesas bem como industrializar para o consumo regional.

7. Programa de investimentos em agroecologia nas escolas técnicas, universidades, etcétera

- Financiamento de projetos de pesquisa e extensão rural pelo Ministério de Ciência e Tecnologia (CNPQ e FINEP), MAPA e MDA nas áreas de agroecologia, agricultura familiar, tecnologias populares, agroflorestas. E que os mesmos sejam construídos em parceria com os movimentos sociais.

Universidades

- Institucionalização dos grupos de agroecologia estudantil existentes nas universidades.
- Reforma Curricular legitimada pelo MEC dos cursos de ciências agrárias que contemple na grade disciplinas como agroecologia, sociologia e extensão rural nos semestres iniciais.

Escola técnicas

- Reconhecimentos pelo MEC do curso de nível Técnico em Agroecologia.
- Legitimar junto ao MEC habilitação do exercício da profissão de Técnico em Agroecologia conforme as atribuições curriculares.
- Investimentos financeiros para que as escolas Técnicas em Agroecologia tenha condições de se manter em área física de no mínimo 50 ha de terra.

8. Programa Água Para Todos, universalização do abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto

- Implementar a lei de Saneamento já aprovada no Congresso Nacional. O saneamento tem recursos garantidos pelo FGTS.
- Implementar as 530 obras do Atlas do Nordeste, propostas pela Agência Nacional de Águas que têm potencial para beneficiar 34 milhões de pessoas do meio urbano na região, exatamente onde o abastecimento de água ainda é mais problemático.
- Implementar as obras de convivência com o semi-árido proposta pela Articulação do Semi-árido no meio rural –cisternas para consumo humano, para produção, caxios, barragens subterrâneas, etc.– já estipuladas nos programas “Um milhão de Cisternas” e “Uma Terra Duas Águas”.

9. Programa Nacional de Habitação camponesa e popular

- Programa nacional de habitação camponesa que possibilite moradia adequada a todas as famílias camponesas, de todas as faixas de renda, em todo o território nacional, de maneira desburocratizada, como política social estratégica para conter o êxodo rural, manter a juventude no campo e repovoar as comunidades campone-

sas, aplicando, em escala crescente, tecnologias de bioconstrução.

Por isto reivindicamos a Implantação de um Amplo Programa de Habitação Camponesa para construir, reformar e ampliar moradias em todo o meio rural brasileiro, tendo como meta construir e reformar 300 mil moradias ano, com valores mínimos de R\$ 16.000,00 por moradia, prazos longos (20 anos) e subsídios adequados (entre 50% a 80%) às faixas de renda das famílias camponesas.

10. Programa de produção de sementes e mudas nativas, crioulas e varietais

- Recursos para multiplicar os bancos populares de Sementes Crioulas e Nativas.
- Recursos para multiplicar viveiros de mudas nativas e para implantação de agroflorestas.
- Implantação massiva de Centros de Preservação e Manejo da Agrobiodiversidade (CIMAS).
- Ampliação da pesquisa, melhoramento e produção de sementes varietais através da Embrapa e outros centros públicos de pesquisa e disponibilização de sementes e mudas básicas para as cooperativas e associações camponesas para multiplicação, com o devido acompanhamento técnico.

11. Programa público de assistência técnica, extensão rural e capacitação

- Fortalecimento da assistência técnica como instrumento estratégico da construção de um novo modelo de produção no campo, implantando massivamente um novo paradigma produtivo ambientalmente sustentável.
- Assistência Técnica, extensão rural e capacitação sistêmica e continuada.
- Ampliar os Programas de Assistência Técnica, incorporando projetos especiais, tais como: transi-

ção agroecológica, produção de sementes crioulas, produção de leite a pasto, diversificação da cultura do fumo, implantação de agroflorestas, crédito assistido com recursos públicos conveniados com as organizações dos camponeses/as.

12. Programa de ampliação da Educação do Campo

- Aumentar significativamente os recursos financeiros das escolas de ensino médio, técnico e superior dos movimentos sociais tendo como base o repasse feito as instituições de ensino federal de estudante/curso.
- Enquadramento das escolas dos movimentos sociais nos PAA-Programa de Aquisição de Alimentos da CONAB.
- Melhorias da infraestrutura.
- Contratação de professores habilitados no curso Pedagogia da Terra para ministrarem aulas em assentamentos rurais.
- Implementação de Medida Provisória que impossibilite o/a estudante ficar sem ter aulas de determinada disciplina por mais de 10 dias.
- Investimento em programas para aquisição de materiais didáticos e audio-visuais e informática.
- Criação de um plano didático-pedagógico construídos por professores, pais, estudantes e movimentos sociais que contemple a realidade das escolas que possuem classes multisseriadas.
- Capacitação didático-pedagógica para professores que ministram aulas em classes multisseriadas.

13. Programa de mecanização agrícola adequada para agricultura camponesa

- Disponibilização de máquinas e equipamentos adaptados às necessidades da agricultura camponesa, leve, simples, resistente, rústica, econômica, barata, eficiente, multiuso e versátil, adaptada

para desempenhar as várias atividades de uma agricultura diversificada. Prioridade para uma mecanização voltada a um novo modelo de agricultura, com produção diversificada, combinação de produção animal com produção vegetal, uso de adubação orgânica e armazenamento de água com irrigação de pequeno porte. É necessário:

- Política industrial de estímulo a este modelo de máquinas agrícolas e financiamento de longo prazo para pagar.
- Além da mecanização familiar e comunitária, necessita Infra-estrutura Pública Coletiva de apoio a mecanização camponesa, para serviços pesados, como terraplanagem, açudagem e outros serviços, de máquinas e equipamentos como trator-esteira, retro-escavadeira poclairn, trator com scaiper, caçambas, adquiridos pelo governo federal, custeados por governos estaduais e prefeituras, sob o controle social dos camponeses através de suas organizações.

Medidas políticas e legislativas

1. Reforma Agrária com retomada de desapropriação de grandes latifúndios.
2. Regularização imediata da terra indígena da Raposa Serra do Sol e a área dos Guaranis, Caiová no MS e Mbiás Guaranis do RS.
3. Aplicação imediata, em nível nacional, da Tarifa Social Baixa Renda de energia elétrica para os consumidores, de acordo com a decisão judicial de maio de 2007, do Desembargador Federal de Brasília Sr. Catão Alves.
4. Isenção de pagamento dos primeiros 100 kw para as famílias camponesas e o que for gasto a mais "equidade" com o preço paga pelos grandes consumidores de energia (R\$ 0,06).
5. Proibição de vender/ceder terras para empresas estrangeiras.

6. Revisar a liberação do milho transgênico no Conselho de Ministros.
7. Revogar a MP da grilagem da Amazônia e o INCRA voltar a regularizar as áreas de Quilombolas.
8. Impedir a expansão do monocultivo de pínus e eucalipto.
9. Pela manutenção da Previdência Pública Universal e Solidária; aprovação imediata do PL 6.852/06 e revogação da MP 410.
10. Limitar a propriedade da terra em 35 módulos fiscais.

Documento

Por su importancia política y social y como modesto homenaje al gran intelectual colombiano recientemente fallecido, publicamos uno de sus últimos trabajos, difundido por *El Heraldo Dominicano*, de Barranquilla, el 8 de junio de 2008.

Detener la guerra

Orlando Fals Borda

Como miembro de la Generación de la Violencia –nacido en 1925– me he preguntado muchas veces, junto a otros, si en el largo período de sesenta años de conflictos internos palpables y agudos Colombia ha perdido definitivamente su reconocido temple de nación tranquila, progresista, sin guerras fronterizas, en una sociedad más bien bucólica y culta, sencilla aunque señorial de postín, para convertirse en un pueblo bélico, espartano, cruel e insensible a los horrores de enfrentamientos fatales, delincuentes, criminales y mercaderes de la muerte.

¿Habremos llegado a tales profundidades culturales, para sentir que la guerra y el conflicto sean cosas tan frecuentes y aceptables que se hayan convertido en expresiones normales de la vida colectiva, sin que produzcan mayores preocupaciones? ¿Quedan aún resquicios de órdenes sociales anteriores donde la cooperación, el altruismo, la construcción, el amor y el respeto a la vida y heredad humanas puedan todavía ser recuperados y activados?

Verá el lector que han habido períodos desiguales en los que el belicismo florece, seguidos de otros caracterizados por búsquedas afanosas de la paz.

Se dirá que ello puede ser lo usual en toda sociedad humana. Pero el caso de Colombia es único en el contexto latinoamericano, y ello no deja de ser motivo de preocupación. Porque sesenta años de guerra casi continua puede ser un récord mundial, del que no podemos enorgullecernos.

Por lo menos, sería conveniente abrir el compás para entender si seguimos hoy aceptando una “normalización de la violencia” con todas sus aberraciones y distorsiones de cultura y personalidad, o si ya hemos tenido suficiente suplido y merecemos llegar a la etapa de la reconstrucción social, moral, política y económica que nos merecemos.

Como se desarrolla en este texto, creo que vamos en esta segunda dirección a causa de fenómenos de saturación guerrerista y acumulación criminosa de los últimos períodos, en especial el actual de “Seguridad Democrática”, para plantear lo que puede ser el renacer de un orden nuevo.

Después del llamado “fracaso pacifista” de Pastrana, el péndulo de la opinión pública se inclinó hacia la intensificación de la guerra. Los electores encontraron un paladín en el ex gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, donde habían nacido, con su venia, los nuevos “pájaros” o “chulavitas”, ahora llamados “paramilitares”, para imponer el orden y control.

No hubo pausa para sopesar mejor esta polémica experiencia. Pero los proyectos continuaron. El país, con Uribe al mando, se embarcó en la más intensa y dura opción bélica de los últimos tiempos. Y este paso fue complejo e intenso, dibujándose como un proceso acumulativo y saturante de todo el instrumental e historial de violencia que provenía del siglo XX, con su trágica espiral.

La pregunta es si seguimos paralizados por el monstruo de la violencia, normalizando todavía su existencia, o si podremos darle el vuelco necesario.

Hay dos perspectivas nuevas que ahora parecen permitir mayor esclarecimiento. La primera es la sensación de que el conflicto interno colombiano no puede dar más, y que ha llegado al nivel de decantación sociocultural, económica y política más allá del cual puede por fin ocurrir la

temida descomposición nacional interna de tipo estructural y superestructural, con pérdidas de soberanía como serían una balcanización territorial-regional o una disolución estatal, con o sin autogolpe, con o sin guerra civil.

A estas temidas posibilidades se puede añadir la guerra externa, con los vecinos Venezuela y Ecuador, que a los *war mongers*, guerreristas nacionales y extranjeros, satisfaría sobremanera por permitirles ensanchar sus negocios. Peligro con el que se ha cortejado de manera ligera en meses recientes. ¡Vaya opciones!

Sesenta años de guerra, un récord mundial, parecen ser más que suficiente. “*Enough is enough!*” decía Churchill en 1945 hacia el final de la Guerra Mundial. Aunque a veces no se vea, tal puede ser el sentimiento mayoritario colombiano de 2008.

“¡Estamos ahítos de la actual situación de milicias, guerras y violencias!” decimos aquí. Y ello puede ser índice de que la disolución nacional es hoy más posible que antes, a causa del autoritarismo imperante. Ahora hay una sumatoria en el destructivo proceso de nuestra violencia múltiple, que sólo se pagaría con la pérdida de las libertades.

Añádanse otros índices de violencia y conflicto, como los usuales sobre delincuencia, pobreza, hambre, desplazamiento, violencia intrafamiliar, etc., más innumerables campos minados, fosas comunes y los patéticos ríos de sangre y cadáveres, y obtendremos un tétrico retrato de la realidad colombiana actual, empeorada desde hace por lo menos dos generaciones.

Así nunca habría ni seguridad ni democracia. Ni la ilusoria paz de las carreteras, apuntalada por tanques y tropas para solaz de bañistas e industrias de turismo.

El clímax de la violencia acumulada

En efecto, puede verse que el régimen del Frente Nacional (orden social burgués que sigue hasta hoy) no cumplió su promesa pacificadora, y que la guerra continuó, adoptando nuevas formas de violencia. Ya ésta no era sólo bipartidista; ahora adquiriría dimensiones económicas, religiosas y del narcotráfico.

La pobreza rural que afectaba a todos los elementos del orden social-burgués se alivió y se frustró la refor-

ma agraria por enésima vez, haciendo que el campesino se refugiara en los cinturones de pobreza de las ciudades y acudiera más y más a las armas. Los campesinos se levantaron en guerrillas contra el sistema y régimen dominantes.

Las políticas neoliberales empeoraron la situación, sin crear suficientes empleos, pero abrieron cauces para la introducción e inversión de dineros ilegales que fueron apoderándose de las industrias nacionales y del Estado. La delincuencia y criminalidad se agudizaron y llegaron a índices nunca vistos.

De poco valieron las reformas constitucionales de 1991, que se dirigían a aliviar, por lo menos, las peligrosas situaciones creadas, como en el reordenamiento territorial que buscara un equilibrio regional e interregional. Y el fracaso del Caguán dramatizó que sus gobiernos habían perdido el rumbo. Sólo la violencia, ahora múltiple, subía en intensidad, formas y efectivos.

Se movía hacia un clímax saturante en el que la militarización de la nación y la socialización de la guerra fueran políticas aceptadas por gran parte de una población que prosperaba materialmente, pero se empobrecía espiritualmente. En esta transición empezó a deformarse el *ethos* cultural y a destruirse el alma del colombiano reconocido.

Con estas nuevas tendencias probécicas en pleno auge, apareció en el año 2001 la candidatura presidencial del doctor Uribe. Él había sido denunciado en 1997 por la revista *Alternativa* como fundador e impulsor de las cooperativas Convivir, que se convirtieron en guaridas de paramilitares, los más terribles criminales conocidos del país, en adelante empleados para combatir a las guerrillas con la anuencia directa o indirecta del gobierno. Llenó la copa de la expectación y barrió las otras candidaturas en la elección de 2002.

Pero aquellas dudosas decisiones en Antioquia, con sus muestras de ilegitimidad, han perseguido al presidente sin poderlas descartar, como si fuera el trágico destino del desgraciado navegante a quien le seguía, día y noche, la sombra del albatros, el pájaro de la muerte, según el poema de Coleridge. La posesión del cargo fue premonitoria: cayeron morteros en el Palacio de Nariño, con la acusación renovada de tratarse ahora de un régimen ilegítimo de origen, lo que

quedó aún más claro en la reelección de 2006, dominada por los “paramilitares” y congresistas hoy en la cárcel. Y la violencia subió de nivel, y el orden social-burgués se vio en peligro de disolución, por quedarse con un Congreso Nacional sin solvencia moral.

Las tendencias a la intensificación de la guerra estaban marcadas, y el presidente Uribe se encargó de traducirlas a la práctica gubernamental, con relativa eficacia.

Se reforzaron las Fuerzas Armadas. Las dos guerrillas (ELN y FARC) se replegaron a las selvas, y al mismo tiempo se militarizó el espacio nacional con pleno cubrimiento, con ayuda de Estados Unidos. También aumentó la presencia del capital subterráneo y la guerra entre mafias, que pasaron al dominio político y al control territorial. Las grandes comunidades afrocolombianas creadas en el Chocó comenzaron a ser invadidas por los “paras”, fomentando más pobreza y desplazamiento.

Las tensiones estructurales del orden no se aliviaron y sus grietas se abrieron todavía más. La militarización de la sociedad procedió a su plenitud, con el beneplácito de mayorías electorales, que acudieron a reelegir al presidente.

Algo inusitado, porque era apenas el segundo de cinco casos, a partir de Rafael Núñez, en que un mandatario lograba pasar a un segundo período.

Saturación del guerrerismo

Se empiezan a expresar con fuerza las grandes mayorías que ya están cansadas de los procesos de socialización bélica atrás descriptos. Hasta el momento, las mejores pruebas de esta positiva reacción se observaron en las marchas del 4 de febrero y el 6 de marzo de 2008. Por varias veces ya repetibles, la manipulación mediática oficial recibió la tunda que ha venido mereciendo.

El pueblo llano fue más suelto y auténtico; descubrió que estaba aún vivo y que podía pensar y actuar. Resultó más maduro que lo esperado. Presencia activa, que hizo imposible la controlada maniobra que ha buscado mostrar el unanimismo de otras campañas.

Ahora se oye un grito que proviene del magma histórico: “No más guerra”; “Queremos el acuerdo humanita-

rio". Así, inesperadamente, se despolarizó el país en instantes inolvidables. Es lo que en sus comentarios algunos notables periodistas llamaron "el nuevo consenso".

Por último, está más claro que nuestro viejo conflicto interno no sólo llegó a su clímax en estos seis años de régimen uribista, sino que alcanzó a eructar como un volcán para salpicar y llegar a países vecinos.

Aunque esta extensión del conflicto venía de mucho atrás, en especial en forma de refugios guerrilleros y actos de retaliación oficial, contrabando de armas y drogas, los peligros quedaron en evidencia por el incidente fronterizo entre Colombia y Ecuador, por el ataque de las Fuerzas Armadas de Colombia al campamento del comandante "Raúl Reyes", el 1 de marzo de 2008. Este hecho demostró que el conflicto interno ya había desbordado las fronteras nacionales y que se había abierto el cráter del clímax de la violencia acumulada y saturante.

El manejo diplomático subsecuente, que debía destacar los principios universales de soberanía y defensa de los estados sólo dramatizó que se abría paso el inevitable anticlímax.

La notable revista británica *The Economist* vio con claridad el peligro subyacente al sostener que, aunque "Uribe sigue siendo visto por millones de colombianos como salvador, al punto de que pueda ser demasiado popular para el bien del país [citado por *El Tiempo*, 20 de abril de 2008], no nos dejemos engañar con estadísticas y encuestas manipuladas, porque la popularidad no confiere legitimidad, nos lo recuerda el jurista Rodolfo Arango".

Una Asamblea Nacional Constituyente con los lineamientos mínimos de la de 1991—que era un acuerdo de paz—, como lo ha propuesto el Polo Democrático Alternativo, se hace entonces indispensable.

Documento

Declaración Política del VII Foro Mesoamericano de los Pueblos

Managua, 16 de julio de 2008

¡Mesoamérica en Resistencia!
¡No al neocolonialismo del libre comercio!

El Foro Mesoamericano de los Pueblos, desde su primera convocatoria a inicios del siglo XXI, ha recorrido un largo camino, construyendo y articulando las luchas y resistencias contra las diferentes expresiones del neoliberalismo (tratados de libre comercio, acuerdos de asociación comercial, concesiones territoriales para la inversión extranjera como el Plan Puebla Panamá, las privatizaciones, la militarización y la criminalización de los movimientos sociales), en una región con una inmensa riqueza sociocultural y poseedora de recursos naturales estratégicos como tierra, agua, una biodiversidad exuberante, recursos energéticos y minerales, etc., que han sido históricamente codiciados por los grandes imperios en su afán por explotarlos y consolidar su poderío económico, político y militar.

En estos años, observamos claramente dos tendencias convergentes: en primer lugar, se ha profundizado la ofensiva del gran capital por apropiarse de todos los recursos estratégicos que poseen los pueblos de la región; en este sentido, los tratados de libre comercio y los acuerdos de asociación, promovidos por Estados Unidos y por la Unión Europea, son los instrumentos centrales de las grandes potencias para consolidar su posición hegemónica en la economía global. En segundo lugar, ha continuado creciendo el movimiento de resistencia popular frente a un modelo expoliador, excluyente, concentrador de riqueza y poder, movimiento al que se

han ido sumando nuevos sectores con reivindicaciones específicas que se agregan a las históricas demandas por tierra, trabajo, dignidad, respeto a la vida y a los derechos humanos, que nuestras organizaciones han enarbolado en su lucha por otro mundo posible.

En estos años, efectivamente, la hegemonía neoliberal ha sido radicalmente confrontada por los movimientos sociales mesoamericanos, con propuestas construidas desde los pueblos y para los pueblos, propuestas que tienen en común el respeto por la vida y la urgencia de producir nuevas formas de relacionamiento entre las personas y las poblaciones, y de éstas con la naturaleza.

Durante estos días, los debates en las distintas mesas (sectoriales y multisectoriales) muestran el complejo abanico de la resistencia de los movimientos populares en la región, con toda su riqueza política y organizativa, así como sus desafíos. Constatamos que hemos avanzado en la consolidación de muchos espacios de resistencia, pero tomamos nota de que es necesario aún profundizar la articulación en algunos de ellos así como dar todo nuestro respaldo a los nuevos sectores que se han integrado en el proceso del Foro. Como todo proceso de lucha, el Foro Mesoamericano de los Pueblos es un espacio vivo, en permanente transformación, por lo que se hace necesario pensar críticamente este proceso en aras de que sirva para consolidar las luchas populares a nivel regional.

Así, en este VII Foro Mesoamericano de los Pueblos, reafirmando el carácter anticapitalista, antiimperialista y antipatriarcal de nuestro proceso, declaramos:

- Nuestra posición política emana desde nuestra diversidad y nuestra resistencia, frente a un modelo que deshumaniza y mercantiliza la vida, la dignidad y la justicia, jerarquizando las relaciones económicas y sociales y subordinando las demandas y necesidades de la gran mayoría de la población a los intereses de una minoría, lo que favorece al gran capital nacional y transnacional.
- El capitalismo, en su fase neoliberal actual, profundiza la exclusión, la inequidad, la pobreza y

- la desigualdad que sufrimos los pueblos mesoamericanos, pues su objetivo principal es auto-reproducirse mediante la expropiación de nuestras riquezas, fomentando para ello la represión y la dependencia y negando a los pueblos su libre autodeterminación y soberanía.
- Especialmente, el capitalismo reproduce estructuras patriarcales de dominación que afectan la vida de millones de mujeres y hombres en nuestra región, pero muy en particular la de las mujeres, a quienes afecta de manera directa y diferenciada debido a su condición, situación y posición desigual en la sociedad. Asimismo a las niñas y niños, a quienes no se considera plenamente como personas y por lo tanto se violan sus derechos humanos, negándoles la capacidad de hablar y decidir sobre los problemas que los afectan. De igual manera, el patriarcado condena el derecho de las personas a la diversidad sexual, negando a quienes deciden vivir su sexualidad de una forma diferente a la sancionada como "buena" y "correcta" el desarrollo pleno de sus derechos de ciudadanía.
 - Se debe reconocer que existe una deuda ecológica y social que los países del Norte tienen con los del Sur por la explotación de la naturaleza y consecuente destrucción del medio ambiente, y entre ellas se destaca la deuda por el cambio climático. En este sentido, denunciamos la implementación de megaproyectos (minería, hidroeléctricas, carreteras, petroleras) en nuestro territorio, así como la acelerada expansión de monocultivos, que están destruyendo nuestra biodiversidad, los medios de supervivencia de miles de comunidades y comprometiendo el futuro mismo de la humanidad, pues los bosques tropicales son parte fundamental del equilibrio ecológico planetario.
 - En la coyuntura actual, la guerra y la militarización están relacionadas con la necesidad de

EE.UU. y otras potencias de garantizar su acceso permanente a recursos energéticos estratégicos, con los cuales no cuentan en sus territorios (petróleo y gas natural), para sostener el ritmo de crecimiento de sus economías, así como la disputa por recursos como el agua y la biodiversidad. Es por ello que vemos en la reactivación de la IV Flota, en el despliegue de las operaciones continentales del Comando Sur, en el mantenimiento de bases militares por todo el territorio americano y en la adopción y aplicación, en muchos países, de legislaciones "antiterroristas", hechos contundentes que demuestran que la militarización es parte central de la estrategia de expansión del capitalismo.

- Esto conlleva a que los pueblos que luchan en defensa de sus recursos sean criminalizados por parte de los gobiernos, con el objeto de controlar los territorios a favor de los intereses de las grandes corporaciones transnacionales.
- La aplicación del modelo neoliberal produjo el desmantelamiento de la economía campesina en toda la región, para favorecer los intereses del agronegocio y fomentando la exportación de productos exóticos por sobre la producción de alimentos, lo que ha llevado a nuestros países a perder casi por completo su soberanía alimentaria, generando además una crisis socioeconómica de profundas consecuencias entre el campesinado.
- Los organismos financieros internacionales implementan políticas de cooperación que en realidad buscan crear marcos regulatorios para la operación de las empresas transnacionales a costa del empobrecimiento de las grandes mayorías. La llamada "cooperación para el desarrollo" de los países ricos reproduce patrones coloniales de relacionamiento tipo "centro-periferia", profundizando la dependencia de nuestros países en relación con los centros hegemónicos del poder global.

- Los pueblos indígenas de toda la región viven en este momento una ofensiva del sistema en contra de sus territorios, sus recursos naturales, su identidad cultural y sus formas de organización y libre determinación. Esta ofensiva se expresa de forma violenta mediante el cerco militar (el caso de Chiapas es crítico), la expropiación de tierras, la destrucción de sus aldeas y comunidades, entre otras cosas, todo lo cual les impide el ejercicio pleno de su autonomía como pueblos, consagrada no sólo por sus propios usos y costumbres sino por convenios internacionales como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
- En el plano de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, vivimos actualmente un proceso de acelerada destrucción de la organización sindical y de sus conquistas históricas, por medio de la flexibilización laboral, como una herramienta para la mayor acumulación de capital por parte de las transnacionales y el empresariado nacional. La precarización de las condiciones de vida de las grandes mayorías se da en un momento en que las tasas de ganancia de las empresas exportadoras e importadoras, que se benefician del modelo, aumenta aceleradamente. Los tratados de libre comercio profundizan esta situación.
- Millones de campesinos y campesinas, indígenas, jóvenes, niños y niñas de nuestra región se han visto forzados a dejar su tierra natal para emigrar hacia EE.UU. y Europa en los últimos treinta años. Este período corresponde, justamente, con la implementación del modelo neoliberal, que expulsa a nuestra población. En los países de destino, las y los migrantes sufren en pésimas condiciones de vida, de trabajo y son discriminados en todos los ámbitos de la vida social. La vergonzosa "Directiva de Retorno" recientemente aprobada por la Unión Europea, así como el "Muro de la Vergüenza" que levanta EE.UU. en su frontera con México, simbolizan el

desprecio que los países del Norte sienten por nuestros hermanos, que con su trabajo enriquecen a los dueños del capital.

- La juventud mesoamericana reafirma su identidad frente al adultocentrismo propio del sistema patriarcal, que criminaliza las formas de ser, saber y hacer de las personas jóvenes. En este sentido, desconoce los espacios oficiales de juventud y las políticas demagógicas de inclusión de las personas jóvenes, en el marco de las cumbres de jefes de Estado y de los gobiernos, por ser no sólo inconsultas y antipopulares sino por promover políticas que ven en la juventud un problema, desde los patrones morales de las clases dominantes. En muchos casos incluso las personas jóvenes son criminalizadas y sufren todo tipo de discriminación, muy especialmente en el plano laboral y académico.
- Finalmente, declaramos que la “democracia” actualmente existente no garantiza la verdadera participación popular en la toma de decisiones y no es por tanto una democracia que permita la autodeterminación de los pueblos. Lo que existe hoy es un sistema electoral que asegura que el poder quede siempre en las mismas manos, mediante lo que algunos gobernantes de la región han llamado una “dictadura en democracia”. Consideramos que la participación política debe asegurarse en un marco auténticamente democrático, lo que significa implementar mecanismos que aseguren que la voz y demandas de las comunidades se incorporen en la definición de las políticas públicas y del modelo económico.

Considerando todo lo anterior, desde el VII Foro Mesoamericano de los Pueblos decimos:

- Rechazamos permanente y radicalmente el libre comercio, en especial las actuales “negociaciones” de un acuerdo de asociación entre la Unión

Europea y Centroamérica que, a pesar de la retórica que los gobiernos de ambas regiones proyectan en sus declaraciones públicas, no es más que un tratado de libre comercio de características semejantes e impactos idénticos a los que acostumbra imponer a los pueblos EE.UU., pero que incluso va más allá al imponer nuevas obligaciones en ámbitos como propiedad intelectual, servicios públicos y protección de las inversiones extranjeras.

- Demandamos que además de manifestarnos contra la violencia, discriminación y exclusión que sufren las mujeres, el carácter antipatriarcal del Foro Mesoamericano de los Pueblos se exprese en adelante, y de manera concreta, mediante metodologías que aseguren la equidad en la participación mediante la incorporación de las mujeres en la toma de decisiones y en los paneles de discusión, así como en las actividades que el Foro promueva en sus planes de acción. Llamamos a las organizaciones y movimientos sociales mesoamericanos a hacer mayores esfuerzos por superar la situación de discriminación que las mujeres viven también a lo interno de nuestras luchas.
- Exigimos garantías para que las niñas, niños y adolescentes puedan expresarse y ser escuchados, asegurando espacios para que ellos y ellas se junten para conocer y compartir los problemas que los afectan y sobre todo aquellos que tengan que ver con firmas, acuerdos y convenios, ya sea que violen sus derechos o que busquen protegerlos, pues los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a usar la palabra para referirse y decidir sobre todo aquello que vaya a afectar sus condiciones de existencia.
- Asumimos nuestro compromiso de integrar el enfoque de derechos de la diversidad sexual en nuestras organizaciones y prácticas diarias, además de exigir políticas públicas a favor de las per-

sonas gay, lesbianas, transexuales y bisexuales. Particularmente, el Foro Mesoamericano de los Pueblos se manifiesta a favor de la aprobación, en Costa Rica, del proyecto de ley que permitiría la unión civil de personas del mismo sexo, considerando que sería un paso muy importante en este sentido.

- En cuanto al problema del cambio climático, consideramos que hay que darle un enfoque político, de justicia y que siente claramente la responsabilidad por la crisis que vive la humanidad y el planeta en su conjunto; exigimos reparación y pago del daño por la deuda ecológica que los países industrializados tienen para con los países del Sur, además de vincular la cuestión del cambio climático con la soberanía alimentaria, el combate a los patrones de consumo depredadores del medio ambiente, el lanzamiento de una campaña de los movimientos a favor de la justicia ambiental y poner realmente la cuestión ecológica como algo fundamental del modelo económico y social por el que estamos luchando.
- Manifestamos enérgicamente nuestro repudio contra la militarización creciente que afecta a nuestros pueblos y contra la criminalización que sufren los movimientos sociales. Concretamente repudiamos a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) que con más de 7 mil soldados somete y humilla al hermano pueblo de Haití, con la participación de tropas de países latinoamericanos como El Salvador, Argentina, Brasil, Bolivia y Chile. Repudiamos también la reactivación de la IV Flota, las operaciones del Comando Sur y muy especialmente nos manifestamos contra el mantenimiento de la Base Militar de Palmerola, en territorio hondureño, por ser una amenaza permanente para los pueblos de nuestra región.
- Demandamos una reforma agraria integral, orientada no simplemente a repartir tierras entre el

campesinado, sino que fomente una verdadera política productiva en beneficio de los pequeños y medianos productores agrícolas, con crédito oportuno, asistencia técnica y protección frente a la invasión de productos agrícolas transgénicos importados, poniendo énfasis en la recuperación de la soberanía alimentaria de nuestros países. Esta reforma agraria debe basarse no en los principios de la agricultura industrial, sino recuperar los conocimientos tradicionales, el rescate de la semilla criolla, establecer prohibiciones para el uso de semillas transgénicas y la construcción de redes de consumo responsable.

- Exigimos que la cooperación para el desarrollo se enfoque en la defensa y promoción de la vida, en la equidad y en la justicia, no en la reproducción del *statu quo*. En ese sentido, consideramos urgente la transformación inmediata de sus prácticas asistencialistas (muchas veces marcadas por la corrupción), de cooptación de líderes y desarticulación de nuestros movimientos, como mecanismo para impedir nuestra lucha por la autonomía y libre determinación.
- Exigimos el respeto al derecho de los pueblos indígenas a su territorio, recursos naturales, formas de organización y autonomía, sustentados y vinculados sobre su propia cosmovisión. Asimismo, condenamos la violencia que actualmente se ejerce sobre los pueblos indígenas, para expropiarlos de sus riquezas naturales y culturales. En el marco de esta Declaración, muy especialmente nos pronunciamos en contra del megaproyecto turístico en Bahía de Tela, en Honduras, como uno de los proyectos más dañinos (aunque no el único) que se impulsan actualmente en la región, provocando un inmenso crimen ecológico y cultural que afecta a las comunidades Garífunas, despojándolas de su territorio y sus derechos ancestrales.
- Como Foro Mesoamericano de los Pueblos demandamos el cese inmediato de las políticas de

inversión y megaproyectos, tales como represas hidroeléctricas, minería, turismo a gran escala, agricultura extensiva e intensiva en manos de las transnacionales, entre otras, que atentan contra la vida de los pueblos.

- Llamamos a fortalecer la lucha ineludible por la defensa de los derechos laborales y humanos de las personas trabajadoras, a decir No a la flexibilización y tercerización laboral en detrimento de los derechos e intereses de los trabajadores y trabajadoras.
- Condenamos a la Unión Europea por la aprobación de la llamada Directiva de Retorno que criminaliza a las personas migrantes, así como a EE.UU. por la construcción del Muro de la Vergüenza, pues las migraciones son causadas por un modelo excluyente que obliga a millones de personas a abandonar su patria en busca de una oportunidad para sobrevivir. Demandamos la inmediata derogación de la Directiva de Retorno así como la construcción de una legislación migratoria que reconozca la Ciudadanía Universal de las personas migrantes.
- Rechazamos los espacios oficiales de juventud al tiempo que reprochamos las políticas demagógicas de inclusión de la juventud, en el marco de las cumbres de Estado, por ser inconsultas y antipopulares. Proponemos frente a esto relanzar la lucha hacia la construcción de un movimiento popular mesoamericano de juventud que pueda articular efectivamente las iniciativas que las organizaciones juveniles impulsan en nuestros países.
- En un contexto de monopolio mediático, luchamos por una comunicación alternativa, desde las bases, hacia una integración mesoamericana, le apostamos a una red de comunicación desde los movimientos sociales, proponemos la apropiación del software libre al servicio de los movimientos sociales y de las comunidades, y nos

- comprometemos a unirnos para seguir comunicando el otro mundo posible y necesario.
- Llamamos a construir un modelo mesoamericano para poder gobernar desde abajo hacia arriba, sin distinciones de ningún tipo; para poder manejar nuestra propia agenda regional es preciso avanzar con nuestro propio concepto de democracia y gobernabilidad; para ello debemos consolidar un verdadero Movimiento Social Mesoamericano que sea capaz de alcanzar estas transformaciones. Nos manifestamos también en contra de la corrupción de los gobiernos de la región, que afecta a millones de personas al negarles sus derechos a una vida digna, con trabajo, salud, educación, agua potable y otros servicios, pues los recursos públicos se consumen en pagar por privilegios para unos pocos.
 - Creemos fundamental la lucha por la construcción de un Estado Laico, con igualdad y equidad de género, que realmente combata la violencia familiar, en pro de los derechos sexuales y reproductivos, con justicia económica y en pro del aborto terapéutico. Necesitamos asimismo promover una espiritualidad liberadora, integradora y restauradora de nuestras culturas e identidades.
 - Finalmente, el VII Foro Mesoamericano de los Pueblos manifiesta su solidaridad para con los Cinco Héroes Cubanos, vilmente encarcelados en las prisiones del Imperio estadounidense, pues su lucha es la de todo un pueblo y la de todo un continente que aspira a un mundo con libertad, justicia y equidad. Nos manifestamos también en solidaridad con todos los presos políticos de toda la región mesoamericana y de todo el continente, en especial los presos políticos en Oaxaca y los estudiantes perseguidos y encarcelados actualmente en Panamá.

La realización del VII Foro Mesoamericano ha sido de vital importancia para continuar la construcción de pensamiento

y articulación de acciones colectivas, pues nos ha permitido reencontrarnos en discusiones y debates necesarios para conocernos mejor y poder pensar en un proyecto social alternativo, de alcance regional.

Reafirmamos la necesidad de seguir profundizando nuestra articulación, pues necesitamos dar pasos que vayan más allá de la celebración del Foro como evento, para construir un Movimiento Social Mesoamericano donde los Foros sean parte de este proceso pero no su objetivo principal. El próximo Foro Mesoamericano de los Pueblos será realizado en México, en 2009, por lo cual desde ahora alentamos la participación popular en este importante espacio de encuentro de luchadores y luchadoras de toda la región.

¡VIVA MESOAMÉRICA UNIDA!

¡OTRA MESOAMÉRICA Y OTRO MUNDO SON POSIBLES!